

Historia
M·Í·N·I·M·A

Las derechas latinoamericanas



ERNESTO BOHOSLAVSKY

EL COLEGIO DE MÉXICO

HISTORIA MÍNIMA DE LAS DERECHAS
LATINOAMERICANAS

Colección Historias Mínimas

Director

Pablo Yankelevich

Consejo editorial

Soledad Loeza

Carlos Marichal

Óscar Mazín

Erika Pani

Francisco Zapata

HISTORIA MÍNIMA DE LAS DERECHAS LATINOAMERICANAS

Ernesto Bohoslavsky



EL COLEGIO DE MÉXICO

Nombre: Bohoslavsky, Ernesto Lázaro, autor.

Título: Historia mínima de las derechas latinoamericanas / Ernesto Bohoslavsky.

Descripción de la publicación: Primera edición | Ciudad de México : El Colegio de México, 2023. | Colección : Historias Mínimas.

Identificadores: ISBN 978-607-564-400-4 (volumen 13) | ISBN 978-607-564-173-7 (obra completa)

Temas (BDCV): Derecha e izquierda (Ciencia política) – América Latina – Historia. | América Latina – Política y gobierno.

Clasificación DDC: 320.52/098 – dc23

Historia mínima de las derechas latinoamericanas

Ernesto Bohoslavsky

Primera edición, 2023

D. R. © El Colegio de México, A. C.

Carretera Picacho Ajusco núm. 20

Ampliación Fuentes del Pedregal

Alcaldía Tlalpan

14110, Ciudad de México, México

www.colmex.mx

ISBN 978-607-564-400-4 (vol. 13)

ISBN 978-607-564-173-7 (obra completa)

Impreso y hecho en México

ÍNDICE

<i>Agradecimientos</i>	11
<i>Introducción</i>	13
<i>Capítulo 1. De finales del siglo XIX a las noticias de la Revolución Rusa (1880-1918)</i>	37
La política oligárquica: entre las dictaduras personales y la democratización	38
Las derechas liberales y las élites satisfechas	48
Las derechas reaccionarias: contra la democracia y las masas	55
Conclusiones	64
<i>Capítulo 2. Las derechas y el origen del miedo rojo (1918-1930)</i>	69
El final de la <i>belle époque</i> liberal	71
Miedo rojo y violencia de clase	78
De reaccionarias a radicales, del libro a la urna, del púlpito a la calle	85
La revancha católica	90
Conclusiones	95
<i>Capítulo 3. La era del fascismo (1930-1945)</i>	99
La crisis de 1930, el fin de los regímenes oligárquicos y la llegada de la nueva economía	101
Las dictaduras: entre la restauración conservadora y la tentación fascista	106
La emergencia de las derechas radicales: rasgos generales	112

La emergencia de las derechas radicales: derivadas nacionales	118
Las derechas liberales, entre el antifascismo y el anticomunismo	125
Conclusiones	129
<i>Capítulo 4. Desarrollo, democracia y anticomunismo</i> (1946-1964)	133
La caliente Guerra Fría y el desarrollo anhelado	138
El anticomunismo civil: <i>think global, act local</i>	143
El anticomunismo de Estado: del antitotalitarismo a la lucha contra la subversión	147
El liberalismo sudamericano: del antifascismo a la “amenaza peronista”	156
¿Qué queda de las derechas radicales?	159
Conclusiones	164
<i>Capítulo 5. “Seguridad nacional”, fin de la hegemonía</i> y dictaduras (1964-1989)	167
Las amenazas a la dominación	170
El tiempo de las dictaduras: interpretaciones y orígenes	177
La emergencia de la tradición neoliberal	185
Jesús Obrero contra Santiago Matamoros: las disputas dentro del catolicismo	192
Conclusiones	196
<i>Capítulo 6. Democracia, derechas y neoliberalismo</i> (1989-2015)	201
Democracias, neoliberalismo y nueva geopolítica	204
¿Hay algún no neoliberal en la sala?	216
Las derechas ante la “marea rosa”	223
Conclusiones	229

<i>Coda. ¿Tienen, finalmente, las derechas su pueblo?</i>	233
<i>Conclusiones generales</i>	243
<i>Bibliografía comentada</i>	253

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecerle en primer lugar al doctor Pablo Yankelevich, director de la colección Historias Mínimas, así como a su comité editorial, por la confianza otorgada en que yo podía producir este volumen. Soy consciente de que desde la invitación para ese propósito hasta la entrega del manuscrito pasó un número indecente de años. Gracias por la paciencia y el interés que sostuvieron respecto a mi trabajo.

Daniel Lvovich y Mario Santiago Jiménez me ayudaron a planificar el índice y el contenido del libro; leyeron algunas de sus partes y siempre me despejaron las dudas que fueron apareciendo. Amigos y colegas a los que tengo afecto y respeto, Ana Clarisa Agüero, Gabriela Águila, Andrea Andújar, Stéphane Boisard, Magdalena Broquetas, Jorge Cernadas, Alberto Consuegra Sanfiel, Nicolás Duffau, Marina Franco, Sergio Morresi y Vanni Pettinà, hicieron comentarios lúcidos y generosos sobre varios capítulos de este volumen. Mi hermano Juan Pablo torpedeó con precisión el último de los capítulos. Todos ellos me entusiasmaron a seguir (o a empujar...) con la escritura de este libro, cuando yo mismo mostraba poca confianza en la empresa. Los dos colegas que actuaron como evaluadores anónimos me obligaron a precisar mejor mis ideas y me desasnaron sobre varios errores presentes en mi texto.

Diversos grupos de alumnos en Argentina, Brasil, Chile, Francia y Uruguay actuaron como un involuntario e inteligente laboratorio de testeo para las secciones de esta publicación: muchas gracias por su paciencia. Mis colegas del Programa de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento han sido siempre interlocutores estimulantes a los que espero seguir vinculado. Pude

discutir algunas de las ideas de este libro en el taller de estudios eidéticos que coordina Eduardo Devés-Valdés en la Universidad de Santiago de Chile y en el Seminario Permanente sobre las Derechas en México, que coordina Tania Hernández Vicencio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México.

Marina Orman me brindó sugerencias frente a ideas poco claras y a oraciones problemáticas que encontró al leer el manuscrito. Más allá de ese agradecimiento puntual, su presencia fue crucial para que yo pudiera concentrarme en escribir este libro. A nuestra prole, Pedro, Amalia y Sofía, le dedico los aciertos que este texto pudiera contener, así como el deseo de que puedan habitar un mundo no dominado por la acumulación voraz y la militancia del odio.

INTRODUCCIÓN

Nuestra primera obligación es entender. Entender, por supuesto, no significa disculpar [...] significa lo contrario. El pensamiento y el arte, pensaba yo, intentan explorar lo que somos, revelando nuestra infinita, ambigua y contradictoria variedad, cartografiando así nuestra naturaleza.

Javier Cercas, *El impostor*

Debe haber algún mal uso del poder cuando aquellos que tan obviamente lo poseen se toman tantas molestias para negar que lo poseen.

John K. Galbraith, *Anatomía del poder*

El estudio de los actores conservadores en América Latina tiene su propia historia. Muchos científicos sociales dedicaron esfuerzos a mediados y fines del siglo xx a revisar rasgos que supuestamente impedían el desarrollo de nuestro continente, tales como el peso de la herencia colonial y del catolicismo, o el recurrente autoritarismo militar. Hoy en día las investigaciones sobre las derechas constituyen un campo en el que confluyen estudiosos (tanto entusiastas como detractores) de los fascismos, de los liberalismos, de los catolicismos, del empresariado, de los nacionalismos y de las Fuerzas Armadas. Se trata de un espacio menos nítido en sus bordes que aquél compuesto por quienes estudian a otras tradiciones ideológicas, como el marxismo, o a actores sociales como el campesinado. Esa falta de delimitación se debe en parte al uso partisano que se da al término “derechas” en la lucha política: definir qué y quiénes son las derechas es una tarea eminentemente polémica que nunca queda —y probablemente nunca quedará— libre del intento de hacer algún aprovechamiento extraacadémico.

El hecho de que el análisis histórico y politológico de las derechas está en un fuerte proceso de renovación y de ampliación de sus objetos de estudio estimula la posibilidad de producir un libro acorde con el espíritu de la colección *Historias Mínimas*, capaz de testimoniar ese crecimiento de las investigaciones y a la vez ofrecer puntos de debate y de avances para el futuro. En particular, este volumen apunta a desarrollar una historia sintética y problematizadora de las derechas latinoamericanas entre finales del siglo XIX y la actualidad. Con ello se espera interesar a un público mayor que el especializado y a la vez establecer puentes entre polémicas, actores y procesos de la actualidad y del pasado. Las apuestas metodológicas aquí ensayadas son tres. La primera consiste en comparar casos, figuras, partidos, corrientes de ideas y prácticas políticas de diversos países de América Latina a lo largo de un periodo relativamente extenso. La comparación no nos brindará una historia común ni nos permitirá encontrar un sustrato o una esencia latinoamericana, pero será de gran aporte para detectar originalidades, recurrencias y rupturas. La segunda destaca el peso de los procesos de circulación transnacional de ideologías, bienes culturales y personas de derechas entre los países de la región. Esta reconstrucción apunta a conocer los —más estudiados y previsibles— impactos del Norte sobre el Sur, pero también algunas de las conexiones Sur / Sur, que han sido hasta ahora menos investigadas. La tercera apuesta es por el estudio simultáneo de los discursos públicos (ideas, conceptos y teorías normalmente desplegados en obras doctrinarias y en mítines), las prácticas políticas (impresión de periódicos, movilizaciones callejeras, organizaciones de masas, infiltración en organizaciones, constitución de *lobbies*, elecciones, atentados, etcétera) y las identidades expresadas, tanto en autoimágenes como en representaciones de los “enemigos”, de la nación y de los conflictos sociales.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DERECHAS?

La distinción entre derecha e izquierda, como se sabe, es fundacional de la vida política occidental desde la constitución de la Asamblea Nacional en 1789 tras el estallido de la Revolución Francesa. Sobre el sector izquierdo del recinto se asentaron los diputados más proclives al modelo republicano y a radicalizar los principios revolucionarios, mientras que sobre el lado opuesto tomaron lugar los hombres más sensibles a los deseos de Luis XVI y de la aristocracia. En decenas de idiomas la palabra para *derecha* está homologada con lo recto, lo correcto y el costado derecho, y lo propio puede decirse del vínculo entre izquierda y lo siniestro, lo inesperado y lo erróneo, según ha mostrado Pedro González Cuevas. En todo caso, el problema del origen o la etimología del término *derecha* parece ser menos relevante que su consagración cuasiuniversal como criterio binario de clasificación ideológica. Es decir, importa menos qué significó inicialmente que cuáles son las ideas a las que la “derecha” está asociada.

¿Hay alguna idea que sea permanente e intrínsecamente de derecha? ¿Hay algún sector social que *sea* la derecha? Estas preguntas son tan arduas como necesarias; sin embargo, las respuestas sobre el particular son inevitablemente discutidas y muchas veces falseadas por experiencias históricas que contradicen las perspectivas más conceptuales o normativas. Hay interpretaciones que entienden que las derechas poseen una serie de rasgos ideológicos propios. Desde algunas lecturas marxistas se ha postulado que las derechas son la voz de la clase dominante. La definición tiene la ventaja de que pone en diálogo a ciertos principios políticos con la existencia de intereses sociales específicos, pero peca de considerar a las ideas como poco más que la voz impostada de la conciencia de ese grupo dominante. Que católicos reaccionarios y liberales anticlericales en México, Colombia o Ecuador no discutieran la legitimidad de la propiedad privada a finales del siglo XIX no oculta el hecho de que tenían enormes

diferencias doctrinales acerca de cuáles eran las relaciones sociales deseables. Rotularlos como de “derecha” sólo por ese punto parece, cuanto menos, poco útil, puesto que inhibe las distancias que separaban a esos sujetos y que, en muchos casos, los llevaron a guerrear entre sí. Si bien el vínculo entre empresariado y derechas es directo, porque éstas promueven el respeto general a sus intereses básicos, como el derecho a la propiedad privada y a controlar la producción, ello no significa que el empresariado tenga un único vehículo político o que se dedique orgánicamente a sostenerlo. Páginas más adelante veremos una propuesta para unir nuevamente en el análisis la diversidad ideológica de las derechas y la defensa de intereses de las élites sociales.

Otro criterio propuesto es que las derechas son esencialmente promotoras de la defensa del orden social, mientras que las izquierdas serían las encargadas de erosionar, zapar y sabotear el *statu quo*. El humor de las derechas suele entusiasmarse poco por las reformas sociales, puesto que las considera, como ha señalado Albert Hirschman, potencialmente perversas (“sólo sirven para exacerbar la condición que se desea remediar”), inútiles (“no logran hacer mella”) o riesgosas (“ponen en peligro algún logro previo y apreciado”). Predominan las percepciones de que los cambios son amenazantes, innecesarios e incontrolables, y por lo tanto, es preferible no aventurarse a ellos, especialmente al tratarse de los asociados con las perspectivas utópicas. Frente a esa argumentación bien pueden plantearse numerosos casos paradójicos: los neoliberales que alentaron cambios medulares en el Estado y el mercado en las décadas de 1980 y 1990, ¿eran de izquierda por ello? Las autoridades cubanas de ese mismo tiempo, renuentes a introducir reformas que restaurasen mecanismos de mercado o de democracia multipartidaria, ¿son de derecha? Las respuestas pueden ser positivas, pero resultan contraintuitivas para el análisis político.

Lo propio puede decirse de otras clasificaciones también inspiradas desde las izquierdas, que les achacan a las derechas mayor

disposición al uso de la represión política; a servirse de argumentos basados en la religión; a ponderar la autoridad, el militarismo, el racismo y el nacionalismo, como señaló el profesor Roger Eatwell. Sin embargo, es posible hallar numerosos contraejemplos históricos de actores y gobiernos de izquierda que no reniegan en términos teóricos ni prácticos de la represión de algún sector social (pensemos en la “dictadura del proletariado” o en la necesidad de una vanguardia que ilumine y guíe a masas inmaduras) y que entienden que no hay nada más legítimo que la autoridad constituida tras una revolución, o que la autoridad respetuosa de alguna tradición política popular, nos recuerda Eatwell. Éste ha planteado que la creencia en la imperfección de los hombres lo mismo puede llevar a justificar gobiernos fuertes y a la represión de los instintos, los excesos y los deseos humanos que a promover gobiernos muy limitados para evitar que élites agresivas y avasallantes se hagan de un poder excesivo a partir del cual se desborde su apetito político y económico. De igual manera, el nacionalismo ha alimentado a muchos hombres y regímenes identificados con la izquierda desde los años veinte hasta la actualidad en varios países de América Latina: ese nacionalismo era entendido como industrialización y bienestar de las masas, y era diferente de aquel que se centraba exclusivamente en el antimarxismo. Militares identificados con valores de la izquierda no han faltado en el continente, de Luís Carlos Prestes a Hugo Chávez, incluyendo en el medio a Líber Seregni, Lázaro Cárdenas y Juan Velasco Alvarado. Todos estos puntos nos invitan a percibir esos elementos ideológicos (nacionalismo, militarismo, autoritarismo) menos como rasgos exclusivos de la derecha que como ocasionales y cambiantes elementos de diversas constelaciones ideológicas.

El filósofo político Norberto Bobbio propuso hace un cuarto de siglo una definición que asoma hoy como canónica. Según postuló, la piedra de toque de la derecha es que tolera o alienta la desigualdad entre los hombres, mientras que la izquierda asume la igualdad como un valor medular. Las derechas consideran que la igualdad absoluta

expresa una homogeneización degradante y asfixiante: el respeto a la jerarquía entre las culturas, los grupos sociales y étnicos, los géneros, las generaciones y las nacionalidades es su punto de partida. Negar el carácter desigual de los hombres es desconocer la naturaleza, el devenir de los seres humanos en el tiempo y el sentido común: en última instancia, es jugar a ser Dios, a ser Ícaro. De allí que el principio de que hay jerarquías no sólo inamovibles sino justas y necesarias parece estar en el corazón de las derechas.

Dino Cofrancesco ha diferenciado entre los fines últimos perseguidos por izquierdas (la igualdad) y derechas (el mantenimiento de las jerarquías) y los medios que se usan para obtener tales fines últimos. Éstos son fundacionales e irrenunciables, pero los medios son mucho más terrenales, cambiantes y negociables: su valoración no es ideológica sino pragmática y no son en sí mismos de izquierda o de derecha. Los préstamos, contrabandos y cruces de estos medios entre izquierdas y derechas han sido comunes: hoy la mayor parte de la izquierda tiene como bandera la democracia multipartidaria y el funcionamiento transparente de los mercados, dos consignas que durante mucho tiempo fueron monopolio de las organizaciones conservadoras. El corporativismo era anhelado por las derechas radicales en los años treinta, pero también era señalado entonces como un objetivo del Partido de la Revolución Mexicana, deseo de representar a los tres grandes sectores del país (campesinos, “sector popular” y obreros). La reforma agraria fue llevada adelante por militares nacionalistas peruanos en 1968 y unos años antes por los demócrata-cristianos en Venezuela y por conservadores chilenos —con menos ímpetu, es cierto—.

De allí que se pueda plantear que el significado político e histórico de los medios (acción guerrillera, paralización de la actividad económica, organización de sindicatos, sublevaciones, tomas de universidades, creación de partidos de masas, atentados, políticas de industrialización, imposición de una dictadura, otorgamiento de sufragio femenino, etcétera) está asociado con los actores que los

impulsan (y los que los impugnan), con los argumentos que los defienden y con qué otros proyectos o conceptos están vinculados. Es por ello que puede postularse, y este libro así procura mostrarlo, que ciertas propuestas políticas han sido levantadas tanto por grupos de izquierda como de derecha en distintos países, por lo que no pueden ser consideradas intrínseca ni permanentemente como de izquierda o de derecha: según el contexto, sirven a ciertos fines últimos, como favorecer o transgredir al *statu quo*, promover la igualdad o restaurar las jerarquías.

Algunos analistas han señalado que los hombres y las mujeres de derechas y de izquierdas no se separan por diferencias ideológicas, sino por la posesión de mentalidades y cosmovisiones particulares. Mientras que para los primeros la realidad sería un resultado orgánico, inevitable e inmodificable de la naturaleza humana, para los segundos se trataría de una construcción sociohistórica, esto es, con rasgos que pueden y deben entenderse pura y exclusivamente como resultado de la acción de las personas en el tiempo. De ello se desprendería una antropología de las derechas más bien pesimista, que pone el acento sobre la peligrosidad, los defectos y las restricciones de los seres humanos. Las identidades, valores y tradiciones que se amasan en el tiempo deben ser conservados, o en todo caso han de ser siempre tenidos en cuenta antes de promover innovaciones. Los derechistas consideran que para definir a un sujeto es más relevante prestar atención a sus condiciones innatas, diferenciadoras e inmodificables más que a la capacidad para incidir en el propio destino. Para decirlo pronto, es más relevante el apellido que el nombre de pila.

Las izquierdas, por el contrario, serían más entusiastas respecto de los cambios y de la capacidad de los hombres para reformarse, aprender de sus errores, mejorar y liberarse de sus constricciones. En ese marco hay que entender lo que quiso decir el sociólogo argentino Juan José Sebreli a finales de los años cincuenta cuando sentenció, retomando a Charles-Ferdinand Ramuz: “La naturaleza

es de derecha”. Pero, de cualquier manera, la convicción izquierdista de que el hombre es perfectible no define si de esa tarea deben encargarse los integrantes autoseleccionados de una vanguardia, como planteaba el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, o si debía ser un ejercicio de autoliberación de los propios indígenas oprimidos, como planteaba su compatriota y contemporáneo José Carlos Mariátegui.

En un libro reciente el irlandés Barry Cannon ha introducido una serie de ideas muy interesantes para el estudio de las derechas latinoamericanas. Cannon sugiere que las derechas, además de poseer un conjunto de rasgos ideológicos compartidos —el antiigualitarismo que indicó Bobbio en primer lugar—, tienen que entenderse como las expresiones específicamente políticas de los intereses de las élites. En consecuencia, las derechas son los vehículos políticos con los cuales las élites defienden sus accesos diferenciados al poder económico, político y simbólico dentro de la nación. Pero, además de contar con ese recurso, las élites poseen otros cuatro: la propiedad y la producción de bienes materiales (tierra, bosques, aguas, minas, capital en diversas formas, propiedades inmuebles, etcétera), vínculos con el poder militar, la producción simbólica (medios de comunicación e Iglesia principalmente, y redes sociales digitales en el último lustro) y alianzas en el escenario internacional. En las conclusiones de este volumen se intentará responder a la pregunta acerca de cuáles de estos cinco recursos fueron más utilizados en el último siglo y medio y en qué periodos.

Siguiendo estas nociones, definiendo una definición de “derechas” que combine, por una parte, el interés por el contenido y la diversidad de sus ideas, con la identificación de los intereses económicos y de los actores sociales que respaldan esas ideas, por la otra. Por ello sugiero entender a las derechas como las organizaciones específicamente políticas que defienden de manera activa las formas desiguales de distribuir bienes, oportunidades y reconocimiento entre las clases sociales, pero también entre varones y mujeres y

entre generaciones. Y si bien las derechas son las voces políticas de los que quieren conservar el orden y los valores tradicionales, quienes llevan a cabo esa tarea no son necesariamente los propios detentadores del poder económico. Puede ocurrir que esos voceros no tengan intereses directos, como fue el caso del escritor uruguayo José Enrique Rodó, defensor de una aristocracia del espíritu refractaria a las masas decadentes hacia 1900. Pero en otros casos son los propios afectados los que asumen su autorrepresentación, como los actuales diputados brasileños del *lobby* latifundista o Jorge Alessandri, a la vez presidente de Chile (1958-1964) y propietario de la importante Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

Así vistas las cosas, la existencia de las derechas expresa una paradoja de enorme relevancia histórica y política. ¿Cómo es que las organizaciones partidarias que defienden intereses minoritarios —y a veces muy minoritarios— consiguen el apoyo político de amplios sectores sociales, incluso mayoritarios? ¿Se trata de un caso de conciencia “falsa” o “desviada” o de un uso intensivo y eficiente de coerción? ¿Es el voto popular por las derechas una aberración sociológica tanto como la existencia de mujeres antifeministas? En síntesis, ¿cómo explicar el apoyo de los dominados a quienes los dominan? Esta última pregunta no ha de responderse con un *a priori* ideológico ni con un principio universalmente válido. Antonio Gramsci parece en este punto más útil que el marxismo ortodoxo: las derechas son proyectos de hegemonía que tienen la capacidad para incluir intereses ajenos a la élite. En ocasiones esa incorporación es meramente retórica, como en las fuerzas conservadoras de finales del siglo XIX; en algunas toma un tono centralmente identitario, y en otras abarca explícitamente acuerdos entre representantes de distintos sectores sociales, por ejemplo, en los casos de las coaliciones en favor de la modernización y el crecimiento industrial en las décadas de 1950 y 1960. Si pensamos a las derechas como proyectos hegemónicos, hay que prestar atención a diver-

sas variables que operan de manera simultánea y que constituyen algunos de los andariveles por los que transitarán los capítulos de este libro: ¿qué mensajes y símbolos utilizan las derechas para acercarse a los sectores por fuera de la élite?, ¿cuáles son los niveles de autoritarismo legitimados y usados para desincentivar otras identidades políticas alternativas (obrerismo, internacionalismo, anarquismo, populismo, zapatismo, marxismo, chavismo, etcétera)?, ¿qué otros discursos y formas de asistencia les llegan a los sectores subalternos por fuera de los que propagan las fuerzas de derecha?, ¿tienen los sectores populares buena disposición y escucha hacia esos discursos de organizaciones de derecha? Responder a estas preguntas ayudará a resolver la paradoja mencionada antes en un sentido menos normativo del que suele primar.

Por ello, es preciso reconocer que muchas organizaciones de derechas —y de izquierda desde ya— a lo largo del último siglo y medio estuvieron dispuestas a —y a veces entusiasmadas con— las tareas de interpelar, convencer y movilizar a sectores por fuera de aquéllos socioeconómicamente más poderosos, como organizaciones de mujeres, campesinos, estudiantes, militares, obreros y sacerdotes. Lo que quizá puede ser marcado como un rasgo particular de las derechas es que ese incentivo a la participación política se realizó casi siempre acompañado de recaudos y temores ante la posibilidad de que se produjera de manera autónoma. Si las derechas recelan de la autoactivación subalterna (por ejemplo, la sindicalización rural en Brasil o en Chile en los años sesenta), no lo hacen de los procesos de politización heterónoma y controlada desde arriba (como fue el caso de los trabajadores del campo, organizados por el Movimiento Ruralista uruguayo o por el Partido Revolucionario Institucional en México en las décadas de 1950 y 1960).

Historiadores y politólogos han clasificado a las derechas por la naturaleza de sus ideas (fascista, monárquica, neoliberal, clerical, etcétera); por los actores a los que interpelaban y los espacios sociales donde reclutan a sus militantes y votantes (empresarial, de

la pequeña burguesía, entre otros), y por sus formas organizativas (partido, liga, ateneo, bandas paramilitares, *think tanks*, etcétera). Junto con ello, hay otro criterio de clasificación, que es el que ha propuesto el historiador español Pedro González Cuevas al sugerir un ordenamiento basado en la fuerza relativa e histórica de cada una de las familias de derecha. Así, González Cuevas plantea que son identificables tres posiciones dentro del campo de las derechas. Las tradiciones *dominantes* son aquellas que en determinado momento concentran el grueso de los apoyos electorales, las simpatías de los grupos sociales poderosos —y sus contribuciones monetarias—, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y las alianzas internacionales. Las tradiciones *residuales* son las que oportunamente tuvieron un momento de auge, pero han sido desplazadas del centro del campo de las derechas: sus recursos económicos y simbólicos, su adhesión social y su incidencia política se encuentran en proceso de erosión. Finalmente, las tradiciones *emergentes* son aquellas que muestran empuje y crecimiento, pero cuyo vigor no les permite —o no les permite aún— desafiar o absorber a las otras familias de derecha.

Si damos por buenas estas ideas, entonces conviene que hablemos de derechas, en plural, puesto que se estará refiriendo siempre a tradiciones políticas que conviven en forma no necesariamente pacífica. Están unidas por la convicción de que hay ciertas jerarquías que han de defenderse de cualquier pretensión niveladora, pero no por ello tienen acuerdos sobre qué diferencias son las intocables y cuáles no (entre las clases, entre los países, entre varones y mujeres, etcétera). Por ello siempre ha habido varias ofertas políticas derechistas que entre sí competían por obtener los recursos y la representatividad de las élites. Esta forma de interpretar tiene la ventaja de que pondera el campo de las derechas como conflictivo, pues está poblado por actores que entre sí tienen relaciones de competencia y a la vez de solidaridad, las cuales van mutando a lo largo del tiempo. Con ello se quiere testimoniar la multiplicidad de identidades clasificables como “derechistas” y dejar de lado

cualquier pretensión de esencialidad. En ese sentido, las derechas se encuentran vinculadas por la posesión de enemigos comunes más que por lazos de amor.

Vale la pena señalar otros puntos analíticos, porque servirán de apoyo a lo largo de los capítulos. El primero de ellos es la composición relacional de las derechas. Sus principios, prácticas y contornos vienen fijados por una dialéctica de diferenciación, enfrentamiento y recomposición frente a diversos actores (partidos, sindicatos, guerrillas, movimientos sociales y estudiantiles, gobiernos extranjeros, etcétera) a los que identifican como adversarios, enemigos o, al menos, competidores. Como señaló el filósofo italiano Marco Revelli, *izquierda y derecha* no son conceptos absolutos, sino que son posiciones: se explican más por la topología que por la ontología. Son lugares del arco político que están enfrentados y relacionados y que son mutuamente excluyentes: ahora bien, esa oposición nada dice sobre el contenido de las ideas contrapuestas. La oposición permanece en el tiempo, mientras lo que varía es el contenido que se pone en juego.

Entre esos enemigos de las derechas, ninguno ha tenido tanto peso en el siglo xx como el comunismo. El anticomunismo es una tradición política tan vieja como su antagonista: en algunos países incluso precedió a la existencia formal de los partidos comunistas y a la constitución del régimen soviético en Rusia. Está claro que entre comunismo y anticomunismo existen procesos de construcción identitaria relacional, esto es, unos se van presentando y criticando en función de lo que (piensan que) el otro es. Pero no se trata de un vínculo mecánico ni directo: a un partido comunista fuerte no le *corresponde* un movimiento anticomunista igualmente poderoso. En muchos casos el anticomunismo tomó una práctica y una dimensión preventivas, que no se condecían frente a las capacidades e intenciones reales de los (identificados como) comunistas. Además, por *comunismo* los derechistas entendían distintas cosas, según el país y según la coyuntura. Para algunos era el largo brazo

del imperialismo soviético y para otros era un fantasma creado por el *trabalhismo*; para algunos era el Partido Comunista local y sus organizaciones satélites, pero para otros una hidra de múltiples y contradictorias caras, a la que denominaban Modernidad, y a la que, en todo caso, hacían nacer bastante antes que en 1917 en Petrogrado: en 1789 en París e incluso en 1517 en Wittenberg, con las tesis de Lutero.

Las derechas son un objeto que debe considerarse también histórico: se trata de corrientes políticas que cambiaron en el tiempo, dado que eran sensibles a los contextos políticos locales, continentales y globales. Por la densidad antiabsolutista y anticonservadora, el liberalismo americano a inicios del XIX estaba a la izquierda respecto de quienes postulaban la necesidad de respetar las jerarquías de las corporaciones coloniales: sin embargo, ser liberal a fines del siglo XIX significaba ser de derecha en la mayor parte de los países. La historicidad de las derechas puede apreciarse, al igual que en cualquier otro sujeto de la política, en las variaciones de sus orientaciones ideológicas, las relecturas sobre el pasado y las alteraciones de sus alianzas y sus antagonismos en el campo de la política.

En síntesis, las derechas aquí son entendidas como proyectos hegemónicos de la élite (o de fracciones de ella) que participan de la vida política junto a actores sociales no encumbrados a quienes dicen y quieren representar, y que exhiben intransigencia ante la igualación, la cual recurrentemente consideran sinónimo de uniformización y nivelación hacia abajo. Las derechas regularmente aparecen asociadas a cierto pesimismo antropológico; muestran reticencia ante los cambios acelerados, pero no ante todos los cambios: avalan aquellos producidos a la velocidad “correcta”, controlados, en diálogo con el pasado y al servicio de los intereses de las élites.

LAS DERECHAS LATINOAMERICANAS: ¿ALGÚN AIRE DE FAMILIA?

¿Qué pasa cuando la pregunta ya no es por la clasificación de la derecha a secas, sino por las derechas latinoamericanas?, ¿hay algo particular en ellas? Hace ya muchas décadas el historiador argentino José Luis Romero postuló que había dos criterios para identificarlas. Por un lado, cierta predilección por regímenes políticos autoritarios y excluyentes, como las dictaduras y las oligarquías. Y, por otro lado, la asunción de la defensa de estructuras socioeconómicas tradicionales, que tenían su origen en el orden colonial. Ninguno de los dos criterios, sostenía Romero, era suficiente: ambos debían estar presentes en alguna combinación. Ese acercamiento hoy parece esquemático y añejo, pero sobre todo deja de lado un aspecto muy relevante de la vida latinoamericana en general y de sus derechas en particular: el vínculo con fuerzas sociales y políticas situadas fuera del continente. Resulta muy evidente la presencia en América Latina de ideologías derechistas originadas en el mundo europeo. La lista siguiente es sólo una muestra y no un compendio exhaustivo. Podemos encontrar influencias francesas en el peso del positivismo comteano en el Imperio brasileño, pero también en el impacto de figuras como Georges Sorel, Maurice Barrès o Charles Maurras y su *Action Française* en las extremas derechas de los años treinta del siglo xx o en figuras vinculadas o acusadas de colaboracionismo durante la Segunda Guerra Mundial, como Jacques de Mahieu, devenido teórico del peronismo en los años cincuenta y sesenta. El peso del pensamiento conservador portugués en Brasil es por demás conocido, al igual que las múltiples influencias de ideologías creadas en Alemania sobre grupos políticos y pensadores en varios países del Cono Sur: prusianismo y nazismo fueron presencias minoritarias, pero ruidosas en el mundo de las ideas de la extrema derecha argentina y chilena. El fascismo tuvo uno de sus hijos predilectos, pero no directos, en la *Ação Integralista Brasileira* (1932-1938). El

influjo de las derechas españolas también resulta evidente en las sucesivas lecturas que en América se hicieron de las obras de pensadores de las tradiciones católicas, reaccionarias y contrarrevolucionarias (Marcelino Menéndez Pelayo y Jaime Balmes, primero, y luego la versión más radicalizada de Ramiro de Maeztu y de José Antonio Primo de Rivera, el líder de la Falange). En la segunda mitad del siglo xx una parte significativa de las preocupaciones y banderas que asumieron las derechas latinoamericanas tuvo un origen estadounidense: las diversas versiones del neoliberalismo (la Escuela de Virginia, la Universidad de Chicago, Milton Friedman, etcétera), del anticomunismo y de la doctrina de la seguridad nacional, exportada de manera insistente durante toda la Guerra Fría a políticos, intelectuales y, sobre todo, integrantes de las Fuerzas Armadas.

Nuestro continente ha sido históricamente más importador que exportador de ideas. Como los hombres de izquierda, los de derecha no han escapado a ese rasgo. Las nociones, preocupaciones y caracterizaciones ideológicas de las derechas europeas han sido usadas localmente, lo cual no significa pasividad histórica. Por el contrario, como han mostrado muchos analistas de los fenómenos ideológicos, en América Latina se producen siempre procesos continuos y originales de adaptación, alteración, recreación y recepción de hechos, ideas y coyunturas generados fuera del continente. Los usos intencionados y selectivos estuvieron a la orden del día: sin ir más lejos, los fascistoides argentinos de los años veinte, fascinados con Action Française, mantuvieron cauto y estratégico silencio sobre el hecho de que Charles Maurras era monárquico y oportunamente había sido excomulgado por el Vaticano. Entonces, más que hablar de influencia, quizá valga la pena pensar que las derechas latinoamericanas —al igual que todas las demás fuerzas políticas— intentaron aprovecharse, utilizar y beneficiarse del establecimiento de ligazones y filiaciones, a veces justificadas y a veces antojadizas, con tradiciones políticas provenientes del exterior.

Ahora bien, las circulaciones no sólo iban del norte al sur, sino que en algunos —pocos— casos han conseguido hacer el camino del salmón: hay ideas, dirigentes y problemas del sur del mundo que han impactado sobre algunos de los rasgos, tonos o miedos del Atlántico del Norte a lo largo del siglo xx. Pero sobre todo es necesario recordar que existió un amplio conjunto de vinculaciones entre organizaciones de derecha de países de América Latina. Esas conexiones no siempre fueron públicas ni reconocidas explícitamente; es posible descubrirlas si se consultan las publicaciones de los partidos de derecha, las memorias de sus figuras, en la realización de congresos internacionales y, en algunos casos, a través del espionaje del que fueron objeto por parte de las policías políticas, como la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), el DEOPS brasileño, el Servicio de Inteligencia y Enlace (SIE) uruguayo —luego Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)— o la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de México. Los “aires de familia” que es posible descubrir entre agrupaciones derechistas latinoamericanas obedecen en parte a esos vínculos, que contribuían a constituir lenguajes e identidades políticos compartidos, identificar enemigos comunes y planificar empresas conjuntas.

Otra fuente de dichas semejanzas es que los actores políticos latinoamericanos se enfrentaron en los siglos xix y xx a problemas relativamente parecidos. Se trata de tensiones de alcance continental o global que fueron objeto de interpretación ideológica por parte de agrupaciones de derecha: me refiero a problemas tales como estabilizar los regímenes oligárquicos hacia 1880, neutralizar los reclamos de las clases medias y sus voceros políticos por la democratización a inicios del siglo xx (capítulo 1 de este libro), reducir la intensidad del conflicto entre capital y trabajo después de la Primera Guerra Mundial (capítulo 2), definirse respecto de las tentaciones ejercidas por el fascismo y el franquismo en el periodo de entreguerras (capítulo 3), ubicarse en el orden bipolar de la Guerra Fría en los años cincuenta en la distancia justa respecto de Washington (capítulo

4), lidiar con la radicalización política producida tras la Revolución Cubana y con la autonomización de las Fuerzas Armadas (capítulo 5), atender a la seducción neoliberal de las instituciones financieras internacionales tras la crisis de la deuda de los años ochenta y, por último, responder a los desafíos planteados por el auge de los gobiernos de la llamada “marea rosa” y el desafío bolivariano a inicios del siglo XXI (capítulo 6).

Hay al menos otros dos aspectos que singularizan la experiencia histórica de las derechas en el continente: la centralidad que tiene para los países latinoamericanos el vínculo con los Estados Unidos y la abrumadora presencia de la fe católica de la región. Desde que los Estados Unidos hicieron un violento ingreso en la geopolítica y la economía caribeña y centroamericana en 1898, la definición sobre las ventajas y desventajas de la cercanía a Washington ha estado a la orden del día entre las derechas. Las lecturas panamericanistas chocaban con las nacionalistas en muchos casos en la primera mitad del siglo XX: los librecambistas y los desarrollistas prosiguieron ese debate en el tercer cuarto del siglo. Sólo desde entonces las derechas latinoamericanas parecen mostrar mayor consenso sobre la pertinencia o la inevitabilidad de seguir las orientaciones estadounidenses en materia económica, diplomática y geopolítica. Eso no significa que todos los actores derechistas sean pro Estados Unidos desde las últimas tres décadas del siglo pasado, pero sí que esa postura no admite discusión entre los partidos políticos y las corporaciones empresariales más importantes, que no ven ni imaginan un orden económico internacional alternativo al vigente desde entonces.

Si el vínculo deseable o tolerable con Washington —y, en general, con actores extracontinentales como las organizaciones panamericanas o el Fondo Monetario Internacional (FMI)— constituye uno de los aspectos centrales en las autoimágenes de las derechas latinoamericanas, cosa parecida puede decirse respecto de la relación con la Iglesia. En un continente macizamente católico, para las derechas constituía un desafío enorme saber qué relaciones es-

tablecer con la institucionalidad eclesiástica (en el nivel local y con el Vaticano), pero también qué identificaciones establecer con las creencias y prácticas religiosas populares y con el pasado colonial. El “alma” católica de la nación: ¿era un elemento que debía restaurarse y cultivarse o uno del cual era necesario deshacerse para dar paso a la modernidad, entendida como superación de las pertenencias religiosas? Las derechas variaron en la respuesta a esa pregunta no sólo a lo largo del tiempo sino entre los países de América Latina. En algunos casos la Iglesia tenía su propio representante en la vida política nacional, como los conservadores chilenos o colombianos o la Unión Cívica uruguaya, pero en otras ocasiones su espíritu integrista la llevaba a rechazar cualquier participación en la política parlamentaria, como ocurrió en Argentina, o a alentar actividad política clandestina, como en el México posrevolucionario o en los años finales de la dictadura de Stroessner en Paraguay.

La institución eclesiástica actuó en respaldo automático del orden social desde tiempos coloniales y como aliada de diversas agrupaciones de derecha hasta la década de 1960. Como muestra el capítulo 5 de este libro, el Concilio Vaticano II (1959-1962) y sus particulares derivas latinoamericanas sacudieron fuertemente los vínculos entre la Iglesia y las élites sociales de distintos países, por cuanto una porción significativa de los sacerdotes, monjas y obispos se reorientó hacia perspectivas liberacionistas y de diálogo con el marxismo. Otra porción de la Iglesia, por el contrario, profundizó su perspectiva autoritaria y reaccionaria, lo cual le permitió mantener la histórica sociedad con las clases altas y convertirse en proveedora de servicios educativos para esas familias, como pasó con el Opus Dei. Además, el crecimiento de las iglesias neopentecostales durante los últimos treinta años ha impactado de lleno en la vida política de varios países, puesto que éstas establecieron alianzas —a veces explícitas— con partidos y figuras de extrema derecha en la promoción de una agenda moralmente conservadora, como muestran los casos de Brasil y Perú.

¿Puede decirse que las derechas latinoamericanas han tenido históricamente más cercanía a las corporaciones militares que sus pares europeas o estadounidenses? Eso resulta difícil de afirmar. Lo que sí en cambio puede señalarse con más seguridad es que las élites latinoamericanas han tendido a confiar en la capacidad política de los uniformados casi tanto como en la de los políticos. La convicción democrática de las élites latinoamericanas ha sido débil —por decir lo menos— y, en todo caso, nunca ha sido más fuerte que la preocupación por defender sus intereses directos. De hecho, podríamos pensar en un juego de suma cero, puesto que allí donde los partidos derechistas mostraron capacidad para representar y gestionar los intereses de los sectores dominantes a través de la producción de hegemonía y éxitos electorales, menos espacio tuvieron las Fuerzas Armadas para intervenir (o menos necesidad había de convocarlas a que resolvieran algún *impasse* político). De cualquier manera, vale la pena señalar que las Fuerzas Armadas latinoamericanas han actuado desde su profesionalización a finales del siglo XIX e inicios del XX como uno de los vehículos de conexión con las potencias centrales, por su dependencia en la instrucción de los oficiales y la provisión de armamentos y doctrinas (de Prusia, de Francia, de la *Royal Navy*, y finalmente, del Pentágono).

Insistiremos a lo largo del libro en la necesidad de considerar a las derechas latinoamericanas como un objeto *plural*. Esa pluralidad se expresaba, como veremos, en el nivel organizativo, en el ideológico y en el origen social de sus seguidores, que incluye —y a la vez excede— a los sectores sociales encumbrados y ha sido cambiante a lo largo del tiempo. Como escribieron recientemente Patricia Rangel y Barry Cannon, “elementos que un día fueron dominantes —la Iglesia católica, el Ejército y el capital local— ahora deben pelear por la influencia y el poder con actores emergentes, como *think tanks*, iglesias evangélicas, nuevas redes sociales y una multitud de movimientos que aquéllos contribuyeron a crear”.

Por lo anterior, las “formas” de las derechas latinoamericanas han sido varias a lo largo del tiempo. En muchos casos se trató de partidos con pretensiones de masividad, que jugaban su suerte en las votaciones, como el Partido Conservador chileno o la União Democrática Nacional brasileña; los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) de México, por el contrario, insistieron desde el inicio en que no serían un partido de masas, sino que apostarían por revolucionar las conciencias lentamente. Pero también adquirieron otras modalidades organizativas: bandas armadas y parapoliciales, como los escuadrones de la muerte en El Salvador o la Liga Patriótica Argentina creada en 1919; círculos de reflexión intelectual y teológica; grupos de presión, y, desde ya, periódicos como *El Debate* (1927-1930) de Colombia o revistas como *Tizona* en los años sesenta y setenta en Chile. Hubo también figuras individuales —sacerdotes, periodistas, publicistas, intelectuales— que conseguían generar sus públicos y sus seguidores y que se concentraban en actividades editoriales o en la agitación a través de la prensa, el sermón o en la calle.

CONTENIDO DEL LIBRO

Dado que el acercamiento que aquí se propone pone el acento en la historicidad y los cambios de las derechas, la organización del libro descansa en recortes cronológicos. Un conjunto de temas y problemas transversales sirve para desplegar la argumentación. Así, el primer capítulo refiere a las derechas liberales y conservadoras que se enseñorearon sobre distintos países de América Latina durante la consolidación de los regímenes oligárquicos entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Encontramos junto con esas fuerzas a una generación político-intelectual de fuerte contenido identitario y nacionalista que, amparada en el hispanismo posterior a 1898, despotricaba contra el cosmopolitismo y el cientificismo de

inspiración positivista. Su racismo tenía un tono menos biologicista que culturalista, y se orientaba lo mismo contra los indígenas y los afrodescendientes que contra los inmigrantes ultramarinos. Su tono pesimista y antievolucionista se enfurecía contra la modernización cultural —incluso de integrantes de la élite—, en la que adivinaba la pérdida de las tradiciones patrias y de las jerarquías naturales.

El segundo capítulo se concentra en el decenio que va de la primera emergencia del “miedo rojo” de 1918 al impacto de la crisis económica de 1929, momento en el que aparecen formas novedosas de derecha antiliberal. Una nueva generación hizo su entrada tras el marasmo civilizatorio que produjo la Gran Guerra, el impacto de la Revolución Mexicana y la difusión de perspectivas antirracionalistas. Estos hombres expresaron como pocos la sensación de desengaño y de desencanto respecto de Europa y sus ideas, a las que consideraron definitivamente anquilosadas. El gesto vanguardista de ese tiempo se expresaba como culto de minorías decididas y autoritarias, que pudieran sacudir al tedio y la impersonalidad de la vida social.

El siguiente capítulo se aboca a la llamada Era del Fascismo, cuando diferentes fuerzas políticas —las de derecha entre ellas— se vieron forzadas a definirse respecto de la Guerra Civil española, la contienda bélica mundial y el conflicto ideológico y luego bélico entre las democracias occidentales, el Eje y la Unión Soviética. Luego de la crisis de 1929 podemos identificar la emergencia de una nueva generación, que fue fogueada al calor de las consecuencias socioeconómicas de la crisis y sobre todo de las reacciones a la expansión del fascismo en Europa y en América. Los años treinta vieron el crecimiento de un nuevo grupo de políticos, intelectuales y militantes anticomunistas y antiliberales, convencidos de la necesidad de renovar el orden político y cultural con una fuerza viril, juvenil y autoritaria. Estos hombres también se entusiasmaron con las tareas de investigación histórica a las que daban un fuerte

interés político: desarrollaron perspectivas revisionistas sobre el pasado nacional, al que recurrentemente veían bajo prismas conspiracionistas.

El cuarto capítulo abarca de 1946 a 1964, esto es, los primeros veinte años de Guerra Fría en América Latina, momento en el que el problema del desarrollo y la agenda anticomunista se colocaron en el centro de las preocupaciones políticas nacionales y desplazaron la inicial promesa de ampliación de la democracia y la impugnación general del fascismo. La generación derechista que reemplaza a los “nostálgicos del nuevo orden”, al decir de Christian Buchrucker, parecía tener más fe en la democracia multipartidaria que sus predecesores, pero su anticomunismo no perdió intensidad. Su esfuerzo apuntaba a crear una derecha que a la vez garantizara estabilidad política, desarrollo económico y orden social en sociedades crecientemente industrializadas y urbanas. La tentación con la democracia cristiana y con el desarrollismo fueron algunas de las expresiones de esos esfuerzos.

Sin embargo, las derechas modernizadoras perdieron el control de los ritmos sociales, no sólo del gobierno y de los resortes del poder público. El fracaso de esa tentativa de crear una derecha compatible con la democracia dio pasto a las derechas radicales anticomunistas y neofranquistas, pero sobre todo a las dictaduras en 1964. El quinto capítulo se concentra en el estudio de los vínculos entre las fuerzas de derecha y las dictaduras que, inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, terminaron asentándose en América Central y del Sur, a partir del golpe de Estado ocurrido en Brasil en marzo de 1964. Tomamos como punto de partida ese año y no 1959, para dar cuenta de la novedad de la respuesta política al desafío de las izquierdas. Estos regímenes autoritarios se presentaron como la forma más segura para perseguir a las almas soliviantadas en las escuelas, las fábricas, el campo, los hogares y las universidades (incluso las católicas, hasta entonces reaseguro de la ideología del

statu quo, puesto que estaban habitadas por muchos jesuitas que enseñaban Marx o que terminaban por alistarse en la guerrilla o por apoyarla explícitamente).

El último de los capítulos presta atención al mundo contemporáneo, aquél producido tras la finalización de los regímenes militares de América Latina, la caída del bloque soviético y el agotamiento del modelo de crecimiento mercado-internista. En el tiempo abierto en 1989 las que mejor se mueven son las derechas neoliberales, ideológicamente reconciliadas con la democracia y a la vez recelosas del intervencionismo estatal y del “populismo”. Encontramos entonces otra generación, dotada de una agenda que era principalmente de modernización económica y de “puesta al día”. Su corazón neoliberal y su convicción de formar parte de una causa internacional y científicamente fundada fueron sus marcas identitarias más evidentes. Aunque esos hombres tenían lazos bien conocidos con las dictaduras, sus personeros y los ganadores económicos en su autopresentación insistían en la idea de libertad, de ruptura con el pasado inflacionario y estadocéntrico, y promovían la seducción a los inversores externos. Esa generación fue la que en los años noventa obtuvo un contundente triunfo ideológico sobre sus adversarios.

En la coda del libro se ofrecen algunas ideas sobre fenómenos recientes, en los cuales vemos una particular cercanía entre las derechas neoliberales afectadas por los gobiernos de la “marea rosa” y la agenda de una derecha muy conservadora, preocupada por impedir la sanción de nueva legislación sobre familias, identidad y género. Por último, en el ensayo bibliográfico final los lectores podrán encontrar algunas referencias para seguir explorando el tema, así como las fichas bibliográficas de todos los textos citados a lo largo de este libro.

No parece ocioso hacer algunas aclaraciones antes de entrar en el primer capítulo. La primera es que el presente tomo descansa principal —mas no exclusivamente— sobre la consulta a autores

y autoras radicados en instituciones académicas latinoamericanas, con quienes se aspira a establecer o profundizar el diálogo sobre el pasado de nuestra región. En ese sentido, este libro desea expresar algo del enorme desarrollo que están teniendo las investigaciones sobre las derechas en las universidades de nuestro continente. La segunda aclaración es que los lectores percibirán que hay algunos casos nacionales que reciben más atención que otros: países como México o Chile son más mencionados que Guatemala o Paraguay. Y si bien el desequilibrio entre casos es inevitable en cualquier texto que pretenda predicar algo sobre la historia de todo un continente durante un siglo y medio, el que aquí se evidencia tiene sus razones específicas. Por un lado, la bibliografía producida y disponible sobre la historia y la vida contemporánea de los países de la región tiene volúmenes, envergadura y desarrollo muy diferenciados. Por el otro, se encuentran los saberes y limitaciones del autor de este libro, cuyas restricciones pudieron ser suplidas sólo parcialmente con los aportes de los textos a su alcance.

CAPÍTULO I
DE FINALES DEL SIGLO XIX A LAS NOTICIAS
DE LA REVOLUCIÓN RUSA (1880-1918)

Nunca he dejado de preguntarme por qué los que más se lucran del país son los que más se avergüenzan de él.

William Ospina, *¿Dónde está la franja amarilla?*

La vertiginosa integración de los circuitos productivos locales de América Latina a los mercados europeos y estadounidenses marcó la vida económica, política y social del continente en el medio siglo posterior a 1880. Ese proceso descansó en transformaciones muy rápidas y violentas de las formas tradicionales de producir, de vivir y de organizarse de los sectores populares, principalmente los rurales. Gracias a las reformas liberales iniciadas en la segunda mitad del siglo XIX, se crearon las bases para la expansión del capitalismo rural, la privatización y concentración de la propiedad de la tierra, la disolución o reducción de las comunidades indígenas y, en muchos casos, el afianzamiento de relaciones laborales serviles. Aun cuando hubo muchas divergencias nacionales y regionales, podría decirse que las élites vivieron una etapa de notable enriquecimiento al afianzar sus exportaciones agrícolas, ganaderas y minerales a las economías metropolitanas. El peso económico creciente de las élites se expresaba en su capacidad para controlar simultáneamente la vida política local y nacional, así como al resto de los grupos sociales. Precisamente, la situación de los trabajadores —o más bien su insumisión creciente— comenzó a ganar terreno en la discusión política a inicios del siglo XX. Algunas voces del conservadurismo transfirieron sus preocupaciones políticas, antaño concentradas en el texto constitucional, a problemas sociales aparecidos o visibilizados entonces con la urbanización y la modernización de la economía, tales como el desempleo, el alcoholismo y la prostitución.

Para ello se sirvieron de algunas de las orientaciones y encíclicas vaticanas, como se verá.

Este capítulo da cuenta del proceso de transformación del liberalismo evolucionista y optimista de 1880 en el autoritarismo de clase que se desplegó con motivo del alza de la conflictividad laboral en la década de 1910. En la primera sección se caracterizan la vida política latinoamericana y los rasgos políticos de los regímenes oligárquicos en ese periodo. En particular, interesa dar cuenta de las novedosas formas de organización de la dominación política tales como la constitución de partidos de derecha o de dictaduras personalistas. Los liberales y conservadores que participaron de la vida política y los dictadores que éstos apoyaron normalmente combinaron una lectura optimista sobre el futuro nacional —indisolublemente asociado a la incorporación a los circuitos económicos del Atlántico Norte— con el deseo de modernizar selectivamente las estructuras sociales y culturales de su país. La segunda sección describe a las derechas liberales que tuvieron a su cargo —y aprovecharon— el control de la vida política nacional. La última sección se concentra en la emergencia de una derecha muy ideologizada y, en general, poco interesada por la actividad política formal. Ésta se encontraba conformada por escritores, ideólogos, sacerdotes y otras figuras ilustradas que ofrecían diagnósticos muy pesimistas sobre los impactos de la integración económica mundial y adivinaban más sinsabores que ventajas en la aparición de nuevos sectores sociales, la sofisticación del consumo y el distanciamiento de la herencia ibérica y católica.

LA POLÍTICA OLIGÁRQUICA: ENTRE LAS DICTADURAS PERSONALES Y LA DEMOCRATIZACIÓN

Como es bien sabido, las disputas políticas y militares que se suscitaron en la América española luego de la invasión napoleónica a

España en 1808 condujeron a la independencia de las antiguas colonias en las décadas de 1810 y 1820. Sin embargo, la independencia no significó estabilidad ni tranquilidad política. Por el contrario, a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XIX las nuevas repúblicas tuvieron una vida política plagada de numerosos, superpuestos e intensos conflictos: guerras civiles, reiterados recambios constitucionales, fragilidad del orden público, alteración de las fronteras, rotación violenta de autoridades y privatización de los ejércitos fueron parte del panorama político de la América hispana por decenios. Recordemos algunas de las principales tensiones a las que se vieron sometidas las jóvenes repúblicas.

El primer problema, el más evidente y fundacional, era el de la identidad. ¿“Americanos”, “mexicanos”, “grancolombianos”, “bahianos”, “altoperuanos”, “chiapanecos”, “rioplatenses”? ¿Quién era el “nosotros” que enunciaba y defendería la independencia? La transición identitaria, institucional, legal y política desde las unidades coloniales (virreinos, capitanías, audiencias, provincias, etcétera) a las nuevas realidades republicanas no fue sencilla ni directa, sino que estuvo tapizada de desafíos y de la obligación de introducir múltiples y poco coherentes cambios. Esos cambios estaban orientados por el realismo político y bélico más que por el respeto a las divisiones territoriales heredadas de la colonia o a las realidades culturales o étnicas previas. Experiencias como la Unión de los Pueblos Libres (1814-1820), la República de Tucumán (1819-1821), la Gran Colombia (1821-1831), la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839) o la República Federal de Centro-América (1824-1839), así como sus disoluciones —e intentos de recomposición— dan cuenta de la inestabilidad territorial y de denominaciones de los países en la primera mitad del siglo XIX. El corrimiento de los límites geográficos y la incerteza sobre las pertenencias (aún no) nacionales marcaron a ese periodo. Como es comprensible, ello se expresó en una larga serie de conflictos políticos y armados que consumieron buena parte de las décadas posteriores a la independencia. La

monarquía brasileña, independiente desde 1822, contorneó muchos de esos problemas, pero no pudo impedir que estallaran revueltas federalistas, republicanas e incluso secesionistas como las de Rio Grande do Sul (1835-1845), Cabanagem (1835-1840), Sabinada (1837) y Balaiada (1838-1841): su fracaso militar o su desactivación política no debe llevarnos a olvidar su existencia.

A ese primer conflicto se le sumaba el que distanciaba a quienes se decían celosos defensores de las prerrogativas de la Iglesia católica y los que aspiraban, por el contrario, a reducir el papel de esta institución en el alma de hombres y mujeres, en la educación de los niños, en la legislación y, en muchos casos, en la gran propiedad rural. Casos como el ecuatoriano, el mexicano o el colombiano fueron testigos de la crudeza con la que liberales y conservadores se enfrentaron por décadas sobre este asunto alternándose en el control de la situación política y la fijación de los textos constitucionales, según la suerte que tuvieran en el campo de batalla. Un país como Chile, que sorteó buena parte de los conflictos de otras repúblicas en la primera mitad del siglo XIX, no pudo evitar que la puja entre conservadores (“pelucones”) y liberales (“pipiolos”) organizara su vida política por lo menos hasta la década de 1920.

Finalmente, el tercer gran conflicto que tensionaba a las dirigencias políticas era la definición de la orientación económica a adoptar. Por un lado, se contaban quienes postulaban la necesidad de reconstruir o mantener las estructuras económicas coloniales y la de respetar el ordenamiento corporativo sobre producción, competencias, monopolios y derechos. Otros sectores, por el contrario, insistían en la premura de orientar la producción minera o agroganadera hacia las crecientes demandas que formulaba la economía europea, revolucionada por la expansión de la actividad industrial. Desde luego, estos actores eran conscientes de que tal modificación implicaba avanzar sobre posiciones y posesiones de la Iglesia y de otras corporaciones, así como vencer la previsible resistencia de las comuni-

dades indígenas a la pérdida de sus tierras o al incremento de exigencias de trabajo no remunerado.

Es interesante notar, entonces, que buena parte de esos conflictos que habían sacudido a la antigua América española —y de los que permaneció en parte eximida la portuguesa— estaba acotada cuando no resuelta al terminar el siglo XIX. El final de esas disputas no fue tanto el resultado de un gran acuerdo entre los múltiples grupos sociales existentes sino el de un pacto entre élites que hasta entonces habían mostrado una incombustible voluntad facciosa. Luego de la Guerra del Pacífico (1879-1884), América Latina no vivió mutaciones significativas en las fronteras nacionales: las disputas se resolvieron mayoritariamente de manera pacífica aun cuando implicaron cesiones de territorio. No se han disuelto ni creado nuevos países desde entonces, salvo por la independencia cubana (1898) y la apurada creación de Panamá (1903), y sólo ha habido una guerra internacional, aquella que libraron paraguayos y bolivianos entre 1932 y 1935 (conflictos no tan extendidos hubo entre peruanos y ecuatorianos en 1941 y entre salvadoreños y hondureños en 1969). Esa relativa ausencia de conflictos bélicos internacionales da cuenta de la estabilidad de los límites y de las pertenencias nacionales: el “nosotros” a finales del siglo XIX no tenía la maleabilidad de las décadas de 1830 o 1840 y era ya un “nosotros” nacional: ya no había ni habrá ciudadanos centroamericanos sino hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. Sus fronteras podrán moverse algo, pero no estaba en discusión cuáles eran los países que existían y los que podían existir. Eso permitió reducir la vigorosa experimentación política y constitucional que habían vivido los nuevos países desde 1810. Algunos adoptaron regímenes más federales como México y Brasil, mientras que otros como Chile y Colombia (desde 1886) se aferraron a constituciones más unitarias. Significativamente, en 1889 terminó el único régimen monárquico existente en el continente, el Imperio brasileño, para dar paso a la mayor república de América del Sur.

El segundo punto de fricción, que dividía orientaciones políticas respecto de la Iglesia, también parece estar subsanado a finales del siglo XIX. Normalmente el triunfo les correspondió a los liberales —salvo en Ecuador y en la Colombia gobernada por Rafael Núñez desde 1886—, quienes se dieron a la tarea de construir instituciones estatales tan libres de las influencias clericales como se pudiera. La derrota política de la Iglesia católica contribuyó a que la vida pública fuera más laica, aunque probablemente no afectó demasiado la vida privada de las familias de élite. Sin duda, impulsó a un sector importante de los prelados a creer que estaban envueltos en una guerra santa contra el Estado liberal. Ellos fueron algunas de las voces más críticas contra la civilización burguesa, la imitación de modelos constitucionales e institucionales del Atlántico Norte y la expansión de los conflictos sindicales a inicios del siglo XX. Como señalaron Roniger y Senkman, en las sociedades en las cuales la Iglesia tenía mayor número de fieles, recursos económicos y llegada a las sensibilidades populares, ésta se encontraba en “mejores condiciones para defenderse y contraatacar, lo que incidió en una mayor violencia en los conflictos y guerras civiles”, así como en predisposición a difundir “mitos conspirativos de inspiración eclesiástica denunciando el supuesto poder de la masonería”.

El papa León XIII fue el gran impulsor del uso del tomismo en la educación, a fines de modificar y eliminar lo que se entendía que eran “errores” de la modernidad, ya denunciados en el *Syllabus* (1863), que condenaba la libertad de culto, el liberalismo y la separación entre la Iglesia y el Estado. Si bien el carácter antiliberal e incluso integrista de la Iglesia se hizo muy intenso a finales del siglo XIX, sólo se convirtió en un desafío político en la década de 1920. La encíclica *Rerum Novarum* (1891) expresó algunas consideraciones sobre la necesidad de morigerar los peores aspectos de la explotación capitalista y actuar preventivamente sobre los trabajadores antes de que las voces ácratas o socialistas los reclutaran. En esa encíclica se condenaba al socialismo por ser contrario al resguardo de

la fe, de la propiedad, la familia y el poder paterno. El impulso de la encíclica se transformó en publicaciones y numerosas iniciativas tales como cajas de ahorro y círculos de obreros católicos, sostenidas más por prelados y laicos que por la jerarquía eclesiástica. Destacaron allí las figuras de monseñor Miguel de Andrea en Argentina y de Alfredo Méndez Medina en México, autor de *La cuestión social en México* (1913).

El caso mexicano es probablemente uno de los más radicales con la aplicación de la Reforma constitucional de 1857, pero no le fueron a la zaga otros países. El gobierno de José Batlle y Ordóñez en Uruguay (1903-1907 y 1911-1915) estuvo dotado de un tenaz espíritu anticlerical, que incluyó la presentación de un proyecto de ley para declarar laborable el día domingo. La debilidad de la Iglesia católica uruguaya y la secularización de la sociedad y de sus élites políticas en el siglo XIX erosionaron la viabilidad política de una opción explícitamente católica, como la que defendió infructuosamente la Unión Cívica creada en 1910. En otros países el triunfo sobre la Iglesia no fue absoluto, sino que expresó más bien un deseo de las élites políticas de dar por zanjada esa discusión a través de algún acuerdo que inhibiera las posiciones inmoderadas de ambos lados. En parte, el establecimiento de esos pactos fue posible y contemporáneo a la resolución del tercer conflicto que había distanciado a las élites y que se originaba en la definición de la orientación económica a seguir.

En algún momento en las últimas décadas del siglo XIX todos los países latinoamericanos encontraron y exploraron un nicho en el mercado global. Algunos ya lo habían hallado tempranamente, como Chile con el salitre primero y luego con el cobre; otros encontraron alguno y lo tuvieron que abandonar por la aparición de competidores, como el guano que exportaba Perú desde sus islas en el Pacífico. En otros casos, los países lograban exportar más de un bien (como México) o consiguieron pasar de un *boom* a otro, cuando la frontera agrícola o la demanda

externa indicaban su agotamiento (el azúcar primero, luego el caucho y finalmente el café en Brasil). La articulación de esa capacidad exportadora con la demanda externa implicó la constitución de entramados económicos locales e internacionales muy complejos. Uno de esos entramados trajo consigo el creciente sometimiento de amplios sectores rurales en los países andinos de América del Sur, en América Central y en el centro y sur de México. En el caso de Brasil implicó orientar a la población esclavizada hacia el área cafetalera de São Paulo, de mayor crecimiento económico. En el sur del continente la opción más utilizada fue la promoción de la llegada de inmigrantes europeos que pudieran sostener la expansión agroganadera en las llanuras rioplatenses.

El alza de las exportaciones brindó a las élites económicas un fuerte respaldo que pudieron utilizar en su favor en las disputas políticas, como ocurrió con los enriquecidos empresarios azucareros de Perú, que lograron vencer los intereses de los hacendados serranos sobre el final del siglo, o de los *fazendeiros* del centro-sur de Brasil, que se impusieron sobre los del noreste del país. En algunos casos no hubo imposición de unas élites sobre otras, sino que éstas decidieron trocar guerras políticas por discusiones parlamentarias para dirimir sus conflictos (como en Colombia después de 1902 o en Argentina después de 1880). La intensificación del comercio internacional les brindó a los gobernantes más recursos para sostener al Ejército y con ello asegurarse la obediencia, el silencio o el miedo de quienes quisieran disputar su orientación política o económica, como deseaban hacer los jornaleros rurales, los mineros o los trabajadores que trasladaban mercaderías hacia los ferrocarriles y los puertos.

La resolución de estos tres grandes problemas (identidad, orden legal y economía) se expresó en una dominación política más estable y previsible a finales del siglo XIX. Los gobernantes que asumieron lo hicieron en un número creciente de casos como resultado del

triunfo electoral y no de un alzamiento militar. Ello no quiere decir que se tratara de elecciones limpias, sino que las urnas eran el único mecanismo legítimo para acceder al poder público. El juego de los votos no era masivo, transparente ni pacífico, pero no había otro que tuviese el mismo nivel de legitimidad. Pocos ejemplos ilustran tan bien la distancia entre el segundo y el tercer tercio del siglo XIX como las seis veces en que en México el general Antonio López de Santa Anna fue presidente (entre 1839 y 1847) y el gobierno que el general Porfirio Díaz ejerció (1876-1911). En varios países la regla fue una dictadura personal, longeva y estable: fueron los casos de Venezuela, gobernada por Antonio Guzmán Blanco primero (1870-1887) y luego por Juan Vicente Gómez (1908-1935), y de Guatemala con Justo Rufino Barrios (1871-1885) y Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). Esas dictaduras descansaban sobre alguna voluntad modernizadora y un fundamento doctrinario liberal que señalaba que su objetivo era cuidar y promover el bienestar y las riquezas de la población.

Hubo un desplazamiento de los recursos y del lugar de la política: para el latifundista que quería llegar al Parlamento pasó a ser menos útil alzar y armar a los peones de su hacienda y se convirtió en ineludible la tarea de convocar a los especialistas electorales, figuras de origen popular (en algunos casos con pasado y prácticas de la delincuencia común) que tenían capacidad para mover —o inmovilizar— al electorado rural y urbano gracias a la precisa combinación de intimidación y recompensas. No se trataba de partidos de masas, sino de partidos de y para los notables devenidos caudillos, caciques, *coronéis*, jefes políticos, etcétera. En todo caso, ello implicaba desarrollar estrategias de movilización, propaganda y fiscalización electoral, de elaboración y distribución de prensa partidaria, es decir, una vida política si no moderna al menos en vías de serlo, y que entrañaba la competencia facciosa —pero menos bélica— entre figuras y camarillas aspirantes a los mismos cargos y poderes públicos.

Vale la pena recordar, de cualquier manera, que todo el proceso no obedecía a ninguna ley histórica. Países como Paraguay y Bolivia vivieron una intensa inestabilidad política hasta mediados del siglo xx. Sin lugar a dudas, los impactos de las guerras internacionales en las que se vieron involucrados (el primero, la Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870, y el segundo, la Guerra del Pacífico, 1879-1884) conspiraron fuertemente contra el establecimiento de una élite legitimada y de un ejército sometido a control civil. En Perú el cimbronazo no duró tanto: desde 1895 se constituyó una dominación política más estable, comandada por el Partido Civil hasta 1919.

En general, el derecho al sufragio estaba sometido a diversas limitaciones. Por un lado, se encontraban las restricciones legales que señalaban fronteras inaccesibles para la participación política: las mujeres siempre estaban fuera de la ciudadanía, y casi siempre también los iletrados (algo sobre lo cual los liberales de inicios del siglo xix no tenían acuerdo, como ilustra el caso de Perú). También había limitaciones fácticas al ejercicio del voto, pues diversos grupos de hombres de acción se ponían al servicio de las camarillas partidarias para inscribir (o impedir la inscripción) en el registro electoral, y para robar, rellenar o quemar las urnas. A su vez, el mecanismo de la elección indirecta constituía otra restricción al potencial impacto de un voto popular no controlado totalmente. Todo ello daba mucho poder a los gobernantes de turno para fijar a sus sucesores a través del control del proceso electoral. Esos sectores debían tomar para sí la tarea de elegir por todos: de allí que, como mostró el historiador Natalio Botana, a fines del siglo xix paradójicamente se entronizaron “gobiernos electores”, encargados de remplazar la voluntad popular al seleccionar *de facto* a sus sucesores en la administración nacional y provincial, gracias al control de las situaciones políticas.

Este nuevo mundo político fue posible allí donde los hombres del Ejército tuvieron un papel y un peso diferentes a los

que habían poseído hasta entonces. A finales del siglo XIX y sobre todo a inicios del siguiente se afirmó un proceso de profesionalización de las fuerzas armadas. Ello significó creación de instituciones específicas para la formación de oficiales y suboficiales durante años; desarrollo de carreras burocratizadas, previsibles y abiertas al talento; eliminación o absorción de fuerzas armadas alternativas (locales, provinciales o privadas), y entrenamiento y provisión de armas, insumos y doctrinas por parte de proveedores metropolitanos (en el Ejército, normalmente Francia o Prusia; en la Armada, los ingleses y alemanes). La actividad política de los oficiales se concentró en la defensa del orden político oligárquico frente a las amenazas provenientes de la acelerada conflictividad sindical: muchos oficiales siguieron tentándose con el salto a la vida política, pero en todo caso la novedad es que la mayor parte de la oficialidad prefirió convertirse en “patriotas de tiempo completo” más que en líderes de ocasionales asonadas. La profesionalización en muchas ocasiones fue acompañada de la incorporación del reclutamiento obligatorio de los jóvenes para ser formados como fuerza de reserva: ello terminó dándoles a los oficiales un contacto directo con muchos problemas sociales del país (deficiencias sanitarias graves, desnutrición, analfabetismo y escasa identificación con la nación) que sirvió a la politización desarrollada por varios en los años veinte.

En síntesis, a diferencia del medio siglo posterior a las independencias, luego de 1880 la regla de la vida política fue mucho más el acuerdo que la lucha entre las élites. Ello se expresó en un orden político más estable donde una élite regional se impuso sobre otras competidoras o donde las dirigencias decidieron trocar guerras políticas por discusiones parlamentarias para dirimir sus conflictos. Esa dominación política era de naturaleza oligárquica. Se basaba en la existencia de partidos dirigidos por notables que se disputaban la suerte en las urnas. Eran regímenes más estables que los predecesores y a la vez más eficaces a la hora de resguardar los intereses de los grandes

propietarios rurales y de minas, de los emisarios financieros y de los acreedores metropolitanos. Su horizonte ideológico era el servicio de las élites económicas. Se trataba, como ya se dijo, de regímenes oligárquicos: los apellidos se repetían en el Parlamento, en la diplomacia, en las asociaciones de ganaderos y latifundistas, en la dirección de los periódicos y en las aulas universitarias. Allí nacieron las derechas liberales, que en muchos casos se dividieron en partidos según criterios de pertenencia regional o de ideas.

LAS DERECHAS LIBERALES Y LAS ÉLITES SATISFECHAS

El historiador Tulio Halperin Donghi señaló que hacia 1880 estaban agotados muchos de los aspectos políticos renovadores y progresistas que había mostrado el liberalismo americano a inicios del siglo. Por entonces, el humor de los liberales se mostraba más dispuesto a establecer acuerdos con los viejos enemigos conservadores —e incluso con la Iglesia— y a aceptar soluciones políticas autoritarias. Las distancias ideológicas entre liberales y conservadores habían tendido a erosionarse, aun cuando sus rivalidades electorales se mantuvieran. Es por ello que incluso en países sin gobierno dictatorial por entonces tales como Argentina o Brasil, la atmósfera política del periodo era más proclive a respetar el “clima de negocios” favorable a las inversiones extranjeras y sus socios locales. En definitiva, el liberalismo había perdido el tono emancipatorio y universalista de principios del siglo XIX y había hecho las paces con las diversas desigualdades existentes —sociales, étnicas, de género, regionales—, que se le antojaban cada vez más naturales, inmodificables o inevitables. El creciente autoritarismo de gobernantes y políticos liberales guardaba relación con la percepción de que ya no era necesario seducir o estimular a sectores subalternos para sumarse a iniciativas políticas y bélicas como las de la primera mitad de siglo.

Se trataba de derechas modernizadoras que deseaban renovar la legislación colonial sobre propiedad eclesiástica y comunitaria de la tierra, toleraban la libertad de cultos, deseaban expandir la provisión de servicios públicos y preferían centralizar tareas que antaño realizaban gobiernos locales. El estilo arquitectónico neoclásico de los nuevos edificios públicos procuraba dejar atrás toda marca de pasado colonial: hay allí una referencia de ese anhelo de una pertenencia nacional abierta al futuro más que a la restauración. Esa élite tenía la expectativa de ser parte de una civilización occidental con sus abundantes bienes agroganaderos y mineros; con las obras de infraestructura portuaria y urbana financiadas gracias a esas exportaciones, y con una aguda conciencia de que la cultura, las letras y las discusiones que valían la pena eran las originadas en las capitales del Viejo Mundo.

Ese complejo de inferioridad no implicaba ausencia de exaltación nacionalista. Ésta ganaba en intensidad al conectar con instituciones destinadas a modernizar y nacionalizar a la población, como las escuelas que brindaban una enseñanza abocada a formar ciudadanos “patriotas”, el reclutamiento masivo de los jóvenes y un mercado de bienes culturales que contribuía a naturalizar y reforzar esa pertenencia nacional (revistas, teatro, almanaques, etcétera). La promoción nacionalista guardaba hasta la década de 1910 un tono cultural más que racista y era presentada como perfectamente compatible con la pertenencia a Occidente o al mundo “latino”, aunque opuesta al que supuestamente lideraban las potencias “anglosajonas”, como postulaba el muy vendido libro *Ariel* (1900), del uruguayo José Enrique Rodó.

¿Qué liberalismo era ese que profesaban las élites de los regímenes oligárquicos, entonces? Es un liberalismo tan particular como sus predecesores y como los posteriores, pero cuyas señas podemos reconocer. Una de ellas es el consenso entre las élites sobre la conveniencia o la inevitabilidad de un régimen representativo. Este liberalismo se muestra cómodo y seguro con la idea de

que la vida americana sólo acepta los modos republicanos. La democracia, en cambio, aparece mucho más como un punto remoto de llegada más que como una necesidad política. El gobierno de las minorías sería un mal necesario hasta que el grueso de la sociedad diera señales contundentes de madurez política, de obediencia y de respeto al orden político —y, sobre todo, a quienes en él tenían las posiciones más encumbradas—. El lugar del pueblo era mucho más el de receptor o de espectador de la política que el de protagonista: la participación política popular fue recurrentemente retratada como desbordada, bárbara y animalesca. Todo ello se alejaba del optimismo que tenían algunos de los promotores de la independencia de España a inicios del siglo XIX, más convencidos del valor cívico de sus conciudadanos. Un gobierno fuerte, incluso una suerte de “dictadura republicana”, podía servir para estimular objetivos de interés público, como el aprendizaje de la democracia por parte de los (futuros) ciudadanos y, sobre todo, para resguardar las inversiones y propiedades privadas.

Probablemente quien mejor expresó los dilemas de aquella época fue el jurista y escritor argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884), quien postuló una interpretación sobre el devenir político de su país que puede ser trasladada al análisis de otros puntos de América Latina. Alberdi creía que el estado civilizatorio americano era aún prematuro y que, por lo tanto, requería de autoridades firmes con voluntad pedagógica. Ésa era la llamada “república posible”, lo que se podía alcanzar considerando la falta de preparación cultural de los pueblos americanos, al menos en comparación con los de Europa Occidental. La “república posible”, eventualmente, conduciría a la “república ideal”, aquélla en la cual las libertades públicas podían afirmar su reinado sin cortapisas debido a que los niveles de conciencia de los ciudadanos así lo permitían y exigían. Hasta que se logaran esas condiciones la política debía permanecer dentro de los claustros de los sectores autoimaginados patricios y responsables. Se trataba de repúblicas restringidas en las que gran-

des contingentes sociales permanecían por fuera de la vida política formal, carentes supuestamente del mínimo de virtudes ciudadanas exigibles.

El régimen oligárquico hacía un rescate selectivo del liberalismo económico, promovido por los que más tenían, para ganar con la llegada de socios extranjeros, el crecimiento de las exportaciones, la expansión de la infraestructura ferroporitaria y el mantenimiento de la disciplina en ámbitos laborales. La adopción de esta perspectiva económica profundizó el modelo monoexportador basado en el corrimiento de la frontera agroganadera. Ese liberalismo económico implicaba pleno e irrestricto respeto y a veces garantías a la (gran) propiedad privada, a las inversiones y préstamos provenientes de países centrales y al pago de la deuda externa. Mostraba fe en que el libre juego de las fuerzas locales e internacionales en el mercado terminaría retribuyendo a los actores según su creatividad, esfuerzo e inversiones, y traería los mejores resultados económicos posibles para el país, éste normalmente confundido con los intereses directos de los latifundistas y mineros. Pero, en cambio, exhibía menor convicción respecto de las ventajas de formalizar el mercado de trabajo, de obligar al pago de salario en moneda de curso legal, de garantizar derechos mínimos a todos los actores del mercado e incluso de eliminar la esclavitud, algo que terminó ocurriendo en Brasil recién en 1888.

Precisamente Brasil es un caso interesante para conocer de cerca a esas derechas liberales. La vida política en ese país durante la llamada Vieja República (1889-1930) descansó en una combinación de fuertes poderes locales y provinciales y un gobierno federal más bien débil, que tendía a descentralizar las potestades sobre endeudamiento externo, políticas migratorias, fuerzas armadas y legislación laboral. Desde mediados del siglo los hacendados más importantes de cada región tenían el rango de *oronéis* de la Guardia Nacional, debido a la confianza política que les generaban a los gobernadores. En el habla popular, todo dueño de una hacienda,

un *fazendeiro*, era coronel, aun cuando legalmente no tuviera ese nombramiento. Los *fazendeiros*, en consecuencia, detentaban a la vez el control político, policial, judicial y económico de su región, de la que eran informalmente déspotas, pero también benefactores, principales empleadores —o propietarios de esclavos—. Los *coroneis* organizaban las elecciones locales, en las cuales ofrecían favores y promesas a los votantes, a los que también amenazaban con coerción física y económica aprovechando su control de las fuerzas policiales y de la justicia local. Los jefes locales se ponían de acuerdo en la elección del gobernador, quien era proclamado en votaciones. El sistema, conocido como *coronelismo*, alcanzaba las cúspides del poder cuando una federación de *coroneis* definía al futuro presidente del país. Las prácticas electorales estaban plagadas de violencia e irregularidades, pero eran realizadas con la frecuencia que fijaban los textos legales. En todo caso, eran perfectamente compatibles con una constitución liberal y muy federal que recortaba el poder central en nombre de la libertad, pero a la vez aseguraba la concentración de los recursos coercitivos en los hombres fuertes locales.

No es extraño que el país careciera *de facto* de un gran partido liberal nacional: más bien lo que ocurría era que cada Estado poseía su propio Partido Republicano (de Pernambuco, de Minas Gerais, de São Paulo, etcétera), que promovió y aprovechó el rápido paso de la monarquía de Pedro II a la proclamación de la república en 1889. Esos partidos provinciales eran los vehículos de las élites locales para producir acuerdos y equilibrios en la distribución de recursos y de cargos. Durante la Vieja República, fueron políticos de São Paulo (exportador de café) y de Minas Gerais (Estado productor de ganado) los que retuvieron las principales posiciones en el poder ejecutivo federal, en lo que fue conocido como la “política del café con leche”. La fuerte marca del positivismo y la masonería en el republicanismo brasileño producía resquemores en la Iglesia católica, que parecía sentirse más cómoda con la ya desaparecida monarquía.

El caso de Argentina coincide respecto del brasileño en varios aspectos. El Partido Autonomista Nacional (PAN) controló la política en el último cuarto del siglo XIX y a inicios de la siguiente centuria. Era menos un partido que una liga de políticos de diversas provincias que controlaban redes electorales locales. El voto masculino era universal, pero en la práctica el número de sufragantes era limitado, por el hecho de que no era obligatorio ni secreto. El PAN —y las organizaciones que de él se crearon o separaron— nunca abandonó una dinámica muy facciosa. Desde la década de 1890 enfrentó desafíos externos más severos, como el atractivo que el novel Partido Socialista generaba entre los votantes de la ciudad de Buenos Aires, o los conatos revolucionarios y el abstencionismo electoral de la Unión Cívica, un partido comprometido con la promoción de comicios limpios, y de fuerte arraigo en ámbitos urbanos y rurales de las zonas más desarrolladas del país. Pero, además, el orden conservador se vio sometido a las tensiones derivadas de un movimiento sindical orientado por los anarquistas y anarcosindicalistas que a inicios del siglo mostró en las calles su voluntad de pelea. La intensidad del conflicto con los trabajadores sindicalizados fue uno de los elementos que animaron a la élite argentina a ponderar mejor algunas de las virtudes pacificadoras de la Iglesia católica, con la cual había tenido varios conflictos a finales del siglo XIX. De allí que los gobiernos liberal-conservadores aparcaran su programa laicista hasta nuevo aviso y recompusieran relaciones con el Vaticano (como hizo Porfirio Díaz en México, durante su largo gobierno).

La situación en Chile fue bien distinta por cuanto se establecieron dos partidos, el Liberal y el Conservador, desde los inicios de su excepcionalmente estable vida republicana. Si el Partido Liberal se mostraba más poblado por figuras vinculadas a la masonería, el segundo era la voz oficiosa de la Iglesia. Los conservadores eran más propensos a un régimen centralista y monitoreado institucionalmente por la Iglesia y moralmente por las Sagradas Escrituras. Si

bien las relaciones políticas eran tensas, los enfrentamientos armados a gran escala eran menos frecuentes que en países vecinos hasta la guerra civil de 1891, la cual terminó dando paso a ciertos acuerdos bipartidarios que incluían el otorgamiento de mayores facultades al Parlamento. De allí en adelante la política ganó en estabilidad, pero también se hicieron más evidentes los rasgos oligárquicos, el cohecho electoral y la endogamia en los poderes ejecutivo y parlamentario. Para los políticos de ambos partidos comenzó a hacerse cada vez más claro que las principales preocupaciones no eran las asociadas a las diatribas en el Parlamento, sino las generadas por el poderoso movimiento de mineros del norte chileno, organizado en mancomunales y detrás de su líder, Luis Emilio Recabarren.

Ésta fue la derecha dominante durante el periodo que abarca este capítulo. Era dominante sobre el grueso de los actores políticos, pero también sobre otras tradiciones de derecha a las que logró someter en las urnas, en el campo de batalla, en la prensa o en el Parlamento. Los políticos conservadores y liberales poseían evidentes diferencias ideológicas, pero en muchos casos esas distancias ideológicas eran amortiguadas por similares orígenes sociales, espacios de sociabilidad e intereses económicos. Como señaló Marta Irurozqui para el caso boliviano,

la ruptura partidaria no correspondía a una división económica, social o profesional, o ni siquiera ideológica en el sentido estricto [...] subyacía una misma cultura, un conjunto de prácticas y concepciones que conformaban el imaginario colectivo del grupo privilegiado, y que después de la contienda electoral, obligaban a una política de conciliación que asegurase la cohesión grupal de la élite.

Esa “comunidad valórica”, al decir de Verónica Valdivia, es lo que permite entender la solidez del consenso entre las fracciones políticas acerca de cómo lidiar con la creciente conflictividad sindical urbana. El ascendiente poder social de los trabajadores fue respon-

dido principalmente a través de la represión, en algunos casos muy cruenta: masacres como la de Santa María de Iquique (Chile, 1907) o Río Blanco (México, 1907) testimonian la intensidad del miedo de las élites y de la dirigencia de derecha, así como su disposición al uso intensivo de la violencia estatal.

LAS DERECHAS REACCIONARIAS: CONTRA LA DEMOCRACIA Y LAS MASAS

Hay una tradición derechista que emergió a fines del siglo XIX y que abrazó una perspectiva reaccionaria. Se trataba de una tradición que, a diferencia de la liberal, tenía un humor pesimista respecto del tiempo que le tocaba vivir, al que no dudaba en calificar de decadente. Si el liberalismo —pero también la izquierda y buena parte del anarquismo— se mostraba convencido de que había una senda de la evolución humana, los reaccionarios eran renuentes a aceptar que el presente era mejor que el pasado, al que tendían a dotar de tonos áureos. Los principales problemas que identificaban pertenecían al campo de la cultura: las fallas civilizatorias y morales eran las responsables de todos los problemas políticos, económicos y sociales del país.

Entre los sujetos enrolados en la derecha reaccionaria predominaban diagnósticos muy negativos sobre el derrotero político y moral tomado por las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX. Exhibían un estado de ánimo sombrío, de cruda decepción con las élites locales y sus costumbres políticas y morales, pero sobre todo de desprecio racista y clasista contra las capas subalternas latinoamericanas. Poseían la convicción de que había problemas de enorme gravedad que habían sido creados más que resueltos por la modernización económica y política de su nación. El progreso en materia económica, entendían, no había sido debidamente acompañado por un desarrollo comparable de la sensibilidad estética y la

caridad, ni por la observación de las viejas costumbres. Entre esas tradiciones que les parecían especialmente dignas de ser restauradas encontraban en primer lugar al magisterio social y moral de la Iglesia, pero también el de las clases altas sobre el pueblo llano, al que continuamente veían como carente de virtudes, a veces voraz e impulsivo, crudamente materialista y sanguinario o, de manera contradictoria, yacente en la inacción y la pasividad histórica y vital. En el Cono Sur, además, la presencia de millones de personas de ultramar les resultaba irritante, puesto que no profesaban la fe católica y habían tornado irreconocible el alma nacional debido a su deseo de consumo y de acumulación.

Figuras como el uruguayo José Irureta Goyena (1874-1947), el chileno Nicolás Palacios (1854-1911), el peruano Francisco García Calderón (1883-1953), el boliviano Alcides Arguedas (1879-1946) y el argentino Miguel Cané (1851-1905) dan cuenta de esa sensibilidad de finales del siglo, muy marcada por una percepción abrumadora de decadencia nacional y la inviabilidad racial y cultural del orden liberal de sus países. En general se trataba de varones ilustrados de clase alta —sacerdotes, publicistas, políticos, escritores, médicos, periodistas y, a veces, todo eso a la vez—. Su voz se expresaba principalmente en la letra escrita de los periódicos, los tratados, los ensayos sobre la psicología nacional y los sermones. Al tratarse de figuras letradas, les iba mejor cuando se concentraban en el uso de las herramientas que manejaban con mayor maestría (la palabra escrita, el fraseo complejo, el manejo de discusiones eruditas y sofisticadas, etcétera). Si bien sus ideas se difundían en ámbitos recoletos y selectos como la cátedra universitaria, la tribuna periodística y los atrios, es probable que algunas alcanzaran a un público más popular a través de los servicios religiosos y de las publicaciones eclesíásticas.

Su sensibilidad antidemocrática no les impidió participar recurrentemente de los gabinetes, de la diplomacia y del Parlamento, mientras se mostraban muy críticos del funcionamiento y los fun-

damentos del sistema que integraban. Sin embargo, en muy pocas ocasiones los hombres de la derecha reaccionaria se tomaron en serio la tarea de desarrollar una práctica específicamente política y que interpelara a sujetos por fuera de su estamento de origen. Sólo después de la Primera Guerra Mundial se preocuparon por acceder a mejores posiciones en el poder ejecutivo a través de la actividad proselitista, la agitación política callejera, la organización de mítines o el armado de redes electorales.

Los lineamientos ideológicos de la derecha reaccionaria conectaban elitismo, intelectualismo, racismo y anhelo de restauración de las jerarquías sociales. Parece aconsejable entender esa derecha como un producto de la modernización política y no como un residuo que provenía del pasado colonial y que, sencillamente, sobrevivió fuera de su época. Esa derecha fue una respuesta novedosa a aspectos de la dominante derecha liberal, tales como el cosmopolitismo y el evolucionismo, pero sobre todo a situaciones inéditas, como los procesos que volvían más compleja la estructura social, la diferenciación de las esferas religiosa y política, la laicización y la intensificación de la movilidad social y geográfica. Se trató, en este sentido, de una nueva derecha, pero que tenía la cabeza girada hacia el pasado prerrepblicano más que hacia el futuro.

Los hombres de la derecha reaccionaria compartían una expectativa y una frustración: la expectativa era que la política era una tarea que pertenecía natural y exclusivamente a las élites del espíritu y a las mentes privilegiadas y creativas. Planteaban de manera insistente la superioridad de quienes desarrollaban tareas intelectuales y no lucrativas y gozaban del tiempo, la formación y la sensibilidad para apreciar los fenómenos estéticos. Junto con ello, realizaban una crítica feroz a quienes carecían de la capacidad para elevarse hacia preocupaciones olímpicas, considerados natural e irreversiblemente inferiores y poco educados. El rechazo se dirigía hacia los pueblos originarios, los afrodescendientes o los inmigrantes italianos y españoles recientemente instalados en el Cono Sur del continente.

Como Jesús en el Templo de Jerusalén, los hombres de la derecha reaccionaria emprendieron su lucha contra los “mercaderes” de su tiempo, entendiendo por tales tanto a los empresarios como a los trabajadores, preocupados por cuestiones mundanas, como podían ser los salarios.

Su desazón provenía, claro está, de que ese liderazgo político autoasignado no era reconocido por los demás actores, que usaban otros criterios para otorgar legitimidad y, sobre todo, poder político. Su condición minoritaria, resultado inevitable del contenido de su prédica, les confirmaba a los reaccionarios sus peores presagios sobre la infección del “virus mercantilista” en la sangre de sus contemporáneos. El intelectualismo era a la vez su señal de identidad y su mayor limitación política, porque la política realmente existente les resultaba degradante, menor y terrenal, y también porque los condenaba sistemáticamente al ostracismo o a la impotencia. Su autoritarismo y su desprecio por las prácticas electorales —aun cuando éstas fueran regularmente dominadas por las élites— expresaban un diagnóstico muy pesimista sobre la calidad moral y política de sus compatriotas, y sobre todo de quienes aspiraban a obtener esa condición de ciudadanos.

El elitismo tenía por contracara un virulento desprecio a las masas y a todo lo que implicara procesos de nivelación social, lo que Rodó llamó “ferocidad igualitaria”. Como explicó el filósofo Alción Cheroni, estas figuras tenían una “desconfianza gnoseológica” en la capacidad racional y en el papel creativo de las masas. De éstas sólo esperaban y toleraban pasividad política, la cual se reconocía y gratificaba, en el mejor de los casos, con paternalismo. Cuando detectaron procesos de activación de demandas, las derechas reaccionarias desplegaron reclamos muy poco velados de represión e incluso de exterminio. La derecha reaccionaria tenía una enorme renuencia a tratar con detalle los conflictos económicos o las pavorosas condiciones de vida a las que estaban sometidas las poblaciones indígenas, los trabajadores

rurales (yanaconas, inquilinos, acasillados, pongos, etcétera) o los pobres urbanos.

Los reaccionarios planteaban que la erosión de las formas tradicionales de distinción, deferencia y reconocimiento de los inferiores hacia los superiores era resultado del vendaval modernizador, como mostró el historiador Oscar Terán. En grandes ciudades les parecía que ya no había respeto a las “viejas virtudes hispanas” y la fe católica de los mayores, pero se ilusionaban con la posibilidad de que restos de esa sumisión voluntaria permanecieran en las sierras, las haciendas, los ranchos, las plantaciones tropicales y las ciudades de provincia. No es extraño que idealizaran los ámbitos rurales, tenidos por incontaminados e inmodificados, y que a la vez despotricaran contra el advenimiento del anonimato y la vulgaridad en espacios urbanos como México, La Habana, São Paulo y Buenos Aires. Allí residirían los problemas sociales y morales: el hedonismo y el culto a la novedad, el materialismo, la corrupción, el alcohol, el parasitismo, la sofisticación vacua y la agitación sindical. Ese resentimiento traslucía la perplejidad ante un orden político donde veían que recién llegados tuvieran el derecho, el atrevimiento y el dinero como para ocupar espacios físicos y simbólicos que hasta hace pocos años eran de exclusivo uso de la élite. El parlamento, las aulas de la universidad, las capas superiores de la administración pública y de las Fuerzas Armadas, lugares de paseo y de consumo cultural dentro de la ciudad, o de descanso y recreación fuera de ella: todos esos espacios fueron tenidos por invadidos o contaminados por personas carentes del abolengo y los méritos como para estar allí.

Los sujetos sin relieve, domesticados por la rutina y la búsqueda de ganancias (a los que el sociólogo José Ingenieros retrató en su célebre libro *El hombre mediocre* de 1913), eran la peor expresión de una modernidad que producía de manera incesante y repetitiva bienes y personas. El número y la cantidad parecían imponerse sobre la jerarquía y la calidad. Su rostro múltiple era expresión de una

mentalidad bovina, pero también de un estado puramente emocional, siempre al borde del desequilibrio en su búsqueda hedonista de estímulos estomacales, sexuales y de satisfacción inmediata. Las muchedumbres eran representadas como incultas, impulsivas e infantiles en la literatura de ficción, en la psiquiatría, en el ensayo y en los discursos públicos de la derecha reaccionaria. Las masas eran peligrosas porque no basaban sus comportamientos en una ponderación racional y equilibrada, sino que vivían absorbidas y atraídas por el dinero: y si bien estos tópicos aparecieron en la pluma de otras figuras, tuvieron enorme densidad entre los voceros de la derecha reaccionaria.

Encontrar textos producidos por hombres de las élites blancas que critiquen las costumbres, la productividad, las tradiciones y la mentalidad de los indígenas no es difícil en la historia de América Latina. Lo novedoso de estos años es hallar textos que condenen abierta y ácidamente los comportamientos y las costumbres de los sectores dominantes. A inicios del siglo xx muchas de las diatribas de la derecha reaccionaria se dirigían hacia el aburguesamiento de las “buenas familias”, a las que entendían carcomidas por la codicia descontrolada y el apetito de acumulación y de figuración. El advenimiento de una sociedad impersonal y supuestamente carente de espíritu de trascendencia habría promovido un relajamiento de las buenas costumbres entre las familias autopercebidas “patricias”. En Argentina voces de la derecha reaccionaria como Eugenio Cambaceres o Miguel Cané les adjudicaban a los inmigrantes europeos la responsabilidad por la desfiguración moral, política e incluso racial de las élites. Como escribió Cané en sus *Ensayos* (1877), “Nuestros padres eran soldados, poetas y artistas. Nosotros somos tenderos, mercachifles y agiotistas. Ahora un siglo, el sueño constante de la juventud era la gloria, la patria, el amor; hoy es una concesión de ferrocarril, para lanzarse a venderla al mercado de Londres”.

Frente al predominio incontenido de los bajos deseos de las masas, pero también de la genuflexión y codicia de las élites, se

postulaba la necesidad de un gobierno fuerte o de las almas menos interesadas en el mundo material. Debido a su interés recurrente por restaurar las jerarquías sociales, no es extraño que algunos reaccionarios fantasearan con que el actor encargado de esa misión fuera el Ejército. Éste unía en su seno el principio de autoridad combinado con el de obediencia profesional. Para otros, la Iglesia debía asumir el magisterio de una sociedad a la que se cansaban de denunciar como deformada, hedonista y homogeneizada.

Ese desdén por la democracia también puede entenderse como resultado de la particular apropiación del ideario positivista por las derechas reaccionarias. Las explicaciones de la sociología de las masas descartaban la idea de que existían individuos libres y racionales: los seres humanos eran entes gregarios, realidades biológicas que respondían a leyes sociales que ellos desconocían y que eran, además, inmodificables. La criminología, la antropología jurídica y la medicina unieron fuerzas para conocer los rasgos innatos y, por lo tanto, incorregibles de los incapaces de adaptarse a la vida moderna: los insanos, los delincuentes, las prostitutas, los alcohólicos, los anarquistas, los homosexuales... Así, los conflictos sociales eran recurrentemente presentados por los hombres de las ciencias médicas y sociales y por las autoridades como cuestiones asociadas a rasgos conflictivos de las “razas” nativas (indígenas y afrodescendientes) o llegadas recientemente (chinos, italianos, judíos, portugueses, españoles, etcétera).

El desprecio por las masas se extendía al mirar el pasado nacional y americano. Las muchedumbres eran constantemente retratadas como salvajes y desafortunadas en los libros de historia, tal como hizo José María Ramos Mejía en *Las multitudes argentinas* (1899). Luis Alberto de Herrera (1873-1959), el histórico líder del Partido Nacional uruguayo, publicó el libro *La Revolución Francesa y Sudamérica* (1910), donde intentaba comprender la naturaleza de los episodios franceses y su repercusión en el Río de la Plata. Ese libro puede ser leído como una teoría histórica sobre las revoluciones

que, según Herrera, nacen del odio, la intolerancia y el resentimiento de los pobres y los ignorantes contra las clases elevadas, que poseen más virtudes morales e ilustración. Esa convicción expresó Laureano Vallenilla Lanz en 1919 cuando publicó *Cesarismo democrático. Estudios sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela*. El libro de Vallenilla es un análisis muy documentado de las guerras civiles de inicios del siglo XIX y de la figura de Bolívar: una interpretación menos literal de *Cesarismo democrático* deja ver que el Libertador es más bien una evocación que apuntaba a brindarle fundamentos teórico-políticos a la longeva dictadura de Juan Vicente Gómez, iniciada en 1908, de la cual Vallenilla fue agente diplomático, vocero y parlamentario. La tesis de Vallenilla era que el pueblo venezolano carecía desde 1810 de la suficiente madurez para atemperar sus expresiones y demandas, por lo que actuaba contra sí y sus intereses. De allí que fuera necesaria una figura cesariana que fungiera como un auténtico gendarme, un caudillo que a la vez interpretara, satisficiera y controlara a masas que, de otra manera, caerían en comportamientos anárquicos e impulsivos. Lejos de ser una rémora, para Vallenilla el caudillismo es la herramienta política que corresponde usar en la época, es la solución política para gobernar a un pueblo voluptuoso, sísmico y pulsional que no tiene un “freno social”, por ser resultado de la agitada y apurada combinación de las sangres de indígenas, negros y europeos:

El vaso donde se condensan los sentimientos de las multitudes tiene en el fondo un sedimento que toda sacudida puede hacer subir a la superficie cubriendo de una espuma de vergüenza el licor brillante y generoso. Eso es lo que sucede en todos los grandes trastornos de la naturaleza: en los ciclones, en los terremotos, en las revoluciones [...] los hombres que permanecen en la sombra en tanto que el orden impera, se rebelan, desde que el freno social desaparece, con sus instintos de asesinato, de destrucción y de rapiña.

Por ello, el régimen político mejor no es el que emerge de un código legal desconectado de las raíces históricas (lo que Vallenilla llama “constituciones importadas”), sino el que impone temor y con ello logra un orden real. En las naciones hispanoamericanas la única fuerza eficiente de orden social y político es “el Caudillo”, propio de una etapa evolutiva en la cual “los jefes no se eligen, sino que se imponen”.

Las derechas reaccionarias en general gustaban de un nacionalismo culturalista que ponía el acento en la herencia católica e ibérica del país y que culpaba a las raíces indígenas y africanas y a la identidad liberal por el sombrío futuro del país. Con intensidad, colocaron en el primer orden de sus preocupaciones la identidad nacional, entendida como resultado natural de la decantación de la historia en instituciones y costumbres que se estaban adelgazando o deformando a causa de los rápidos cambios económicos y sociales vividos. La preocupación por la pérdida de la identidad le dio buena parte de la coloración esencialista, pesimista y culturalista a la derecha reaccionaria, un punto en el que se diferenciaba del liberalismo, de tono algo más cosmopolita, optimista y tolerante de la diversidad religiosa y cultural —pero bastante menos de la ideológica—. No es casual que el problema o las inseguridades respecto de la identidad nacional se intensificaran en un contexto de sociedades sacudidas por la acelerada integración al comercio mundial y por la renovada y masiva llegada de migración ultramarina. De allí que se sucedieran los intentos por retratar una historia, una literatura y un arte nacional útiles para afirmar esa pertenencia, especialmente sobre la mente de los niños en las escuelas.

La imagen de España había quedado severamente enjuiciada por las plumas liberales en el marco de la afirmación de una identidad nacional, joven y deseosa de establecer contrastes severos con el pasado colonial. Tampoco ayudó a recomponer el vínculo con España su recolonización de la República Dominicana

(1861-1865) ni la guerra naval que libró contra la alianza de Chile y Perú (y con menor participación de Bolivia y de Ecuador) entre 1865 y 1866. En todo caso, la vuelta de página sólo se produjo después de la independencia de Cuba y de Puerto Rico (1898), momento en el que España perdió la presencia colonial que aún tenía en América. Ese aspecto, más el hecho de que los Estados Unidos aparecían como una potencia con mayores anhelos, firmeza y, sobre todo, capacidad de expansión imperialista, contribuyó a que se crease un clima algo más propicio para el rescate de logros españoles por parte de los reaccionarios. En síntesis, los hombres de la derecha reaccionaria propagaban la lectura de que España había desarrollado una misión de naturaleza espiritual y civilizatoria de expansión de la auténtica fe, primero con la Reconquista de la Península Ibérica y luego con la colonización de América, lo que presentaban como un proceso más consensuado que violento. De España podía venir el aliento para restaurar las buenas tradiciones nacionales que se estimaban ya tempranamente perdidas en la década de 1900.

CONCLUSIONES

A fines del siglo XIX se estableció en los jóvenes países latinoamericanos un orden político mucho más estable que el que habían conocido por décadas. Fue por entonces que llegaron a su fin los procesos de experimentación política y constitucional iniciados tras la ruptura del vínculo colonial. El Estado nacional se hizo de muchas competencias y facultades que hasta entonces retenían la Iglesia católica, los gobiernos provinciales o las corporaciones. En general, el ejercicio del gobierno tendió a centralizarse en desmedro de los poderes locales: las instituciones centrales, rápidamente devenidas nacionales, concentraron la recaudación, el dictado de leyes, las relaciones con el exterior y, sobre todo, las imbatibles y cada vez más profesionalizadas fuerzas armadas. Las duras gue-

rras civiles que habían enfrentado a representantes de ciudades y de provincias, de banderías liberales y conservadoras, de monarquías y de repúblicas, de centralistas y autonomistas, dieron paso a un nuevo tiempo político. Ese tiempo estuvo caracterizado por la aparición y la legitimación de un juego político inexcusablemente basado en el principio de la representación popular, aun cuando no había consenso sobre quiénes componían el pueblo y más bien tendieron a primar criterios excluyentes a la hora de decidir sobre los derechos de mujeres, indígenas y pobres urbanos. Los partidos de las élites, pero también dictadores como Juan Vicente Gómez, se presentaban como encarnación de esa voluntad popular y de las instituciones específicas de gobierno: con ello se diferenciaban, o al menos intentaban hacerlo, del liderazgo personalísimo, inorgánico e intransferible resultante de los alzamientos.

Donde había regímenes representativos la realización de elecciones producía periódicamente cierta zozobra, sobre todo cuanto más amplio era el padrón de los habilitados a votar. Es por eso que las fuerzas de derecha usaron muchos mecanismos tanto legales como fácticos para disminuir el número de sufragantes: no fue extraño que incluso se redujera aún más el número de personas habilitadas, como ocurrió en Brasil en 1881 y en Perú en 1896. El voto popular era objeto a la vez de coqueteo y de miedo, pero sobre todo de recelo, porque (re)tenerlo implicaba el despliegue de recursos monetarios y políticos y la atención —así fuera temporal e hipócrita— a preocupaciones, necesidades y demandas populares. El fraude, el cohecho y la violencia parecían opciones menos costosas y más controlables. Si las elecciones eran la puerta para el poder, los partidos eran entendidos como los que tenían la llave de esa puerta. De allí que se constituyeran diversos partidos liderados por varones de las élites que pujaban entre sí por el acceso a los puestos de gobierno.

Con el paso del tiempo el sistema mostró que las disputas entre esos partidos de derecha —y sus fracciones internas— no eran las

únicas y por momentos ni siquiera las más importantes. ¿Qué otros desafíos aparecieron?, ¿Quiénes son los “otros” de las derechas? A los partidos liberales y conservadores que representaban los intereses directos de las élites les surgieron rivales de fuste ya a finales del siglo XIX y sobre todo a inicios del siguiente. Por un lado, fuerzas reformistas y favorables a la democratización del sufragio y del acceso al gobierno: el batllismo uruguayo, el radicalismo argentino y el chileno o el Partido Demócrata en Perú son ejemplos de esos contrincantes. El disgusto con la reelección perpetua de Porfirio Díaz puede interpretarse también en este sentido. Esos partidos conjugaban el respeto a las principales reglas de la economía de exportación con una discusión sobre el papel que las élites económicas se daban a sí mismas en la vida política nacional.

Por el otro lado, también emergieron con mucha fuerza agrupaciones de trabajadores urbanos que desafiaban abiertamente las reglas capitalistas y a una clase política a la que entendían como servil a los intereses de los latifundistas y propietarios de minas, de los inversores extranjeros y de la Iglesia católica. Potentes organizaciones inspiradas en tradiciones anarquistas primero y luego socialistas y sindicalistas sacudieron la dominación política cada vez con más frecuencia a inicios del siglo XX. Las lecturas reaccionarias percibieron estos episodios como una ruptura de las formas de deferencia tradicional. En definitiva, la indisciplina social de los trabajadores fue presentada y vivida como una señal más de la decadencia moral de una sociedad que había ido demasiado lejos en el proceso de mercantilización de sus lazos sociales (en términos de la época, *espíritu fenicio*), en su alejamiento de los valores católicos y en la pérdida de sensibilidad estética y ética.

Esta derecha reaccionaria que dejaba escuchar sus agrios argumentos sobre la decadencia nacional de países que acababan de nacer debe entenderse como parte de tendencias ideológicas mayores, de alcance occidental. Durante las últimas dos décadas del siglo XIX comenzaron a tomar fuerza filosofías políticas que descreían de la

existencia —o al menos de la importancia— del individuo racional imaginado por el liberalismo, el socialismo y el evolucionismo. Por el contrario, diversos ideólogos europeos —y sus promotores en América— abrazaron lecturas antiliberales y antidemocráticas, y estaban convencidos de la necesidad de abandonar el horizonte del constitucionalismo y el contractualismo liberal decimonónico. El tiempo del individuo consciente dio paso al del miedo a las masas y el desprecio elitista y racista de la vulgaridad. Estos argumentos reaccionarios percibían a la sociedad de masas como una marea que aniquilaba cualquier forma de distinción espiritual y civilizatoria. Cuando las condiciones nacionales y mundiales variaron después de la Primera Guerra Mundial, su diagnóstico negativo sobre la organización republicana y los textos constitucionales dio paso a la conformación de organizaciones explícitamente políticas, deseosas de dar por terminada esa experiencia liberal y republicana. Si los reaccionarios compartían una perspectiva decadentista (supuestamente identificada en la pérdida de la raza y el espíritu nacional, en un afeminamiento de las costumbres y el predominio del materialismo), los liberal-conservadores, en cambio, eran algo más optimistas. Ellos expresaban la idea de que en algún momento sobrevendría la república ideal en la que podrían participar todos (los varones) que lo anhelaran: en ese tiempo, siempre imprecisamente definido, ya no serían necesarios los caudillos.

Sobre las distancias entre reaccionarios y liberal-conservadores, vale la pena retener dos aspectos. El primero es que hubo muchos casos de sujetos que a lo largo de su vida hicieron el pase de una tradición ideológica a la otra: a veces una derrota electoral o la asignación de un cargo político menor al esperado estimulaba un giro reaccionario y refractario hacia la política de partidos. Por el contrario, una buena *performance* electoral o un reconocimiento satisfactorio podía convertir a un furibundo reaccionario en un sujeto integrado a la vida política institucional, menos urgido por imponer su lectura pesimista sobre el estado moral del país. El segundo

aspecto es que entre liberal-conservadores y reaccionarios no había significativas diferencias en sus orígenes de clase, su formación o sus ámbitos de sociabilidad: en esos años los políticos, los escritores, los propietarios de periódicos, los jueces y los obispos eran varones que provenían de los mismos nichos sociales y compartían ámbitos sociales, lecturas y prejuicios. La explicación sobre las diferencias ideológicas entre ellos remite a la política coyuntural más que a los potenciales aportes que pueda dar una sociología de las élites.

El periodo 1880-1918 se abre con la imagen de una élite económica y política con una enorme capacidad para modelar la vida nacional según sus intereses, pero se cierra de una manera bien diferente. Se trata de una élite que se vio presionada para que ampliara o que tolerara el acceso al sufragio, para que desplegara formas básicas de legislación social (jubilación, pensión, accidentes laborales, etcétera) y para que aceptara derrotas electorales. A esos retrocesos políticos se le sumaron los problemas económicos que trajo la Gran Guerra y luego las novedades llegadas desde el Imperio de los Zares. En todo caso, vale la pena notar que los procesos de urbanización y los que volvieron más compleja la sociedad, sobre todo en el Cono Sur, vinieron aparejados con desafíos políticos que dejaron mal paradas a las derechas liberal-conservadoras, pero de ninguna manera las removieron del poder.

CAPÍTULO 2
LAS DERECHAS Y EL ORIGEN DEL MIEDO ROJO
(1918-1930)

A fines de junio de 1920 se realizaron comicios presidenciales en Chile: la paridad de los resultados obtenidos por la alianza opositora y por el oficialismo incrementó la tensión política reinante, porque le daba al Congreso la llave para destrabar la situación y, llegado el caso, designar como vencedor a uno de los dos candidatos. A inicios de julio el ministro de Guerra, Ladislao Errázuriz, declaró que había sospechas fundadas de que Perú y Bolivia querían aprovechar la confusión generada por el conflicto político chileno y estaban movilizandando tropas con el objetivo de recuperar los territorios perdidos décadas atrás en la Guerra del Pacífico. En consecuencia, a lo largo de ese mes tropas y barcos fueron enviados hacia el norte del país a repeler una invasión que nunca existió, y que recibió el sarcástico nombre de “la guerra de don Ladislao”. Varios sindicatos ligados al anarquismo y la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) se opusieron al envío de fuerzas militares, por creerlo una mera distracción patrioter y belicista. Integrantes de ligas patrióticas de Santiago se lanzaron a la calle para apoyar la movilización de tropas y para denunciar a los “enemigos internos”, que supuestamente exponían la integridad territorial nacional por su devoción al anarquismo, al comunismo y al “oro de Lima”. Una muchedumbre de oficialistas favorables a las maniobras militares asaltó el 21 de julio la sede central de la Fech en la capital, y de su puerta colgaron el cartel en el que se leía “Se vende esta casa. Tratar en Lima”. Varios dirigentes estudiantiles fueron detenidos y uno de ellos murió en la cárcel como resultado del maltrato físico

recibido. Como veremos en este capítulo, el episodio es ilustrativo de muchos de los rasgos que tuvieron las derechas latinoamericanas en la inmediata posguerra: despliegue de violencia parapolicial callejera, lecturas conspirativas sobre el origen del conflicto social y transnacionalización del miedo al accionar subversivo. Esa serie de características fueron tributarias de algunas de las transformaciones vividas en el continente desde mediados de la década de 1910.

A lo largo de los años veinte, en la mayor parte de los países latinoamericanos encontró su final —o vivió una amenaza severa— el control político indiscutible de las oligarquías. Los lazos políticos de la dominación oligárquica, nacidos en las haciendas, en los ranchos y en las redes clientelares urbanas, estaban desgastados y desafiados. Las relaciones paternalistas de los caciques y caudillos con sus subalternos se vieron desbordadas por la proliferación de otras pertenencias ideológicas —como las que trajeron el comunismo, la Acción Católica o el indigenismo—, pero también por la ampliación de las actividades económicas urbanas no controladas directamente por la élite latifundista y minera. La primacía política de la oligarquía fue sometida a diversas presiones simultáneas que no siempre pudo resolver o reprimir de manera eficiente: por un lado, a la objeción de los trabajadores portuarios, mineros, ferroviarios y rurales y de las izquierdas a ellos ligadas, que se hizo especialmente intensa en los años de la inmediata posguerra; por el otro, a los partidos —o facciones de partidos— promotores de la ampliación de la participación política y de mejoras en las prácticas electorales, pero también a fuerzas entusiasmadas con una refundación de las universidades, hasta entonces un refugio exclusivo de las élites. Asimismo, se hizo presente la intervención de jóvenes oficiales del Ejército, que exigían una reorientación general del orden político, un sector público más eficiente y centralizado y legislación social y laboral. Y otro tanto ocurrió con las voces más cercanas a la Iglesia, que adivinaron que luego de la firma de paz en Europa en 1918 se abría una nueva época histórica, signada por el agotamiento del

liberalismo y por una reválida de principios del catolicismo político, la educación religiosa obligatoria y el rechazo a la libertad de cultos.

Así como una historia de las derechas latinoamericanas de estos años señala esa multiplicidad de desafíos simultáneos, es importante también apreciar la ampliación de las organizaciones derechistas en los años que van de 1918 a 1930: seguía habiendo partidos liberales desde ya, pero a ellos se sumaron entidades de otro tipo, como ligas y guardias blancas armadas, asociaciones de defensa del interés empresarial y grupos políticos controlados por la Iglesia.

EL FINAL DE LA *BELLE ÉPOQUE* LIBERAL

Los años veinte de América Latina están enmarcados por los impactos que tuvieron procesos de enorme envergadura no generados en el continente. El punto de inicio es la Gran Guerra desde julio de 1914, con su consecuente afectación de las vías de transporte marítimo y la destrucción de los antiguos circuitos de comercio internacional que unían a las repúblicas americanas con los países centrales. A ello le siguió, en los años posteriores, una ola de conflictividad sindical en puertos, ciudades y áreas rurales que se superpuso a las noticias sobre la revolución liderada por los bolcheviques. El cierre de los años veinte coincide con los efectos, aún más devastadores, que tuvo la crisis iniciada en octubre de 1929 en los Estados Unidos. Las consecuencias sociales y económicas de la crisis se hicieron evidentes de manera rápida y hundieron a los países exportadores de bienes primarios en una pavorosa recesión y elevación de la tasa de desempleo, entre otros factores negativos.

La Gran Guerra estranguló a las estructuras del comercio internacional por varios años y dislocó las principales actividades económicas, al dificultar los envíos de mercadería primaria hacia Europa, así como la llegada de bienes manufacturados a América Central y

del Sur. Las materias primas que más se usaban en el esfuerzo de guerra, como el salitre, o aquéllos irremplazables en la dieta occidental, como los cereales, mantuvieron o incluso ampliaron su demanda durante la guerra. Los efectos del final de la contienda se hicieron sentir cuando los países beligerantes fueron recuperando su capacidad para producir localmente alimentos hacia 1919 y 1920, y sus actividades industriales dejaron de exigir los mismos volúmenes de materias primas que durante la guerra. En Chile entre 1918 y 1919 la ocupación minera cayó 22%; la producción de nitratos, 40%; las exportaciones se desplomaron 69%, y todo ello arrastró consigo una reducción de los ingresos públicos que fue estimada en 50%. La situación social local tendió a agravarse por el incremento de la desocupación, pero también porque en muchos casos se registró un alza de los precios de los bienes básicos. Asimismo, vale la pena recordar el devastador impacto que tuvo la epidemia de gripe española, que causó en Sudamérica decenas de miles de muertos entre 1918 y 1919.

Los regímenes oligárquicos, que a fines del siglo XIX e inicios del XX habían mostrado una gran estabilidad, comenzaron a exhibir debilidades en la década de 1910. Las presiones vinieron desde el exterior (por una presencia más decidida e interventora de los inversores estadounidenses), desde abajo (sindicatos y movilización en las calles), desde dentro del sistema político (partidos y voces reformistas, jóvenes oficiales) y desde la extrema derecha (con el crecimiento de la derecha radical y, en particular, del catolicismo integrista). El dominio social de los latifundistas y hacendados se vio opacado por el creciente peso en la política y la economía local de los inversores y acreedores estadounidenses, mucho más agresivos en sus modos que sus pares ingleses: el cobre en Chile, el petróleo en Venezuela y México, los plátanos en el Caribe y Colombia y desde 1914 las filiales de City Bank empezaron a marcar una pérdida relativa de poder de los latifundistas. Luego de la guerra el comercio internacional perdió el carácter multilateral que había tenido hasta

entonces y tendió a transitar por caminos bilaterales, dominados por el Reino Unido en América del Sur y por los Estados Unidos en América Central y en el Caribe. La acrecida llegada de las inversiones estadounidenses fue acompañada muchas veces por amenazas de intervención militar, cuando no de ocupaciones destinadas a garantizar el cobro de las deudas externas o proteger los intereses de esas firmas. Así, la presencia estadounidense en Cuba desde 1898 y en Panamá desde 1903, así como las ocupaciones de República Dominicana (1916-1924), Haití (1915-1934) y Nicaragua (1912-1933) formaron parte de un tiempo en el que se combinaba la “diplomacia del dólar” —consistente en prestar dinero a los gobiernos débiles para obtener luego generosas concesiones— con la doctrina del “gran garrote” que formulara el presidente Theodore Roosevelt. No llama la atención que se extendiera un amplio espíritu antiimperialista, o más bien antiestadunidense, que encontró cobijo no sólo en las almas identificadas con las izquierdas. En efecto, voces evidentemente ubicadas en las derechas denunciaban su incomodidad con el avance económico y cultural de la América del Norte, frente al que proponían a veces anglofilia y a veces una lectura latinista o arielista.

Tras el final de la guerra estallaron varios conflictos sociales y sindicales que terminaron intensificando los temores de las clases dominantes y de sus voceros políticos. Ese miedo se reforzó porque por doquier comenzaron a hacerse cada vez más intensas las demandas de ampliación del padrón electoral para incluir a quienes hasta entonces estaban excluidos por carecer de los ingresos, la propiedad o las calificaciones exigidas, o por su sexo. Pero los reclamos también se orientaban a la mejora de las prácticas electorales y la incorporación a la actividad política de sectores ajenos al patriciado local. En ese marco hay que entender desde ya a la Revolución Mexicana, iniciada en 1910 por integrantes de las élites políticas que estaban descontentos, la cual les recordó a las derechas de varios países que debían tomar resguardos para asegurar la

dominación y contener las amenazas desde abajo. Hay que anotar también los procesos de mejoramiento de la vida electoral en Argentina desde 1912, en Uruguay desde 1916 y en Chile desde 1925. Ello dio lugar a procesos electorales más disputados en los que el oficialismo fue derrotado por sus oposiciones, de mayor compromiso con la democratización y con la incorporación de sectores subalternos: la constitución uruguaya aprobada en 1917 habilitó la discusión parlamentaria sobre derechos electorales para las mujeres (que se concedieron en 1932). Fueron numerosos los integrantes de las élites sociales que entendieron que con la pérdida del poder ejecutivo (en Argentina en 1916 y en Chile en 1920) se vivía un cimbronazo político y cultural de primer orden. El principal problema que adivinaba la élite era el cuestionamiento a su derecho “natural” a ejercer el gobierno de los hombres.

La pérdida de la exclusividad en el poder ejecutivo se combinó con otro episodio que, a los ojos de la élite, venía a confirmar su sensación de estar cercada. El proceso de reforma de las universidades, iniciado en la ciudad de Córdoba (Argentina) en 1918, alcanzó dimensión continental en pocos años. Ya a inicios de los años veinte existía una red que unía estudiantes universitarios cordobeses, mexicanos, de La Habana, de Santiago de Chile, de Lima y de otros puntos de la geografía americana. Muchos de esos jóvenes mostraron interés o, en todo caso, curiosidad por los sucesos rusos, en los que creían encontrar alguna esperanza sobre el futuro de la humanidad. La militancia estudiantil fue semillero de numerosos dirigentes que actuaron en la vida política latinoamericana por décadas: desde 1918 se los vio en Chile involucrados en la creación de “universidades populares”, donde tuvieron acercamientos con obreros y artesanos, así como en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado en Cuba. Muchos dirigentes estudiantiles venezolanos saltaron a la lucha contra la dictadura de Gómez y constituyeron lo que fue conocido como la Generación del 28, que tanta incidencia tuvo en la política de ese país por décadas. Los reformistas pueden

ser caracterizados como portadores de una cierta sensibilidad social más que como propiamente revolucionarios —aunque entre ellos claro que los hubo, de inspiración tanto comunista como anarquista—. Muchos promovieron experiencias de cooperación y de diálogo con sindicatos urbanos. Por ello, una porción de la élite política los identificó como un brazo más de una conspiración bolchevique o masónica (versión a la que contribuía el hecho de que la orden jesuítica dominara hasta 1918 la Universidad de Córdoba).

El proceso de democratización de la vida política fue apuntalado en algunos casos por intervenciones de militares. Figuras como los *tenentes* de Brasil o los jóvenes oficiales de Chile en 1924 o de Ecuador en 1925 no se lanzaron a la política abierta siguiendo a un general ambicioso, sino detrás de consignas ideológicas y principios abstractos, más difíciles de ser sometidos a transacción. Algunas de las demandas presentadas eran el dictado de nueva y más amplia legislación laboral y social, nacionalismo económico y la centralización del poder político para darle eficiencia al accionar estatal y también evitar la formación de camarillas de políticos ineficientes y prebendarios. Esta tradición política latinoamericana nacida en los años veinte se extendió por todo el siglo. Eran partidarios de un Estado dirigista, autoritario, modernizador, industrialista y nacionalizador de las masas trabajadoras y de los principales recursos económicos. Hay reflejos suyos en el nacionalismo revolucionario de oficiales bolivianos, brasileños, peruanos, argentinos y chilenos de mediados del siglo xx, e incluso en el chavismo de fines de la década de 1990.

De Perú en 1924 surgió un particular desafío al gobierno de Augusto Leguía (1919-1930): la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el primer partido político con pretensiones de alcance continental. El APRA tuvo seguidores en numerosos países de la región, entre otras cosas merced al exilio forzado de sus primeros afiliados peruanos, muchos de ellos universitarios, quienes se dieron a la tarea de misionar la acción del partido y de su fundador,

Víctor Raúl Haya de la Torre, inicialmente un dirigente estudiantil. Los cinco puntos del programa del partido APRA dan cuenta del peso de reclamos americanos más que nacionales: “acción contra el imperialismo, unidad política de América Latina; nacionalización de tierras e industrias; internacionalización del canal de Panamá; solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas del mundo”. Y si bien el APRA generó mayor simpatía ideológica que impacto político fuera de las fronteras peruanas, contribuyó sin dudas a desplegar un conjunto de sentidos políticos que desnaturalizaban la estrecha pertenencia a las naciones dominadas por los regímenes oligárquicos.

Finalmente, cabe retratar otro proceso de los años veinte que contribuyó a adelgazar las prerrogativas de la oligarquía, la cual desde fines del siglo XIX se había recostado en un nacionalismo excluyente y racista para sostener su dominación. Ese nacionalismo restringía la pertenencia nacional a los propietarios blancos y las ciudades capitales en una batalla imaginaria —y a veces literal— contra los indígenas, los afrodescendientes y los trabajadores migrantes, a los que caracterizaban por su barbarie, molicie, atraso e incultura, como se vio en el anterior capítulo. En contraste con ello, en los años veinte se hicieron presentes tendencias en la arquitectura, el ensayo, la pintura y la literatura que impulsaban definiciones más amplias de la identidad nacional. Dicha sensibilidad pujaba por mover los límites de lo que debía ser considerado nacional o auténtico (la sierra, lo indígena, lo mestizo, la negritud, los campesinos, el interior del país, el pasado precolombino) y que hasta entonces había sido en general objeto del desprecio de las élites. Los ejemplos son numerosos, pero probablemente los más conocidos son el muralismo mexicano —que incorporó y dio visibilidad al fondo rural, mestizo e indígena— y la literatura indigenista, que intentaba retratar las penas de la población andina de Perú, Bolivia, Guatemala y Ecuador, y a la vez impugnar el carácter fatuo de la identidad hispanoblanca, urbana y litoral. Entre 1925 y

1929 el escritor y activista de izquierdas peruano José Carlos Mariátegui tenía una sección en la revista *Mundial* editada en Lima: significativamente, la sección se titulaba “Peruanicemos al Perú”. Con ello, Mariátegui —a quien denominaban con la voz quechua “Amauta”, que significa sabio— daba cuenta de la necesidad de encontrar y aceptar las raíces rurales, indígenas, andinas del Perú, frente a las artificiosas pertenencias blancas, hispanocatólicas y costeñas. Figuras como Miguel Ángel Asturias, con *Leyendas de Guatemala* (1930) y su traducción al español del *Popol Vuh* (el libro sagrado con las mitologías mayas); los indigenistas peruanos y militantes del APRA Luis Alberto Sánchez y Ciro Alegría; la revista *Amauta* (1926) e incluso el poeta brasileño Oswald de Andrade con el *Manifiesto Antropófago* (1928) tienen que entenderse como parte de esta nueva sensibilidad estética y política. Como mostró el sociólogo Eduardo Devés Valdés, el mestizaje para los positivistas de finales del siglo XIX conducía a la decadencia racial de las naciones, pero en los años veinte la percepción se había invertido al punto de que un texto como *La raza cósmica* (1925), del filósofo y político mexicano José Vasconcelos, convertía la mezcla genética de los humanos en la única salida para el salto evolutivo mundial.

En las décadas de 1910 y 1920, como se señaló, tuvo lugar el desarrollo de luchas para imponer definiciones más incluyentes de nacionalidad: *a*) ampliación de ciudadanía mediante legislación electoral que garantizara la pureza del sufragio y la expansión de derechos a varones por fuera del patriciado; *b*) inclusión económica con la demanda de legislación social y laboral que le fijaba obligaciones al Estado y a la patronal, y *c*) inclusión identitaria por medio de la crítica cultural y social a los moldes racistas de nación. Como escribió Patricia Funes, lo que estaba en juego entonces ya no era el perímetro de los Estados sino su volumen y su contenido, que habría de medirse en densidad social y profundidad temporal. La nación, ha expuesto esta historiadora, en los años veinte dejó de ser considerada meramente la dimensión cultural

o folclórica del Estado, y pasó a ser entendida más bien como una condensación de las complejidades y contradicciones sociales y étnicas a lo largo del tiempo. En algunos países implicó dejar de venerar al indio idealizado, estetizado y desaparecido, y prestar la atención a los problemas realmente existentes de las poblaciones originarias.

MIEDO ROJO Y VIOLENCIA DE CLASE

Los impactos sociales y económicos de la Primera Guerra Mundial fueron muy fuertes. La huelga general de 1917 en Brasil, impulsada por el alza del costo de vida y problemas habitacionales, sacudió muchas de las seguridades del empresariado brasileño. Los fuertes conflictos sindicales y la represión de julio de ese año en São Paulo testimonian el inicio de un ciclo de violencia y miedo político que se extendió hasta los primeros años veinte. En noviembre de 1918 hubo una movilización muy masiva en Río de Janeiro que fue objeto de represión y de estigmatización: según las autoridades militares, se trataba de un complot anarquista destinado a tomar el poder. En Chile entre 1917 y 1921 estallaron más de 200 huelgas en Santiago y Valparaíso. Según Norberto Ferreras, en Argentina hubo en 1915 unas 65 huelgas con 12 000 participantes, pero en 1919 ese número saltó a 367 huelgas que involucraron a 308 000 personas.

La conflictividad sindical fue traducida por los parlamentarios y la prensa de derecha como “amenaza maximalista”. Ello habilitó el despliegue de operaciones represivas a gran escala tendientes a reducir a sangre y fuego los desafíos desde abajo. Las clases dominantes no repararon en muchos límites legales a la hora de enfrentar a los trabajadores. El incremento de la represión policial y militar de los conflictos laborales fue recurrente entre 1918 y 1930. Algunos casos merecen ser mencionados por su brutalidad. El primero es la Semana Trágica de enero de 1919 en Buenos Aires, un episodio que

involucró el uso del Ejército para perseguir a grupos de trabajadores urbanos en huelga y que ocasionó varios cientos de muertos en muy pocos días, así como un ensayo de pogromo en el barrio de Once. El impacto de este episodio desbordó a la capital argentina y tuvo repercusiones represivas y preventivas en Asunción y en Montevideo destinadas a evitar réplicas de alzamientos “maximalistas”. Otro ejemplo proviene del extremo sur del continente, a ambos lados de los Andes: el episodio conocido como Patagonia Trágica se vivió en el verano austral de 1921 y 1922, y fue una auténtica carcería humana por parte del Ejército argentino que desembocó en el fusilamiento de cientos de peones de las enormes haciendas de producción de ovinos. En noviembre de 1922 el Ejército ecuatoriano abrió fuego contra una multitud congregada por demandas sindicales en Guayaquil y causó centenares de víctimas: en esa ocasión se denunció la inminencia de un levantamiento comunista en la ciudad. Al año siguiente se volvieron a usar esas ideas para justificar la represión y el homicidio de decenas de indígenas en la hacienda Leito. El último caso es la llamada Masacre de las Bananeras, ocurrida en Colombia en 1928, cuando el Ejército disparó a mansalva sobre los trabajadores en huelga en el departamento de Magdalena, a los efectos de defender los intereses de la poderosa United Fruit Company.

Las clases dominantes nacionales se dividían a la hora de interpretar las razones del descontento de los obreros y de los consumidores. Por un lado, se encontraban aquellas figuras de la derecha que entendían que existía una “cuestión social”, la cual se dejaba ver en las altas tasas de mortalidad, los bajos niveles de instrucción y el hacinamiento urbano. En esa línea iban también las intervenciones ya mencionadas de los jóvenes oficiales. Entendían que esos problemas debían ser enfrentados más temprano que tarde a través de una atención legislativa por razones sociales —para mejorar las condiciones de vida de los desheredados— y políticas —para evitar la tentación maximalista—: hacía allí parecen haber ido la decisión

del gobierno peruano de fijar una jornada laboral de ocho horas luego de fuertes conflictos sindicales, la ley brasileña sobre accidentes laborales (1919) y la propuesta de un Código Laboral en Argentina, presentada en 1921. En ese marco debe entenderse el peso creciente que adquirió la Organización Internacional del Trabajo en materia de recomendación de legislación laboral.

Pero, por el otro lado, se hallaban quienes postulaban que la agitación era el resultado de una campaña subversiva esencialmente orquestada por extranjeros. Es interesante notar que el miedo rojo estuvo presente desde antes del triunfo de los bolcheviques. La Liga de Defensa Nacional fue fundada en 1916 por el poeta Olavo Bilac, en el marco de crecientes rumores de agitación sindical en los puertos brasileños. Pero fue sin dudas la llegada de noticias sobre la marcha de la revolución en Rusia lo que estimuló la creación de organizaciones de autodefensa de la clase dominante. En esta lectura, a la vez xenofóbica y conspirativa, los problemas sociales y el descontento sindical se presentaban como el resultado del accionar de agentes externos. Es por ello que, junto con la represión oficial, el empresariado en diversos puntos de América se dio a la tarea de combatir por sus propios medios a la actividad sindical antes de que la situación desembocara en algo parecido a los sucesos rusos. Así, la confección de listas negras con los nombres de los “sospechosos”, boicots empresariales, organización de guardias blancas y reclutamiento de rompehuelgas o “crumiros” formaban parte del repertorio, entre otros, de la Asociación del Trabajo, creada en Buenos Aires en mayo de 1918 para defender los intereses de los más importantes capitalistas locales y extranjeros.

Las guardias blancas desplegaron discursos abiertamente antiizquierdistas y xenofóbicos, y dirigieron el grueso de sus actividades represivas a la disputa callejera con los sindicatos. Fue el caso en 1919 de la Liga Patriótica Argentina (LPA) y las Ligas Patrióticas, fundadas en el norte de Chile en 1911 ante la intensificación de los problemas

límitrofes con Perú, pero resurgidas bajo el miedo rojo en 1918. En 1929 se creó en Montevideo la agrupación paramilitar Vanguardia de la Patria, en la que participaron muchos jóvenes con conexiones con el ejército. En el caso de Chile se concentraron en las localidades limítrofes con Perú. Allí se dedicaron a atacar a estudiantes, sindicalistas y trabajadores peruanos sin constituir, como en Argentina, una organización unificada y de alcance nacional. Su ideario político nunca fue demasiado explícito, salvo en la convocatoria al mantenimiento del orden social y a la expulsión de los extranjeros. Se trató de una violencia directa del empresariado, en un esfuerzo por recomponer la dominación que se creía sometida a amenazas severas del llamado “maximalismo”. Las ligas de América del Sur se mostraron más eficientes para el despliegue de violencia contrarrevolucionaria en coyunturas críticas que para la construcción de consensos políticos amplios y sostenidos en el tiempo: a diferencia del fascismo, tuvieron una preocupación muy ocasional e instrumental por interpelar a sectores populares y mucho más reducida por movilizarlos políticamente en un sentido parecido a la Marcia su Roma, liderada por Benito Mussolini en octubre de 1922. Le interesaban más las masas dóciles que las agitadas. La LPA intentó acercarse a las masas de manera paternalista, priorizando su educación y su moralización. En particular, desplegó iniciativas destinadas a las mujeres solteras, para instruir las en la caridad y el amor a la patria. El presidente de la LPA, Manuel Carlés, señaló en 1922 cómo es que la caridad combatiría al egoísmo y el comunismo: “Contra el instinto egoísta del animal, el hombre ejercita sentimientos morales de caridad, de ayuda, de religión, de civilización y patriotismo. Contra el principio feroz del comunismo que aconseja suprimir a los débiles, la caridad argentina cuida, consuela y cura”.

Su militarización no escaló hacia niveles que desafiaran el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, en buena medida porque era algo que el Ejército no alentaba —o estuviera

dispuesto a tolerar— y, sobre todo, que los liguistas desearan desarrollar. Como expresó la historiadora Verónica Valdivia, las ligas tuvieron más visibilidad que influencia. En la medida en que la derecha dominante fue capaz de controlar o de reprimir a la agitación sindical con las herramientas tradicionales, no convocó a las fuerzas de la derecha radical ni impulsó reformas significativas o de gran caladura, un aspecto que cambió en la década de 1930, como se verá en el siguiente capítulo.

La formación de esas ligas expresaba la sensación de acorralamiento de una parte de las élites tras la Revolución Rusa, deseosas de romper un cerco más imaginado que real. Pero simultáneamente transmitían la idea de que esas élites habían perdido —al menos parcialmente— la fe en que las fuerzas del Estado respaldarían de manera automática sus intereses: cualquier posición reformista o de neutralidad respecto de los conflictos sociales fue denunciada por voceros del empresariado como señal de “obrerismo” o de connivencia con la subversión. Esas nociones fueron usadas para denostar los gobiernos de Hipólito Yrigoyen (1916-1922; 1922-1928) en Argentina y de Arturo Alessandri (1920-1924) en Chile, tal como las élites uruguayas hicieron después de 1925 ante la posibilidad de la restauración de las políticas estatistas del expresidente José Batlle y Ordóñez: en 1929 se institucionalizó en Uruguay el Comité de Vigilancia Económica, que nucleaba a las asociaciones empresariales —como la Federación Rural— contrarias al renacimiento de lo que en la época se denominaba “inquietismo”. Si bien por entonces no hubo propiamente un partido fascista en ese país, algunas de sus ideas corporativistas generaron interés entre los empresarios, deseosos de institucionalizar su presencia en algún ámbito estatal independiente de su (escasa) fuerza parlamentaria. Como mostró el historiador Gerardo Caetano, las derechas reaccionarias uruguayas del periodo fueron “antiestatistas rabiosas” y estaban convencidas de que el agro era la fuente de riquezas nacionales a la que parasitaban los políticos profesionales y una administración pública tenida por elefantiásica.

Muchos de los agudos conflictos entre las clases sociales en el periodo fueron presentados por la derecha como luchas entre nacionales y extranjeros. Así, aquellos países sin leyes de residencia que limitaran los derechos de los extranjeros se apuraron a promulgarlas. El parlamento chileno votó en noviembre de 1918 la suya: los 16 meses que habían pasado desde su ingreso como proyecto dan cuenta de que se había modificado el contexto y se tenía por urgente su tratamiento. Al igual que ley de Residencia de Argentina (1902) y la Ley Gordo en Brasil (1907), la ley chilena permitía la expulsión sumaria de aquellos extranjeros involucrados en la difusión de ideas disolventes o la agitación social. El Congreso colombiano aprobó en 1928 leyes de persecución a los extremistas que “pretendan propagar ideas encaminadas a suprimir o debilitar el sentimiento y la noción de patria” o a difundir “el desprecio en contra de la religión católica”. Esa forma de xenofobia o de racialización de los conflictos sociales no fue la única del continente. En los años veinte se conformó en el norte y el centro de México una serie de comités antichinos: Alicia Gojman mostró que en 1930 aparecieron el Comité Nacional Pro-Raza y la Liga Mexicana Anti-China y Anti-Judía, entre otras. Se trataba de organizaciones nacionalistas y xenófobas, que expresaban temores un poco abstractos sobre las posibles consecuencias raciales del mestizaje y algo más concretos sobre la competencia de los asiáticos en el mercado de trabajo. La orientación xenofóbica se encontraba presente lo mismo entre los que se reclamaban hijos de la Revolución Mexicana o sus enconados detractores.

Conviene detenerse un poco sobre el problema del temor y de la amenaza social. El “miedo rojo” se extendió por varios países en la medida en la que se confirmaba la expansión de los movimientos revolucionarios en Europa tras la guerra. Podemos especular que en casi todo Occidente tuvieron repercusiones las zozobras y dudas de las clases dominantes sobre la capacidad del capitalismo para sobrevivir a los embates revolucionarios. ¿Cuánto había de miedo sincero,

cuánto de angustia infundada y cuánto de aprovechamiento político en el crecimiento entre 1919 y 1921 de lo que el politólogo Alain Rouquié llamó “antibolchevismo sin comunistas”? Son variables difíciles de discernir. Es cierto que las élites parecían tener miedo y que las izquierdas habían ampliado su peso en la clase trabajadora urbana, sobre todo del Cono Sur latinoamericano. Los anarquistas de los Industrial Workers of the World y los comunistas consiguieron ampliar sus posiciones en la organización de base en las fábricas y los puertos. En numerosos países se organizaron los partidos comunistas afiliados a la Internacional Comunista y sus militantes se mostraron decididos, convencidos y empeñosos. Esos partidos juraron seguir los principios de la Komintern y evidenciaron en poco tiempo una rápida expansión. Se trataba, entonces, de una clase trabajadora urbana más poderosa y mejor organizada que la que existía a inicios del siglo, y que mostraba solidaridad interna y predisposición al conflicto, lo cual resultaba más desafiante que el potencial lanzamiento de una revolución.

Sin embargo, el número de los activistas comunistas era generalmente muy bajo, restringido a ciertos gremios (en general urbanos), y su poder para interpelar y movilizar a las masas estaba coyunturalmente agigantado a causa de la situación rusa. El poder social de los trabajadores organizados era una realidad; que ello constituyera una amenaza revolucionaria parece más discutible. Los temores eran desmedidos por cuanto las fuerzas revolucionarias no fueron significativas en la década de 1920. El intenso miedo a la potencial confraternización entre obreros y soldados según el modelo del soviét de Petrogrado no pasó de ser un fantasma de la época. Es interesante notar que ese espectro conspirativo tomaba colores particulares en cada país: mientras que en Argentina y Brasil tuvo mayor éxito la idea de que estaba en marcha una conspiración judeo-bolchevique, en Chile las voces de la derecha encontraban en 1920 que entre los planificadores del complot subversivo había judíos, pero también peruanos y argentinos. En México y en

Colombia, en cambio, los hombres de la derecha católica asignaban a los masones una buena parte de la responsabilidad por este proceso, pero también por las reformas liberales de mediados del siglo XIX. La separación entre Iglesia y Estado que fijaron las constituciones de la época (México en 1917, Uruguay en 1919 y Chile en 1925) parecía confirmar esos miedos.

DE REACCIONARIAS A RADICALES, DEL LIBRO A LA URNA,
DEL PÚLPITO A LA CALLE

Como vimos en el capítulo anterior, la derecha reaccionaria de inicios del siglo XX hablaba en una sintonía esencialmente cultural; su diagnóstico y sus propuestas tenían el tono olímpico y abstracto que se puede esperar de sujetos que entienden que la actividad intelectual o teológica es la superior y, por tanto, la que debe dirigir la política. Pero después de las noticias sobre la Revolución Rusa y de sus impactos en las repúblicas americanas, esa derecha reaccionaria adoptó un tono explícito y centralmente político enlazado a una propuesta de remplazo del orden liberal-republicano heredado del siglo XIX por alguna otra forma de vida política más autoritaria y, en algunos casos, más católica y más militarizada. De allí que convenga hablar de unas derechas radicales según la definición de Roger Eatwell: están más interesadas en producir un mundo nuevo que en restaurar uno que ya ha desaparecido o que está en vías de hacerlo. Aun cuando expresaban algo de nostalgia por la pérdida de la identidad nacional (como las reaccionarias) y de preocupación por el mantenimiento del orden social (como las conservadoras), colocaban el acento en la construcción de un nuevo futuro nacional, de orden y jerárquico, cuya llegada implicaba inevitablemente el despliegue de violencia; una división tajante entre los líderes y los gobernados, y el final de la democracia de partidos.

Su argumentación postulaba que, dado que el maximalismo propagaba la solidaridad internacional entre los trabajadores, la mejor manera de contrarrestar su expansión sería a través de la promoción agresiva y permanente del nacionalismo. Si la hermandad de clase era “disolvente”, el patriotismo era el antídoto para reparar la desunión entre los conciudadanos y frenar la temida revolución. Como se verá, muchos entendían que el patriotismo a sostener ya no era el de defensa de las constituciones, sino que debía tener una densidad religiosa y cultural, incluso étnica, mucho más vigorosa que la que hasta entonces se había creído necesaria. Más allá de la invocación al catolicismo como fuerza de conservación social, no faltaron intelectuales de estas derechas radicales que promovieron un orden autoritario sustentado en un Estado eminentemente laico o neutral en términos religiosos, como ocurrió con el jurista brasileño Francisco Campos o los voceros del empresariado rural y urbano uruguayo. Entre los llamamientos a superar el umbral republicano, probablemente los que alcanzaron más impacto y escucha fueron los producidos por el escritor argentino Leopoldo Lugones y por un grupo de periodistas y políticos conservadores colombianos conocidos como los Leopardos.

Al cumplirse el centenario de la batalla de Ayacucho que libró el continente americano de la Corona española en 1824, se organizó en Perú una serie de festejos. A tal efecto fue convocado Lugones, quien tuvo la oportunidad de cerrar el evento con un discurso posteriormente conocido como *La hora de la espada*. En un texto repleto de referencias castrenses, Lugones sancionó: “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada”. Esa hora era la del ejército, “la última aristocracia, vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica”. Dado que “el sistema constitucional del siglo XIX está caduco”, las tareas políticas del momento le correspondían a la espada, que “hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque

ésa es su consecuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo”. Si el mundo se debatía entre la imposición de la autoridad firme o de la ley débil, “el hombre de espada tiene que estar con aquélla. En esto consisten su deber y su sacrificio”. En un tono que definitivamente tenía evocaciones del *vivere pericolosamente* de los fascistas, Lugones sentenciaba que

El pacifismo no es más que el culto del miedo, o una añagaza de la conquista roja, que a su vez lo define como un prejuicio burgués. La gloria y la dignidad son hijas gemelas del riesgo; y en el propio descanso del verdadero varón yergue su oreja el león dormido. La vida completa se define por cuatro verbos de acción: amar, combatir, mandar, enseñar.

No llama la atención que Lugones se asentara cada vez más en posiciones filofascistas y antidemocráticas ni que el discurso de Ayacucho fuera publicado en un volumen titulado *La Patria fuerte*, editado por el Círculo Militar argentino en 1930. El poeta y director de la Biblioteca Nacional del Maestro apoyó el golpe de Estado de ese año en Buenos Aires, momento que creyó propicio para convertirse en una versión local del *Duce*. Su suerte política al frente de una agrupación a la que bautizó Guardia Argentina fue menor que la literaria: nunca consiguió encuadrar ni liderar grupos significativos de militantes del nacionalismo en los años treinta.

A mediados de la década de 1920 un grupo reducido de jóvenes intelectuales y políticos conservadores colombianos renovó la práctica periodística y la retórica política con planteos sumamente agresivos. Autodenominados los Leopardos, Eliseo Arango (1900-1977), José Camacho Carreño (1903-1940), Augusto Ramírez Moreno (1900-1974) y Silvio Villegas (1902-1972) lanzaron sus diatribas contra el liberalismo, los conservadores más moderados y la secularización de la vida política en *El Nuevo Tiempo* y *La Patria*, pero, sobre todo, en *El Debate*. Según ha postulado el historiador Ricardo

Arias, dos eran los puntos que concentraban las preocupaciones de los Leopardos: mantener el carácter católico de la sociedad colombiana y romper cualquier posible acercamiento político con los liberales, como sí estaban haciendo algunos dirigentes conservadores. Sus posturas cerradamente clericalistas y autoritarias se expresaban en una serie de interpretaciones sobre la “cuestión social” y la promoción de un reordenamiento católico de la sociedad que pudiera evitar tanto el individualismo egoísta del capitalismo como la deshumanización comunista. Sólo un poder ejecutivo fuerte tendría las facultades necesarias para contrarrestar el desorden social que traía el “socialismo” y el desorden moral que implicaban el liberalismo y otros enemigos de Dios. No tardaron en encontrar en Simón Bolívar una figura autoritaria, militar y providencial que debía ser objeto de culto.

A lo largo de los años veinte creció entre los políticos y los intelectuales el número de adeptos a las ideas antiliberales y, especialmente, de aquellos que impugnaban a las instituciones parlamentarias con argumentos de las derechas radicales. Es claro que en los veinte había dictaduras en América (la de Augusto Leguía en Perú desde 1919, la de Gerardo Machado en Cuba desde 1929, la de Juan Vicente Gómez en Venezuela), pero no era —aún— el rasgo generalizado del continente, como sí lo era en la Europa del Sur: España con el general Primo de Rivera desde 1923, Italia con Mussolini desde 1922 y Portugal desde 1926. En ese tiempo apareció una primera ola de simpatías con el fascismo en el Cono Sur americano, casi de manera contemporánea a los primeros pasos de Mussolini al frente de su gobierno. Un caso inusual de simpatía por Mussolini lo constituye la dictadura de Machado en Cuba. El paso del barco Italia en 1924 por La Habana formó parte de la política de acercamiento del régimen fascista al cubano: el dirigente estudiantil comunista Juan Antonio Mella, por entonces exiliado, no dudó en calificar a Machado como el “Mussolini del Caribe”.

Previsiblemente, fueron italianos o sus hijos los que promovieron la organización local del Partido Nazionale Fascista. De igual manera, descendientes de alemanes fueron quienes mostraron inicialmente recepción al discurso del nazismo. Algo parecido puede decirse del impacto de las ideologías españolas de extrema derecha, que tuvieron alguna llegada en los años veinte (por ejemplo, a través del embajador en Buenos Aires, Ramiro de Maeztu) con la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Desde luego, se crearon agrupaciones que no estaban compuestas exclusivamente por italianos, como el Partido Fascista Argentino (1927), el Partido Popular Corporativo (Chile, 1926), el Comité Central Nacionalista (Chile, 1927), la Legião Cruzeiro do Sul y el Partido Fascista Brasileiro (ambos de Brasil), que nunca alcanzaron masividad y desaparecieron antes de 1930.

Las proclamas de estas primeras organizaciones fascistas en favor de un régimen político católico y corporativo resultaban peculiares, innecesarias o directamente inaceptables para los conservadores. La mayoría de éstos percibió al fascismo en los años veinte como un producto exclusivamente italiano que en ocasiones despertaba atracción y debate, porque ofrecía una salida extrema para el problema de la conflictividad sindical y para reactivar la economía con vigor y reanimar el alma nacional, pero ciertamente no alentaron la creación de contrapartes americanas. El fascismo generó algún interés —incluso admiración— en personas muy alejadas de la extrema derecha, como pasó con la escritora progresista argentina Victoria Ocampo, quien se encontró con Mussolini en 1934. *Il Duce* generó admiradores en los dos partidos políticos uruguayos: el líder colorado Julio María Sosa fue el primer dirigente de su partido en declarar públicamente su fascinación por el fascismo tras visitar Italia. Otro colorado, Pedro Manini Ríos, encabezó una delegación oficial que visitó Italia, donde fue recibido por Mussolini.

Debido al fuerte peso del universo intelectual francés sobre los países de América del Sur, no llama la atención que hubiera escucha

de Charles Maurras y las actividades de la Action Française. Los jóvenes redactores del periódico *La Nueva República* en Buenos Aires y los de la revista *A Ordem* en Rio de Janeiro eran algunos de los lectores confesos y apasionados de Maurras y su ideología tradicionalista y reaccionaria. En igual sentido, el corporativismo aparecía para muchos hombres como un posible modelo para superar el liberalismo, al que veían como desquiciante, incapaz de organizar a las masas y, sobre todo, terreno fértil para que pudieran anidar las ideologías consideradas extremas, como el anarquismo o el comunismo. En un sentido muy similar sonaban muchas voces católicas.

LA REVANCHA CATÓLICA

Los hombres de derecha radical interactuaban con las iniciativas de la Iglesia o estaban dentro de ella, como el particular caso de maurrasianos católicos, por ejemplo, los Leopardos. Los laicos eran una verdadera excepción en este universo de derechas. Las nuevas derechas radicales tuvieron vínculos de alianza más que de competencia con la Iglesia católica, que hablaba a través de numerosos promotores oficiales y oficiosos. Reacción eclesiástica y derechas radicales compartían numerosos consensos ideológicos, pero también espacios periodísticos, ámbitos de sociabilidad y, especialmente, enemigos.

La Iglesia aprovechó el retroceso del evolucionismo y del liberalismo político y económico tras la Gran Guerra e intensificó no sólo su vida institucional, sino también sus esfuerzos por lograr la reconquista de unas sociedades —y especialmente unas élites— a las que creía extraviadas a causa del hedonismo, el consumismo y la falta de patriotismo y de fe. Vemos en los años veinte una Iglesia que abandona sus posiciones defensivas para asumir otras de ofensiva, contrarias al *statu quo* de las relaciones con el Estado.

En ningún lugar esas pretensiones tuvieron tal belicosidad como en México, donde la llamada Guerra de los Cristeros fue una auténtica confrontación entre modelos bien distanciados acerca de qué facultades debían permanecer en manos del Estado y cuáles en la Iglesia. La Constitución de 1917 no sólo confirmó las restricciones que la de 1857 le fijaba a la Iglesia católica, sino que las intensificó: prohibición de cultos fuera de los templos, eliminación de la educación religiosa, fijación estatal del número de iglesias y sacerdotes en el país, entre otras. No parece casual que muchos sacerdotes se alistaran entre los opositores a los gobiernos posrevolucionarios y que se sirvieran para ese propósito de las redes católicas en los Estados Unidos. La Acción Católica de la Juventud Mexicana primero y luego la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas fueron dos de las organizaciones que más denunciaron en los años veinte lo que entendían como una persecución propia del Imperio romano contra los primeros católicos. Bajo la consigna de “Viva Cristo Rey”, las acciones bélicas se desataron a mediados de 1926 y generaron varios miles de muertos en el país, sin dejar un claro vencedor militar. Las actividades armadas sólo concluyeron en 1929, cuando la curia entendió que era preferible la transacción con el régimen posrevolucionario a mantener en pie las fuerzas rebeldes, puesto que hipotecaban la situación de la Iglesia en el futuro. Un acuerdo de paz le otorgó al Estado y a la Iglesia un *modus vivendi* que se extendió por el resto del siglo xx, el cual fue vulnerado en la práctica en numerosas ocasiones sin que condujera a nuevas rupturas. En todo caso, los grupos del catolicismo intransigente mostraron de allí en adelante no sólo un enorme rechazo hacia los gobiernos posteriores al de Plutarco Elías Calles (1924-1928), sino también desconfianza política hacia la jerarquía de la Iglesia católica. De hecho, la firma del acuerdo no implicó que todos los católicos depusieran sus armas: muchos de ellos participaron en diversos atentados o se dieron a tareas de más largo aliento para reforzar la hegemonía católica, como se verá en el próximo capítulo.

Sin llegar a los extremos mexicanos, hubo en los años veinte varios esfuerzos de la institución eclesiástica por impulsar el paso de la crítica social a la acción pública y política. En parte la Iglesia aprovechó el marco de la conflictividad sindical de finales de la guerra para mostrarse como una institución capaz de brindar el cemento social que el nacionalismo constitucional, más afín a las oligarquías liberales, no conseguía ya ofrecer. La revitalización institucional eclesiástica en buena medida descansó en la fervorosa cantidad de actividades que llevó adelante la Acción Católica, creada por el Papa Pío XI (1922), en línea con la encíclica *Rerum Novarum*, mencionada en el primer capítulo. La Acción Católica se desplegó en cada país según los recursos y las necesidades allí disponibles, pero sus patrones generales, preocupaciones y modos de organización fueron férreamente centralizados por el Vaticano. Tres de las organizaciones creadas en Colombia fueron las Juventudes Católicas, los Círculos de Obreros Católicos y la Liga de Damas Católicas, las cuales dan una muestra de las poblaciones en las que la jerarquía católica suponía que se podía infiltrar la tentación comunista o la disolución moral. En sintonía parecida, en abril de 1919 se creó la Unión Popular Católica Argentina, constituida por una rama económico-social, otra para las damas y una tercera juvenil. El catolicismo sería la solución a los problemas morales y sociales del país, según afirmaba el diario *El Pueblo* en Buenos Aires en 1921: “La república está enferma hace mucho tiempo, porque habiéndose infiltrado el virus de la inmoralidad sus médicos no han querido comprender la excelencia de las inyecciones cristianas, únicas capaces de enriquecer su sangre debilitada, dotándola de nuevos elementos de depuración social”.

Es interesante anotar aquí la consolidación de una particular corriente de catolicismo “integral e intransigente”, tal como la ha llamado el sociólogo Émile Poulat. Para esta perspectiva, la fe católica debía regular todas las esferas humanas (gobierno, moral,

educación desde ya, vida sexual y familiar, etcétera). Su intransigencia respecto del mundo moderno se expresaba en la denuncia permanente de sus males, como el laicismo o la división entre pecado y crimen, entre política y religión. Se trató de la línea oficial vaticana por décadas, oportunamente apuntalada por encíclicas emitidas por varios pontífices desde León XIII en adelante. En todo caso, el catolicismo integrista de esos años expresa una particular paradoja. Se trata de actores evidentemente políticos que se movilizan, se arman y publican periódicos y libros con la expectativa de recrear un orden social que, perciben, ha dejado de reproducirse automáticamente: son militantes e intelectuales que van a la calle —a la guerra en el caso de México— para restaurar un esquema de jerarquías y de autoridades tradicionalmente indiscutidas. En definitiva, marchan a la política para erradicar las transformaciones que la propia modernidad política ha introducido.

No conviene suponer que la Iglesia y sus organizaciones viraron en su totalidad hacia esas posiciones integrales: en su interior también se desarrolló un vigoroso catolicismo social, y una buena parte de los obispos se sentía ideológicamente más cómoda con el conservadurismo que con líneas más radicalizadas hacia la derecha. En Perú y Bolivia numerosos obispos se lamentaban por la situación de los indígenas, pero su queja no rebasaba el límite del paternalismo y la invitación a la concordia y la moderación de las demandas (de los trabajadores) y de la codicia (de los patrones). En algunos casos hubo sacerdotes que se lanzaron a organizar a trabajadores y trabajadoras, como ocurrió con los Círculos de Obreros Católicos.

La ofensiva católica contra el ordenamiento liberal —al que se entendía como responsable del avance del maximalismo entre las clases trabajadoras— tomó cuerpo especialmente en algunas iniciativas editoriales y educativas. Entre las instituciones católicas más importantes se destaca el Centro Dom Vital,

patrocinado por Jackson de Figueiredo desde 1922 y desde 1929 por Alceu Amoroso Lima. El Centro Dom Vital, al igual que los Cursos de Cultura Católica que la Iglesia comenzó a brindar en Argentina desde 1922, constituyen los puntos más relevantes de la avanzada intelectual del tomismo en América del Sur. Revistas como las cariocas *Gil Blas* (1919-1923) y *A Ordem* (1921-1990), la argentina *Criterio* (desde 1928 a la actualidad) o el periódico colombiano *El Debate* (1927-1930) le dieron un gran empuje en esos años al mundo intelectual y periodístico católico. Su fuerza no estaba sólo en el renovado vigor ideológico que mostraban, sino también en su incorporación consciente y a veces gozosa al mercado de la prensa modernizada. Silvio Villegas, uno de los Leopardos, escribió en *El Debate* el 3 de julio de 1927: “Se ha dicho que, si San Pablo viviera, se haría periodista antes que predicador, y esto se acerca mucho a la verdad. Hoy hay la necesidad de decir muchas cosas a los que nunca pisan una iglesia, pero que suelen divertir sus ocios con las hojas periódicas”.

Con todo, se trataba de un proyecto político de la Iglesia católica destinado a incidir sobre las élites sociales y políticas más que a reconquistar a la sociedad toda. O al menos podríamos postular que la iniciativa tuvo más éxito sobre los sectores altos que sobre los trabajadores. Por la naturaleza de sus publicaciones, el origen social de sus promotores y el perfil de sus propuestas sociales —más paternalistas que reformistas—, se percibe que era un esfuerzo norteador a acercar las dirigencias del Estado y empresariales a la Iglesia para, desde esas cimas, desplegar luego el proceso general de recristianización de la vida social (que, de cualquier manera, también era una puja en el interior del universo católico, para desplazar a los más “liberales” o moderados).

CONCLUSIONES

En los años veinte había muchos actores de la derecha liberal que estaban seguros de que sería posible sostener en el futuro cercano las condiciones sociales y políticas anteriores a la guerra. Mostraban confianza en que, tras el violento choque producido por el enfrentamiento bélico y la conflictividad sindical que sobrevino a continuación, otra *belle époque* arribaría. Ésa siguió siendo la derecha dominante: con menos espacio para actuar políticamente por la intervención de fuerzas partidarias y militares favorables a la reforma política y legislativa, por la presión de los sindicatos y porque la Iglesia desplegaba expectativas que ya no parecían ser tan compatibles con el orden constitucional decimonónico. En todo caso, esa derecha liberal continuó controlando el juego político (manejo de elecciones y relaciones con el empresariado y con las Fuerzas Armadas), pero se mostró cada vez más dispuesta a escuchar —y a repetir— argumentos provenientes de las viejas derechas reaccionarias y de las emergentes derechas radicales, así como a darles permisos tácitos a las organizaciones paramilitares y de clase alta para la persecución no oficial al movimiento obrero y las izquierdas. Sin embargo, el anhelado sueño de las derechas liberales de regresar a la senda de la *belle époque* se mostró de corta vida: a finales de 1929 el sistema económico mundial volvió a entrar en una zona de incertidumbres aun mayor que la que había traído la Gran Guerra.

Aunque aún le sobraban defensores al régimen liberal-republicano, en la década de 1920 comenzaron a escucharse discursos que señalaban que la modernización de la vida social y económica no sólo traía el progreso, sino también la amenaza de la disolución social. Organizaciones de derecha radical entendían que ya no era posible transitar las aguas de la política y de la dominación social con las mismas herramientas que hasta entonces se habían usado, por lo que eran necesarias vías más extremas y represivas para modificar, erosionar o revertir los avances produ-

cidos en materia de reforma social, ampliación de la ciudadanía o distribución del ingreso o de la propiedad. Las voces que terminaron por ponderar la necesidad de una salida *manu militari* para enfrentar al desafío desde abajo comenzaron, por entonces, a escucharse con más intensidad. Es decir, para ubicar de nuevo a cada uno en “su” lugar se iba a requerir de mayores niveles de violencia física y simbólica, y de un recrudecimiento de los mecanismos de vigilancia y exclusión. Su punto de partida era que la guerra y la creación de la URSS marcaban el cambio de una época para la cual el liberalismo y el positivismo habían quedado obsoletos.

Esas derechas radicales combinaban la ensoñación nostálgica de la hacienda, del respeto de los de abajo a los de arriba, con el despliegue de formas de hacer política que nada tenían de tradicionales ni de bucólicas: agresiva prensa diaria, mítines políticos, violencia callejera, uso de uniformes entre los integrantes de las bandas paramilitares y en algunos casos voluntad (más declarada que eficiente) de llegar a las masas urbanas. Las propuestas políticas de las primeras organizaciones fascistas americanas en el sentido de instaurar nuevos regímenes políticos de cuño corporativista y católico sonaban extrañas, inaceptables y sobre todo innecesarias a los oídos de los líderes liberales y empresariales, salvo en aquellas ocasiones en que la disciplina social parecía perderse definitivamente, como en los años de 1918 a 1921. De allí que, cuando la situación política se mostró más estable y la economía comenzó a ofrecer señales de reactivación, el oxígeno político para las organizaciones de derecha radical tendió a mermar y se agotó antes de 1930.

La cuestión de la violencia política se tornó mucho más relevante en los años veinte de lo que había sido antes. Ello se expresó en una dimensión intelectual al convertirse en un objeto de interés teórico-político. Hubo muchas reflexiones y propuestas ideológicas sobre el uso justificado de la violencia política, sea para erigir un nuevo orden, sea para sostener al decadente orden oligárquico con-

tra sus detractores reformistas y de izquierda: textos como los de Leopoldo Lugones antes comentados fueron en este sentido. Pero la violencia apareció no sólo en los libros y las proclamas, sino que también puesta en práctica como herramienta política. Pensemos en las recurrentes intervenciones del Ejército, pero sobre todo de actores novedosos, como las ligas patrióticas o los cristeros. Los años veinte no inventaron la violencia política ni las masacres de obreros en huelga, pero parece claro que en este decenio se incrementó la violencia oficial, como la paramilitar, en algunos casos combinada, como pasó con la Semana Trágica de Buenos Aires en 1919 o la Masacre de las Bananeras del Magdalena en 1928.

Sugiero pensar los años veinte como un increíble laboratorio donde las derechas liberales y las radicales fueron procesando localmente una serie de fenómenos que, por su propia naturaleza, eran transnacionales. El primer desafío fue lidiar con los durísimos impactos de la guerra y de la posguerra, lo cual en varios casos significó el abandono *de facto* de principios del liberalismo *laissez faire* y la adopción de una economía autárquica y con incipiente desarrollo de manufacturas hasta entonces importadas. El liberalismo económico encontró límites claros durante la guerra en la propia Europa, donde los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas de creciente intervención y racionamiento de los recursos. Y si bien la situación en América no fue tan drástica como en Europa —ni siquiera en el México devastado por los diez años de revolución—, lo cierto es que el liberalismo perdió muchas de sus credenciales y capacidad para legitimar estructuras de dominación tan desiguales como las que había legado el siglo XIX. Nacionalizar y regimentar a las masas como un recurso necesario para la actividad bélica dejó de ser un mero sueño de los autoritarios más extremos para analizarse seriamente como parte de las necesidades de la defensa nacional.

El segundo desafío fue realizar todo esto en el marco de una feroz impugnación desde la izquierda y desde la derecha radical a los valores de la civilización burguesa del siglo XIX: luego de la guerra,

ya no hay tantos defensores convencidos de que los seres humanos marchan inevitablemente por un camino de evolución y progreso, ni de que la racionalidad política es el resultado de la deliberación de los parlamentarios y de las reglas constitucionales. Palabras como Razón o Civilización fueron desplazadas del vocabulario de la filosofía, la teoría y la acción políticas desde los años veinte, y las remplazaron llamamientos a darles mayor peso al hecho consumado, al impulso, al instinto y a la decisión.

El tercer proceso de alcance global que tuvo impacto en América Latina fue la intensificación del catolicismo como identidad política: se trataba de un catolicismo más integral, mejor organizado a través de la Acción Católica, más receloso respecto de los males de la modernidad y excitado ante la caída en desgracia de su rival ideológico de todo el siglo XIX, el liberalismo. A ese enemigo se le sumaría el proveniente del cuarto desafío global: la aparición del horizonte socialista desde 1917. La revolución de los bolcheviques y luego la supervivencia de la URSS condujeron a la constitución de una amenaza internacional recurrentemente invocada. Dicha amenaza se vivió con aprehensión y auténtico miedo de clase entre 1918 y 1921, así como en cada ciclo de protestas de los trabajadores que parecía anunciar inestabilidad para los intereses de la clase dominante, sus afiliaciones y sus alianzas internacionales. En todo caso, vale la pena recordar que los celos e impugnaciones ante la posibilidad de que el comunismo —cualquiera que fuera su significado— hiciera pie en tierras americanas no abandonaron las pesadillas de las derechas en el resto del siglo XX.

CAPÍTULO 3 LA ERA DEL FASCISMO (1930-1945)

El 1 de mayo de 1938 se realizó en Buenos Aires el tradicional acto del Día Internacional de los Trabajadores. Miles de personas se concentraron en calles y plazas del norte de la ciudad, normalmente asiento de las élites en la capital argentina: la gran diferencia respecto de anteriores actos del 1 de mayo era que esta vez los organizadores no provenían de la izquierda como era tradición, sino exactamente de sus antípodas ideológicas. Agrupaciones políticas, sindicatos y periódicos autodenominados “nacionalistas” fueron los que llamaron a las masas a sumarse al acto. Según reconstruyó la historiadora Mariela Rubinzal, los “nacionalistas” en los días previos habían repartido folletos e impartido charlas en los barrios para difundir la convocatoria, y pusieron tranvías y buses a disposición de los interesados en asistir. En la ocasión del acto no se entonó “La Internacional”, sino que una banda de música hizo sonar marchas marciales, el himno nacional y el de la Alianza Juvenil Nacionalista, piezas que fueron interrumpidas con ocasionales consignas antiseimitas por parte de los manifestantes, muchos de los cuales estaban uniformados y realizaban el saludo fascista con el brazo derecho. En el acto del 1 de mayo del año siguiente incluso se vio en Buenos Aires una columna de damas, por cuya vestimenta se las adivina más de clases altas que estrictamente obreras.

En varios sentidos, esos actos “nacionalistas” del 1 de mayo en Buenos Aires testimonian tres de los procesos de transformación política, organizativa e ideológica que vivieron las derechas tras la crisis económica de 1929. Primero, la consolidación de una derecha radical, decidida a convocar y movilizar a las masas, incluso a

los trabajadores urbanos, por los cuales normalmente los conservadores habían mostrado más recelo y desprecio que interés: que invitara a varones y mujeres no garantizaba su asistencia, desde ya, pero debe señalarse la novedad del recurso y la confianza de sus promotores en la iniciativa. A su vez, también vemos que esa derecha radical echó mano de un repertorio de prácticas políticas que, sin renunciar a la lucha electoral, apostaba por la ocupación de las calles e, incluso, la utilización de la violencia. La exaltación de la virilidad y la juventud, un punto recurrente del primer fascismo, estuvo presente en esos años. La promoción de la violencia física era entendida como un medio para imponer disciplina y sanear un orden al que se consideraba inauténtico y feminizado. El uso de discursos explícitamente antisemitas y la promoción de una forma de “justicia social” no marxista daban a esa derecha radical una fuerza movilizadora que no descansaba en el mero repudio a Moscú, sino que perfilaba un conjunto de premisas ideológicas propias. El tercer punto a destacar es la intensidad de los procesos de internacionalización de la política latinoamericana: el ascenso de Hitler, la invasión italiana a Etiopía, la Guerra Civil española y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial tuvieron enormes impactos en el continente americano, promovieron adhesiones a los países y bandos contendientes y estimularon procesos inevitablemente transnacionales de identificación y de rechazo: las derechas latinoamericanas opinaron, se posicionaron, chocaron y se pensaron de manera reiterada respecto del convulsionado escenario europeo.

La emergencia de esa derecha radical en las calles —en muchos casos con evidentes rasgos de fascistización— impactó sobre las posiciones e identidades de votantes y políticos liberales y conservadores, de oficiales de las Fuerzas Armadas y de hombres de la Iglesia católica. La adhesión a los discursos promovidos por las derechas radicales, como el corporativismo, se tornó alternativa frente a la caída en desgracia de los promotores del *laissez faire* liberal, que fue visto cada vez más como un conjunto de ideas anticuadas o inúti-

les, y de cualquier manera, poco eficaces para enfrentar el desafío del comunismo y el de una economía mucho más compleja que la de la década de 1900. De hecho, la vida económica en los años treinta dejó de estar orientada por el liberalismo económico como lo había estado a inicios del siglo y parcialmente en la década de 1920. El impacto a largo plazo de la crisis de 1929 se evidenció en la cada vez más extendida regulación estatal de la actividad económica, en procesos de industrialización y de urbanización, el afianzamiento del mercado interno respecto del comercio internacional y la ampliación de la clase trabajadora urbana. El alza del peso electoral y demográfico de los trabajadores manufactureros fue uno de los datos políticos y sociales de los que las derechas conservadoras debieron tomar nota cuando intentaron reconstituir una hegemonía que parecía haberse roto irreversiblemente en 1930 con la crisis económica y sus secuelas sociales.

LA CRISIS DE 1930, EL FIN DE LOS REGÍMENES OLIGÁRQUICOS Y LA LLEGADA DE LA NUEVA ECONOMÍA

El impacto de la crisis desatada a finales de 1929 fue enorme. Se hizo sentir muy rápidamente en los mercados internacionales en los que se transaban las materias primas exportadas por América Latina. Por varios años seguidos la actividad económica transitó por zonas sombrías y muy complicadas. Caída del volumen y del precio de las exportaciones, reducción de las divisas, desempleo en la actividad rural y la minería inicialmente y en las actividades urbanas luego, y falta de insumos y de bienes importados son algunos de los efectos que se advirtieron rápida y permanentemente. Hacia mediados de la década de 1930 la situación tendió a estabilizarse y mejorar, aunque bajo unas coordenadas que no dejaron de presionar y de condicionar la política en los países latinoamericanos en los años siguientes.

En las naciones más grandes de la región hubo sectores de las élites que conservaron la fe en que el mercado internacional volvería a ser en algún momento aquel que en la *belle époque* les había garantizado ingresos extraordinarios y predominio político, pero en los hechos esa atapa quedó atrás. Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México vivieron procesos de fuerte crecimiento de las industrias dedicadas a abastecer a los mercados locales, gracias a la circunstancial falta de competidores internacionales primero, y al establecimiento de protecciones arancelarias y políticas industrialistas posteriormente. El eje de la economía se movió del comercio internacional a las manufacturas y a los servicios para el mercado interno en expansión y en muchos casos concentrado en grandes áreas urbanas, como Buenos Aires, São Paulo o la Ciudad de México. Ese desplazamiento implicó pérdida de poder de los latifundistas, que se vieron sometidos a la presión conjunta de partidos políticos reformistas, sindicatos industriales y, a veces, grupos empresariales nuevos, dedicados a actividades urbanas (aunque en algunas naciones los latifundistas reciclaron o diversificaron sus intereses y se sumaron como inversores a las nuevas ramas de la economía).

La expansión de las manufacturas fue acompañada de la incorporación de miles de obreros industriales a la vida económica y política. Trabajadores concentrados en las ciudades y en sus contornos marginales terminaron por darles un perfil completamente nuevo a las sociedades. En varios países el Estado asumió la tarea de organizar y controlar sindicatos que representarían a esos trabajadores, así como el dictado de leyes laborales: la vida sindical se transformó en una cuestión de gran preocupación, considerando la centralidad del costo laboral en la actividad industrial y el peso electoral de esas masas, como muestran los casos de México y Brasil. Los comunistas, en particular, también fueron activos en el proceso de sindicalización de varios grupos de trabajadores urbanos, lo cual terminó produciendo un recrudecimiento de los miedos anticomunistas en

los años treinta, especialmente allí donde el Partido Comunista se involucró —o al menos previó hacerlo— en maniobras revolucionarias, como en Chile, Brasil o El Salvador.

El derrumbe ideológico del liberalismo no sólo se expresó en la falta de fe en la capacidad del comercio internacional para relanzar y sostener la vida económica nacional. En los años treinta emergieron nuevas expectativas y demandas sobre la actividad económica nacional, así como sobre las funciones necesarias y legítimas que el Estado debía tener en la economía: en particular, una de las consecuencias de la crisis fue la creciente convicción de que el Estado debía desplegar obligaciones sociales que no se restringían a garantizar el cumplimiento de los contratos entre privados. La búsqueda de una economía autocentrada y autárquica, generadora de empleo y menos vulnerable, se tornó un objetivo recurrente y válido de la política económica nacional, como mostró José del Pozo. La administración pública se hizo más compleja y abarcadora: empresas públicas —en la actividad petrolera, por ejemplo— creadas en estos años, mayor política social, ampliación de las fuentes de recaudación impositiva, más regulación de la actividad laboral y creación de bancos centrales son parte de esta avanzada dirigista, que alcanzó mayor ímpetu durante la Segunda Guerra Mundial.

En esos años se vivió una ardua competencia a tres bandas entre ingleses, alemanes y estadounidenses por ampliar o retener sus espacios de intervención económica en la región. Los ingleses estaban perdiendo fuerza económica frente a los estadounidenses desde el final de la Gran Guerra, sobre todo en el Caribe, América Central y el norte de la América del Sur. Pero el agresivo ingreso del Reich a través de la provisión de créditos, manufacturas y tecnología volvió compleja la competencia por la hegemonía comercial.

La economía alemana, en franco proceso de recuperación a mediados de los años treinta, se convirtió en demandante de diversas materias primas latinoamericanas (alimentos, minerales, etcétera). La introducción de una moneda no convertible, el *aski-marc* o

aske-marco, le permitía al Reich asegurarse la provisión de ciertos bienes primarios latinoamericanos a la vez que la exportación de sus productos manufacturados. Como señaló el historiador Victor Bulmer-Thomas, Alemania pasó de aportar 10.9% a 17% de las importaciones latinoamericanas entre 1930 y 1938 (y las exportaciones hacia el Reich pasaron del 7.7% al 10.3%). La carne uruguaya, el café de Costa Rica, Brasil y Colombia, con dificultades para vencer el proteccionismo británico, se volcaron hacia el mercado alemán hasta el inicio de la guerra. El desenlace de la competencia internacional en América Latina se produjo sólo con la entrada de Washington en la Segunda Guerra Mundial en 1941, tras lo cual las inversiones alemanas fueron objeto de expropiaciones. Pero hasta entonces ni ingleses ni alemanes cejaron en su esfuerzo por coquetear con los gobiernos, los empresarios y los políticos locales, además de lanzar todo tipo de versiones sobre los intereses imperiales de los rivales.

Especialmente durante el conflicto bélico, Washington intensificó su interés por los países latinoamericanos y su alineamiento con los Aliados: la cuestión de la guerra y la posible presencia de colaboradores del Eje era el prisma obsesivo con el que las embajadas estadounidenses miraban los escenarios políticos. En 1941 el presidente Roosevelt creó la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos, a cargo de Nelson Rockefeller. La Oficina debía promover la cooperación económica entre los países del hemisferio, pero sobre todo servía como canal para la financiación y la distribución de noticias, programas de radio y películas destinadas a sostener el esfuerzo de guerra contra el Eje. Marc Becker mostró que a inicios de los años cuarenta el FBI (Federal Bureau of Investigation) envió sus hombres por América Latina en la búsqueda de redes de espionaje de los alemanes: en el caso de Ecuador, ante la ausencia de hombres del Reich, los agentes del Bureau se dedicaron a vigilar a dirigentes del Partido Comunista local. Pero quizás el caso más extremo fue la participación del embajador

estadunidense Spruille Braden en la campaña presidencial de Argentina en 1945 y 1946, cuando abiertamente apoyó al candidato que competía contra el coronel Perón, a quien se identificaba como el hombre del nazismo en Buenos Aires (tal como había ocurrido con el gobierno instalado en Bolivia en 1943). En 1945, antes de que Perón asumiera la presidencia del país, Braden lo describió como la “encarnación del control militar fascista [...] Fue engendrado por los nazis y los provee de los cimientos a partir de los cuales éstos esperan construir la victoria de postguerra”.

Como se señaló en el capítulo anterior, el ascenso del *Duce* en 1922 había traído pequeñas sacudidas de admiración concentradas en las comunidades de italianos. Pero a mediados de los años treinta se hizo claro que el fascismo era un traje que no sólo podía lucir Italia, sino que parecían tener fundamento sus pretensiones de ser una ideología tan universal como el liberalismo o el comunismo. Ese proceso fue de la mano de la creciente internacionalización de las identidades políticas, tanto de la fascista como de sus detractoras. Previsiblemente, los eventos europeos sacudieron con más fuerza a las personas de ese origen asentadas en América, como ocurrió con los italianos, tan numerosos en el Río de la Plata y el centro-sur de Brasil, pero también de los españoles, presentes en gran número en México y en Cuba. Sin embargo, el ascenso de Hitler en 1933, el estallido de la Guerra Civil española en 1936 y, finalmente, el inicio de la conflagración mundial en 1939 interpe-laron y movilizaron a miles de latinoamericanos. En Cuba, al igual que en los Estados Unidos, la invasión italiana a Etiopía en 1935 cimbró la política local, al conectar las demandas del antifascismo y las preocupaciones políticas de la población afrodescendiente.

Tanto los que se identificaron con las dictaduras de Italia, España y Alemania como los que se pusieron del lado del bando republicano español y luego de los Aliados (o sólo de la URSS) en la guerra entendían que en esos conflictos se libraban disputas que los involucraban e interpelaban, como si se tratara de procesos que

ocurrían en su propia tierra. El alzamiento del general Franco y luego la construcción de su régimen en España fueron vividos por muchos hombres de derecha radical y de la Iglesia como un modelo de salvación frente a la amenaza “roja” y al liberalismo hedonista y decadente en los países hispanoamericanos. Para sus detractores, en cambio, el triunfo del franquismo agraviaba el alma democrática y republicana que supuestamente tenían los países del continente.

En el quinquenio que interesa en este capítulo los regímenes de Italia, España y Alemania organizaron actividades de espionaje y de propaganda en América. El proselitismo fascista, falangista o nazi estaba dirigido a las colectividades residentes en el país más que hacia la población local, como mostró Ronald Newton. La presencia de dinero nazi en Argentina ha sido un tema muy estudiado por los historiadores interesados en el impacto de la guerra en América Latina. El Reich adquirió estaciones de radio, periódicos y revistas de manera secreta a través de su embajada en Buenos Aires, de empresas alemanas radicadas en el país o de la agencia de noticias TransOcean. El estímulo que esa embajada le dio al antisemitismo recayó sobre figuras y organizaciones que ya tenían antecedentes de adhesión a la judeofobia, como eran la ya mencionada Alianza Juvenil Nacionalista, y también Enrique Osés, director de *Crisol* y Carlos Silveira, a cargo de *Clarínada*. En México José Vasconcelos fundó y dirigió la revista *Timón* con dinero alemán, y estuvo al servicio de la creación del efímero partido nazi local.

LAS DICTADURAS: ENTRE LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA Y LA TENTACIÓN FASCISTA

La proliferación de salidas autoritarias entre 1930 y 1945 expresa la debilidad en la que se encontraban los principios republicanos que habían sostenido —en algunos casos muy hipócritamente— los regímenes oligárquicos y los voceros de las derechas conservadoras

desde finales del siglo XIX. Como resultado de un golpe de Estado o de un alzamiento cívico-militar, hubo cambio de autoridades entre 1930 y 1937 en Argentina, Brasil, Guatemala, Perú, Chile, Uruguay, Cuba y Bolivia. Sintomáticamente, al igual que en los años sesenta, muchos golpes o insurrecciones se dieron a sí mismos el nombre de “revoluciones”. Hablo de los regímenes del general Uriburu en Argentina (líder de la Revolución de Septiembre de 1930 y dictador hasta 1932); de Sánchez Cerro (1930-1931) y de Óscar Benavides (1936-1939) en Perú; de Gabriel Terra en Uruguay (jefe de la Revolución de Marzo, 1933-1938); de la Revolução de 1930 de Getúlio Vargas y luego del Estado Novo brasileño (1937-1945); de Anastasio Somoza en Nicaragua (1937-1947); del general Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944); del general Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1931-1944); del general Tiburcio Carías en Honduras (1936-1949), y del general Higinio Morínigo en Paraguay (1940-1948). A ellas podemos sumarle que a inicios de los años treinta aun gobernaban como dictadores Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1927-1931), Gerardo Machado en Cuba (1929-1933) y Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935), y que en Bolivia en ese tiempo la norma era la existencia de golpes de Estado que imponían soluciones políticas poco duraderas (como la dictadura de Gualberto Villarroel, 1943-1946).

En muchos casos no se trató sólo de golpes que interrumpieran circunstancialmente la vida política republicana, sino de dictaduras que intentaron reorientar al país bajo líneas más autoritarias. Los dictadores en ocasiones diseñaron constituciones de corte autoritario y corporativo para institucionalizar el nuevo orden: Vargas en Brasil y José Félix Estigarribia en Paraguay implementaron los nuevos textos, mientras que Uriburu en Argentina y Terra en Uruguay no lo consiguieron. Conviene, en todo caso, recordar que no se trataba de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas como las de la década de 1970, sino de autocracias personales que contaban con el respaldo de las corporaciones militares y de grupos políticos

y empresariales. Esas dictaduras, como veremos, en general estaban encabezadas por un militar, pero administradas *de facto* por personal proveniente de las fuerzas liberales y conservadoras tradicionales, y en sus fundamentos ideológicos se encontraban elementos cuyo origen eran las derechas radicales.

La más relevante de todas experiencias dictatoriales fue, sin dudas, el Estado Novo (1937-1945), porque encarnó una original combinación de industrialización, política de masas, nuevo autoritarismo tecnocrático e involucramiento con los gobiernos fascistas europeos. Vargas construyó y sostuvo un régimen político autoritario y personalista que nunca fue sometido a consulta electoral y que fue apoyado por diversas camarillas políticas provinciales, las Fuerzas Armadas y los nacientes sindicatos de trabajadores industriales. Probablemente una de sus mayores novedades fue el despliegue de una represión política intensa, de novedosas estrategias de propaganda y de iniciativas de modernización cultural, educativa y de los medios.

La censura sistemática, el uso de la prisión política, la persecución a cargo del Departamento da Ordem Política e Social e incluso la tentativa de organizar colonias agrícolas para reeducación moral y cívica de los enemigos del Estado Novo le dieron un carácter fuertemente autoritario al régimen. La enérgica represión a los comunistas —quienes intentaron llegar al poder a través de una revuelta fracasada en 1935— fue de la mano del despliegue de innovadoras herramientas de propaganda política y de fuertes inversiones públicas en actividades culturales. A través de la acción del Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), Vargas consiguió transmitir su mensaje con revistas como *Cultura Política* (1941-1945) y, sobre todo, con sus programas de radio, destinados a alcanzar a la numerosa población rural (y analfabeta). El DIP promovía la imagen de Vargas como “padre de los pobres” brasileños y a la vez también incentivaba los miedos anticomunistas.

El fundamento político del Estado Novo provino de figuras de la extrema derecha brasileña, como los juristas Francisco Campos

y Francisco José de Oliveira Viana. Estos hombres no eran voceros de la Iglesia ni comulgaban con el fascismo, sino que su perspectiva apuntaba a la constitución de un orden fuerte, personalista y modernizador, que entroncara con las tradiciones autoritarias brasileñas más que con la importación de un entramado ideológico. Campos justificaba de esta manera en su libro *O Estado Nacional. Sua estrutura. Seu conteúdo ideológico* (1940) el advenimiento de un nuevo tiempo y de un orden corporativista que permitirían dejar atrás tanto al liberalismo como su consecuencia, el comunismo:

El corporativismo mata al comunismo de la misma manera que el liberalismo genera al comunismo. El corporativismo interrumpe el proceso de descomposición de mundo capitalista previsto por Marx como resultado de la anarquía liberal. Las grandes revoluciones políticas del siglo xx desmintieron la profecía de Marx y desmoralizaron la dialéctica marxista. La voluntad de los hombres y sus decisiones pueden, por lo tanto, poner fin a la supuesta evolución necesaria del capitalismo hacia el comunismo.

Por varios años Vargas mantuvo excelentes relaciones económicas con el Tercer Reich y se alineaba en términos internacionales con los gobiernos del Eje. Fue especialmente conocido el caso de la extradición a la Alemania nazi de Olga Benario, pareja de Luis Carlos Prestes, el secretario general del Partido Comunista Brasileiro (PCB). Sin embargo, cuando en 1941 submarinos alemanes hundieron barcos brasileños, se sacudió el escenario político y el dictador lanzó a su país a la guerra junto a los Aliados. Brasil envió tropas a combatir al sur de Italia y desde su territorio partieron numerosos vuelos a África del Norte. Vargas ordenó vigilar y concentrar a la población alemana y japonesa residente en Brasil, por considerarla potencialmente enemiga de la nación. Sin renunciar a sus principios y prácticas de naturaleza autoritaria, el dictador brasileño reorientó la política exterior y obtuvo numerosas concesiones y

ventajas de la cercanía con Washington, por entonces dispuesto a aceptar a un nuevo amigo sin interesarse mucho por su pasado de colaboración con la Alemania nazi. El giro de la política exterior de 1942 forzó al PCB a cambiar de posición frente al dictador. El partido acompañó la ampliación de la legislación laboral producida durante el final del Estado Novo y, sobre todo, apoyó en 1945 la propuesta de Vargas de llamar a una asamblea constituyente. Por esa cercanía con el dictador y su resistencia a condenar en su totalidad la experiencia varguista, el PCB quedó alejado de la coalición opositora, liderada por la União Democrática Nacional, y presentó una candidatura presidencial propia a mediados de 1945.

La otra dictadura que mostró fuertes señales de orientarse hacia la extrema derecha fue la instalada en Argentina en 1943, que apartó del poder a la coalición conservadora que gobernaba desde 1932. Si bien la dictadura quedó bajo control de militares, congregó a actores de diversas organizaciones “nacionalistas” y católicas —algunos de ellos, de fuerte filiación antisemita, como el ministro de Instrucción Pública, Gustavo Martínez Zuviría— que manifestaban una supuesta equidistancia ideológica entre los Aliados y el Eje. Se trató de un régimen militar nacional-católico que impuso la educación católica en las escuelas, que envió interventores ultramontanos a las universidades y que prohibió la actividad partidaria. La dictadura llevó adelante maniobras de persecución al sindicalismo comunista, así como de censura de los espectáculos y de tangos que eran considerados de dudosa moralidad. Junto con ello, el régimen comenzó a desarrollar políticas de acercamiento a los sindicatos no comunistas a través de la concesión de legislación favorable en materia de jubilación, salarios y condiciones laborales. El hombre que mejor aprovechó esa política fue el entonces coronel Juan Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, quien fue electo presidente en febrero de 1946.

El caso de Uruguay, por el contrario, ilustra acerca de cuáles eran los límites de las derechas radicales para entrar en los gobiernos

cuando las fuerzas conservadoras estaban bien paradas. En marzo de 1933 el presidente Gabriel Terra, del Partido Colorado, llevó adelante un autogolpe de Estado con el beneplácito de una facción de su partido y del Partido Nacional, asociaciones empresariales y un sector de la policía. El dictador anunció la puesta en marcha de grandes cambios legales para dar por terminada la vida política tal como se la practicaba desde la implantación de la constitución vigente desde 1919. Fueron disueltos el Consejo Nacional de Gobierno y el Parlamento, se intensificó la vigilancia anticomunista, se le dio temprano reconocimiento a la Junta de Burgos en España y se rompieron las relaciones diplomáticas con la URSS. En el elenco gubernamental había una serie de figuras que hacían explícitas valoraciones positivas del franquismo y del régimen de Mussolini, y que despotricaban contra la democracia parlamentaria, la conflictividad entre las clases sociales y la acción estatal igualadora que había promovido el Partido Colorado a inicios del siglo xx. En 1939 se les negó el derecho al desembarco a refugiados europeos, tal como ocurrió en Cuba y los Estados Unidos. En 1936 se promulgó la ley 9604, que impedía el ingreso de extranjeros acusados de tener ideologías radicales y que clasificaba a los inmigrantes según sus cualidades morales y biológicas para integrarse a la vida nacional. Esos cambios en la legislación introdujeron una polarización política muy intensa, como mostró Clara Aldrighi, puesto que lo que parecía estar en juego era la definición de la identidad nacional uruguaya más que la regulación de una actividad particular.

La dictadura terrista parecía dar por cerrado el compromiso de las diversas facciones de las derechas con la democracia bipartidaria: no pocos uruguayos vieron al régimen de Terra como la versión local del fascismo. Sin embargo, como probó la historiadora Magdalena Broquetas, Terra fue un hábil negociador que consiguió reclutar apoyos en los dos principales partidos y los grupos de interés, pero no tenía capacidad para avanzar sobre líneas de derecha radical. El proyecto de Terra fue un esfuerzo restaurador

del empresariado uruguayo y de las facciones conservadoras de los dos partidos más que un régimen propiamente fascista. En todo caso, el régimen de Terra se desmoronó antes de que consiguiera cristalizar reformas legales significativas y finalmente debió buscar una salida política que condujo a un retorno a la tradicional vida política uruguaya a inicios de los años cuarenta.

LA EMERGENCIA DE LAS DERECHAS RADICALES: RASGOS GENERALES

La edad de oro de las derechas radicales se vivió en estos años. Por entonces, organizaciones explícitamente antiliberales y anti-comunistas, influidas por un catolicismo político con espíritu de reconquista, los avances del fascismo en Europa y el derrotero de la Guerra Civil española se ofrecieron como una opción política para la ciudadanía. Se trataba de organizaciones políticas a las que debemos llamar radicales por su voluntad movilizadora y modernizante más que restauradora, y que en general gustaban de identificarse como “nacionalistas”. Afirmaban recurrentemente la necesidad de afianzar el nacionalismo político, económico y cultural frente a las fuerzas disgregadoras de la “politiquería” del orden político-constitucional liberal, el egoísmo individualista del capitalismo y la guerra social que alentaba el comunismo. Las doctrinas provenientes de la extrema derecha europea circularon con profusión, aunque inevitablemente de manera selectiva: españoles como Ramiro de Maeztu con *Defensa de la hispanidad* (1934) y luego José Antonio Primo de Rivera, y franceses como Charles Maurras. Incluso había algún interés por la obra de Mihail Manoilescu, promotor de salidas fascistas y corporativistas, como la que propuso en *El siglo del corporativismo* en 1934 (texto que fue republicado en Chile en 1941).

La condena de la derecha radical al liberalismo se fundamentaba en que se trataba de un modelo económico que generaba pobreza a la vez que fortalecía los monopolios y las actividades financieras.

En ese punto la derecha radical conectaba con argumentaciones de las izquierdas, pero se diferenciaba de ellas al plantear que la salida al orden liberal no era la promoción de la lucha entre las clases, sino el afianzamiento de la cooperación social. El amor a la patria sería el cemento orgánico, natural y armónico que permitiría postergar las formas más agudas del materialismo y del resentimiento social. Un Estado fuerte sería garantía de límites al accionar de los monopolios extranjeros, pero también a las arbitrariedades y los dislates de los empresarios abusivos —carentes de virtudes católicas como el paternalismo— y de sindicalistas sedientos de venganza e insensibles al llamado a la concordia social y la unidad nacional. De allí que estas derechas radicales alentaban alguna forma de justicia distributiva que, desde luego, no conducía a entronizar la igualdad, sino a establecer diferencias tolerables y sensatas entre las clases sociales. Con ello, invitaban a darle a la vida una trascendencia que permitiera escapar al materialismo de quienes persiguen el aumento de las ganancias o de los sueldos. Por eso buena parte de la convocatoria de las derechas radicales estaba revestida de espiritualismo y, como señaló Sandra McGee Deutsch, parecía estar interesada en modificar el sentido de la vida más que la estructura social.

Esas nuevas voces se mostraron cercanas a las ideas corporativistas: en materia económica, alentaron la organización de los trabajadores y propietarios, así como un papel decisivo del Estado, argumentando selectiva y alternativamente según principios yacentes en la encíclica *Quadragesimo Anno* (1931) o en la *Carta del Lavoro* (1927) del régimen fascista. En materia política los hombres de las derechas radicales eran favorables al rediseño de las constituciones decimonónicas —consideradas artificiales, arcaicas o ajenas al alma nacional— y a promover alguna instancia de representación parlamentaria “funcional” u “orgánica” y no partidaria, además de la instauración de formas de gobierno autoritarias y tecnocráticas. Así lo explicaba en 1940 Guillermo Izquierdo Araya, uno de los principales voceros del Movimiento Nacionalista de Chile:

No se va contra la democracia; pero sí contra las instituciones desacreditadas, envejecidas o inadecuadas para los imperativos de nuestro siglo y que sirven de fundamento a la “democracia liberal-individualista” y “democracia capitalista”. Hacer que esta democracia se transforme en una “democracia funcional” (en el plano político) y “democracia corporativa” (en vez de capitalista en el plano económico) no significa ir contra la democracia misma: significa mejorarla y ponerla a tono con los tiempos y sus imperativos [...] dar ingerencia [*sic*] a las fuerzas de la producción, del comercio y del proletariado manual e intelectual a través de Consejos funcionales, y limitando al máximo la intervención de la política partidista en los negocios públicos.

Una de las discusiones ideológicas que recorrían a las derechas radicales del periodo era acerca de si era pertinente o deseable sumarse a la competencia electoral y asimilarse a otros partidos. Sobre este punto había tres desembocaduras posibles. Hubo hombres y organizaciones que se incorporaron a la vida política formal y probaron su suerte en las urnas, como el caso de Julio Irazusta, que fue diputado (1939-1945), o el de Matías Sánchez Sorondo, que fue senador (1932-1941) en Argentina. También se contaron aquellos que eran contrarios a su organización partidaria y se mantuvieron como un grupo anti *statu quo*, dispuesto al uso sistemático de la violencia política y al repudio a las instituciones democráticas, como ocurrió con las Camisas Doradas de México. Finalmente, se cuentan aquellos casos de organizaciones que participaban en elecciones con candidaturas y también se mostraban con voluntad para intervenir en peleas y tiroteos callejeros, y llegado el caso, intentar o acompañar una toma del poder por medio del uso de las armas, como fue el caso del Movimiento Nacional Socialista de Chile y de la Aliança Integralista Brasileira (AIB), que lanzaron fallidos golpes de Estado en sus países en 1938.

El catolicismo era prenda de unión entre los hombres de las derechas radicales, aunque también había aquéllos un poco encandilados

por el paganismo y el esoterismo nazi. En todo caso, no renunciaron nunca a embanderarse como los únicos defensores del alma católica frente a lo que, entendían, constituía la hipocresía del liberalismo y el ateísmo del comunismo. Los lazos entre las organizaciones católicas y las derechas radicales fueron muy intensos en la mayor parte de los países. Organizaciones como la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (1931) en México, sacerdotes como Gustavo Franceschi en Argentina y publicaciones como la chilena *Estudios* (1932) expresaron ese deseo de politizar la identidad religiosa.

El catolicismo era convocado por las derechas radicales para reponer las jerarquías en el universo político, por ejemplo, colocando a la Iglesia como custodia moral de la nación. Pero también entendían que esa restauración necesitaba o merecía una expresión en los ámbitos privados, por ejemplo, a través de una recuperación del papel central del padre dentro de la familia y una intensificación de las funciones domésticas de las mujeres. No llama la atención que las derechas radicales estuvieran compuestas en muy buena medida por varones jóvenes que se mostraban recelosos de la autonomización de las mujeres —una autonomización, por otro lado, más imaginada que real—. Aun así, la condena al feminismo no significó ausencia de mujeres en las organizaciones de derecha radical. Las mujeres se contaban por miles en la AIB y en el sinarquismo mexicano: participaban con papeles asistenciales y “propios de su sexo” en la vida de la organización, pero se trataba de una actividad inexcusablemente política.

Muchos intelectuales conservadores como el chileno Alberto Edwards (1874-1932) se dieron a la tarea ya en los años veinte de ofrecer lecturas del pasado nacional en las cuales la identidad del país era inseparable de sus raíces hispanas y católicas. Según esta perspectiva, el ropaje liberal y republicano que vestían las constituciones era artificial y había generado distorsiones históricas y deformaciones en la economía, la política y la cultura de las naciones. La reelaboración del pasado nacional se convirtió en un elemento

de propaganda política por cuanto articulaba el diagnóstico decadentista con la convocatoria urgente a renovar el orden político. El análisis del pasado solía incluir la idea de que la doctrina liberal-contractualista, la pluralidad religiosa y la organización libre del mercado eran incrustaciones en el alma hispanoamericana (católica, caudillista, corporativa y jerárquica), considerada más hija de la Conquista española que de las independencias del siglo XIX. A ello Charles Maurras, un hombre muy leído por esas derechas radicales americanas, llamaba la distancia entre el país legal cuyas formas son liberales (la Constitución, la vida política dentro de las instituciones) y el país real cuyo contenido no es liberal (las tradiciones populares, un orden social orgánico consagrado en la vida social, pero no sancionado legalmente) y que debía ser reducida a través de la acción política.

Esas voces tuvieron más escucha sólo desde los años treinta, tras el hundimiento de la economía liberal en las naciones hispanoamericanas. En las interpretaciones sobre la vida nacional que hicieron las derechas radicales luego de 1929 campeaba generalmente una perspectiva decadentista, que entendía que el país se encontraba postrado en un proceso de degeneración económica, política y, en muchos casos, moral. Las derechas radicales se presentaban como esfuerzo de restauración de jerarquías sociales supuestamente extraviadas durante la “borrachera” liberal del siglo XIX y las convulsiones de la política de masas del siglo XX. Esta última había producido una sociedad a la que denunciaban como amorfa, indisciplinada, inorgánica o materialista. De allí que el comunismo era visto como el hijo inevitable del liberalismo más que como su contendiente. Así lo hacía saber en 1937 la revista *Estudios*, una de las voces más férreas en la defensa de una tercera vía entre el liberalismo y el comunismo en esos años: “el sistema económico liberal individualista ha producido el comunismo y la sociedad sólo podrá librarse de él mediante la aplicación de las doctrinas cristianas y la implantación del corporativismo”.

En la prensa periódica y radial de las derechas radicales las mitologías conspirativas estaban a la orden del día. Lanzaban frecuentemente denuncias sobre el accionar de fuerzas poderosas y ocultas que complotaban para convulsionar el país, alterar la paz social y, finalmente, someter a la nación al control extranjero. Esa pelea contra la conspiración conduciría, como señaló Pierre-André Taguieff, a identificar y estigmatizar a los supuestos responsables: normalmente comunistas, masones o judíos, pero sobre todo una combinación de todos ellos.

Al hablar de mitologías conspirativas, vale la pena retener un dato paradójico. Quienes se sirven con frecuencia de este tipo de argumentaciones son también quienes despliegan regularmente actividades conspirativas. Así, suelen acusar a terceros de cometer pecados (promover golpes de Estado, comprar la prensa, esconder sus intenciones, tener contactos espurios con actores externos, etcétera) que les son propios. Es por eso que la denuncia conspirativa y decadentista debe entenderse en primer lugar como una involuntaria autoimagen de los denunciantes antes que como una —siquiera vitriólica— descripción del enemigo. Tomemos algunos ejemplos de las derechas radicales de este periodo. El integralismo brasileño denunció hasta el cansancio que el comunismo operaba en las sombras para hacerse del poder, y que no trepidaba en usar la violencia política, la mentira y la infiltración en las Fuerzas Armadas para ese fin. Pero la verdad es que había muchísimos más oficiales integralistas que comunistas en el Ejército. Y que quienes en 1937 inventaron un supuesto complot de judíos y comunistas para controlar a Brasil (el llamado Plano Cohen) y se sirvieron de esa falsificación para apoyar al Estado Novo fueron oficiales integralistas. El Movimiento Nacional-Socialista Chileno denunció que el comunismo tenía una relación desleal e hipócrita con la democracia, a la que pretendía sabotear: sin embargo, quienes intentaron un golpe de Estado en 1938 fueron ellos, y no los comunistas. Periódicos “nacionalistas” argentinos como *El Pampero* recurrentemente

señalaban que el Partido Comunista local recibía órdenes y financiación de una potencia extranjera, la URSS: sin embargo, era su director quien obtenía fondos de la embajada alemana en Buenos Aires.

LA EMERGENCIA DE LAS DERECHAS RADICALES: DERIVAS NACIONALES

Veamos ahora con un poco más de detalle algunas de estas organizaciones. En octubre de 1932 se creó la Ação Integralista Brasileira (AIB), la más importante organización fascista fuera de Europa. Su relevancia radica en primer lugar, como ha probado el historiador Fábio Bertonha, en haber tenido perspectivas reales de tomar el poder a fines de los años treinta. En segundo lugar, en el número de afiliados: en 1935 la AIB declaró tener 1 123 grupos organizados en 548 municipios de Brasil y unos 400 000 afiliados (aunque probablemente la mitad fuera un número más realista). A fines de 1937 el integralismo publicaba 114 periódicos y 4 revistas en todo el territorio nacional: esa enorme actividad periodística complementaba la construcción de la biblioteca de títulos de la AIB, compuesta por unos 75 libros de filosofía, sociología, derecho, economía e historia. La tercera razón es que fue el primer partido político realmente nacional en un país que hasta entonces había priorizado y alentado la creación de partidos provinciales: la AIB fue gozosa al encuentro de la política de masas de Brasil, desplazando el tradicional estilo oligárquico. Mostró voluntad de movilizar a sectores populares y clases medias, hasta entonces poco o nada convocados por las formas tradicionales de la política. Eso explica la sobrerrepresentación de descendientes de migrantes europeos, sobre todo del centro y el sur del país, pero también de negros y de numerosas mujeres en sus filas. Y si bien las *senhoras* en la AIB normalmente tenían asignadas funciones asistencialistas y educativas, podemos pensar que la situación de otras organizaciones políticas no era más auspiciosa:

en todo caso, la AIB entendió muy bien que debía aprovechar el derecho al sufragio con que contaban las mujeres desde 1932.

Plinio Salgado (1895-1975) fue el alma máter del integralismo. No sólo tomó a su cargo la autoría de buena parte de los textos políticos medulares de la AIB, sino que también se encargó de diseñar las camisas verdes usadas por sus afiliados, el logo de su indumentaria (la letra griega sigma) y los rituales de casamiento y de defunción que debían respetarse. Los afiliados tenían la obligación de portar el uniforme, de saludarse con la mano extendida y de usar la voz guaraní “Anaue”. La creación de la milicia de partido contribuyó también a que recurrentemente se señalara a la AIB como una variante tropical del fascismo.

La AIB no era una simple reacción conservadora contra el sindicalismo y el comunismo, sino que ofrecía una alternativa corporativa y fascista dirigida contra lo que se consideraba problemas específicamente brasileños, como el liberalismo de las élites y un federalismo excesivo. La concepción política de la AIB partía de la necesidad de promover la constitución de individuos integrales (en lo espiritual, lo moral, lo político y lo económico) y de recuperar la armonía entre las clases sociales y dentro de las familias. Por eso la revolución que los “blusas verdes” proponían tenía un tono moral y mesiánico, que implicaba tanto la restauración de las tradiciones nacionales como el advenimiento de la Cuarta Humanidad que desplazaría la “civilización burguesa”. Según Salgado, ser burgués no significaba pertenecer a una clase social, sino poseer un espíritu pasivo, decadente y lucrativo. En ese camino la AIB consiguió incorporar a distintos sacerdotes entusiasmados con el catolicismo integrista. Fue el caso del franciscano Hélder Câmara (1909-1999), quien fundó en 1931 en el estado de Ceará la Legión del Trabajo, para promover la organización corporativa de la economía. Luego Câmara contribuyó a crear la Juventud Obrera Católica y en 1933 hizo lo propio con la Sindicalización Obrera Femenina Católica, que reunía a trabajadoras de la región.

La política mexicana fue muy marcada por el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Su ambicioso programa de reforma agraria, el menos convincente proyecto de “educación socialista” y el apoyo que les dio a los sindicatos en sus disputas con el empresario constituyeron desafíos muy serios a las élites económicas, a la Iglesia, a la oposición política y a un sector de las familias revolucionarias. En ese marco aparecieron algunos grupos pequeños, demasiado inspirados en discursos producidos en Europa, que desde los ojos del mexicano medio parecían más exóticos que una opción política: la Acción Revolucionaria Mexicanista (1931), más conocida como Camisas Doradas; la Unión Nacionalista Mexicana y la Legión Mexicana Nacionalista (1937). El general Nicolás Rodríguez dirigía a los Camisas Doradas, una organización que no se privó de desplegar argumentaciones antisemitas en su disputa con otras entidades políticas y sindicales, cercanas al cardenismo, al comunismo y al antifascismo. En el acto por el vigésimo quinto aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en 1935, los Camisas Doradas asaltaron el local del Partido Comunista en la Ciudad de México y atentaron contra la casa del dirigente sindical Vicente Lombardo Toledano: el Zócalo fue testigo de la balacera. Evidentemente, el impacto de la Guerra Civil española intensificó las luchas de los Camisas Doradas contra las fuerzas de izquierda, especialmente como reacción frente a la bienvenida que Cárdenas les dio a los refugiados republicanos.

Más relevantes fueron los grupos católicos integristas, puesto que se dieron una formación teológica y política más sistemática y desarrollaron un proceso clandestino de organización de años. El rechazo católico al cardenismo fue expresado, entre otros, por la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización formalmente independiente, pero siempre favorable a la Iglesia católica. Sin embargo, el más importante de todos los grupos fue, sin dudas, la Unión Nacional Sinarquista (1937-1946), que emergió como resultado de la confluencia de los esfuerzos hasta allí subterráneos de la Iglesia católica por resistir a la política pública cardenista y las

condiciones de la paz acordada tras la guerra cristera. El sinarquismo optó por convertirse en un movimiento rural de masas con una estructura clandestina y a la vez en un partido político cuyo alcance cubría la mitad del territorio nacional y que en 1940 apoyó como candidato presidencial a Juan Almazán. Por entonces los centenares de miles de adherentes a la Unión Nacional Sinarquista profesaban abierta simpatía por el nacional-sindicalismo de la Falange Española, el anticomunismo y el catolicismo. A ojos del gobierno de los Estados Unidos, involucrado de lleno en la guerra desde 1941, el sinarquismo se parecía demasiado a una quinta columna del Eje, por lo que solicitó al gobierno mexicano su desactivación política, tarea que llevó a cabo el entonces secretario de Gobernación (y futuro presidente), Miguel Alemán: éste encabezó las negociaciones para desmontar políticamente al empresariado encabezado por el Grupo Monterrey, el núcleo patronal más fuerte dentro de las fuerzas antirrevolucionarias, que financiaban al Partido de Acción Nacional (creado en 1939) y a Almazán. En 1941 el presidente Ávila Camacho incorporó al Código Penal el delito de la “disolución social” promovida por agentes internos y externos, con el propósito de perseguir a agentes nazi-fascistas.

En el caso cubano, según ha reconstruido la historiadora Katia Figueredo Cabrera, el desarrollo inicial de la Falange en la isla (1936) fue inseparable del peso de la colonia española allí. Sin embargo, la creación de organizaciones como la Legión Nacional Revolucionaria Sindicalista, la Legión Estudiantil de Cuba y la Asociación Partido Nazi Cubano (1938) no puede explicarse usando sólo ese argumento. Su peso político no fue significativo, y en todo caso, estos grupos no sobrevivieron a las presiones estadounidenses durante la guerra, también por la sospecha de actuar como cobertura de las actividades de espionaje y propaganda de los alemanes. El presidente cubano Fulgencio Batista, quien en los años treinta se destacó en la represión a las fuerzas sindicales y de izquierda, en 1941 ilegalizó a la Falange e incorporó en su gabinete en 1943 a tres

ministros comunistas, como parte de su política de unión nacional para enfrentar al Eje.

Como deja ver el episodio con el que se inicia este capítulo, las derechas radicales argentinas consiguieron visibilidad pública en los años treinta y cuarenta. Entonces se multiplicaron los grupos políticos, los periódicos, los libros y los programas de radio identificados con esta perspectiva. Su punto más alto probablemente fue durante los años de la guerra, cuando tuvieron mayor capacidad de movilización política, más activistas y más lectores. A diferencia de Brasil, en Argentina no hubo un movimiento unificado o un solo liderazgo. La regla fue más bien la dispersión en pequeños grupos nucleados en torno a una figura y una publicación, que tendían a rivalizar más que a converger. La desunión y el faccionalismo resultaban de su fuerte ideologización, pero más de la imposibilidad de consensuar un jefe aceptable para todos. Es interesante notar, de cualquier manera, que esa fragmentación organizativa no implicó grandes diferencias ideológicas entre ellos, como bien ha marcado Sandra McGee Deutsch.

Las derechas radicales argentinas de este quindenio tuvieron dos periodos bien diferenciados en lo que se refiere a sus prácticas ideológicas y ámbitos de reclutamiento. El primer momento, entre 1928 y 1933, fue marcado por grupos pequeños de clase media y alta urbana, en general liderados por varones con formación intelectual e involucrados en la actividad periodística. El periódico *La Nueva República*, la Liga Republicana y la Legión Cívica Argentina le dieron fundamentos ideológicos a la dictadura de Uriburu y procuraron sostener, tras la muerte de éste, su legado. Sus rasgos ideológicos se centraban en el repudio a la organización y la movilización de las izquierdas y la democracia —especialmente porque conducían al triunfo de la depuesta Unión Cívica Radical—. Sus rasgos reaccionarios se dejaban ver en el desdén por los sectores populares y un reclutamiento restringido a las capas superiores de la sociedad

argentina. De allí que Fernando Devoto haya señalado que estos grupos eran más restauradores que propiamente fascistas, puesto que en sus discursos había más reverberación del conservadurismo y el antiizquierdismo de fines del siglo XIX que una auténtica innovación ideológica.

Luego de 1933 es posible observar la constitución de un movimiento que escapa a ese original elitismo y convoca a la acción, la captación y la movilización por fuera del patriciado local. Decepcionados por la restauración de la dominación política conservadora a partir de 1932, estos grupos radicalizaron su crítica a la democracia y al liberalismo. En organizaciones como la Alianza de la Juventud Nacionalista (1937) o el diario *Crisol*, se verifica una suerte de plebeyización del reclutamiento, pero también de los temas de interés. Se dejaron de lado las cuestiones más olímpicas —como la decadencia del ser nacional— y se plantearon temas propios de la “cuestión social” y del bienestar de los trabajadores. Esa reorientación fue identificada por diversos historiadores como un giro hacia el “nacionalismo orgánico”, el fascismo e incluso un particular antiimperialismo de derecha que colocaba en el centro de la agenda política la cuestión de la soberanía nacional y la “justicia social”. Vale la pena señalar, también, que esta apertura a la “cuestión social” se realizó sin abandonar nociones de anticomunismo, antiliberalismo y antisemitismo que venían de años anteriores.

También de ese periodo data la particular interpretación del pasado argentino que hicieron estos grupos de derecha radical. Ese revisionismo impugnaba el relato fundacional y oficial sobre el país, de cuño liberal, y postulaba una contrahistoria que colocaba al imperialismo anglosajón y a la oligarquía “cipaya” a él asociada como responsables de los problemas nacionales. Así, en 1935 el diario *Crisol* argumentaba que “los argentinos están podridos de liberalismos, pacifismos y otros venenos internacionales; son instrumentos de las logias y de los capitalismos”, por lo que

ya estamos definitivamente atados. Sólo basta que nuestros gobernantes continúen enredándonos más y más con sus concesiones y su suicida pacifismo, que nos sigan entregando en beneficio de nuestros vecinos, especialmente de Chile, para que Inglaterra pueda dominarnos por completo y chuparnos hasta la última gota.

De acuerdo con la interpretación revisionista, la nación estaba degradada como resultado de la adopción de un régimen político ajeno a las tradiciones nacionales y de una economía que sólo satisfacía a los intereses concentrados y dominantes (que para ellos lo mismo quería decir ingleses que judíos). El revisionismo procuró invertir las valoraciones de las figuras del pasado argentino: mientras que Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires a mediados del siglo XIX, había sido objeto de repudio por la enseñanza oficial, los postulados revisionistas lo ensalzaban como un ejemplo de gobernante católico, nacionalista, consagrado por la población subalterna y opuesto a los intereses anglosajones.

El revisionismo argentino fue de la mano del producido en Uruguay por figuras del Partido Nacional, como Luis Alberto de Herrera y Felipe Ferreiro. Ambos postulaban la pertenencia de Uruguay al pasado hispanoamericano más que a un sino liberal o contractualista. Aquí los vasos comunicantes entre propuesta política y planteo histórico son muy claros, según ha mostrado la historiadora Laura Reali. Así, la visión organicista e historicista que Herrera tenía sobre la nación se articulaba con su rechazo a la intervención estadounidense en la política de los países sudamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, en Uruguay el fascismo apenas hizo pie en los años treinta, principalmente a través de la figura del periodista y ensayista Adolfo Agorio, quien creó la Acción Revisionista del Uruguay en 1937. Antes de la formación del partido, Agorio había dirigido la revista *Corporaciones* (1935-

1938), de fluidos contactos con el integralismo brasileño y difusora de frecuentes diatribas antisemitas. Las campañas antijudías en la prensa nacional, en periódicos parroquiales y escolares, en discursos parlamentarios y en programas de radio se desarrollaron durante la dictadura de Terra. Ellas fueron acompañadas por el diario herrerista *Tribuna Popular* y por publicaciones filonazis como *Patria*, *Fragua*, *El Orden* y *Audacia*, según ha reconstruido Clara Aldrichi. El despliegue de esas campañas —en general muy poco exitosas— estaba al servicio de la lucha contra la fracción batllista del Partido Colorado, mucho más liberal en aspectos sociales y morales, más estatista en aspectos económicos y promotora de lecturas más cosmopolitas y constructivistas de la identidad nacional.

LAS DERECHAS LIBERALES, ENTRE EL ANTIFASCISMO Y EL ANTICOMUNISMO

La suerte política de las derechas liberal-conservadoras en estos años estuvo muy marcada por los impactos sociales de la caída del comercio internacional tras la crisis de 1929: el descontento social y la potencial expansión del comunismo pasaron a ocupar un lugar relevante en las preocupaciones políticas de esas fuerzas. Ello se debió a la poderosa y explícita conexión entre los voceros liberales y conservadores y los intereses de las élites (sobre todo, latifundistas y mineros), que hasta entonces habían detentado de manera casi exclusiva los principales resortes económicos. En los primeros años treinta los dirigentes de los partidos conservadores retuvieron la esperanza en la restauración de la vida económica de la década anterior, y en particular del lugar destacado que en ella tenían los agroexportadores. En países como Bolivia, Cuba o Venezuela la inestabilidad política y la sucesión de golpes de Estado impidieron que se constituyera o reconstituyera una dominación política sostenida de las fuerzas conservadoras.

Las expectativas de restauración de un orden social en el que las clases dominantes tenían asegurado el control de la economía y del poder político encontraron varias dificultades objetivas a nivel nacional e internacional para concretarse, y colisionaron contra los planes alternativos que tenían otros actores de la política y la economía. La interrupción del orden político por parte de altos oficiales conspiró contra el establecimiento de lazos permanentes entre las élites económicas y los partidos políticos liberal-conservadores. Además, el camino que deseaban recorrer muchos dirigentes políticos conservadores era estrecho, y quizás imposible, porque estaba plagado de contradicciones. Querían recuperar o retener el poder político, pero a la vez recelaban de la democracia electoral que había producido algunas de sus bestias negras, como Arturo Alessandri, Hipólito Yrigoyen o José Eliécer Gaitán. Su fe en la vida republicana era de poca profundidad, pero no tenían otra para remplazarla. Pretendían restaurar la disciplina social y reducir la conflictividad sindical, pero simultáneamente tenían reticencias respecto de la necesidad o las ventajas de las salidas *manu militari* o de la imposición de un modelo inspirado en el fascismo. Valoraban la potencial contribución de la Iglesia católica para producir apaciguamiento social, pero no se sentían tentados a seguir las perspectivas crecientemente integristas que difundían el Vaticano y los episcopados nacionales. Figuras políticas del conservadurismo argentino como Manuel Fresco o Marcelo Sánchez Sorondo oscilaban todo el tiempo entre ser voceras de la restauración republicana o encarnar un nuevo orden político con alguna vaporosa identificación con el fascismo. Probablemente Vargas vivió y estimuló ese movimiento pendular durante los años del Estado Novo, y quizá Terra en Uruguay y Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria en Perú también.

Los conservadores mexicanos y colombianos (en la oposición) y los argentinos (en el gobierno), así como Vargas en Brasil —hasta 1938— establecieron conexiones recurrentes con grupos y figuras de las derechas radicales en este periodo. Con ellos contribuyeron

a dotar a las ideas de ese origen de legitimidad y espacios de difusión. De las derechas radicales esperaban tanto inspiración y novedades ideológicas como ayudas más concretas en el control de las calles y el enfrentamiento con fuerzas de izquierda y sindicales. En algunos casos, mientras que las derechas radicales ponían las ideas innovadoras y a hombres armados en la vía pública, las derechas conservadoras aportaban un mejor conocimiento de la vida política, conexiones con empresarios, militares e Iglesia, y cierta respetabilidad en la esfera pública. En aquellos países en los cuales la derecha tradicional fue capaz de atravesar los años treinta sin echar mano a las Fuerzas Armadas —o, en todo caso, de hacerlo sólo ocasionalmente—, como Chile, los márgenes para el accionar de la extrema derecha fueron mucho menores. Tanto al Partido Conservador, plenamente articulado a la Iglesia católica y al social-cristianismo, como al Partido Liberal les bastaba con el ejercicio de sus mecanismos tradicionales para retener el poder (cohecho, lealtad electoral de los trabajadores y arrendatarios rurales, redes clientelares urbanas, voto católico, cooptación de autoridades, etcétera). Sofía Correa ha destacado que la capacidad de adaptación y la autoconfianza de esa derecha tradicional le permitieron prescindir de alianzas permanentes con grupos más radicalizados y conservar altas cuotas de poder hasta la década de 1960.

Varias figuras y organizaciones del liberalismo sudamericano se involucraron en los años treinta y cuarenta en organizaciones antifascistas que se identificaban con la democracia multipartidaria. En ese proceso se encontraron con los socialistas y, desde 1941, también con los comunistas. Participaron de organizaciones antifascistas o en favor de los Aliados, como la Sociedade Amigos da América (1943-1945), la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (1935-1943) y Acción Argentina (1940-1943). Ese imaginario antifascista fue alentado por los partidos liberal-conservadores cuando estuvieron en el gobierno en Chile (1932-1938), en Uruguay (1938-1946) y en Colombia (1930-1946). Pero también los

partidos liberales se acercaron al antifascismo cuando estuvieron en la oposición, como los líderes brasileños contrarios al Estado Novo y los argentinos que repudiaban a la dictadura instaurada en 1943. Argumentaban que la democracia era el régimen históricamente construido, aceptado y pertinente para los países americanos. Por lo tanto, sus enemigos (como el general Carlos Ibáñez del Campo en Chile, el coronel Juan Perón en Argentina y Laureano Gómez en Colombia) eran tildados de fascistas, puesto que traían un proyecto ajeno al alma liberal del continente: de allí que, en su lectura, el fascismo significara centralmente un proyecto contrario a la democracia, pues se asimilaba a personalismo, ultranacionalismo o refuerzo del caudillismo. Como veremos en el siguiente capítulo, luego de la Segunda Guerra Mundial esa noción de “fascismo” quedó cada vez más superpuesta a la de “totalitarismo”, al punto de convertirse en un arma arrojada de tanta elasticidad que lo mismo incluía al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) boliviano, a antiguos adoradores del *Duce* y a comunistas.

En los años treinta se consolidó en México un ala conservadora dentro de la gran familia revolucionaria, como reacción frente al sexenio de Lázaro Cárdenas. Esa facción oficialista, que reconocía como referente al expresidente Plutarco Calles, terminó absorbiendo o atrayendo a muchas fuerzas derechistas, empresarios e incluso católicos moderados, que hasta allí habían permanecido fuera de las camarillas dominantes. Algunos de esos actores tuvieron el peso político regional como para bloquear iniciativas del presidente Cárdenas, como ocurrió con Román Yocupicio en Sonora y con los hermanos Ávila Camacho en Puebla desde 1937, de furibundo anticomunismo. Esa facción oficialista era partidaria de clausurar la etapa de reformas y estabilizar un *statu quo* que incluía una alianza estratégica con los Estados Unidos, asegurar el dominio político del partido de gobierno —Partido de la Revolución Mexicana (PRM), luego Partido Revolucionario Institucional (PRI)— y dar seguridad y tranquilidad al empresariado local y extranjero. Y si bien

el contexto de la Segunda Guerra Mundial y las preocupaciones de Washington sobre su seguridad contribuyeron a afianzar este proceso de ajuste de cuentas entre las familias revolucionarias, fue sólo después de 1946 que se solidificó el giro conservador de los gobiernos priistas.

CONCLUSIONES

Muchas de las certidumbres que habían tenido los políticos derechistas zozobraron a inicios de los años treinta como efecto de los descalabros económicos que introdujo la crisis. Los problemas económicos como el desempleo y la recesión prometían traer —y a veces trajeron— mucha conflictividad social. Algunos políticos e intelectuales diagnosticaron que, de hecho, la crisis había conducido al fin del horizonte liberal y habilitaba, por tanto, el desarrollo y el diseño de alguna nueva institucionalidad política y constitucional más autoritaria, corporativa y tecnocrática. Y si bien estas propuestas, a las que sus adversarios rápida y sistemáticamente criticaron por ser “fascistas”, no tuvieron gran capacidad para interpelar a las élites ni a los sectores subalternos, no debe perderse de vista que su mera enunciación por actores legítimos y centrales de las alianzas derechistas conservadoras advierte sobre la fractura del consenso liberal.

En síntesis, lo que resulta claro es que, de toda la variedad de propuestas que las derechas radicales hacían, sólo el anticomunismo pareció concitar el apoyo entusiasta y unánime de las fuerzas conservadoras. Ello fue así tanto en los países que vivieron intentos de sublevación comunista en los años treinta (Brasil, Chile) como en aquéllos donde no se verificó este tipo de episodios. En cambio, las propuestas de una reforma que impusiera una constitución corporativa, la militarización del Estado, la imposición del integrista católico, una mayor presencia de Estado en la

economía, la recristianización del sistema educativo y una política inmigratoria antijudía era un tema que generaba más división que consenso entre las figuras del liberal-conservadurismo.

Como ha mostrado la historiadora Sandra McGee Deutsch, allí donde las fuerzas conservadoras eran débiles frente a los partidos reformistas y la actividad sindical, tenían menos autoconfianza en sus capacidades políticas y hegemónicas. Ello les daba mayor espacio a las derechas radicales para movilizarse, reclutar y militar. La voluntad de las derechas radicales de reponer las formas tradicionales de autoridad y de imponer disciplina social entroncó bien con las pretensiones del conservadurismo de aquietar las aguas sociales en el marco de los conflictos sociales y gremiales de los años treinta. Se trataba de un programa que incitaba a la acción, a tomar las calles, a producir y difundir prensa, a organizar mítines, a portar uniformes y a protagonizar episodios violentos, pero donde la derecha liberal tenía confianza en su propia capacidad —o controlaba a las Fuerzas Armadas—, podía prescindir de alianzas incluso efímeras con los grupos radicalizados, ligados —*de facto* o en términos identitarios— al fascismo y al antiparlamentarismo. El caso más patente es Chile, donde la fortaleza electoral de la derecha tradicional, la continuidad y legitimidad de los juegos electorales y la presencia de ideologías reformistas en las Fuerzas Armadas terminaron por quitarles oxígeno político y atractivo a los partidos “nacionalistas”, corporativistas o fascistas creados en esos años, como el Movimiento Nacional Socialista de Chile (MNSCH). También las débiles organizaciones fascistas y antisemitas uruguayas funcionaron como participantes marginales de la coalición detrás del dictador Terra.

Tiene cierta utilidad establecer una comparación entre algunas de las organizaciones de derecha radical presentadas en este capítulo, que ocuparon una posición emergente a lo largo de este periodo. Al hacerlo, se torna evidente que Brasil fue el único país en el que estos grupos alcanzaron porciones significativas de incidencia política y lograron movilizar a grandes contingentes de la población,

tanto de las élites como de sectores subalternos (si bien los llamamientos de la AIB a los trabajadores urbanos parecen haber sido menos atractivos que los ofrecidos por la izquierda, o desde 1943, por el varguismo). Al contrario, los grupos de derecha radical fueron más ruidosos que importantes en México, en Uruguay, en Cuba y en Chile (en su mejor elección, en 1937, el MNSCH alcanzó 4% de los votos). En Argentina, por lo menos hasta mediados de los años treinta los únicos que respondieron a la convocatoria fueron varones y mujeres de estratos sociales elevados. Al igual que en México, las élites intelectuales o políticas fascistizadas intentaron ampliar la convocatoria social sin obtener demasiado éxito.

Es posible encontrar también diferencias en las relaciones de las derechas radicales con las Fuerzas Armadas. En Argentina se detectan muchos lazos personales y afinidades ideológicas entre figuras de ese sector y oficiales en actividad. En Brasil, si bien no faltaron oficiales integralistas, lo cierto es que el grueso de los hombres de armas era más conservador que propiamente camisa verde: al igual que a sus colegas chilenos, poca gracia les hacía la existencia de milicias de partido uniformadas, predispuestas a la movilización callejera y al uso no controlado de la violencia armada. Puestas a elegir, Vargas parecía ofrecerles a las Fuerzas Armadas más garantías que los arrebatos de los ideologizados líderes del integralismo. Y como ocurrió en 1930, 1937 y 1945 en Brasil, el elemento políticamente relevante era a quién respondían los fusiles, no quién tenía más votos.

La Iglesia católica pareció mostrar decisiones asimilables a las de las Fuerzas Armadas. Si bien las derechas radicales se decían defensoras del orden católico y, llegado el caso, sustentaban sus posturas citando las encíclicas, no siempre su amor fue correspondido por la Iglesia, que en algunos países prefirió mantener el diálogo directo con las autoridades nacionales (Getúlio Vargas en Brasil, Agustín P. Justo en Argentina, Arturo Alessandri en Chile) o no innovar respecto de su tradicional apoyo a las fuerzas políticas moderadas (el conservadurismo en Colombia y Chile, el herrerismo uruguayo,

el Partido Acción Nacional en México). Esa decisión le permitió reintegrarse al bloque dominante allí donde los “furores” liberales del siglo XIX la habían apartado sin necesidad de vincularse con políticos con los que *a priori* tenía más afinidad ideológica, pero que parecían tomarse con desmesura la consigna “Roma o Moscú” y que se servían de los textos sagrados para justificar su antisemitismo y alimentar sus anhelos políticos personales. Conforme avanzaba la guerra y se comprobaba la inevitable derrota del Eje, la apuesta de la Iglesia por distanciarse de las derechas radicales se hizo más evidente: pero las cercanías y ambigüedades en los primeros años treinta serían recordadas por sus adversarios por décadas.

CAPÍTULO 4
DESARROLLO, DEMOCRACIA Y ANTICOMUNISMO
(1946-1964)

Un militante del *trabalhismo* brasileño le escribió en enero de 1947 una carta al antiguo ministro de Trabajo del Estado Novo, el varguista Alexandre Marcondes Filho, para advertirle que, en Pernambuco, su estado natal, “Todos los partidos democráticos están atónitos con la organización comunista y apoyo que atacemos ya al comunismo antes de que él nos devore dentro de Brasil”. Esa carta formó parte de los numerosos reclamos y solicitudes de ilegalización del Partido Comunista Brasileño (PCB) que se hicieron públicos en 1946 y 1947. Pero es interesante notar que otros discursos, producidos por miembros de partidos más claramente de derecha, fueron en sentidos alternativos. Muchos activistas de la União Democrática Nacional (UDN) les enviaron telegramas a sus diputados para que rechazasen la ilegalización del PCB, porque ello colocaría a la democracia y a las libertades públicas en riesgo. De hecho, uno de los fundadores de la UDN dijo que el comunismo y el varguismo eran dos totalitarismos (uno de izquierda y otro de derecha) que debían ser combatidos con similar intensidad por los demócratas. “No es posible que la libertad que reconquistamos, después de una larga guerra librada en su defensa, sea nuevamente sacrificada por los herederos de la dictadura, en su lucha contra los amantes de las dictaduras de otro género.” Esas discusiones entre simpatizantes y dirigentes de derecha en Brasil ilustran algunos procesos que retrata este capítulo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las derechas liberales y conservadoras abrieron las puertas de América Latina para un tipo de democracia con dos rasgos recurrentes. El primero de ellos era su supuesta

convergencia con el desarrollo, y el segundo, la exclusión de los extremos ideológicos, a los que dieron en unificar con el término *totalitarismo*: en estos años, la promesa del desarrollo parece haber tenido tanto peso como la voluntad de desplazar de la política a las izquierdas y a los nacionalismos. Como en un espejo, muchos católicos pasaron a entender después de 1945 su identidad religiosa como compatible y convergente con la democracia liberal más que como su antípoda. El precio que pagaron las fuerzas católicas dominantes por esa aceptación de la democracia (limitada) fue la toma de distancia ideológica y organizativa respecto de las derechas radicales.

Esa democracia de la segunda posguerra se definía, para liberales y conservadores, por la ruptura con los “totalitarios” comunistas, pero también con los “totalitarios” fascistas, con quienes habían tenido relaciones de diversa naturaleza en el periodo anterior. El quiebre, a veces bastante rápido, de los frentes multipartidarios creados durante la guerra les permitió a los hombres de las derechas liberal-conservadoras estigmatizar a sus antiguos socios izquierdistas al asociarlos con una identidad unánimemente repudiada luego de 1945 como lo eran los fascismos. De hecho, el término *totalitario* tuvo una utilización tan elástica que incluso los liberales de países del Cono Sur lo usaron para caracterizar al régimen peronista (1946-1955). Como señalaron Sergio Morresi y Martín Vicente, una nueva camada de intelectuales liberales identificó en esos años “una democracia deseable (liberal, republicana, limitada) y otra execrable (populista, desmesurada y potencialmente totalitaria)” que debía ser, como mínimo, vigilada.

El anticomunismo devino una marca de la Guerra Fría latinoamericana. Vale la pena retener la distinción que ha propuesto Marcelo Casals entre el “anticomunismo de Estado” desplegado con medidas legales y por instituciones oficiales, como las Fuerzas Armadas, y el “anticomunismo civil”, que llevaban adelante organizaciones políticas y sociales sin carácter oficial. En los 20

años que abarca este capítulo el anticomunismo fue política de Estado (legislación represiva, estados de excepción, tribunales para actividades “antinacionales”, ilegalización del Partido Comunista, centros de detención), pero también fue promovido por actores civiles, como la Acción Chilena Anticomunista (1946-1949). El anticomunismo funcionó a nivel nacional, pero también tomó escala internacional a través de redes como la Confederación Interamericana de Defensa del Continente (1954-1958) y de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (creada en 1948), de cuyo seno fue expulsada Cuba en 1962.

Este capítulo no pretende ignorar el peso estadounidense en la región durante la Guerra Fría, sino dirigir la atención del lector hacia los discursos y las prácticas de las derechas latinoamericanas, en particular, los límites que éstas pusieron en la definición, los sentidos y la institucionalidad de la democracia. En los años cincuenta y los primeros sesenta las derechas liberales dieron una pelea ideológica y electoral para imponer sus ideas y opciones económicas. Lanzaron o compartieron iniciativas y propuestas económicas (industrializadora, desarrollista, “populista”, estabilizadora, “comunitarista”, etcétera) y culturales (modernizadora y promotora del *American way of life*, etcétera) a fin de disputar espacios y argumentos con las izquierdas y otros segmentos del arco político y social. Así se acercaron a la Iglesia católica y a organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que confiaban en que la democracia podría darle estabilidad a la vida política de la región sólo si se combinaba con la puesta en marcha de planes para alcanzar el desarrollo.

También la Alianza para el Progreso (1961-1970), lanzada por los Estados Unidos, incrementó las expectativas de que podrían realizarse cambios estructurales dentro del marco democrático sin necesidad de abrazar al marxismo, como había ocurrido en Cuba. Se trató de una apuesta por incrementar o sostener una cierta

hegemonía sobre el resto de la sociedad. En el caso de América Central, el miedo a la expansión o la réplica de la revolución guatemalteca estimuló las intervenciones en favor del desarrollo: firma del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica de Centroamérica (1958), Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1960) y constitución del Mercado Común Centro Americano (1960) y del Sistema de Integración Económica Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica (1961). El dinero de los Estados Unidos fluyó hacia América Central para modernizar la infraestructura de transporte de personas y mercaderías y de comunicaciones (e incluso para financiar una pequeña reforma agraria en El Salvador). Pero estas iniciativas no condujeron a la obtención de soluciones satisfactorias a problemas como la concentración de la tierra o la baja esperanza de vida de la población.

Numerosas voces académicas, políticas, católicas, campesinas y de organismos internacionales reclamaban una reforma agraria que permitiera desconcentrar la propiedad de la tierra; aumentar la producción de alimentos y de otros bienes industrializables y exportables, e introducir a los trabajadores rurales en la economía de mercado (actores de izquierda daban otras razones, naturalmente, para llevar adelante la reforma agraria). La moderación de los cambios (Venezuela, Colombia, Chile, etcétera) terminó por convertirse en un búmeran que amenazó a los latifundistas con la aplicación de una reforma agraria más ambiciosa como la cubana (1959-1963) o la peruana (1969-1975), o con procesos un poco más descontrolados de ocupación de tierras por parte del campesinado, a veces apoyado por organizaciones armadas (Perú, Colombia o Chile luego de 1970).

Los resultados que obtuvieron esas iniciativas económicas y culturales de las derechas fueron deficientes por varias razones: la resistencia desde abajo a ellas, la obstrucción de los poderes fácticos —especialmente la gran propiedad rural—, la ansiedad

anticomunista de Washington y el impacto de la Revolución Cubana. A mediados de los años sesenta esa inicial dimensión positiva se tornó mucho más débil y condujo a aceptar o promover la instauración de regímenes dictatoriales o la restricción de las libertades públicas en nombre de la seguridad. La ilusión de posguerra de combinar desarrollo y democracia se diluyó, y la agenda anticomunista de las Fuerzas Armadas y de las asociaciones empresariales terminó monopolizando las iniciativas políticas.

Quizás el derrotero de Guatemala sea el que funciona como síntesis de lo ocurrido en distintas naciones en las dos décadas que interesan en este capítulo. En 1944 una revolución desalojó del poder al general Jorge Ubico, que había dirigido el país con mano dura de manera ininterrumpida desde 1931. La revolución condujo una serie de reformas de envergadura que afectaron intereses de los latifundistas y, en particular, de la todopoderosa United Fruit Company, la compañía que dominaba la exportación de bananas. El liderazgo y el control de la revolución quedó en manos de militares nacionalistas, con preocupaciones sociales, pero no era de ninguna manera un gobierno orientado por los comunistas locales. La gravedad de los problemas sociales es difícil de exagerar: Antonio Acosta mostró que en los años cincuenta 2% de los propietarios controlaba 70% de la tierra cultivable, y que 57% del campesinado estaba desposeído de la tierra. En 1954 un golpe de Estado encabezado por el general Castillo Armas, con el beneplácito de Washington, dio por terminada la revolución guatemalteca y abrió paso a la restauración de los poderes tradicionales, así como a la represión del campesinado y de los políticos progresistas, recurrentemente acusados de ser hombres de Moscú. Las reformas sólo serían aceptadas si eran conducidas por las derechas, a su ritmo y según sus necesidades. En contraste, el anticomunismo terminaba por absorber las preocupaciones de las élites y de los partidos liberales.

LA CALIENTE GUERRA FRÍA Y EL DESARROLLO ANHELADO

En las décadas de 1930 y 1940 la industrialización latinoamericana dio grandes saltos como resultado del estrangulamiento del comercio internacional y de la caída de los proveedores metropolitanos de manufacturas. Tras el conflicto bélico, la actividad manufacturera fue alentada de manera sistemática y explícita por gobiernos de la región: políticas crediticia, arancelaria, laboral, agrícola e impositiva se usaron para estimular el crecimiento industrial. En algunos casos la política favorecía las inversiones de actores locales —como el gobierno peronista a fines de los años cuarenta— y en otros, sobre todo tras el agotamiento de las fases iniciales de la industrialización, les daba la bienvenida a las inversiones extranjeras, como en el Brasil desarrollista del presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960), el México del “desarrollo estabilizador” de los años cincuenta y sesenta y la presidencia de Jorge Alessandri en Chile (1958-1964). La promesa del “desarrollo”, entendido éste de una manera algo fetichista, alentaba una serie de transformaciones de la economía, la cultura, la educación y el agro (más sobre su tecnificación y el uso eficiente de las tierras que sobre el régimen de propiedad). La discusión sobre la necesidad de llevar adelante alguna reforma en la propiedad rural —a veces alentada por economistas e industriales “desarrollistas”— incentivó a gobiernos conservadores a llevar adelante programas en ese sentido antes de que la demanda escalara. Convencidos tanto los dirigentes políticos como las nuevas ciencias sociales de que el desarrollo no arribaría de manera espontánea, quisieron llegar a él a través de la planificación y de la imitación de patrones tecnológicos y culturales de los países considerados avanzados.

Los problemas económicos de las décadas de 1950 y 1960 producían recurrentes episodios de insatisfacción social y política. La búsqueda de mecanismos de estabilización condujo a recurrentes convocatorias al Fondo Monetario Internacional (FMI, creado en

1946) para obtener financiación y asistencia técnica a fin de aplicar planes económicos. Los vínculos con el FMI fueron más oscilantes que permanentes: muchas veces las negociaciones o la aplicación de sus recomendaciones de política económica eran interrumpidas por arrebatos de autonomía de presidentes, deseosos de mostrarse ante sus votantes como celosos custodios de la soberanía nacional o en todo caso, convencidos de que podían prescindir de los préstamos internacionales. Naturalmente, los márgenes de maniobra frente al FMI eran reducidos para los países pequeños, que tenían mayor vulnerabilidad ante las sacudidas y la financiación externas.

La industrialización trajo consigo un crecimiento del número de obreros (metalúrgicos, petroleros, textiles, de autopartes, de alimentos, etcétera), así como del poder de sus sindicatos. En países como México, Brasil y la Argentina peronista las autoridades consiguieron en general mantener satisfechas o al menos controladas las demandas sindicales con una combinación de coerción, cooptación y beneficios. En Uruguay, en Chile y en la Cuba prerrevolucionaria hubo mucha mayor conflictividad entre trabajadores y Estado en los años cincuenta: los mineros bolivianos dan testimonio de ello también. No llama la atención que para contener las demandas diversos gobiernos recurrieran a expedientes represivos, como el encarcelamiento de dirigentes gremiales, la legislación sobre estados de excepción y la disolución por la fuerza de las manifestaciones o de las tomas de plantas fabriles y las minas. En general estas maniobras fueron acompañadas de la denuncia gubernamental de que las manos de Moscú, de Beijing o de La Habana se encontraban por detrás de la conflictividad sindical.

El crecimiento industrial fue en paralelo a una acelerada concentración demográfica: el contorno periurbano de Lima, São Paulo, la Ciudad de México y Buenos Aires se fue poblando de millones de personas llegadas detrás de la promesa de un empleo. La pobreza urbana fue una de las postales recurrentes de esos años, al igual que el agravamiento de los problemas asociados con la ocupación acelerada

y no planificada del espacio urbano, como hacinamiento; malas condiciones de construcción y mantenimiento de viviendas, y falta de servicios y transportes públicos. “Favelas”, “pueblos jóvenes”, “barriadas”, “villas miseria”, “callampas”, “palomares”, “ciudades perdidas”, “población” y, finalmente, “cantegriles”, son algunos de los nombres que tomó la ocupación informal del suelo urbano en América Latina desde entonces.

Esos cambios sociales y económicos se producían en un contexto de mayores libertades públicas que en el pasado. Si en los años treinta se constituyeron numerosas dictaduras, tras 1943 se abrieron camino las democracias. Más de la mitad de los países latinoamericanos vivió una transición a algún régimen democrático entre 1943 y 1963: Uruguay (1943), Guatemala (1944), el fin del Estado Novo en Brasil (1945), la elección de Perón en Argentina (1946) y las caídas de los generales Higinio Morínigo en Paraguay (1948) y Tiburcio Carías en Honduras (1949) apuntalan esta tendencia. Una revolución en Bolivia en 1952 colocó en el poder a Víctor Paz Estenssoro, impedido de asumir la primera magistratura obtenida en las urnas el año anterior. Colombia y Venezuela vivieron el final de las dictaduras de los generales Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), respectivamente. La entrada del Movimiento 26 de Julio en La Habana en enero de 1959 fue percibida inicialmente como un triunfo más de las fuerzas democratizadoras sobre las autoritarias. E incluso una breve esperanza democrática se abrió en la República Dominicana con la asunción de Juan Bosch en 1962 tras el asesinato del dictador Rafael Trujillo.

¿Cómo encaja este renacimiento (o nacimiento) de las democracias con los cambios geopolíticos más globales? La agenda de los Estados Unidos en la Europa de posguerra era inevitablemente multilateral, puesto que debía negociar con países que habían sido aliados durante la guerra, que tenían economías poderosas y a los que quería como actores de primer orden en la contención de la URSS. Pero la relación con los países latinoamericanos era muy diferente

por cuanto se trataba de naciones que no habían participado de la guerra sino tardía y marginalmente en el mejor de los casos, que tenían economías más débiles y que no podían refrenar exitosamente la presión económica y diplomática del vecino del norte. Washington contaba, en consecuencia, con mayor capacidad para imponer su agenda en América Latina que en África y en Asia, donde potencias regionales (Francia, Inglaterra, China) también desplegaban sus iniciativas y recursos diplomáticos, económicos y militares. Si bien ésa era la situación de América Central y el Caribe, ya a inicios del siglo xx resulta evidente que en América del Sur se abrió un tiempo geopolítico marcado por el predominio incontestado de la diplomacia e inversiones estadounidenses que dejó atrás la competencia con ingleses y alemanes de los años treinta.

En consecuencia, América Latina integraba un mundo que en teoría contaba con dos polos, aunque *de facto* sólo uno de ellos tenía presencia. Los soviéticos aceptaron en esos años que era un área de control indiscutido de Washington y no retaron ese acuerdo implícito, salvo con el envío de ingenieros, artistas y misiles a Cuba desde 1960. En efecto, sólo la Revolución Cubana fue un desafío geopolítico explícito a la hegemonía de los Estados Unidos: y si bien lo hizo en un nivel materialmente modesto, su impacto simbólico no debe ser menospreciado. Un miedo parecido generó la revolución guatemalteca de 1944, pero Cuba parecía más peligrosa por sus conexiones explícitas con Moscú, por afectar los intereses de los propietarios de centrales azucareras, industrias, refinerías y servicios públicos, y, sobre todo, porque podía y deseaba actuar como un ejemplo replicable para otros actores insatisfechos con el capitalismo realmente existente.

Ya desde antes del ingreso de Castro y sus hombres a La Habana, Washington tenía una preocupación obsesiva por la posible expansión del comunismo en la región. Con presión diplomática, económica y militar, la Casa Blanca quiso evitar el acceso al poder —o la permanencia en él— de fuerzas reformistas a las que

consideraba cercanas al comunismo. Para ello podía amenazar con el palo —como el apoyo al golpe en Guatemala en 1954 o la invasión a República Dominicana en 1965— u ofrecer zanahorias a los gobiernos y las Fuerzas Armadas. Los Estados Unidos echaron mano de distintos mecanismos y programas, como la promoción y el financiamiento de reformas para evitar la pobreza extrema y la radicalización política; las ayudas económicas, así como el uso de propaganda, del cine y del *soft power* para hacer visibles las ventajas del “mundo libre”. Pero también lo hizo con la Escuela de las Américas, asentada en Panamá desde 1946, mediante el envío de asistencia técnica y el adoctrinamiento ideológico a las policías y las fuerzas armadas para la vigilancia y la represión de lo que fue crecientemente identificado como un enemigo interno. Un entramado de organizaciones estatales —Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Departamento de Estado, Pentágono, United States Agency for International Development creada en 1961, etcétera— y no estatales —como las fundaciones Rockefeller, Farfield y Ford; la American Federation of Labor, y el Congreso para la Libertad de la Cultura— persiguió a los supuestos aliados de Moscú en América Latina. Llegado el caso, la democracia parecía ser a ojos del gobierno estadounidense un valor subalterno respecto de la obtención de garantías sobre la represión al comunismo: los acuerdos de Eisenhower con el generalísimo Franco en 1953 fueron en ese sentido, al igual que los silencios respecto de las dictaduras amigas de Guatemala (1954-1958 y 1963-1966), de François Duvalier en Haití (1961-1976), de Anastasio Somoza en Nicaragua (1937-1956) y de Alfredo Stroessner en Paraguay (desde 1954). Pero no sólo las dictaduras cultivaban buenos lazos con Washington. Durante la guerra de Corea (1950-1953), Colombia decidió acompañar a las tropas estadounidenses con el envío de tres fragatas y cerca de 5 000 hombres, lo que fue recompensado con creces *a posteriori*.

Resulta impreciso indicar que el anticomunismo tiene un origen exclusivamente estadounidense: lo que sí parece cierto es que la

presión de Washington —y las tentaciones que ofrecía— contribuyó a intensificar los anticomunismos locales. El anticomunismo de los Estados Unidos fue más influyente donde encontró actores locales con experiencia y credenciales acumulados en ese sentido, y que compartían la prioridad asignada a la agenda anticomunista por sobre la búsqueda del desarrollo o el respeto a las democracias. Como observó Rodrigo Patto, las disposiciones persecutorias contra el PCB se iniciaron antes de que el presidente estadounidense Truman explicitara que Washington y Moscú tenían divergencias insalvables: incluso la embajada de los Estados Unidos en Río de Janeiro consideró “precipitada” la decisión brasileña de romper relaciones con la URSS en 1947. En todo caso, la creciente presencia militar e ideológica de los Estados Unidos en América Latina también puede pensarse como parte de un proceso de mayor duración de erosión del tutelaje de las ideas europeas sobre las latinoamericanas desatado tras la Primera Guerra Mundial.

EL ANTICOMUNISMO CIVIL: *THINK GLOBAL, ACT LOCAL*

Al acercarse el final de la Segunda Guerra Mundial, millones de trabajadores aspiraban a que muchos de los sacrificios que les habían exigido el gobierno nacional y los partidos de izquierda para ayudar a la causa de los Aliados se trocaran por beneficios materiales y legislación laboral protectora. Por ello, la firma de la paz en Europa, la reducción de la represión policial, la relegitimación de los partidos comunistas y la instauración de las democracias en América Latina facilitaron el recrudecimiento de los conflictos sociales. En Chile en 1944 se produjeron 60 huelgas en las que intervinieron 26 000 obreros, pero al año siguiente unas 512 huelgas convocaron a 80 000 participantes. Ello estimuló los miedos anticomunistas de empresarios y partidos conservadores y liberales, que se coaligaron en una “unión sagrada” para repudiar la presencia (real o imagina-

da) de los comunistas, por entenderlos ajenos a las reglas democráticas y a las tradiciones cívicas nacionales.

En ese anticomunismo civil había combinación de oportunismo político y de miedo sincero, en proporciones difíciles de medir. Para algunos, el anticomunismo era un fin, mientras que para otros era un medio para resolver en su favor las disputas dentro de instituciones universitarias, gremiales o partidarias, y contra actores más poderosos que los comunistas locales, como los partidos populistas o los sindicatos urbanos. La agenda del anticomunismo civil lo mismo se dirigía a objetivos de política nacional —como la persecución a los sindicatos identificados con la izquierda— que de política internacional —ruptura de las relaciones diplomáticas con el bloque soviético, en particular, con Cuba—. El anticomunismo civil era una galaxia sumamente heterogénea que incluía asociaciones empresariales deseosas de reducir el dirigismo estatal y el poder de los gremios; integristas católicos empeñados en la regulación corporativa de las relaciones laborales; oficiales interesados en que el Estado avanzara sobre la producción de energía y acero, y figuras del sindicalismo peronista, charro o *trabalhista*. Las discusiones entre figuras de la derecha giraban en torno a qué era el comunismo, las razones de su expansión electoral y sindical, cuáles eran los lazos reales y posibles de los comunistas con las fuerzas populistas o nacionalistas y, finalmente, cuáles eran los mecanismos —legales o no— más eficientes para detenerlo. Para algunos dirigentes, la oposición al comunismo era absolutamente legítima, y debía producirse a través de metodologías no represivas, pero para otros la única forma de eliminar la “amenaza roja” era dejar al Partido Comunista fuera del orden legal.

Tal como en los años veinte y treinta, el catolicismo como fe y la Iglesia como institución siguieron siendo casi monolíticamente anticomunistas en América Latina en los cincuenta. Es cierto que a finales de esa década la experiencia de los “curas obreros” y luego la

potenciación de un catolicismo humanista y de la democracia cristiana abrieron discusiones sobre la legitimidad teológica del conservadurismo y de la resignación, pero sólo a fines de los años sesenta se desataron abiertos enfrentamientos dentro del mundo católico sobre las posibles vinculaciones entre catolicismo, marxismo y violencia revolucionaria.

En los frentes anticomunistas participaban hombres y mujeres de múltiples capas sociales. En ese sentido, si bien es evidente que los sectores sociales altos eran los más interesados en bloquear cambios radicales en la distribución de los bienes, no es menos cierto que la prédica anticomunista alcanzó y fue asumida por actores difícilmente clasificables como acomodados: el medio millón de personas que participó en marzo de 1964 en São Paulo de la *Marcha da Família com Deus pela Liberdade* no pertenecía íntegramente a las élites locales. A la diversidad social e ideológica del anticomunismo civil se le sumaba la organizativa: se trataba de una nebulosa heterogénea de figuras, instituciones, publicaciones y organizaciones partidarias, culturales y paraestatales. Había allí asociaciones internacionales, organismos nacionales como el Instituto Brasileiro de Ação Democrática, la jerarquía de la Iglesia católica, estudiantes universitarios, la gran prensa y partidos políticos. Pero además de estas organizaciones formales y de funcionamiento legal, también grupos de choque, provocadores a sueldo de la policía y exiliados de Europa del Este y Cuba se sumaban a la galaxia del anticomunismo civil.

En muchos países se crearon organizaciones explícitamente anticomunistas, algunas de ellas conectadas a redes internacionales. Entre ellas destaco dos. La primera es el Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC, 1950-1966), una red internacional de escritores, periodistas y universitarios secretamente financiada por la CIA y con sede central en París. El CLC se concentró en denunciar la opresión contra la cultura y la educación en el mundo soviético, a la vez que criticaba la asunción de posturas neutralistas en el

marco de la Guerra Fría. De acuerdo con las investigaciones de Jorge Nállim y de Juan Bozza, el CLC se expandió por América Latina desde 1953 por la acción de Julián Gorkin, un excomunista español. Gorkin reclutó a figuras de la cultura y la política del continente con cierta sensibilidad progresista, liberal, demócrata-cristiana e incluso socialista que poseían alguna respetabilidad. Entre ellas estaban el novelista Rómulo Gallegos (presidente de Venezuela 1947-1948), el profesor aprista Luis Alberto Sánchez, el socialista uruguayo Emilio Frugoni, el colombiano Eduardo Santos, dueño de *El Tiempo* y presidente de su país (1938-1942), el filósofo argentino Francisco Romero, el escritor brasileño Érico Verissimo y el célebre mexicano Alfonso Reyes.

La segunda organización es la Confederación Interamericana de Defensa del Continente (CIDC), creada a mediados de la década de 1950. La CIDC se reunió en cuatro congresos entre 1954 y 1958 en diversas ciudades latinoamericanas con el propósito de discutir los avances de la penetración soviética en el continente americano. Los animadores de la CIDC fueron el almirante brasileño Carlos Penna Botto y el católico integrista mexicano Jorge Prieto Laurens. Éste fue líder estudiantil e integró algunas de las familias revolucionarias, y en los años cuarenta se afilió de lleno en la línea anticomunista, por lo que fue acusado recurrentemente de ser un hombre de la embajada estadounidense. De hecho, como mostró Mario Santiago Jiménez, el congreso de 1954 fue financiado con fondos de la CIA que permitieron reunir a delegados de organizaciones anticomunistas de una veintena de países americanos y establecer conexiones con redes anticomunistas asiáticas. Esos congresos continentales no fueron los únicos espacios de sociabilidad del anticomunismo civil: en las décadas de 1950 y 1960 hubo múltiples congresos de estudiantes, de abogados y de exiliados de Europa del Este cuyo propósito central era debatir sobre la mejor manera de abrirle los ojos a la sociedad frente a la “amenaza roja”.

Se crearon numerosas organizaciones de “autodefensa moral” (como la argentina Liga de Madres de Familia, 1951) que reaccionaban contra lo que identificaban como un desborde de los valores tradicionales. Esos grupos parecían decididos a combatir los desafíos a las buenas maneras y a restaurar formas de deferencia y de sumisión que se entendían puestas en jaque por una modernización sin control moral y por la militancia o los gobernantes de izquierda. Esas organizaciones se involucraron en la vigilancia y la denuncia de la infiltración marxista en instituciones educativas: en Uruguay los maestros fueron objeto de persecución por la prensa de blancos y colorados y por organizaciones de padres y de alumnos, tales como el Movimiento Estudiantil Demócrata Antitotalitario (1950) y la Organización de Padres Demócratas (1962). El anticomunismo moral se advertía en las demandas de censura de películas y obras de teatro o directamente en ataques a redacciones de revistas, salas de cine o de teatros responsables de la difusión de prensa, obras y filmes considerados indecorosos, prosoviéticos y contrarios a la moral cristiana. El auge de ese anticomunismo moral incluso permitió un regreso a la escena pública de la Iglesia católica en un país de larga tradición laica como México, donde lideró campañas en la televisión y en los cines contra la decadencia de los valores sociales y el comunismo —y de paso, contra el protestantismo—: ese proceso encontró coincidencias con el gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970). Las organizaciones del anticomunismo moral contribuyeron a que una parte de las clases medias y altas urbanas acabara soldando sus preocupaciones políticas con la agenda del empresariado temeroso de las reformas o de expropiaciones.

EL ANTICOMUNISMO DE ESTADO: DEL ANTITOTALITARISMO A LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN

Por cerca de cuatro décadas el “anticomunismo de Estado” se convirtió en una fuerza política, cultural y legal muy poderosa,

encarnada en organismos de espionaje y persecución, legislación represiva y Fuerzas Armadas moldeadas por la doctrina de la seguridad nacional y la contrarrevolucionaria francesa. Durante ese tiempo, la constitución de dispositivos y de legislación explícitamente anticomunista no fue patrimonio de los regímenes *de facto*: también los constitucionales lo hicieron, y a veces de manera entusiasta. Vale la pena detenerse en algunos derroteros nacionales para ver las variaciones y a los actores involucrados.

En Brasil, tras el fin del Estado Novo, asumió en 1946 la presidencia el general Euríco Dutra, apoyado por los dos partidos varguistas. El dato de las elecciones presidenciales de 1945 que llamó la atención a políticos varguistas y antivarguistas y a oficiales del Ejército fue que el PCB había alcanzado 10% del caudal de votos, pese a contar con pocos recursos económicos y a que había permanecido clandestino e ilegalizado desde 1935; 15 diputados comunistas (entre ellos Jorge Amado) y el senador Luis Carlos Prestes constituyeron la bancada del PCB, que se amplió aun más en 1947. El poder del PCB, sin embargo, estaba lejos del volumen electoral de los partidos varguistas, ganadores de las elecciones presidenciales, y objetos predilectos de las invectivas de la opositora UDN.

El gobierno de Dutra se enfrentó con vehemencia a la expansión de la conflictividad sindical, que había sido contenida durante el Estado Novo. El Ministerio de Trabajo intervino varios sindicatos y cerró la Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, en la que los comunistas tenían un destacado papel. En 1947 la justicia federal suspendió el registro legal del PCB y 1948 cesó el mandato de todos los representantes comunistas en el Parlamento nacional y las cámaras municipales. El debate parlamentario sobre la “cassação dos deputados do PC” fue arduo, porque, como se mencionó en el inicio de este capítulo, había muchos diputados liberales que creían que había mejores maneras de enfrentar al comunismo.

Sólo en 1958 los comunistas brasileños consiguieron una vuelta a la legalidad que les permitió incluir a sus candidatos en las listas

de otros partidos de izquierda o *trabalhistas*: en 1964, junto con otros partidos, fue ilegalizado nuevamente. Ello se dio en el marco de la siguiente ola de anticomunismo, desatada a inicios de los años sesenta. El presidente *trabalhista* João Goulart fue acusado de facilitar la infiltración del comunismo en la administración pública, las empresas estatales y las Fuerzas Armadas. Su decisión de retomar las relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS confirmó esta sospecha. La campaña contra su gobierno enfatizó fuertemente primero su debilidad frente a los comunistas, y posteriormente su complicidad con ellos. Como mostró Rodrigo Patto, figuras de la UDN como Carlos Lacerda se convirtieron en furibundos anti-comunistas que sabían que el PCB era una fuerza minoritaria sin oportunidades de llevar adelante ninguna revolución: en todo caso, su mayor miedo era una potencial vinculación del partido con el presidente Goulart. La salida golpista se impuso a inicios de 1964, cuando se hicieron públicos desafíos a la cadena de mando dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Entre 1938 y 1946 el Partido Comunista Chileno (PCCH) participó en la alianza gobernante junto con el socialismo y el Partido Radical. En 1946 el candidato apoyado por el comunismo ganó las elecciones: el presidente Gabriel González Videla designó en su gabinete a tres ministros comunistas (por primera vez en la historia de Sudamérica), con la esperanza de que ello aminoraría la conflictividad sindical. Sin embargo, los ministros comunistas duraron sólo cinco meses en su puesto, debido a que González Videla tenía la convicción de que el PCCH era responsable de la agitación y las huelgas. El presidente también sabía que el partido estaba viviendo un crecimiento electoral, habiendo alcanzado 10% de los votos en 1946. Los latifundistas presionaron también al gobierno para que limitara el proceso de sindicalización de los trabajadores rurales que llevaba adelante el PCCH. Y a ello se le sumó que el Departamento de Estado manifestó que la ruptura con el comunismo era condición indispensable para seguir recibiendo la ayuda financiera.

Otros actores políticos hicieron llegar su repudio a la presencia del comunismo en el gabinete y exigieron que el presidente se librase de ellos: la Iglesia, el Partido Liberal, la Acción Chilena Anticomunista y la revista *Estanquero*, de línea nacionalista y filoperonista. A mediados de 1947 se leía en sus páginas que el comunismo era “una aberración psíquica que se estrella contra todos los medios de persuasión y que es independiente de la condición económica de las masas obreras”.

El gobierno envió al Parlamento el proyecto de una ley titulada Defensa Permanente de la Democracia, que canceló el registro partidario del PCCH, permitió el encarcelamiento de sus dirigentes y borró del padrón electoral a sus afiliados (o a quienes se sospechaba que lo eran). Tanto González Videla como luego el presidente Ibáñez del Campo (1952-1958) se sirvieron de esa legislación (a la que el PCCH llamó “la ley maldita”) para reprimir por 10 años conflictos sindicales en los que denunciaban la presencia del comunismo. La ley mantuvo a los dirigentes y militantes comunistas en la clandestinidad o en el exilio, como fue el caso del entonces senador Pablo Neruda, quien cruzó a caballo, de manera clandestina, la frontera con Argentina en el otoño de 1949. Fueron creados dispositivos de represión policial y parapolicial que incluían la erección de un campo de detención para a los presos políticos, en la ciudad costera de Pisagua.

Los impulsores de la ley consideraban que el comunismo era el mal mayor, por lo que detenerlo justificaba el sacrificio de la libertad. La disputa sobre la legalidad y la utilidad de prohibir al comunismo acabó por causar la división del Partido Conservador. Los que apoyaron al presidente González Videla terminaron formando el Partido Conservador Tradicionalista, apadrinado por Sergio Fernández Larraín, un asiduo concurrente a los congresos de la CIDC. Otros conservadores, en cambio, entendían que el precio exigido por la prohibición del comunismo era demasiado alto, tal como expresaron voces del liberalismo brasileño y paraguayo en 1947.

Recordemos que la derecha siguió siendo una poderosa fuerza electoral en Chile hasta inicios de los años sesenta. Impuso en 1958 a su candidato presidencial, Jorge Alessandri, promotor de un proyecto de modernización económica y de reducción del intervencionismo estatal. Su promoción de la libertad económica fue apoyada por el gobierno estadounidense y por el gran empresariado chileno, y generó el clima para la creación de varias escuelas de economía y negocios. Alessandri procuró llevar adelante una política independiente respecto de los partidos conservador y liberal, que habían acompañado su candidatura. La decisión de Alessandri de conducir una tímida reforma agraria —que expropió algunos latifundios improductivos— iba de la mano de la convicción que compartían los poderosos latifundistas de Valle Central de que el problema principal del agro chileno era la baja productividad y no la concentración de la propiedad.

Pero el plan de Alessandri fracasó por cuanto no consiguió resolver los problemas de la balanza externa, no satisfizo las demandas del campesinado, no llegaron las suficientes inversiones industriales desde el exterior y, en el medio, la Revolución Cubana incentivó los miedos anticomunistas. Su gobierno terminó carente de esa dimensión propositiva que había tenido al inicio —al igual que la presidencia de Arturo Frondizi en Argentina en 1962 y los gobiernos “blancos” de Uruguay desde 1959—, y en 1964 eran tales el desprestigio de las ideas promercado y el miedo a un triunfo de la izquierda que los partidos de derecha decidieron apoyar a ojos cerrados al demócrata-cristiano Eduardo Frei, promotor de reformas básicas. Esos apoyos no explican la proporción de 56% que Frei obtuvo en las elecciones, pero muestran que la experiencia demócrata-cristiana funcionó como un *leading case* que Washington quería cuidar y, potencialmente, exportar. Como mostró Sofía Correa, la derecha chilena había conseguido por décadas monitorear las políticas públicas a distancia, sin controlar el poder ejecutivo, gracias a sus parlamentarios y a la

presencia de sus hombres en áreas relevantes del Estado. Esa estrategia encontró un límite con el gobierno de Frei —quien reclutó sus planteles en la CEPAL y el campo de las renovadas ciencias sociales—, y definitivamente se clausuró con el ascenso al poder de la Unidad Popular en 1970.

Salvador Allende obtuvo la presidencia del país ese año por un margen muy estrecho. Su gobierno puso en marcha una serie de reformas radicales de la economía que lo distanciaron —como era previsible— respecto de los sectores empresariales, del gobierno estadounidense, del novedoso Partido Nacional, del poderoso diario *El Mercurio* de la familia Edwards, pero también de la democracia cristiana, y, desde 1972, de los grupos profesionales y de muchas mujeres de origen popular, como probaron Marcelo Casals y Margaret Power. Allende desplegó numerosas iniciativas de nacionalización (sin ir más lejos, la principal actividad económica, la minería del cobre en el norte). La derecha se resistió a la aceleración de la reforma agraria y grupos radicalizados apostaron por la acción violenta o se dieron a la tarea de seducir a las Fuerzas Armadas para que derrocaran al gobierno de la Unidad Popular.

Chile y Brasil no fueron los únicos países con anticomunismo de Estado. La coalición electoral detrás de la candidatura del coronel Perón en 1946 albergaba a muchos actores anticomunistas, tales como hombres de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia católica, convencidos de la necesidad de derrotar al “demoliberalismo” y a los “rojos”, por ser enemigos mortales de la nación argentina, a la que consideraban a todas luces católica e hispana. Pero también estaban allí presentes los sindicalistas del nuevo Partido Laborista, enfrentados a sus pares provenientes de la izquierda. El triunfante candidato no defraudó las expectativas de esas fuerzas, ya que su retórica intentó mantenerse equidistante respecto del “capitalismo” y del “comunismo”. Así lo expresaba el sacerdote Virgilio Filippo, confesor de Eva Perón, en su libro *El Plan Quinquenal de Perón y los comunistas*, de 1948:

nosotros no queremos ni hordas del capitalismo imperialista, ni hordas expansionistas comunistas. Por eso elucubramos los medios de redención que no son ni la explotación del hombre por el poder privado de los magnates [...] ni por la explotación inhumana de la dictadura del proletariado puesta en manos de un único partido, regido por un dictador.

Durante la década peronista, el gobierno espía a militantes y dirigentes del comunismo y de las asociaciones que supuestamente le servían de “pantalla”, y ordenó allanamientos, operativos y detenciones. En 1951 el mayor Jorge Osinde, formado en Inteligencia del Ejército, comenzó a dirigir la Coordinación Federal de la policía, encargada de la detención y la represión de “agentes extranjeros”, es decir, comunistas. Mariana Nazar mostró que entre 1948 y 1955 fue solicitada la expulsión de 116 extranjeros acusados de ser comunistas y que en 1954 fueron detenidos 368 trabajadores por la misma razón. Por ello, el Partido Comunista argentino se entusiasmó con el derrocamiento de Perón en 1955, dado que prometía traer la “restauración” de la democracia multipartidaria en el país. Sin embargo, desde 1956 se incrementaron la vigilancia y la persecución policial sobre el comunismo, por considerar que podía llegar (o había llegado) a acuerdos con el peronismo para facilitar las actividades de resistencia y sabotaje del movimiento obrero. A una dictadura cuya fuente de legitimidad era la lucha por la eliminación del “totalitarismo nazi-peronista” no le resultó difícil extender el accionar represivo contra otro “totalitarismo” como el soviético. La creación de la División de Investigaciones de Partidos Antidemocráticos de la Policía Federal y de la Secretaría de Informaciones del Estado dio forma a un aparato de vigilancia y represión de creciente complejidad, especialmente durante el gobierno de Frondizi (1958-1962). La implementación del Plan de Conmoción Interna del Estado (1960) parecía dirigida a perseguir tanto a peronistas como a comunistas. Finalmente, el Partido Comunista argentino fue ilegalizado en 1961

y se habilitó el juzgamiento en el fuero militar de sus miembros involucrados en actividades de conmoción pública o atentados contra la autoridad.

En Uruguay encontramos un anticomunismo de baja intensidad en comparación con el de los países vecinos. El Partido Comunista de Uruguay nunca fue convocado a conformar alianzas con fracciones del Partido Nacional ni del Colorado, pese a que existía la convicción de que el comunismo era un peligro más potencial que real y a que aquél aceptaba las reglas del juego democrático. Esa creencia sobre la debilidad del comunismo local comenzó a sufrir transformaciones vertiginosas tras la modificación del escenario político nacional en 1958. Ese año llegó al poder el Partido Nacional en alianza con el Movimiento Ruralista, y se incrementó la conflictividad social y política. El esfuerzo por dismantelar algunas de las características del Estado de compromiso neobatllista y por implementar políticas económicas promercado se tradujo en intensificación de los conflictos sociales con estudiantes y trabajadores en las calles y el creciente despliegue de maniobras represivas hasta llegar a la imposición de una dictadura en 1973. Los dirigentes más conservadores del Partido Colorado tejieron alianzas con sus otrora rivales del Partido Nacional para combatir al supuesto enemigo comunista.

El caso mexicano tiene algunas particularidades respecto del cuadro sudamericano. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno y el Partido Comunista apoyaron la causa de la unidad nacional como parte de los esfuerzos contra el Eje, el final de la contienda bélica deshizo esas posiciones comunes. Los comunistas que fueron compañeros por la izquierda del partido revolucionario en los años treinta pasaron a ser denunciados como perturbadores del “desarrollo estabilizador”, especialmente tras las huelgas de estudiantes (1956) y de electricistas, ferrocarrileros, maestros, tranviarios y telefonistas (1958), que desembocaron en detenciones de líderes comunistas en la prisión de Lecumberri. En los años cua-

renta y cincuenta el delito de “disolución social”, que había sido creado para perseguir el espionaje alemán, fue utilizado para criminalizar y perseguir las demandas de estudiantes, campesinos y obreros, acusados de estar al servicio de la penetración extranjera. Miguel Alemán, quien había construido el vínculo directo con el Departamento de Estado en materia de seguridad hemisférica, tras asumir como presidente en 1946 promovió el desembarco de asesores, tecnología y ayuda estadounidense para profesionalizar las tareas de inteligencia.

El giro conservador se hizo evidente en México: a la alianza gobernante ingresaron los sectores dialoguistas de la Iglesia y los inversores estadounidenses, y de ella salieron las voces más díscolas y autónomas del sindicalismo y del estudiantado. La vigilancia, y la represión de la conflictividad campesina, sindical y estudiantil en los años cincuenta y sesenta estuvieron a cargo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que tuvo asesoramiento del FBI (Federal Bureau of Investigation), según mostró Sergio Aguayo. El anticomunismo pasó a ser un elemento de peso de los gobiernos mexicanos de la inmediata posguerra, aun cuando no fuera públicamente así reconocido. Ese anticomunismo priista, alimentado por las redes de los expresidentes Plutarco Elías Calles (1924-1928), Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán (1946-1952), en realidad apuntaba a deshacerse del personal político, la identidad y la radicalidad del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). La marcha atrás con la reforma agraria y de los mecanismos de conciliación laboral, así como la remoción de la referencia a la lucha de clases en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apuntaron a clausurar la herencia cardenista, por considerarla causante de “disolución social”. Ello explica el renovado peso de la Unión Nacional de Padres de Familia, que había estado activa ya durante la Guerra Cristera, y que se concentró en la oposición a la aplicación del articulado de la Constitución de 1917 y a la llamada “educación socialista” del gobierno de Cárdenas.

En 1955 el dictador cubano Fulgencio Batista creó el Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC). El montaje del BRAC fue posible por la asistencia técnica de la CIA. A cargo del BRAC estuvo Mariano Faget, quien durante la Segunda Guerra Mundial había dirigido la Oficina de Investigación de Actividades Enemigas, que había vigilado el posible accionar de espías del Eje en el país. Previsiblemente, el BRAC se concentró no sólo en la captura y la tortura de militantes del Partido Comunista —que había ganado adeptos entre los trabajadores y profesionales de las grandes ciudades de la isla—, sino también en la persecución al opositor movimiento estudiantil y al Movimiento 26 de Julio (cuyos hombres desembarcaron en la isla en 1956). La restauración democrática peruana se agotó en 1948 cuando el general Manuel Odría dio un golpe que lo mantuvo en el poder por ocho años. Ése fue el puntapié de una extensa persecución contra los dirigentes y militantes comunistas, pero también contra el APRA (según evoca la novela *Conversación en la catedral*, que Mario Vargas Llosa publicara en 1969). En Venezuela la dictadura de Pérez Jiménez (1953-1957), con la excusa de perseguir a los comunistas y dar un guiño a Washington, dio cuenta de militantes de Acción Democrática, un partido definitivamente más importante y desafiante para el régimen.

EL LIBERALISMO SUDAMERICANO: DEL ANTIFASCISMO
A LA “AMENAZA PERONISTA”

Luego de la Segunda Guerra Mundial la democracia apareció para los liberales como un valor a ser defendido contra quienes promovían dictaduras, fueran fascistas o comunistas. En todo caso, algo distinto a democracia era considerado inviable, cuando no una rémora, un residuo histórico cuyo final era no sólo deseable sino también inevitable. El diario *La Prensa* de Buenos Aires expresó con optimismo, dos días después de la caída de Getúlio Vargas en 1945,

que estaba en marcha el proceso de eliminación de las dictaduras tras el final de la guerra:

El dictador del Brasil que acaba de ser depuesto, fue saludado alguna vez [...] como el primer caudillo americano de tipo moderno [...] se asemejaba a los dictadores europeos del siglo actual, tan admirados por los que parecen nacidos para mandar o ser mandados arbitrariamente, y que han tenido triste fin después de haber encarnado, arruinado y destruido a sus respectivas patrias.

Ese liberalismo, como se vio, se alejó del resto de las fuerzas antifascistas después de 1945, y fue girando sus enconos hacia otras figuras políticas como Juan Perón, Getúlio Vargas, Víctor Paz Estenssoro o Carlos Ibáñez del Campo a quienes recurrentemente llamó demagogos, totalitarios o, simplemente, caudillos. En ese tránsito encontró apoyo en Washington y en asociaciones internacionales cuando se trataba de defender la libre empresa y la iniciativa individual, tal como ocurrió con los escritores, intelectuales y periodistas que formaron parte del CLC. Su confianza en que el final de la guerra traería automáticamente el desplazamiento de las figuras acusadas de ser “fascistas” o cómplices del Eje fue una declaración voluntarista más que una profecía. Sus candidatos, apoyados por los principales periódicos, radio e, incluso, una cadena de televisión, fueron derrotados en elecciones limpias. Así, la UDN, creada en abril de 1945, y la Unión Democrática, lanzada en Argentina meses después, vieron con asombro que el nuevo régimen político democrático inaugurado en 1946 iba a ser dirigido por un militar que hasta meses atrás había sido ministro del régimen *de facto*: el general Euríco Dutra y el coronel Juan Domingo Perón.

Los liberalismos del Cono Sur identificaron dos tradiciones adversarias luego de 1945. Por un lado, las izquierdas. Y por el otro lado, las fuerzas nacionalistas o populistas que tuvieron mucha fuerza en esos años. Para los liberales de Colombia y Chile el

anticomunismo fue casi excluyente, mientras que para sus pares de México, Brasil y Argentina fue mayor y más permanente el encono antipopulista (léase cardenismo, varguismo y peronismo, respectivamente). Partidos como la UDN y sectores de la Unión Cívica Radical en Argentina combinaban la preocupación por el populismo (varguista o peronista) y por el comunismo, en la suposición de que ambos buscaban imponer regímenes totalitarios que deseaban el sometimiento de las personas y sus mentes al Estado y a un líder despótico. En Brasil las preocupaciones antivarguistas eran tan importantes como —e incluso estaban superpuestas con— las anticomunistas. Por 20 años el antipopulismo y el anticomunismo alimentaron las diatribas de la UDN: cuando ésta creyó liberarse de Vargas en 1954 con su suicidio, en 1961 debió lidiar muy fastidiosamente con uno de sus herederos, João Goulart.

El gobierno peronista desarrolló una política exterior muy activa en los años cuarenta y los primeros cincuenta gracias a la alta demanda del trigo en la posguerra, las reservas acumuladas durante el conflicto bélico, su cercanía con la Iglesia católica y su fortaleza electoral. El gobierno colocó agregados sindicales en diversas embajadas para promover la idea de que Argentina era una suerte de paraíso de los trabajadores. Muchos de esos agregados se reunieron con dirigentes sindicales locales y en algunos casos distribuyeron dinero y ayudas de diversa naturaleza a organizaciones afines. La pretensión peronista era liderar una civilización “latina”, equidistante respecto de las superpotencias, una considerada anglosajona, capitalista e individualista, y la otra soviética, atea y materialista. Esa expectativa de convertir a Argentina en la locomotora moral y económica del mundo latino se confrontó con el panamericanismo alentado por Washington —seguido de cerca por la diplomacia brasileña—, que veía en las veleidades peronistas una innecesaria distracción en la lucha contra los soviéticos.

El antiperonismo era extendido entre las derechas liberales sudamericanas en los años cincuenta y sesenta. En Uruguay, Perón fue

señalado como el responsable de la agitación sindical que en 1951 se utilizó como justificación de la toma de “medidas prontas de seguridad”, esto es, del estado de excepción. El socialcristiano chileno Rafael Gumucio habló en 1955 en la Cámara de Diputados de su país para denunciar la persecución de los católicos en Argentina. Y su argumento se basaba en la autoridad moral que le daba el hecho de que:

Hemos repudiado por igual todas las dictaduras —la roja, la parda y la blanca— cualquiera que sea su contenido programático y aun cuando se diga que una de ellas defiende la religión y que otra defiende al proletariado de los explotadores. Esta actitud limpia nos da autoridad moral en esta ocasión para denunciar los actos atentatorios contra la declaración de los derechos del hombre y contra la dignidad humana que ejerce el dictador argentino.

El gobierno peronista fue recurrentemente acusado de desplegar iniciativas totalitarias tales como la expansión territorial, la injerencia en asuntos internos de otros países y los intentos de control de la educación y la religión. Esta convicción animaba, como se vio, a hombres de la izquierda y la derecha chilena, a liberales colombianos como Germán Arciniegas, y a políticos del Partido Colorado paraguayo como Juan Natalicio González o del Partido Nacional uruguayo, como Eduardo Rodríguez Larreta.

¿QUÉ QUEDA DE LAS DERECHAS RADICALES?

La noción de “totalitarismo” implicaba una definición de quiénes eran actores legítimos de la democracia y quiénes no merecían un lugar en ella. Evidentemente, los comunistas o sus adláteres estaban vetados para las derechas, pero también lo estaban los “restos” del fascismo con los que identificaban al Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR) boliviano, al peronismo o al varguismo, y las fuerzas de derecha radical, neofascista o ultracatólicas que sobrevivieron a la guerra o que se crearon después de ella. Los nacionalistas argentinos de la década de 1940, la Aliança Integralista Brasileira (AIB), el Movimiento Nacional Socialista de Chile y el sinarquismo mexicano que habían alentado proyectos de transformación social y política inspirados en el fascismo debieron buscar después de la contienda impulso (y financiación) en otros lugares. Las condiciones del ecosistema político les quitaron espacio de maniobra y atracción a esas voces tras 1945. Muchas de estas figuras, a quienes Cristian Buchrucker llamó “nostálgicos del nuevo orden”, siguieron organizándose bajo la forma de partidos políticos que participaban en contiendas electorales, pero no dejaron de despotricar contra la “politiquería” y la demagogia partidocrática. Estaban, en realidad, más entusiasmadas con la posibilidad de un golpe de Estado que mejorara sus escuálidas oportunidades electorales y les permitiera ocupar posiciones de poder desde las cuales lanzarse a la caza de los comunistas y de la cultura pluralista y laica.

Las ocasionales formas de colaboración entre las derechas gobernantes y las fuerzas de derecha radical descansaban sobre el común deseo de persecución al comunismo, aun cuando “comunismo” no significa lo mismo para todos: algunos creían verlo sólo donde previsiblemente podía estar (el Partido Comunista y las organizaciones que éste promovía), pero otros lo encontraban también en asociaciones gremiales y partidos políticos muy ajenos a cualquier influencia soviética, en los *hippies* o en los dirigentes *trabalhistas*.

Las organizaciones de derecha radical eran explícita y centralmente anticomunistas, varias de ellas inspiradas por el nacionalismo antiliberal y católico de entreguerras. Su rechazo a la economía de mercado sin regulación, su fortísima impronta de catolicismo integrista y la promoción del hispanismo franquista las acercaban a las derechas radicales de las décadas de 1930 y 1940 más de lo que admitían. Esas fuerzas eran parte de una tradición residual con

una presencia más agresiva que relevante en las calles, que siguió aportando a lo largo del periodo figuras al mundo intelectual y a áreas del gobierno en regímenes dictatoriales y democráticos en varios países. Investigaciones recientes han mostrado hasta qué punto estas organizaciones se vincularon con grupos de exiliados cubanos, rusos y de Europa del Este, y con redes internacionales como la Asociación de Naciones Cautivas, la Asian People's Anti-Communist League (1954) y la World Anti-Communist League (1967). Organizaciones como Joven Europa y Joven América contribuían a poner en contacto a los grupos anticomunistas americanos con contrapartes asiáticas y europeas, como el Movimento Sociale Italiano.

Allí donde fue posible, algunos de los antiguos admiradores de Mussolini se reciclaron en la lógica de la Guerra Fría. Un caso extremo podría ser el del empresario italiano Amadeo Barletta, cónsul honorario en Cuba desde 1939 y promotor del fascismo en la isla. En tiempos de la guerra, Barletta huyó a Argentina para evitar su posible detención por estar acusado de colaborar con el Eje. Barletta regresó a Cuba en 1946 y allí devino importante propietario de medios (el periódico *El Mundo* y un canal de televisión) y representante de la empresa General Motors en varios países latinoamericanos, así como nuevamente cónsul honorario de Italia. Las voces más extremas provenían probablemente del Partido da Representação Popular (PRP), formado en 1945 por los antiguos miembros del integralismo liderado por Plinio Salgado. Su peso electoral no fue importante, y lo propio puede decirse de su capacidad para incidir sobre los gobiernos, incluso en la dictadura instaurada en 1964. El PRP se sumó con entusiasmo a la campaña de hostigamiento contra el presidente Goulart y a los reclamos a las Fuerzas Armadas para que lo desalojaran del poder.

El sinarquismo mexicano, que había conseguido movilizar a cientos de miles de votantes y de simpatizantes detrás de consignas contra Cárdenas, luego de 1946 se quedó sin oxígeno

político. Por un lado, su cercanía ideológica con el falangismo no era ya tolerable después de la guerra, y, por el otro, sus dirigentes más moderados entendieron que era más útil apoyar a las fracciones moderadas del partido gobernante que lanzar un juego político alternativo. El electorado católico rural fue girando sus opciones hacia el Partido Acción Nacional (PAN), hacia el PRI en acelerado proceso de derechización o hacia opciones más radicalizadas: a los dirigentes más enconados del sinarquismo, como Salvador Abascal, los terminó decepcionando el acercamiento del generalísimo Franco a los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y fueron cayendo en la impotencia política.

En Argentina los grupos de nacionalismo autoritario y católico se dividieron frente a la irrupción del peronismo, la dirección que éste ejerció sobre el Estado y su vínculo con el movimiento obrero. Hubo quienes, como Ernesto Palacio o el mencionado Virgilio Filippo, ingresaron decididamente en el nuevo movimiento, puesto que vieron en él lo que venían reclamando desde la década de 1930: una combinación de promoción del bienestar social, política exterior independiente, organización corporativa de las relaciones entre capital y trabajo, patronazgo católico de la educación y rechazo al liberalismo, al comunismo, al imperialismo y a la “oligarquía”. Pero otros, como los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, se mantuvieron muy alejados y críticos, porque recelaban del personalismo de Perón, de su uso pragmático y flexible de las ideas, de una relación demasiado directa con las masas y del peso que tenía Eva Duarte en las decisiones oficiales. Es evidente que Perón se sirvió de muchas de las ideas y hombres del nacionalismo católico argentino, pero dejó de lado otras nociones que le resultaban incómodas, innecesarias o de poco provecho político. En todo caso, la larga alianza de Perón y la Iglesia facilitó el ingreso de nacionalistas católicos al Estado desde 1946, pero el agrio conflicto que posteriormente se desató entre el presidente y la cúpula eclesiástica en 1954 le alienó al régimen sus apoyos más decididamente católicos.

Tras el golpe de Estado de 1955, cobró fuerza una derecha de tinte nacionalista y antiliberal que lo mismo buscó apoyo entre antiperonistas que entre peronistas.

En Chile la creciente pérdida de legitimidad de la democracia y de los acuerdos parlamentarios, así como el agotamiento producido en la población tras los gobiernos del Frente Popular (1938-1952) tornaron más atractivos los discursos corporativos y contrarios a la partidocracia. Ello permitió la llegada de fuerzas que no habían tenido hasta entonces responsabilidad de gobierno, como el Partido Agrario-Laborista (PAL), que impuso a su candidato presidencial, el general Carlos Ibáñez del Campo, en las elecciones de 1952. En el PAL confluyeron antiguos miembros del Movimiento Nacional Socialista de Chile, pero no sólo ellos. Una vez en el poder, buena parte de las medidas radicales promovidas por el PAL debieron quedar archivadas ante la necesidad de obtener mayorías parlamentarias que incluían a los liberales. De hecho, durante la presidencia de Ibáñez (1952-1958) no lograron convencer de sus proyectos de marchar hacia una “democracia orgánica”, no ya al grueso de la sociedad, sino a la coalición gobernante.

En los años cincuenta y sesenta hubo grupos de jóvenes que vivieron una radicalización hacia la derecha, dirigida contra la supuesta expansión comunista y la modernización sociocultural. Bandas juveniles neofascistas, nacionalistas o ultracatólicas recurrieron a formas de violencia política, incluyendo atentados y homicidios contra otros jóvenes, fueran de izquierda o *hippies*. Varios de estos grupos formaron parte de un reverdecimiento del antisemitismo, de inspiración tanto racista como católica. Un punto extremo de la violencia judeofóbica de estos grupos se alcanzó luego de la ejecución del antiguo jerarca nazi Adolf Eichmann en 1962: en Buenos Aires y en Montevideo organizaciones de extrema derecha secuestraron a dos jóvenes (Graciela Sirota y Soledad Barrett) y les tatuaron esvásticas en el cuerpo.

Me refiero a organizaciones argentinas como Tacuara (1957), Guardia Restauradora Nacionalista (1960), Federación Argentina

de Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA) (1963), Concentración Nacional Universitaria (1971) y Juventud Peronista de la República Argentina (1973); las uruguayas Montonera, Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad, Confederación de Estudiantes del Interior y, sobre todo, Juventud Uruguay de Pie (1970); los mexicanos Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (1961), los Tecos y el Frente Universitario Anticomunista (1955), y en Chile el Movimiento Gremialista (1966). El alma máter de este último, Jaime Guzmán (1946-1991), y otros estudiantes escribían en la revista integrista *Fiducia*, donde despotricaban contra los partidos (en particular, de izquierda y la democracia cristiana) y preconizaban su remplazo por un orden autoritario jerárquico, tradicionalista y corporativista inspirado en el franquismo. Combatían discursivamente al “enemigo marxista”, al que encontraban infiltrado en la Iglesia, especialmente entre los jesuitas. Bajo el gobierno de Allende (1970-1973), los gremialistas fueron acercándose a la obra de Von Hayek y se inclinaron por un modelo de “democracia protegida” contra el marxismo, por un capitalismo lo más libre posible y por el principio de subsidiariedad del Estado, esto es, que el Estado sólo interviniera allí donde no llegaba la actividad privada en forma suficiente. En una caracterización que unía a ultracatólicos y neoliberales, la “vía chilena al socialismo” significaba estatismo, colectivismo y el final de las libertades (y de la propiedad privada).

CONCLUSIONES

La salida de la Segunda Guerra Mundial le dio una oportunidad política al liberalismo. Se trataba de un liberalismo que aparecía reconciliado, al menos temporalmente, con la democracia multipartidaria, con cierto intervencionismo keynesiano y con la promoción de reformas de base. El fenómeno excedió al continente:

Samuel Huntington en *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* señaló que en las dos décadas posteriores a 1945 se expandieron en Occidente los regímenes basados en la competencia multipartidaria. En ese periodo más de 30 países —casi la mitad de ellos en América latina— pasaron de alguna forma de dictadura a un gobierno democrático (incluyendo el derecho a voto de las mujeres en muchos casos). La pregunta que circulaba por la cabeza de muchos dirigentes derechistas entonces era cómo transformar a los viejos círculos oligárquicos en partidos de masas, de base popular, que fueran capaces de asegurar a la vez una dominación política estable y alguna forma de desarrollo: ¿adoptar el programa demócrata-cristiano?, ¿promover el desarrollismo o alguna de las sugerencias de la CEPAL?, ¿seducir, crear a un pueblo trabajador que no fuera comunista?

El remplazo de la lógica geopolítica de la Segunda Guerra Mundial por la proveniente del choque entre Moscú y Washington generó que en buena parte las derechas liberales y conservadoras del continente (México, Colombia, Brasil, Chile, etcétera) se orientaran hacia los Estados Unidos, la libre empresa y el anticomunismo, en un contexto de profundización de los conflictos sindicales. Aun cuando asumamos que en los escenarios nacionales no eran determinantes las posturas de la Casa Blanca, es cierto que éstas condicionaban mucho la toma de opciones. Así, la legislación y los aparatos de inteligencia que habían sido creados para vigilar y perseguir a los agentes externos al servicio del Eje en los años cuarenta fueron reconvertidos en muy poco tiempo en instrumentos de persecución de la actividad sindical, política y estudiantil bajo el argumento de que eran herramientas soviéticas para la desestabilización.

En estos años quedó aparcada la tentación fascista en los países latinoamericanos. El triunfo de los Aliados le quitó margen de maniobra y seguidores a ideas y figuras que se parecían demasiado a las derrotadas en Berlín en 1945: por muchos años, la rehabilitación

de las derechas radicales de entreguerras fue patrimonio de grupos muy pequeños que generaban más escándalo que incidencia política. De cualquier manera, hombres que habían estado oportunamente cerca del Eje, del bando franquista y de las ideas corporativistas e integristas fueron invitados a participar de la lucha contra el comunismo junto a las derechas liberal-conservadoras en una suerte de “unión sagrada” que incluía un conveniente olvido sobre ese pasado. Otros hombres provenientes de las derechas radicales se alistaron en las fuerzas populistas de los años cincuenta y sesenta, sin abandonar tampoco el anticomunismo.

Si el periodo que aquí interesa se abre con las discusiones entre dirigentes y militantes de partidos brasileños acerca de cuál era la mejor manera para lidiar con el problema comunista (y si éste era o no más grave que la herencia varguista), se cierra con el golpe de Estado en ese país, que en 1964 puso en marcha un régimen de las Fuerzas Armadas obsesivamente anticomunista. Las apuestas de las derechas dominantes en la segunda posguerra, en pos de obtener o retener la hegemonía, en pocos años dieron paso a regímenes en los cuales la exclusión, la vigilancia y la represión de partidos reformistas, populistas e izquierdistas (comunistas o no) eran una regla *de facto* o legal de la vida política. En los sesenta las derechas liberales parecieron entrar en retirada en su capacidad para controlar la sociedad, los debates públicos y los resortes del poder público. El fracaso de la tentativa de crear una derecha moderna y compatible con la democracia y con reformas sociales terminó dando un inesperado espacio para el resurgimiento de las derechas radicales anticomunistas o neofranquistas y a las dictaduras en los años sesenta y setenta. Con ello se inició una nueva era, marcada por el predominio de la agenda de seguridad por sobre la promoción de la democracia; el de la persecución al enemigo interno sobre el objetivo del desarrollo, y el de las armas sobre la puesta en marcha de las reformas sociales.

CAPÍTULO 5
“SEGURIDAD NACIONAL”, FIN DE LA HEGEMONÍA
Y DICTADURAS (1964-1989)

Retomemos el ejemplo chileno. En 1958 los partidos liberal y conservador llevaron un candidato conjunto que ganó las elecciones presidenciales. Seis años después, los dos partidos ni siquiera presentaron un candidato presidencial y prefirieron apoyar a la “Revolución en libertad” de los demócrata-cristianos, para asegurarse de que la izquierda no ganaría la elección. Es más, en 1966 liberales y conservadores disolvieron sus partidos (fundados en la primera mitad del siglo XIX) y decidieron crear uno nuevo, llamado Partido Nacional: luego de 1970 se dedicaron a sabotear el gobierno del socialista Salvador Allende y a reclamar la intervención militar, que finalmente se produjo el 11 de septiembre de 1973. La impotencia política de las fuerzas de derecha habilitó el desembarco de las Fuerzas Armadas, las cuales pusieron en marcha un innovador programa económico de cuño neoliberal que produjo enormes costos sociales. En 15 años la derecha chilena pasó de ganar las elecciones presidenciales a exigir el fin de la larga tradición democrática multipartidaria y a entusiasmarse con la llegada de una feroz dictadura que generó miles de muertos, detenidos y exiliados.

El capítulo anterior mostró las estrategias llevadas adelante por partidos de derecha y representantes de las élites tras la Segunda Guerra Mundial para ponerle límites a la democratización y a la vez alentar ciertas expectativas de desarrollo: promoción de alguna industrialización con una sindicalización controlada por el Estado; asociación con inversores extranjeros en ramas industriales y de energía; incorporación a la Alianza para el Progreso; reformas

agrarias para mejorar el rendimiento de la producción rural y a la vez moderar los reclamos campesinos; coaliciones electorales con partidos nacionalistas, demócrata-cristianos o reformistas para evitar cambios más profundos; tolerancia a las dictaduras de militares un poco mesiánicos y autócratas... Ese tiempo de ensayos y de pruebas entró en un cono de sombras definitivamente a mediados de la década de 1960. A partir de entonces y por 25 años la agenda política de las derechas liberal-conservadoras tuvo un tono menos propositivo, menos interesado en producir hegemonía, y quedó más centrado en la represión a sus adversarios reales e imaginados.

Ese papel menguado de los actores políticos conservadores fue la contracara del fortalecimiento político de la alianza de las Fuerzas Armadas, el gran empresariado, una parte de la Iglesia y el gobierno de los Estados Unidos. Tal coalición se dio a la tarea de lograr una reconstitución autoritaria del capitalismo y de la dominación social, que se creían amenazados desde abajo en las calles, en las aulas, en la familia y en los lugares de trabajo. La llegada de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas (para diferenciarlas de las personalistas de los años treinta, por ejemplo) expresa el fin de ese orden sociopolítico construido trabajosamente desde los años cuarenta, que implicaba para las élites establecer acuerdos con sectores sociales subalternos y atender algunas de sus demandas, entre ellas, las referidas a condiciones de vida y laborales. Hechas las cuentas, a las élites les parecía más conveniente pagar el precio de la supresión de la democracia y las libertades que tolerar (y financiar) un Estado de compromiso que daba lugar para la expresión de organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas que amenazaban su predominio.

¿Por qué tomar a 1964 y no a 1959, que fue el año del triunfo de la Revolución Cubana, unánimemente considerado un hito de la Guerra Fría en el continente latinoamericano? ¿No sería más oportuno optar por la periodización que pondera los hechos de Sierra Maestra como un auténtico parteaguas que aceleró la internalización y la nacionalización del enfrentamiento entre Washington y

Moscú? El triunfo de la Revolución Cubana contribuyó sin dudas a radicalizar la posición de unas derechas que veían con recelo las posibilidades de cambio en la región. Golpes de Estado de inspiración anticomunista se generalizan desde el inicio de la década: en 1962 en Argentina y Perú, y en 1963 en Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras. Pero vale la pena recordar que la Revolución Cubana no disparó de manera inmediata ni universal una histeria militarista: entre 1959 y 1964 hubo miedo a potenciales réplicas en otros puntos, pero también hubo otras reacciones de las derechas nacionales y del gobierno de los Estados Unidos a los posibles impactos de la isla sobre el continente. La recepción y la valoración sobre la Revolución fue cambiando a lo largo de los años sesenta: la “peligrosidad” no se advirtió inicialmente sino tras los fusilamientos de enemigos políticos y la adopción explícita del marxismo-leninismo. Sólo a mediados de los años sesenta la Alianza para el Progreso fue aparcada por el Departamento de Estado y dio paso a preocupaciones más vinculadas con la lucha contrainurgente. A partir de allí, la contención del comunismo fue más un asunto de los agregados militares que de los economistas y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) estudiosas del (sub) desarrollo. En esa década la respuesta *manu militari* se extendió en numerosos países de la América Central y del Sur, y allí donde no hubo dictaduras podemos percibir el despliegue de formas novedosas y ambiciosas de anticomunismo de Estado, según la definición de Marcelo Casals.

La “seguridad” se colocó en el punto más alto de la agenda desplazando y resignificando al “desarrollo”, que durante mucho tiempo había tenido ese lugar destacado. Si en los años cincuenta se creía que el desarrollo constituía un antídoto contra la expansión comunista, en los setenta la promoción de una “seguridad” militarizada pasó a considerarse condición previa e indispensable para cualquier política económica. La centralidad de la “seguridad” fue inevitablemente de la mano de un ingreso acelerado e irreversible de las corpo-

raciones castrenses en la vida política, en la gestión de gobierno y en la producción de normativa legal. Dictaduras estables, formalizadas, longevas y de una intensidad represiva desconocida hasta esa fecha enmarcan el cuarto de siglo que sigue a abril de 1964, cuando se erigió en Brasil el primer régimen institucional de las Fuerzas Armadas en América basado en la doctrina de la seguridad nacional.

Confiamos en que adoptar 1964 y no 1959 no implique caer en dos errores frecuentes en la interpretación. El primero es el que supone que las Fuerzas Armadas fueron los únicos actores que hicieron política y que quisieron representar a los intereses socialmente dominantes: como veremos, bajo las dictaduras había margen para el desarrollo de una vida política, ya sea informal o clandestina como en Uruguay, o formal e institucionalizada como en Brasil. Dictaduras y partidos (no sólo de derecha) han mostrado ser compatibles. Las dictaduras no fueron sinónimo de ausencia de vida política, sino una combinación de restricciones y persecuciones intensas a ciertas fuerzas políticas, y de colaboración y diálogo con otras. El segundo error es el que postula que la marcha hacia la instauración de una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas era un camino inevitable, prescripto en alguna ley de la historia. Por el contrario, hay varios contraejemplos en este periodo de países sin régimen *de facto*, como México, Costa Rica o Venezuela. Y también hay muestras de que, antes de tomar la vía de las dictaduras, se ensayaron (y luego desecharon) otras opciones políticas, tales como la incorporación de militares al gabinete, la supresión legal del Partido Comunista, la tolerancia o el estímulo a la represión clandestina, además de la creación y el uso de legislación de excepción.

LAS AMENAZAS A LA DOMINACIÓN

El proceso de industrialización de América Latina condujo periódicamente a episodios de conflictividad social y tensiones socioe-

conómicas en los años sesenta y setenta. Recurrentes crisis daban cuenta de la incapacidad del modelo desarrollista para sostener la tasa de crecimiento; generar las divisas suficientes con las exportaciones primarias; ampliar el creciente gasto social de pensiones, salud y educación, y, al mismo tiempo, mantener la inversión estatal en empresas públicas, actividades industriales, infraestructura y generación de energía. En ese periodo se hicieron explícitos algunos de los problemas estructurales de la modernización económica, tales como la situación del agro. El inicio o la aceleración de los procesos de sindicalización rural lanzados por grupos católicos y de izquierda pareció afectar la estabilidad política en las áreas rurales al desafiar el control de los latifundistas.

Otro problema del capitalismo latinoamericano, a ojos del empresariado, tenía que ver con la fuerza de los sindicatos de trabajadores y de los partidos políticos que los representaban. Los mineros chilenos y bolivianos y los obreros metal-mecánicos argentinos tenían una gran capacidad para sostener sus demandas frente a la patronal —en muchos casos, empresas multinacionales—, mantener un salario real comparativamente bueno y condicionar todo intento de “racionalización” de los costos laborales. Al menos en el Cono Sur, estos años estuvieron marcados por pujas redistributivas de mucha intensidad y una alta conflictividad social y sindical. En muchos casos los enfrentamientos terminaban alcanzando dos áreas sensibles para el empresariado, como las amenazas sobre la propiedad privada (expresadas en exigencias o intentos de estatización) y sobre el control del proceso productivo: ¿quién define qué, cuánto y a qué velocidad se produce en la planta fabril? ¿Lo hace el gerente o el delegado sindical (este último muchas veces conectado a organizaciones de izquierda partidaria o armada)?

Los niveles de inestabilidad política y económica fueron probablemente de los más altos del siglo. Las señales de la pérdida del control político por parte de los partidos gobernantes —fueran conservadores o reformistas— se dejaban ver en la multiplicación

de los episodios de violencia política como atentados, secuestros, ocupaciones de campos y lugares de trabajo y militarización de las fuerzas políticas. La demanda de restauración de la disciplina social y política se presentó como acuciante para el gran empresariado, en particular para aquéllos involucrados en actividades económicas internacionales, cuya base de acumulación no era el consumo en el mercado interno, sino la exportación. Dicho sector, mejor preparado para la competencia global, apostó por la liquidación radical del modelo desarrollista o industrialista, que traía consigo crecimiento del empleo industrial y regulación estatal de las principales variables económicas.

Esa percepción de amenaza se intensificó por los cambios políticos vividos en varios países. Si en 1959 el gobierno cubano podía ser visto como una excentricidad en el continente, ya en 1970 Chile mostraba el caso de un gobierno marxista producto de elecciones. En las elecciones presidenciales de 1971, en su primera aparición pública, el Frente Amplio uruguayo obtuvo casi 20% de los votos. Y junto con ello numerosas experiencias de guerrilla urbana (Argentina y Uruguay) y rural (Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú y, sobre todo, América Central) parecían constituir una amenaza seria. Y en igual o peor sentido iban las dictaduras de Perú (1968) y de Ecuador (1972): ejemplos de regímenes autoritarios con fraseología marxista o populista y voluntad reformista, que lanzaron agresivos procesos de nacionalización de empresas y de reforma agraria acompañados por movilización de tropas. Todo parecía conjurarse contra las élites en esos años sesenta y setenta, y las predisponía a aceptar salidas más autoritarias.

A ello debemos sumar un conjunto de desafíos sociales a la dominación y a la vida burguesa que tal vez fueron menos grandilocuentes que las ocupaciones de fábricas o los secuestros de empresarios o de diplomáticos estadounidenses, pero que tenían gran impacto simbólico. Me refiero a procesos de revisión y de politización de aspectos de la vida cotidiana y de las formas tradicionales

de autoridad. Según Guillermo O’Donnell, en la época se produjo una “crisis de la dominación celular” que se expresaba en numerosas formas de transgresión microsocia y de cuestionamiento de las jerarquías patriarcales. Ello condujo a que una parte de la sociedad viviera lo que se ha llamado un “pánico moral”, esto es, la percepción de que el orden moral vigente estaba puesto en entredicho de manera abrupta, abierta y voluntaria por sujetos desviados de la norma social “natural”. El pánico moral incluye un diagnóstico pesimista, una profecía de cataclismo inminente y un llamado a la acción, según mostraron autores como Stanley Cohen y Jock Young. La sensación de pánico moral de muchos adultos en los años sesenta y setenta se intensificó, porque coincidió con el debilitamiento del papel conservador que había tenido la Iglesia católica hasta entonces, dado que, como se verá más adelante, ésta orientó su agenda hacia problemas sociales estructurales y a la vez atenuó sus más tradicionales preocupaciones de tono espiritual.

Los tradicionales roles de género de las amplias clases medias del Cono Sur sufrieron cambios que no siempre alcanzaban el discurso público: de allí que Isabella Cosse identificara una “revolución discreta”, que puso en apuros el modelo de mujer doméstica y del varón proveedor. El giro hacia relaciones más igualitarias entre varones y mujeres —expresado por ejemplo en el reclamo de que aquéllos asumieran tareas domésticas y de cuidado de los niños— condujo a discutir prácticas tenidas hasta entonces por inmodificables. Las demandas de más libertades individuales y el cuestionamiento a los valores morales tradicionales coincidieron con la aparición de grupos feministas y de homosexuales en este periodo: y si bien en términos cuantitativos no se trataba de contingentes significativos, su existencia y visibilización contribuyeron a desnaturalizar ciertos hábitos. En particular, las variaciones de los comportamientos femeninos fueron percibidas muy negativamente por las mentes conservadoras, que vieron en el consumo de las píldoras anticonceptivas, la reducción del largo de la falda o los besos públicos

y la legitimación de vínculos afectivos más libres y espontáneos señales evidentes de una decadencia cultural.

En un sentido similar fueron las alteraciones en los vínculos intergeneracionales: en los años sesenta y setenta se hizo evidente que los jóvenes eran un grupo que reflejaba menos una cierta condición etaria que una colectividad autoconsciente. Aun en su propia heterogeneidad, miles de jóvenes parecían dispuestos a poner en cuestión el principio de autoridad del padre en la familia. Muchachos radicalizados por la izquierda comenzaron a aparecer por todas partes: en las escuelas secundarias, las universidades —en las cuales leían a Martha Harnecker, Frantz Fanon, Louis Althusser, los novelistas del “boom latinoamericano” (Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, etcétera) y la teoría de la dependencia, y ya no a Talcott Parsons y a cualquier cosa que oliera a Fundación Rockefeller—, los asentamientos informales, las parroquias y las organizaciones católicas, y se acercaron a sindicatos de obreros y de campesinos.

Las distancias que adultos y jóvenes tenían en sus valores morales, la socialización política, la música y la literatura consumidas y las ansias de cambio se vivieron como auténticos dramas en el interior de miles de familias, sobre todo de las grandes ciudades. Muchos anticomunistas indignados creían percibir explícitas articulaciones y conexiones entre los embates a la autoridad patriarcal, el abandono del tutelaje moral de la Iglesia, escuchar a Bob Dylan y Violeta Parra, leer novelas en las que el final estaba narrado al inicio y fascinarse con ser como el Che Guevara. De allí que el “comunismo” que en los años sesenta y setenta decían combatir los oficiales del Ejército, las asociaciones empresariales, los padres de estudiantes de escuelas secundarias y los militantes derechistas se refería menos al Partido Comunista que a una sensación extendida de insatisfacción con los resultados de las políticas económicas, la activación de jóvenes (mujeres y varones), las reformas en la legislación laboral, las innovaciones en las prácticas

educativas, las amenazas a la propiedad del suelo rural y urbano y la impugnación a los valores tradicionales.

Esa dimensión moral del anticomunismo fue retomada por organizaciones de padres, madres y jóvenes. En el verano de 1968 militantes de la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA) y agentes policiales bonaerenses se dedicaron a secuestrar, golpear y rapar *hippies* en la ciudad de Buenos Aires y en playas de la costa atlántica. La aparición de organizaciones anticomunistas de mujeres como Poder Femenino (1972), opositora al gobierno de Allende, y la Campanha da Mulher pela Democracia, constituida en Rio de Janeiro (1962), con una agenda y unas consignas generalmente contrarias al feminismo —al que asimilaba sin mucho problema al marxismo y al ateísmo—, puede considerarse una novedad del periodo. Las dirigentes de esas agrupaciones participaron en giras internacionales, como ha estudiado Margaret Power, que permitieron conectar a chilenas, brasileñas y estadounidenses dedicadas a legitimar la constitución de dictaduras abiertamente anticomunistas que se declararon dispuestas a salvar a las familias de la disolución.

Una pista para entender la implantación de dictaduras como reacción frente a esta percepción de amenazas la puede aportar la revisión de la historia de los pocos países que no estuvieron sometidos a un régimen de esa naturaleza. Como han escrito Rouquié y Suffern, factores militares y sociopolíticos explican la ausencia de dictaduras: una profesionalización débil o tardía de las Fuerzas Armadas; la potencia y la coherencia del sistema de partidos, y la existencia de un pacto multipartidario que prohíbe invocar a las instituciones armadas, pero también debilidad de los partidos progresistas y los sindicatos, y control o marginalidad de la participación de las masas. En Venezuela, luego de la dictadura de Pérez Jiménez, los principales partidos, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) llegaron a un acuerdo de coexistencia en 1958 que implicaba no recurrir a

las Fuerzas Armadas para resolver sus conflictos políticos y a la vez incorporarlas en los procesos de toma de decisiones. Los ingresos provenientes de la exportación petrolera permitieron amortiguar los problemas sociales y con ello desactivar las amenazas producidas por las guerrillas rurales, que quedaron rápidamente desconectadas de los principales conflictos nacionales.

Colombia, sin lugar a dudas uno de los países sobre los cuales podrían profetizarse menos oportunidades de que se asentara la democracia tras la etapa llamada La Violencia (1948-1958), dio muestras de estabilidad del sistema bipartidista. Los desafíos sociales fueron enfrentados a través del despliegue de acciones y discursos antisubversivos muy cercanos a los que usaron las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, pero no fue necesario ni deseable el abandono del régimen constitucional. Conservadores y liberales se alternaron en la presidencia desde 1958 por 40 años. En un país surcado por la violencia política endémica, latifundismo, fragmentación geográfica y pobreza, las Fuerzas Armadas permanecieron sometidas a una agenda bélica desplegada en numerosos puntos del territorio nacional por variadas unidades de combate.

El caso mexicano es también muy revelador. Allí la fortaleza y la legitimidad del régimen posrevolucionario garantizaron el control civil de las Fuerzas Armadas —y de otras corporaciones desde ya—. La cohesión de la dominación centrípeta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que combinaba estímulos y amenazas, ayuda a entender que desde los años treinta tuvieron un estrecho espacio de maniobra las Fuerzas Armadas, mas no ciertos generales en algunos estados. ¿Qué tipo de anticomunismo de Estado se desarrolló en México en las décadas de 1960 y 1970? Lorenzo Meyer propuso que se trató de un “anticomunismo discreto”, que combinaba una diplomacia explícitamente no alineada (de excelentes relaciones con la Revolución Cubana y enfrentada a la dictadura franquista) con prácticas silenciosas, no ideologizadas y más disimuladas de vigilancia y persecución a las fuerzas de izquierda. En

particular, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) actuó como el brazo represivo del régimen durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), cuando estuvo al comando de Fernando Gutiérrez Barrios y se intensificaron los vínculos de cooperación con la embajada de los Estados Unidos en México. Los gobiernos mexicanos se mostraron dispuestos a colaborar en las demandas específicas de cooperación anticomunista de Washington: es probable que en algunas presidencias el anticomunismo fuera más intenso y honesto y en otras sólo fuera epidérmico o temporal. En todo caso, la construcción y el despliegue de las agencias de vigilancia y persecución acompañaron a la política de recepción de exiliados sudamericanos en los años setenta. Las palabras —y sobre todo decisiones— como las del presidente Díaz Ordaz respecto de masacrar a los estudiantes en octubre de 1968 invitan a revisar esa supuesta discreción en la persecución al comunismo.

EL TIEMPO DE LAS DICTADURAS: INTERPRETACIONES Y ORÍGENES

El despliegue del miedo anticomunista terminó afectando de manera irreversible la vida democrática al estimular la intervención preventiva por parte de las Fuerzas Armadas y la persecución a líderes sindicales, estudiantiles y campesinos. El cambio del imaginario y las prácticas anticomunistas de América Latina en la década de 1960 se deja ver en la definición del actor estatal al que se le asigna la misión de controlar y combatir al comunismo. A mediados del siglo xx seguían siendo secciones específicas de las policías las que tenían las tareas de registrar, intimidar y reprimir al comunismo, al que se entendía como una actividad delictiva. Pero en los sesenta, las Fuerzas Armadas comenzaron a asumir (o se les concedieron) nuevas funciones ligadas directamente al mantenimiento del orden social. Y junto con este desplazamiento de funciones hacia una institución que formalmente se encargaba de la defensa, el otro

rasgo que parece ser innovador es que el comunismo era presentado como un problema más internacional que nacional. No es ajeno a este proceso el peso de la Escuela de las Américas en la formación de miles de oficiales latinoamericanos, a los que entrenó en la idea de que la Tercera Guerra Mundial se desarrollaría entre enemigos ideológicos y no entre ejércitos regulares. Sobre este punto se volverá más adelante.

Al igual que los años treinta, los sesenta y setenta estuvieron marcados por un desplome de los regímenes democráticos y su remplazo por dictaduras. Repasemos brevemente la cronología de esos cambios de regímenes, para ver su cercanía en el tiempo y, sobre todo, su duración. Brasil, 1964-1985; Argentina, 1966-1973 y 1976-1983; Perú, 1968-1980; Panamá, 1968-1989; Bolivia, 1964-1982; Ecuador, 1972-1976; Uruguay, 1973-1985, y Chile, 1973-1990. A ello se le sumaron los “años de plomo” de El Salvador (1980-1982), Honduras (1974-1980), Guatemala en los setenta y las longevas dictaduras de Stroessner en Paraguay (1954-1989), de los Somoza en Nicaragua (1937-1979) y de los Duvalier en Haití (1957-1986). A fines de los años setenta las dictaduras del Cono Sur eran responsables del exilio de decenas de miles de personas, de unos 50 000 asesinatos y de medio millón de encarcelados, según ha relevado José del Pozo. Vale la pena señalar qué rasgos son originales de esas dictaduras, así como dar cuenta de sus conexiones respecto de las fuerzas partidarias de derecha y de las élites socioeconómicas.

Las discusiones políticas y académicas sobre estas dictaduras, sus características y su extendida implantación en América Latina comenzaron tan pronto se detectó el fenómeno. Esos debates fueron numerosos y muy sostenidos en el tiempo. Según el sociólogo Manuel Garretón, hay tres grandes líneas interpretativas sobre el particular. La primera, surgida de manera contemporánea a los hechos, pondera aspectos estructurales y señala que la imposición de las dictaduras es la respuesta lógica de las élites económicas a las dificultades para sostener sus ganancias: estos regímenes —a los que

el politólogo Guillermo O’Donnell dio en llamar “Estados burocrático-autoritarios”— permitieron lanzar una nueva fase de acumulación a fuerza de reprimir costos laborales y reducir el nivel de vida popular y las “exageraciones” distributivas. La crítica a esta mirada es que supone que entre intereses económicos y prácticas políticas hay una vinculación mecánica. La segunda interpretación prestó una mayor atención a los militares y a sus transformaciones organizacionales y doctrinarias. En esta perspectiva, los procesos de profesionalización, autonomización e ideologización alentados por el contacto con el Pentágono serían responsables de la introyección de la idea de que los intereses nacionales y los de las Fuerzas Armadas eran idénticos. La limitación de esta interpretación es que reduce la dinámica política y de los conflictos sociales de la época a las ideas y las prácticas de la corporación militar, y con ello conduce a suponer que alguna ley histórica sanciona la instauración de una dictadura. Y la tercera línea de análisis, que es más reciente, pone el acento en explicaciones más coyunturales y centradas en la historia política de cada país, factores en los cuales se cree encontrar las posibilidades y límites de la llegada y permanencia de las dictaduras y de los actores que las promovieron o resistieron. Alejándose de cualquier teleología, esta perspectiva pondera la multiplicidad de caminos tomados y enfrentados, y no supone inevitable la llegada de un régimen autoritario. Así, esta línea propone estudiar los rasgos diferenciales de cada dictadura (tipo de represión, institucionalidad creada, socios políticos, modalidades de construcción de consensos y apoyos sociales) y el tipo de salida hacia regímenes democráticos. Pero esta interpretación dificulta la percepción de los elementos compartidos entre las dictaduras, su evidente sincronía, sus “aires de familia” y sus conexiones oficiales y clandestinas. Cabe entonces apostar más bien por lecturas capaces de articular elementos estructurales con el análisis de la autonomización de las Fuerzas Armadas y el estudio de los derroteros nacionales. Ello implica también buscar un equilibrio en las explicaciones para ponderar tanto los escenarios nacionales

como el papel jugado por Washington, sobre todo cuando gobernaron Richard Nixon (1969-1974) y Ronald Reagan (1980-1988), o cuando Henry Kissinger orientaba la política exterior.

El periodo de 25 años que este capítulo retrata no constituye un tiempo homogéneo ni transcurrió igual en toda América Latina. Las asincronías entre los países dan cuenta de que las variables nacionales parecen pesar más que los procesos compartidos. En todo caso, no es ocioso hacer notar que fue hacia mediados de los años setenta que se hicieron transparentes los rasgos más fundacionales y restauradores de las dictaduras: ello no sólo se deja ver en las dictaduras instaladas en Argentina, Chile y Uruguay entre 1973 y 1976, sino también en los giros derechistas que tomaron las dictaduras boliviana y peruana en esa década. En todos esos casos las dictaduras parecen mostrar más afinidad con políticas neoliberales más que con las nacionalistas de los generales peruanos en 1968, o con el desarrollismo autoritario de los brasileños o del general Onganía en Argentina. Esa orientación se conecta más estrechamente a las transformaciones globales del capitalismo en esos años (estancamiento, ofensiva contra el poder sindical, creciente predominio del capital financiero, etcétera).

Se han usado diversas clasificaciones para agrupar a las dictaduras. Algunos analistas identificaron a las dictaduras nacionalistas y reformistas (Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador), a las sultanistas o de “gangsterismo de Estado” (Paraguay, Nicaragua, Haití) y a las inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional, tanto las que implantaron programas económicos liberales o neoliberales (Chile, Uruguay y Argentina en 1976) como las que aceleran una vía burocrático-desarrollista (Brasil y Argentina en 1966). En cuanto al ejercicio del poder, hubo diferencias notables entre los regímenes. Aunque unificadas por el anticomunismo explícito —salvo las dictaduras nacionalistas-reformistas como la peruana— y por la voluntad refundacional, se dividían entre las que conservaron algo del armazón constitucional anterior y las que se dieron una nueva

institucionalidad autoritaria. Esa institucionalidad incluía alguna dimensión representativa y descansaba sobre una vida política asaz restringida. Conviene recordar que la suerte de los partidos políticos fue dispar. En muchos casos fueron ilegalizados y perseguidos —Chile—, en otros fueron invitados a conformar nuevas organizaciones políticas —la Aliança Renovadora Nacional (Arena) de Brasil— y en algún otro se alistaron detrás de la dictadura —Uruguay— y la “candidatura” presidencial que ésta alentaba —como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Social en Bolivia o el Partido Colorado en Paraguay—. Hombres provenientes de diversas corrientes “nacionalistas” argentinas se desempeñaron en el Ministerio del Interior, en el de Relaciones Exteriores y en áreas educativas y judiciales durante las dictaduras iniciadas en 1966 y 1976.

Como se mencionó, decenas de miles de hombres de las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos asistieron a la Escuela de las Américas, en Panamá. Allí se ofrecían cursos que difundían la “doctrina de la seguridad nacional”, una visión geopolítica manufacturada en el marco de la confrontación global entre capitalismo y socialismo. En algunos casos esa visión remplazó (en otros se superpuso) a la vertiente francesa, producida al calor de las guerras en Indochina y Argelia. Esa doctrina proponía un esquema maniqueo y paranoico que dividía al mundo entre Occidente y Comunismo. En esa disputa no eran admisibles límites éticos ni religiosos para la organización de la represión, puesto que se trataba de una guerra que por definición era permanente: sería ilegítimo o ingenuo suponer que se podía llegar a alguna forma de paz consensuada, o más modestamente, a un alto al fuego temporal. Las Fuerzas Armadas debían abandonar las tradicionales hipótesis de conflictos y guerras convencionales librados por el control de territorios entre Estados y enemigos identificables y formalizados. La doctrina de la seguridad nacional era una teoría de la guerra contra un adversario todopoderoso, tenaz y por momentos invisible. Éste procedía con

formas indirectas de agresión, puesto que se servía de instrumentos psicológicos para conquistar las almas y las mentes de los incautos y explotar a su servicio los resentimientos y descontentos sectoriales que pudieran existir en la sociedad.

El comunismo era presentado no sólo como un enemigo temible, sino como el único responsable de todos los males de las naciones occidentales y, entre ellas, las latinoamericanas. Se infiltraba en las universidades, en la Iglesia, entre los jóvenes, en las fábricas, en los medios de comunicación, en cada familia: incluso los partidos reformistas —el peronismo, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), la democracia cristiana chilena, la Acción Democrática en Venezuela, el *trabaldhismo*, etcétera—, por más que hicieran fe de anticomunismo, eran entendidos como antesalas a la implantación de un régimen soviético. Por ello, la guerra que las autoridades dictatoriales decían llevar adelante era total y probablemente infinita, porque detectaban como actividad enemiga a toda forma de oposición organizada para desafiar las políticas del Estado. En definitiva, cualquier integrante de la sociedad era potencialmente “el enemigo”. No había diferencias significativas entre criticar a las autoridades, ser diputado en representación de partidos de la oposición, realizar un atentado con bombas, leer a Eduardo Galeano, sumarse a la guerrilla, realizar tareas pastorales entre los pobres o estudiar una carrera de ciencias sociales. Todas eran percibidas como actividades diversas en la superficie, pero invisiblemente coordinadas y al servicio de la misma conspiración roja.

Combatir a un enemigo no convencional requería de tácticas no convencionales como contrasubversión, sabotaje y acciones terroristas. De allí que las formas en que se desplegó la represión estatal se tornaron también múltiples, pero coordinadas, a imagen y semejanza del enemigo imaginado. Era esencial el desarrollo de técnicas de guerra psicológica que pudieran desactivar las del enemigo, pero también el despliegue de un sistema de producción, recolección y

análisis de la información por parte de aparatos de inteligencia y de “seguridad” especializados que clasificaban a los potenciales blancos de la represión. La creación, la ampliación y la profesionalización de los servicios de inteligencia dan cuenta de la centralidad otorgada a la obtención de la información. La distinción entre actos represivos o preventivos fue abolida, al igual que la idea de que había una política exterior de una naturaleza —o con un basamento legal— distinta a la política interior: la puesta en marcha del Plan Cóndor desde 1975 da cuenta de la creciente coordinación transnacional de fuerzas de seguridad y de la disolución de límites nacionales a la hora de perseguir a enemigos subversivos. En los años sesenta Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador constituyeron junto a los Estados Unidos el Consejo de Defensa Centroamericana (Condeca), a los efectos de coordinar la lucha antisubversiva. Desde los años cincuenta Washington ha acompañado las actividades de las Fuerzas Armadas de América Central: les ha transferido capacitación, créditos e insumos bélicos. Ha entrenado a oficiales de las tres armas, así como a cuerpos de la policía, especialmente en las áreas de inteligencia, espionaje y comunicación.

En ese marco no llama la atención que diversos grupos paramilitares de extrema derecha se dieran a la tarea de combatir por mano propia la expansión de las izquierdas, sea que éstas estuvieran en el gobierno (el Chile de Allende, el Brasil de Goulart, la Argentina de Cámpora) o en sindicatos y organizaciones partidarias y estudiantiles (México, Uruguay, Colombia, etcétera). Allí destacaron el Frente Nacionalista Patria y Libertad, creado en Chile (1971), el brasileño Comando de Caça aos Comunistas (1963), bandas peronistas federadas en la Alianza Anticomunista Argentina (la llamada Triple A, 1974) y el Comando Libertadores de América (1975). Los escuadrones de la muerte operaron con total cobertura de las Fuerzas Armadas en El Salvador, donde asesinaron al arzobispo Óscar Romero en 1980 y produjeron la masacre de El Mozote (1981). En Guatemala el

Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO) y la Nueva Organización Anticomunista (NAO) tuvieron rienda suelta para desarrollar la represión contra los campesinos, muchos de ellos de identidad maya. Estas organizaciones paramilitares tenían abundantes lazos de cooperación con organismos de seguridad y de inteligencia que se dejaban ver en el intercambio de información y la provisión de armas, entrenamiento y protección, así como en el desarrollo de actividades represivas conjuntas. Una parte de esa historia es la que protagonizaron las fuerzas contrasandinistas, estacionadas en Honduras, dedicadas a combatir a la revolución sandinista con armas y con atentados.

Es interesante revisar el régimen de Stroessner (1954-1989) en Paraguay, puesto que se trató de una dictadura *sui generis* que incluía fuertes dosis de personalismo, pero también el apoyo del muy popular Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas. En sus inicios, nada parecía distinguir a esa dictadura de otras anteriores de Paraguay o de las entonces contemporáneas de Venezuela y de Colombia. Sin embargo, a fines de los sesenta el régimen adoptó el vocabulario y las preocupaciones de la doctrina de la seguridad nacional y participó de manera entusiasta del Plan Cóndor y de otras iniciativas de cooperación anticomunista internacional, en particular con la dictadura taiwanesa. Los vínculos de Stroessner con Chiang-Kai-Shek se cimentaron en los años setenta gracias a la participación compartida en la World Anti-Communist League: la Escuela de Guerra de Taiwán recibió por años a los oficiales paraguayos en búsqueda de entrenamiento en lucha antisubversiva. y a cambio de ello Asunción nunca reconoció al gobierno de Beijing como legítimo representante de China. De hecho, en 1979 la capital paraguaya fue sede del XII Congreso Anual de la League, que reunió a lo más granado del anticomunismo mundial.

LA EMERGENCIA DE LA TRADICIÓN NEOLIBERAL

A inicios de los años sesenta el neoliberalismo constituía una tradición política minúscula, muy afincada en ciertos núcleos de economistas y empresarios que habían leído con interés e incluso fruición obras de Von Mises o de Von Hayek. Y si bien algunos economistas neoliberales ingresaron en los gabinetes de las dictaduras en los años setenta, no consiguieron imponer su perspectiva en ningún lugar, salvo en Chile. Pero, como se verá en el siguiente capítulo, treinta años después el neoliberalismo se había transformado en la tradición dominante entre las derechas, al punto de subsumir —organizativa o ideológicamente— a las antiguas organizaciones liberales y obtener el apoyo económico y político del empresariado y, lo que es más sorprendente, impregnar las retóricas y políticas públicas de grandes formaciones políticas tradicionalmente hostiles al conservadurismo liberal.

Eduardo Devés-Valdés ha argumentado de manera sólida que, aunque no nació en América Latina, el neoliberalismo se latinoamericanizó, puesto que detectó enemigos propios (como el cepalismo, las economías de planificación centralizada y la industrialización por sustitución de importaciones). También se preocupó por pensar temas específicos del continente (como la informalidad laboral) y elaboró conceptos para aplicar a la región. El neoliberalismo brindaba un diagnóstico histórico negativo de la vida económica latinoamericana desde 1930. En esa evaluación, se señalaba paradójicamente que la presencia estatal era tan impotente como omnipotente: en su libro sobre historia del pensamiento latinoamericano, Devés-Valdés muestra que escritores neoliberales recurrentemente echan mano a la imagen del Estado como un ente gigante, controlador, invasor, contaminante, pero simultáneamente ineficiente (el “ogro filantrópico” de Octavio Paz).

Sergio Morresi postuló que el neoliberalismo no promueve un Estado débil o mínimo, sino uno lo suficientemente poderoso y

eficiente que asegure el orden requerido por una economía de mercado y que pueda “corregir al mercado *real* para que se acerque al mercado *ideal*”. En esta interpretación, que creo más ajustada, el gran enemigo no es el Estado, sino la política, puesto que ésta combate los resultados “naturales” de la economía al distribuir caprichosa e injustificadamente los bienes y servicios. Como señala Morresi, en la perspectiva neoliberal “la desigualdad es el eje dinámico de las sociedades, porque suponen que una situación donde algunos pueden tener mucho más que otros, ofrecería estímulos para que todos compitan por llegar a los sitios más elevados”.

Respecto de los orígenes y rasgos del neoliberalismo, Hernán Ramírez ha defendido la idea de que se trata de una ideología “polimórfica y policentrada”, puesto que ha tenido diversas usinas, que a su vez han construido sus particulares redes de cooperación y de competencia. El crecimiento de la tradición neoliberal en las décadas de 1970 y 1980 fue el resultado de la incorporación a diversos regímenes dictatoriales de economistas formados en las escuelas neoliberales, sobre todo estadounidenses. Sin embargo, su origen es previo. Las dictaduras no importaron al neoliberalismo, sino que éste se encontraba disponible localmente, tenía sus instituciones promotoras y planteles preparados y entusiasmados con la posibilidad de dar el salto al interior del Estado. La publicación de *El camino de la servidumbre* de Friedrich von Hayek (1944) y la constitución de la Sociedad Mont Pelèrin (1947) no pasaron desapercibidos en el continente. En la década de 1950 se produjo una mayor difusión del neoliberalismo en el Cono Sur: figuras como Von Hayek y Von Mises visitaron Argentina y Chile para dar charlas y se involucraron en la creación de fundaciones e institutos de investigación financiados por empresarios. Así ocurrió en el Centro de Difusión de la Economía Libre (1957), la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (1964), el Instituto de la Economía Social de Mercado (Argentina), el Instituto Zuloaga (Venezuela), el Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES, Brasil), el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas,

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (1946), el Centro de Estudios Económico-Sociales (Guatemala, devenido hoy Universidad Francisco Marroquín) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (El Salvador).

La versión argentina del neoliberalismo era inicialmente más política que económica, puesto que identificaba como su némesis al peronismo, por considerarlo “liberticida”. Los “enemigos” que el neoliberalismo rioplatense deseaba combatir en los años sesenta y setenta eran la “demagogia”, el populismo y una democracia a la que se creía desbocada y lanzada a prometer un bienestar a las masas imposible de abastecer por parte de la economía. Según postulaban figuras como Alberto Benegas Lynch, los auténticos hombres de Estado eran los que seguían ideas serias y no caían en el canto de sirenas de la demagogia. Esta corriente encontró espacio en gobiernos democráticos y dictatoriales, especialmente en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura y el Banco Central. Álvaro Alsogaray, probablemente el más importante de los políticos ordoliberalistas de la segunda mitad del siglo xx argentino, fue autoridad económica en varios gobiernos dictatoriales y no dudaba en asimilar a la desperonización del país con la desnazificación alemana. En su promoción de un capitalismo autoritario, entendía que la única obligación relevante del Estado era garantizar la libertad económica, y que esa libertad debía tener prioridad por sobre otras. De allí la justificación que ofrecía de los regímenes de participación política restringida (sea a través del autoritarismo castrense o el voto calificado). En Chile, en cambio, las preocupaciones eran medularmente económicas: el diagnóstico reiterado sobre la falta de dinamismo de la economía nacional y la inflación elevada. En 1955 la Universidad de Chicago firmó un famoso convenio con la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile para darles formación de posgrado a los economistas: ese espacio funcionó como uno de los ámbitos de formación de la élite de economistas (los Chicago Boys).

De cualquier manera, antes de 1973 en América Latina se trataba de una prédica neoliberal solitaria en un mar de enorme consenso (civil, militar, académico) sobre diversas variantes de desarrollismo y planificación, así como sobre la necesidad de la intervención estatal para resolver problemas sociales y económicos y para proteger a las industrias. Por entonces, los discursos neoliberales sobre las ventajas de la apertura comercial y financiera respecto del modelo desarrollista sonaban un poco trasnochados para la sociedad en general, para las Fuerzas Armadas y para el empresariado en particular. Los neoliberales lograron algunos avances durante las dictaduras en los años setenta. La oportunidad que tuvieron de ingresar por primera vez a los gabinetes fue resultado de dos procesos. Por un lado, la crisis y la transformación del capitalismo mundial en esa década, incluido el impacto global del *shock* petrolero de 1973, generaron un enorme flujo de capitales disponibles para el mercado financiero y los préstamos internacionales, y con ello se les dio relevancia a los economistas y financistas especializados en estas actividades económicas. Por otro lado, varios gobiernos latinoamericanos cayeron en fuertes crisis inflacionarias y de puja distributiva que invitaban a las élites a la búsqueda de soluciones nuevas y autoritarias. Por ello, las dictaduras del Cono Sur les dieron la bienvenida a algunos economistas neoliberales, deseosos de convertir sus ideas teóricas en políticas públicas. La justificación que los neoliberales daban de su participación como funcionarios en regímenes *de facto* era que cualquier sociedad que no se basara en un mercado libre de regulaciones sería, en definitiva, una dictadura.

El modelo económico de las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay en los años setenta implicaba una particular combinación de extremo autoritarismo político y un selectivo respeto de la libertad económica. Sus afinidades con los intereses empresariales se hacían evidentes en el hecho de que sistemáticamente consideraban a las organizaciones de los trabajadores como enemigas: los milita-

res, por creerlas expresión de subversión y de lucha de clases, y los economistas, por ser instituciones corporativas, que fijaban de manera artificial y prepotente unas condiciones salariales imposibles de cumplir. El rechazo a las negociaciones paritarias y a la firma de pactos sociales o de control de precios, el reconocimiento de federaciones sindicales alternativas y la encarnizada persecución militar a los activistas y dirigentes sindicales —sobre todo de base— se complementaban para reducir el poder social de la clase trabajadora que se había formado al calor de las políticas industrialistas de la segunda posguerra. Esa selectividad también se expresó —más allá del discurso oficial “promercado”— en el enorme y discrecional apoyo financiero estatal a sectores escogidos del poder económico.

Fue en Chile donde los neoliberales consiguieron avanzar más y desbancar a otras tradiciones ideológicas. Allí quedaron encargados de la administración de la hacienda y de la transformación económica iniciada por el general Pinochet. El propio líder de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, visitó Chile para respaldar explícitamente a la dictadura y sus políticas económicas. Como mostró Stéphane Boisard, la administración económica llevada adelante por el ministro Sergio de Castro constituyó un experimento de vanguardia que puso en marcha innovaciones en política pública sin antecedentes en el mundo, y que sólo años después formaron parte de las orientaciones fijadas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y por Ronald Reagan en los Estados Unidos. El modelo neoliberal implementado se dedicó con ahínco a crear una nueva orientación económica que generó efectos tanto a corto como a largo plazos. En los primeros meses de aplicación de las políticas monetaristas y de *shock*, se dispararon la recesión y el desempleo: la desregulación de las actividades financieras y comerciales intensificó la crisis de la balanza internacional y desplazó el corazón de la economía nacional de las actividades industriales a las finanzas. La función subsidiaria del Estado; la reversión —también selectiva— de la reforma agraria y de las nacionalizaciones llevadas

a cabo por la Unidad Popular, y la liberalización de las tarifas y del mercado cambiario fueron algunas de las políticas públicas que en muy pocos meses produjeron una refundación autoritaria y neoliberal del capitalismo chileno, que en buena medida sobrevivió intacta hasta tiempos actuales. De acuerdo con Connell y Dados, los neoliberales le ofrecían a la Junta Militar una nueva “estrategia de desarrollo” que implicaba abrazar el comercio internacional con exportaciones mineras y agrícolas. Un plan así les generaba entusiasmo a los sectores propietarios y a Washington, por cuanto incluía también abandonar la previa estrategia de industrialización y debilitar a la poderosa clase obrera y sus sindicatos.

En Uruguay y Argentina los economistas no pudieron avanzar demasiado en la venta de empresas públicas o la privatización de la educación y de la seguridad social como en Chile, pero sí dolarizaron *de facto* la economía y abultaron la deuda externa. La toma de deuda con montos exorbitantes y desconocidos hasta esa fecha fue defendida por las figuras neoliberales de las dictaduras como señal de la confianza del mundo occidental en ese camino económico (en los años ochenta el volumen de la deuda se convertiría en un peso agobiante para las dictaduras salientes, pero sobre todo para los primeros gobiernos democráticos). De hecho, el ingreso del neoliberalismo en los países donde no hubo (o ya no había) dictaduras ocurrió tras el impacto de la “crisis de la deuda externa”.

El proceso se puede rastrear en México al tomar nota de las variaciones en el reclutamiento de figuras para el gobierno. Según un libro ya clásico de Peter Smith, el PRI seleccionaba a los hombres para la actividad política en la más importante universidad estatal del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en particular en la Facultad de Derecho. De allí los reclutados daban el salto a actividades políticas y de administración en ámbitos subnacionales, y finalmente un grupo terminaba conformando las élites gobernantes federales. El conocimiento de las leyes y la experiencia en la vida política universitaria se percibían como credenciales

importantes para un buen desempeño en los sexenios. Pero a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), la posesión de saberes de economía obtenidos en los posgrados ofrecidos en universidades de los Estados Unidos pasó a ser entendida como un antecedente más valioso para los candidatos al gabinete nacional. El propio De la Madrid había estudiado en Harvard University, y los siguientes presidentes, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) también eran economistas con posgrados obtenidos en los Estados Unidos. De acuerdo con Ana Belén Mercado, el giro neoliberal en Colombia se produjo durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). Ese proceso se acompañó de una decisiva intervención en la batalla de las ideas por la revista *Ciencia Política* (1985-1999). En el consejo editorial de la revista estaba lo más granado de la derecha latinoamericana, en particular de la neoliberal: Octavio Paz, Carlos Rangel, Mario Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner, quienes alcanzaron mucha mayor visibilidad específicamente política a inicios del siglo XXI a través de las fundaciones y *think tanks* neoliberales.

La propuesta ideológica del neoliberalismo estuvo lejos de ceñirse al campo de la economía. En buena medida puede pensarse que constituyó una propuesta global de reinterpretación del lazo social, de la vida económica y una teoría sobre el individuo. Esa dimensión cultural del neoliberalismo es la que contribuyó, luego de las dictaduras, a garantizar su hegemonía ideológica. Devés-Valdés ha dado cuenta de esa voluntad de combate del neoliberalismo, expresada en el rechazo de las perspectivas más identitarias de América Latina (y de supuestos mitos como el del “Tercer Mundo” o el del “imperialismo”), y su afán modernizador y occidentalista. Quizás el caso más conocido de esta propuesta sea el libro del economista peruano Hernando de Soto llamado *El otro sendero* (1986). El título era una referencia provocadora ante el apogeo de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, por entonces de fuerte presencia en ámbitos rurales y urbanos. En el libro De Soto aborda

el problema de la informalidad económica de Perú bajo un prisma muy innovador y provocador, por cuanto plantea que se trata de un fenómeno social potencialmente positivo: las iniciativas económicas cotidianas que toman cada día miles de limeños para ganarse el pan constituyen un capital humano creativo e innovador al que un Estado oprobioso y sobrerreglamentador intenta controlar y apagar. La informalidad aparece entonces como un gesto de rebeldía frente al predominio fiscalista y un reservorio de energía económica, y no como muestra de la incapacidad de la economía para producir suficientes y permanentes fuentes de empleo. Las expresiones de De Soto condensaron y vulgarizaron un conjunto de valores morales y económicos que terminaron prosperando y haciéndose sentido común en los años noventa: meritocracia individual, rechazo a la intervención estatal para igualar lo que el mercado jerarquiza, desregulación de la actividad económica y convicción de que el desamparo social es una herramienta positiva para el crecimiento económico.

JESÚS OBRERO CONTRA SANTIAGO MATAMOROS: LAS DISPUTAS DENTRO DEL CATOLICISMO

Las sensaciones de amenaza que las élites sociales y económicas tuvieron en las décadas de 1960 y 1970 se intensificaron porque fueron sincrónicas con transformaciones vividas por la Iglesia católica. Fueron múltiples los impactos teológicos, organizativos, pastorales y políticos del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de las particulares lecturas que de éste y de la encíclica *Populorum Progressio* hicieron los obispos en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968). La Iglesia dejó de actuar como un respaldo acérrimo, permanente y automático al *statu quo*, dado que manifestó simpatías explícitas por las reformas en la propiedad rural o por la redistribución del ingreso, como ocurrió

con la “Revolución en Libertad” de Eduardo Frei en Chile (1964-1970), o con Goulart en Brasil (1961-1964). En varios países la Iglesia orientó sus apoyos políticos hacia partidos reformistas como la democracia-cristiana, y toleró e incluso promovió el diálogo con fuerzas de la izquierda política y gremial. Algunos sacerdotes se involucraron abiertamente en la sindicalización de los campesinos, y con ello desafiaron no sólo a las fuerzas de izquierda con las que competían —y a veces cooperaban—, sino también a los latifundistas. El surgimiento de una línea de “teología para la liberación” y de la “opción por los pobres”; la publicación de la *Teología de la liberación: Perspectivas* (1971) del peruano Gustavo Gutiérrez; el “Mensaje de los 18 Obispos del Tercer Mundo” (1967) firmado entre otros por el brasileño Hélder Câmara —antiguo integralista, como se mencionó—; la creación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (1968), o el movimiento de los “curas vileros” (en asentamientos de emergencia en Argentina) daban cuenta de que una importante facción de uno de los históricos defensores del orden se mostraba definitivamente en juego con el otro bando. De hecho, varios sacerdotes abandonaron los hábitos y se alistaron en organizaciones armadas o colaboraron con ellas: entre otros tenemos los casos del colombiano Camilo Torres (muerto en combate en 1966), el brasileño Frei Betto (preso entre 1969 y 1973) y el argentino Gerardo Ferrari (asesinado por la policía en 1969). A fines de 1989, tropas del Ejército salvadoreño ocuparon la sede de la Universidad Centroamericana y asesinaron a seis sacerdotes jesuitas cercanos a la teología de la liberación.

Esta renovación de la Iglesia católica sacudió de manera notoria —y a veces irreversible— la fisonomía y las identidades de las derechas latinoamericanas. Ese proceso condujo a una erosión y a veces incluso a una ruptura de los lazos históricamente sólidos entre la curia, las familias de élite y los partidos conservadores, pero también entre la curia y las Fuerzas Armadas. Este distanciamiento fue vivido por numerosas figuras de la derecha, de las Fuerzas

Armadas y de la élite social como una auténtica traición, que llevó a la búsqueda de referentes religiosos alejados de las perspectivas oficiales. El general Juan Carlos Onganía, dictador en Argentina (1966-1970), estaba muy vinculado con la organización católica tradicionalista francesa Cité Catholique de Jean Ousset y con la revista *Verbo*. La intensidad de los conflictos intracatólicos también se dejó ver bajo el gobierno de João Goulart en Brasil. En ese país las campañas anticomunistas tomaron un carácter ecuménico: eran en nombre de Dios y de la familia, y dejaban de lado las invocaciones antaño dominantes a Jesús o a la virgen María. Ello permitió incluir en las movilizaciones y ceremonias anticomunistas a rabinos y pastores protestantes, como mostró Rodrigo Patto.

En ese marco debemos entender la aparición o la potenciación de organizaciones católicas que se opusieron a la línea oficial de Roma y de los Episcopados nacionales y, sobre todo, a los sacerdotes, monjas y laicos que se habían orientado hacia la teología liberacionista. Uno de los casos más conocidos fue la Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), creada en 1960 por Plínio Corrêa de Oliveira. La TFP se expandió por diversos puntos de las Américas: estableció redes y filiales en Argentina, Chile, Colombia y los Estados Unidos, entre otros puntos. Ya durante las reuniones del Concilio en Roma en 1962, la TFP advirtió sobre la infiltración del comunismo, el judaísmo y la masonería en la curia papal. En su percepción política, los sacerdotes y monjas que desplegaban un discurso social y reformista debían ser separados y perseguidos.

La otra organización católica integrista que operó con fuerza en este periodo fue la de los Tecos (apócope de Los Tecolotes), una entidad secreta creada en Guadalajara en 1934. Furiosos anticomunistas, los Tecos se dieron a la tarea de crear organizaciones estudiantiles en diversos puntos de México (la capital, Puebla y Guadalajara, donde tuvieron su propia universidad) de manera coordinada con las autoridades eclesíásticas locales y con el ya mencionado Prieto

Laurens: éste y los obispos se encargaban también de proveer apoyo religioso y operativo a sus militantes, quienes no tenían mayores reparos en recurrir a armas de fuego. En los años sesenta se unieron al PRI de Jalisco en su persecución contra el comunismo. Tanto figuras de la TFP como de los Tecos participaron en diversos congresos de la World Anti-Communist League realizados en ciudades de Asia entre 1967 y 1971, y, de hecho, los Tecos fueron los organizadores del congreso que en 1972 se realizó en Guadalajara y que dio origen a la Confederación Anticomunista Latinoamericana.

Junto con esas organizaciones, debemos dar cuenta del accionar de diversos sacerdotes, quienes, a título más bien individual, hicieron gala de unas críticas feroces a la reconciliación entre fe y modernidad que estaba ensayando el Vaticano. Su encono tradicionalista contra la Iglesia oficial, así como un reverdecido antisemitismo los condenaron a cierto ostracismo institucional y a recostarse en organizaciones y redes anticomunistas nacionales y continentales. Fue el caso del brasileño Geraldo de Proença Sigaud (1909-1999), arzobispo de Diamantina en los años que abarca este capítulo. Furioso antirrevolucionario y denunciador de complots de masones, judíos y comunistas contra Roma, fundó en 1963 junto a monseñor Marcel Lefebvre en Roma el Coetus Internationalis Patrum, organismo que nucleaba a los sacerdotes enfrentados al Concilio Vaticano II. Lefebvre fue el máximo animador de la tesis del sedevacantismo, que postulaba que el Papa Pablo VI era un ocupante ilegítimo del trono de Pedro. Por ello, Lefebvre fue excomulgado en 1988, sanción que también le cupo a Antônio de Castro Mayer, obispo de Campos, en Brasil. Probablemente los mayores animadores de esas ideas fueron los jesuitas Julio Meinvielle (argentino, 1905-1973) y Joaquín Sáenz y Arriaga (mexicano, 1899-1976). Sáenz y Arriaga fue un encarnizado defensor de las lecturas tradicionalistas. Publicó *Sede Vacante: Paulo VI no es Papa legítimo* (1973) y *La Nueva Iglesia Montiniana* (1972), libros en los que daba cuenta de que el Concilio Vaticano II era resultado del accionar de la mafia judía en Roma. Su postura le costó ser excomulgado.

Meinvielle fue un entusiasta asesor de los nacionalistas argentinos de los años treinta, a los que proveyó de varias obras de doctrina católica sistemáticamente antisemita y anticomunista. A fines de los años cincuenta actuó como consejero espiritual del Movimiento Nacionalista Tacuara, y en 1972 fue uno de los conferencistas invitados al mencionado congreso de la World Anti-Communist League en Guadalajara. Según mostró Mario Santiago Jiménez, Meinvielle viajó frecuentemente en las décadas de 1950 y 1960 a México, donde asesoró teológicamente a los jóvenes de los Tecos y de El Yunque (otra organización secreta que había sido creada en 1953).

CONCLUSIONES

Podemos detectar que en los años sesenta y setenta hubo desafíos abiertos a la capacidad de las élites económicas y políticas para gobernar la sociedad: esos desafíos se expresaban a veces más en los niveles simbólico y político y en otras ocasiones también alcanzaban esferas propiamente económicas. Actores militares, políticos y empresariales percibían de manera pesimista el cuadro económico y político de la región y veían con aprehensión una potencial reducción de su capacidad para mantener el *statu quo*. Por ello echaron mano a todos los elementos disponibles para defender sus intereses y sostener el orden social y moral que los beneficiaba, entre ellos aceptar o promover las dictaduras más represivas de la historia latinoamericana. Ellos no lo sabían, pero en ese mismo periodo se vivió el inicio del descenso de la curva revolucionaria del siglo xx: impulsos “revolucionarios” como los alentados por la URSS, la China posterior a Mao y Cuba parecían haberse agotado ya en los años setenta. Los potenciales relevos (Vietnam más genéricamente, y Nicaragua en el ámbito local) se vieron sofocados por una agenda doméstica y nunca tuvieron la capacidad y quizá tampoco el interés por liderar globalmente los procesos revolucionarios.

El despliegue obsesivo de la agenda de la seguridad contra el “enemigo interno” tuvo enormes consecuencias en el corto y en el largo plazos en el continente. La constitución de regímenes cerradamente anticomunistas fue de la mano de una intensificación de la persecución y sobre todo de un salto cualitativo en las tecnologías de vigilancia, secuestro y exterminio de los enemigos políticos. Los costos en vidas humanas fueron pavorosos y deben medirse en muchos miles. A los muertos deben sumarse los exiliados y quienes sufrieron diversas formas de sanción legal, como la pérdida de la nacionalidad, de derechos civiles o, lisa y llanamente, de la libertad. El uso masivo de la prisión política, tanto oficial como clandestina, fue un rasgo recurrente de estos regímenes. En 1976 Amnistía Internacional denunció que Uruguay era el país con más cantidad de presos en relación con el total de sus habitantes.

Los puntos de mayor letalidad fueron, en primer lugar, Guatemala y, luego, Argentina. En el primero de esos países el *Informe de la Comisión de la Verdad* en 1999 fijó en 130 000 el número de asesinados, en 45 000 los desaparecidos y en 250.000 los niños huérfanos desde 1961 (sobre una población de poco más de 10 millones de habitantes a fines del siglo xx). Entre 1978 y 1982 se desplegaron numerosas operaciones represivas destinadas al asesinato colectivo de campesinos (conocidas como Tierra Arrasada y Frijoles y Fusiles), que han sido caracterizadas por muchos analistas como intentos de genocidio y que han generado muchísimos desplazamientos de la población rural: medio millón de refugiados en México y un millón de desplazados dentro del país. En Argentina las organizaciones de derechos humanos han estimado en 30 000 el número de víctimas, producidas principalmente entre 1976 y 1980. La virulencia de la represión acabó por producir miedos de larga duración en sociedades como la chilena, la cual se demoró mucho tiempo en tratar explícitamente los problemas asociados con las herencias y continuidades dictatoriales. El deseo de

restaurar las formas de dominación que amenazadas, de reubicar a cada uno (y cada una) en “su” lugar y de relanzar la actividad económica sin el peso de los compromisos con los trabajadores en pocos países fue compatible con la democracia: allí donde se mantuvo el orden constitucional, como México o Colombia, eran detectables enormes deficiencias —o, directamente, falta de voluntad— para garantizar el estado de derecho.

Las dictaduras y la imposición de una agenda política centrada en lecturas securitistas pueden ser entendidas de dos maneras opuestas. En primer lugar, como muestra de la capacidad de las fuerzas sociales dominantes para impedir el avance de reformas radicales, inmovilizar a la sociedad y congelar los embates de sus adversarios, sean las oposiciones de izquierda (Uruguay, Argentina, Nicaragua, El Salvador), gobiernos de izquierda (Brasil, Chile) o militares de izquierda (Perú, Bolivia, Ecuador). Pero, paradójicamente, también pueden percibirse como evidentes señales de debilidad de argumentos, de falta de autoconfianza y de capacidades de las derechas para gobernar —o seguir gobernando— a sociedades que habían entrado en procesos de turbulencia social y que reclamaban democratización, distribución de tierras y mejoras de las condiciones de vida de la población. En efecto, los años anteriores a los golpes de Estado de Brasil en 1964, de Uruguay y Chile en 1973, de Argentina en 1976 y de países centroamericanos como El Salvador y Guatemala están plagados de hechos que dan cuenta de la incapacidad hegemónica de los gobiernos para controlar tanto el proceso político como el económico.

La estrechez de los intereses materiales defendidos, el seguidismo a los intereses estadounidenses y un anticomunismo acérrimo que veía a Moscú detrás de cualquier iniciativa reformista condujeron a las fuerzas de derecha a un evidente aislamiento social y político que reforzó las tendencias autoritarias y dinamitó desde mediados de los años sesenta los potenciales puentes con otras fuerzas políticas, como los partidos demócrata-cristianos o populistas, que tampoco mostraban entusiasmo por el socialismo soviético ni por las guerrillas rurales

o urbanas (estas últimas, predominantes luego del fusilamiento del Che Guevara en 1967). En ese proceso de retroceso de sus capacidades políticas, las élites echaron mano a las fuerzas armadas, a los medios de comunicación, a la embajada estadounidense y a las figuras más conservadoras de la Iglesia para retener o recuperar el poder. El camino de las victorias electorales de sus representantes les era esquivo, y cuando les sonreía, conducía a irresolubles problemas de gobernabilidad o a la imposibilidad de imponer las políticas públicas deseadas: la democracia dejó de ser compatible con el resguardo de esos intereses. Podríamos decir, en consecuencia, que las dictaduras surgen en un contexto social conflictivo y de una intensa politización que no pudo o no quiso ser controlada ni absorbida por las derechas y que terminó siendo objeto de intervención de un actor con enorme poder de fuego, como lo eran las Fuerzas Armadas. Esa intervención no fue posible sólo por el hecho de que las fuerzas políticas conservadoras fueron superadas en su capacidad de negociación y de integración, sino también por una serie de innovaciones ideológicas e institucionales producidas dentro de las instituciones castrenses desde los años cincuenta en contacto con las doctrinas militares francesa y estadounidense.

El precio que las fuerzas de derecha liberal-conservadora pagaron por alentar o tolerar las dictaduras fue que, tras iniciarse los procesos de transición a la democracia en los años ochenta, no quedaron bien paradas, precisamente por su pública asociación con aquellos regímenes *de facto* y sus consecuencias de todo orden. Como veremos en el próximo capítulo, los primeros gobiernos posdictatoriales estuvieron, en general, en manos de las fuerzas políticas que habían sido opositoras a los regímenes autoritarios. Sin embargo, de ese proceso terminaría emergiendo el nuevo rostro dominante de las derechas desde la década de 1990, el neoliberalismo, un conjunto de ideas que, como se vio, todavía en los años setenta sonaban muy alejadas de los grandes consensos sociales, incluso entre los grupos empresariales.

CAPÍTULO 6
DEMOCRACIA, DERECHAS Y NEOLIBERALISMO
(1989-2015)

Ese que “Al capital goma 2”
con *spray* pintaba en la pared
sufre de exceso de colesterol
si fluctúan los tipos de interés.
Y hoy tiene un adoquín
en su despacho
del muro de Berlín.

Joaquín Sabina,
“El Muro de Berlín”

El 2 de febrero de 1989 Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia de Venezuela. El recuerdo de su primer mandato (1974-1979) era ciertamente positivo para la mayor parte de la población, por cuanto refería al tiempo en el que el país, destacado exportador petrolero, aprovechó las portentosas alzas del precio del crudo tras 1973. Las expectativas eran, en consecuencia, de continuidad de esos tiempos “sauditas”, incluyendo la ampliación del gasto social, el alza de subsidios y el mantenimiento de salarios reales altos. Pese el anhelo de restauración de la edad dorada de los petrodólares, Pérez reapareció con equipos e ideas neoliberales que fueron exactamente en el sentido contrario. Las restricciones económicas, el déficit fiscal y la baja del precio del crudo convencieron al nuevo presidente de que debía reducir y no expandir el gasto público, y de que eso debía hacerlo a través de medidas de *shock* que no dieran tiempo de respuesta a aquéllos potencialmente afectados por la decisión. Este tipo de planes se ajusta a lo que Susan Stokes denominó la llegada del “neoliberalismo de sorpresa”, episodios de ruptura violenta y explícita del contrato preelectoral entre autoridades y votantes. El paquete de Pérez apuntaba a desregular una economía que se creía

esclerotizada por el peso del Estado, su déficit y su deuda externa. El presidente tomó la decisión de liberar las tasas de interés y de cambio, así como la mayor parte de los precios; incrementar las tarifas del transporte y servicios públicos; cerrar el ingreso de empleados al Estado; abrir las importaciones, y duplicar el precio de los combustibles. El programa le otorgaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) la supervisión de la marcha general del plan para reducción del déficit a cambio de que liberara préstamos frescos. Los disturbios, saqueos e incendios y otras formas de resistencia popular al paquete de medidas de Pérez fueron conocidos como Caracazo. La brutal represión del Ejército dejó un saldo oficial de 300 muertos, pero distintas organizaciones multiplican varias veces ese número. Rescato de estos episodios de inicios de 1989 tres elementos que se repitieron en varios países en los años siguientes.

En primer lugar, el peso y la legitimidad que habían obtenido el diagnóstico y el recetario neoliberal, al punto de que habían penetrado en partidos que históricamente habían sido celosos promotores del dirigismo económico y de la ampliación de la protección social brindada por el Estado. El segundo aspecto es que la implementación de las medidas neoliberales como las que introdujo Pérez —y luego otros presidentes— tuvo un impacto social y político inmediato, que se expresó en inestabilidad política. El tercer punto tiene que ver con la centralidad política que tomó el FMI en la región —y más en general en las periferias mundiales—: obtener su visto bueno respecto del plan económico propuesto a la ciudadanía, del presupuesto presentado en el Parlamento y de las políticas impositivas, monetarias, comerciales, laborales y financieras se convirtió en una obligación más importante que el cumplimiento del programa preelectoral o de los compromisos históricos de cada partido con sus votantes. En este último aspecto encontramos entrampados a algunos de los partidos políticos latinoamericanos tradicionalmente clasificados como populistas. Dados a elegir entre coherencia identitaria

o atender los intereses de los poderosos acreedores externos y de los actores más concentrados de la economía nacional, esta segunda fue la opción tomada.

El año 1989 está saturado de hechos de una enorme trascendencia a nivel de hemisférico y global. Su mera enumeración, sin ser exhaustiva, permite hacerse una idea de las transformaciones que se produjeron a partir de entonces. Para empezar, fue el año en el que los países de Europa del Este, hasta entonces integrantes del bloque soviético, vivieron revoluciones o transiciones que en cuestión de meses los convirtieron en sociedades capitalistas y en vías de incorporar la democracia multipartidaria como régimen de gobierno. El derrumbe del Muro de Berlín en noviembre actuó como símbolo de la finalización de la Guerra Fría, momento en el que, si esto hubiese sido un *round* de boxeo, el árbitro le habría levantado la mano al ganador indiscutido, los Estados Unidos, frente a un rival acostado sobre la lona. El nuevo balance geopolítico se trasladó rápidamente a América Latina, donde las voces comprometidas con las izquierdas vivieron una temporada de reflujo y de extravío ante la abrumadora derrota histórica del proyecto comunista. La invasión de *marines* a Panamá en diciembre de 1989, con el objeto de llevar ante la justicia estadounidense al entonces presidente Manuel Noriega, dio cuenta de que se harían más desembozados los vínculos de dominación de los Estados Unidos sobre la región. En junio de ese año se creó en Nicaragua la Unión Nacional Opositora, que le disputó y le arrebató la presidencia al sandinismo meses después: con ello se cerró la experiencia de la revolución nicaragüense iniciada una década atrás. Por otro lado, en febrero de 1989 terminó la más longeva de las dictaduras latinoamericanas, la liderada por el general Alfredo Stroessner en Paraguay desde 1954. En diciembre el general Augusto Pinochet fue testigo del triunfo electoral de Patricio Aylwin, candidato presidencial opositor. A estos episodios cabe agregar los procesos de súbita conversión al neoliberalismo de los líderes de partidos populistas o reformistas

—el peronismo, el MNR boliviano, el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) brasileño, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, la Acción Democrática venezolana—, que se dieron a la tarea de reorientar rápidamente sus propuestas y su acción de gobierno hacia el llamado Consenso de Washington.

Podemos proponer, a partir de este conjunto de acontecimientos, que hacia 1989 se cierran simultáneamente tres ciclos históricos en América Latina de distinta naturaleza y duración: el de las dictaduras iniciado en 1964, el de la Guerra Fría que comenzó en 1946 y el de economía mercado-internista, alentado desde los años treinta.

Se podría sintetizar el proceso en la idea de que las derechas aceptan la democracia definitivamente a finales del siglo xx porque se trata de democracias neoliberalizadas, esto es, de regímenes políticos en los cuales las pujas, las luchas y la negociación políticas no ofrecen riesgos para las élites. Son democracias en las cuales la única iniciativa política admisible es aquella que refuerza una orientación económica neoliberal y controla los niveles de participación y toda la dimensión sustancial de la vida política. Esa derecha neoliberal dominante encontró un límite con la constitución de polos antineoliberales, algunos de los cuales llegaron al gobierno y pusieron en jaque aspectos de la dominación tal como se la ejercía desde los años noventa. Los gobiernos de la llamada “marea rosa” a inicios del siglo XXI comenzaron a poner en discusión muchos de los rasgos del programa neoliberal: fue entonces que se produjo un proceso de descomposición de ese gran acuerdo sobre el camino neoliberal que era más multipartidario que social.

DEMOCRACIAS, NEOLIBERALISMO Y NUEVA GEOPOLÍTICA

Los cambios geopolíticos globales transitados después de 1989 condicionaron fuertemente los procesos políticos de América Latina. El final de la Guerra Fría produjo un efecto paradójico. Por un

lado, eliminó cualquier atisbo de desafío a la hegemonía estadounidense en la región: desde los años noventa Cuba estuvo lejos de contar con los recursos necesarios para asumir esa función. Las intervenciones del gobierno estadounidense se dejaron ver con el envío de la misión militar para reponer en el poder al presidente Bertrand Aristide en Haití en 1994, pero sobre todo con el lanzamiento de un ambicioso proyecto militar y financiero llamado Plan Colombia, que desde el año 2000 transfirió dinero, tecnología y equipamiento militar a Bogotá con el propósito de eliminar la producción de narcóticos, aunque posteriormente tuvo derivas y usos contra la guerrilla. En esos años se expandió el número de bases militares estadounidenses en el Caribe, incluyendo el uso renovado de la prisión de Guantánamo en la isla de Cuba para los prisioneros provenientes de Afganistán e Irak, así como la provisión de sistemas de radares para control de los vuelos furtivos de narcotraficantes en Perú, Colombia y Paraguay.

Pero esa eliminación casi completa de cualquier esbozo de resistencia geopolítica a Washington —y la mencionada invasión a Panamá fue prueba contundente de ello— se acompañó de cierta pérdida de interés estadounidense en la región, un fenómeno al que los especialistas han llamado “abandono benigno”. Desde 1989 América Latina perdió por años el fuerte atractivo que tenía para el Departamento de Estado, que permaneció más concentrado en el devenir de la transición a la democracia y el capitalismo de los países de Europa del Este primero y de Afganistán y Medio Oriente luego de 2001. Las repúblicas de América Latina no fueron ya objeto de un escudriñamiento tan asfixiante de su situación política, como cuando se pensaba que la “amenaza comunista” pendía sobre esa región. En todo caso, el bolivarianismo exportado por los ingresos petroleros de Venezuela fue resistido desde Washington, pero no fue percibido como un riesgo geopolítico inminente ni comparable al de La Habana o a las guerrillas sudamericanas y centroamericanas en los años setenta, un riesgo que había alentado —al menos justificado— la imposición de

dictaduras militares obsesivamente anticomunistas. El monitoreo político recayó más en el FMI y el Banco Mundial que en el Departamento de Estado.

Si en 1980 eran contados los países latinoamericanos con democracia, 10 años después la situación era exactamente la contraria. A través de procesos pactados entre las Fuerzas Armadas y las principales fuerzas partidarias nacionales, a lo largo de los años ochenta se implementaron las salidas de las dictaduras. Salvo en los casos de Bolivia y de Argentina, donde el colapso de la gestión (o la derrota militar) forzó a los militares a buscar desesperadamente que los civiles se hicieran cargo del marasmo que dejaron, en general se trató de transiciones lentas, reversibles, con rendiciones de cuentas acotadas y muy controladas. De allí entonces que pueda señalarse que el proceso es mucho más expresión de una retirada estratégica de las Fuerzas Armadas que la imposición de la sociedad civil o una supuesta revalorización universal e irrefrenable de la cultura política democrática y de los derechos humanos. De hecho, luego de la asunción de los primeros presidentes civiles, las Fuerzas Armadas retuvieron poder político y actuaron —a veces de manera explícita con planteos, a veces velada con alguna exhibición de poderío bélico en las calles— como tutoras de los nuevos gobiernos y de la potencial actuación judicial sobre la represión militar y paramilitar ocurrida en el pasado reciente, y también para exigir el respeto a la legislación producida bajo el régimen dictatorial. Como mostró Edelberto Torres Rivas, en América Central la transición a la democracia no significó la llegada de la paz sino la continuidad de la guerra bajo un manto de mayor legitimidad política. El final de las dictaduras no trajo inmediatamente la paz, sino una reconversión de la lucha contra las guerrillas y los acusados de apoyarlas o simpatizar con ellas. En Colombia, de hecho, la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —y los movimientos sociales— ha sido más intensa a inicios del presente siglo que antes, y los

asesinatos políticos a líderes de izquierda no han mermado en El Salvador ni en Guatemala desde la firma de los tratados de paz en 1992 y 1996, respectivamente.

Las primeras elecciones presidenciales tras las dictaduras tendieron a consagrar a los partidos opositores o al menos a los candidatos que proponían deshacerse, así sea selectivamente, de algunos de los rasgos de los regímenes autoritarios. Los derrotados en general fueron los partidos que decían representar la herencia dictatorial o que habían manifestado menos hostilidad a convivir con ella. Como mostró Loxton, hubo partidos conservadores herederos de la dictadura cuya suerte en las urnas les fue desfavorable, porque no conectaban bien con una sociedad que anhelaba mayores niveles de libertad cotidiana y que ya no se asustaba ante las amenazas del comunismo —Unión del Centro Democrático (Ucede) en Argentina, Partido de Avanzada Nacional (PAN) de Guatemala—. Pero hubo otros partidos conservadores que sí consiguieron aprovechar las ventajas y las redes legadas por las dictaduras y obtuvieron importantes espacios en la vida política constitucional —Unión Demócrata Independiente (UDI) en Chile, Partido da Frente Liberal (PFL) en Brasil, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en El Salvador y fracciones blancas y coloradas en Uruguay—. Estos partidos, en algunos casos creados por la dictadura para asegurar su continuidad, asumieron como propia la tarea de defender su legado memorial respecto de otras interpretaciones —incluyendo la judicial—, su orientación económica, y el presupuesto, las prerrogativas y las facultades corporativas de las Fuerzas Armadas.

Esos partidos, que habían participado en el proceso de transición a las democracias, formaron parte del *lobby* promilitar e invitaron a sus compatriotas al olvido o a un mutuo perdón entre victimarios y víctimas de la represión dictatorial. En países como Chile o Brasil esa causa tuvo un respaldo social y electoral significativo en diversas capas de la población. James Loxton ha mostrado que diversos partidos conservadores heredaron y aprovecharon

recursos políticos de las dictaduras, tales como la organización territorial, redes clientelares, conexiones con los empresarios, un pasado compartido y una cierta identidad reconocible en el sistema de partidos. Es por eso que este politólogo ha señalado que los “partidos sucesores” de las dictaduras “tuvieron éxito *debido* a sus vínculos con esos regímenes y no pese a ellos [...] Tener las raíces en las antiguas dictaduras pudo, bajo ciertas circunstancias, ser una bendición más que una maldición para los nuevos partidos”.

Con el paso de los años las derechas se fueron identificando cada vez más con el ideario neoliberal y con una propuesta de futuro más que con la defensa de las dictaduras. Al perseverar en su participación electoral a lo largo de los años noventa y los dos mil, oportunamente consiguieron acceder al poder ejecutivo por sus alianzas electorales, por su integración celular a los partidos triunfantes, por su sagacidad para integrar gabinetes presidenciales sin ganar elecciones, pero, sobre todo, por su capacidad para definir los temas de los debates ideológicos y con ello los límites de lo que se podía imaginar y hacer en materia de política pública.

Diversos militares que tuvieron altos cargos durante las dictaduras —incluso que ejercieron la primera magistratura— conservaron o alcanzaron cuotas de poder en posteriores gobiernos constitucionales. El caso más conocido es el del general Pinochet, quien tras 1990 siguió actuando como comandante en jefe del Ejército y en 1998 se convirtió en senador vitalicio. Pero si los cargos de enorme relevancia que tuvo Pinochet luego de su dictadura no fueron merced a alguna consagración electoral sino a la constitución que había hecho aprobar en 1980, más llamativos parecen ser los casos de Desiré Bouterse y los generales Hugo Banzer y José Efraín Ríos Montt. Bouterse fue dictador de Surinam entre 1980 y 1987 y posteriormente su presidente electo en 2010 y reelecto en 2015. A través de partidos con alguna trayectoria o creados *ad hoc*, Banzer presidió Bolivia entre 1997 y 2001, y Ríos Montt fue en dos ocasiones diputado nacional en Guatemala y quedó tercero

en las elecciones presidenciales de 2003. El general Antonio Domingo Bussi se convirtió en 1995 en el gobernador electo de la provincia argentina de Tucumán, espacio donde había tenido a su cargo la dirección de una sangrienta represión a mediados de los años setenta. Figuras civiles que tuvieron participación política en las dictaduras desarrollaron carreras políticas destacadas en los gobiernos democráticos, como el guatemalteco Mario Sandoval Alarcón, el salvadoreño Roberto D'Aubuisson —ambos líderes de escuadrones de la muerte y protagonistas de numerosos crímenes políticos— o el chileno Andrés Chadwick, elegido como uno de los representantes de la juventud “sana” del Chile pinochetista y luego ministro del Interior de Sebastián Piñera en sus presidencias. Paulo Maluf fue intendente de São Paulo durante la dictadura (1969-1971) y luego en el régimen democrático (1993-1997), cuando dicha urbe era la quinta más poblada del planeta.

La ausencia de golpes de Estado exitosos y el control civil de las Fuerzas Armadas pueden considerarse indudablemente como avances democráticos de los años noventa. Hubo un abandono de las carreras armamentistas entre los países, algo que había marcado los años setenta con mucha intensidad. Las hipótesis de conflictos bélicos internacionales desaparecieron, y de 1989 a la fecha se cuenta una única y breve confrontación armada, que se produjo en 1995 entre Ecuador y Perú por problemas limítrofes. Colombia y Venezuela se han amenazado reiteradamente, pero el conflicto no pasó a mayores. En lo referido a la Iglesia católica, si bien su *lobby* sobre la legislación de familia y de derechos sexuales y reproductivos siguió operando, no tuvo el peso de las décadas pasadas, en parte porque su agenda se concentró en las críticas a los efectos sociales de la economía neoliberal y en responder a las numerosas denuncias sobre pedofilia que comenzaron a poner en jaque a la institución. Es por ello que hubo acuerdo entre importantes fuerzas políticas para avanzar respecto de legislación a la que ésta se había opuesto por décadas: evidentemente se ha producido un

proceso de modernización de la legislación civil y política, con la adopción de leyes como las de patria potestad y de divorcio (Argentina en 1987 y Chile en 2004, un país de fuerte peso de la Iglesia católica). Incluso se legalizó el derecho al aborto en Guyana en 1995, en Uruguay en 2012 y en Argentina en 2020.

Otros aspectos de la vida democrática sugieren lecturas más matizadas o menos optimistas. La “calidad de la democracia” ha sido un tema recurrente de debate de los últimos 30 años del continente a causa de cuestiones tales como la frecuencia de las destituciones de presidentes por la vía de los juicios políticos o por la incapacidad de los gobiernos para manejar los efectos sociales adversos de los rumbos económicos tomados. La lista de los presidentes que renunciaron o les fue suspendido su mandato es larga: Fernando Collor de Melo (1992) y Dilma Rousseff (2016) en Brasil; Carlos A. Pérez en Venezuela (1993); Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador; Raúl Alfonsín (1989) y Fernando de la Rúa en Argentina (2001); Raúl Cubas Grau (1999) y Fernando Lugo (2012) en Paraguay; Alberto Fujimori (2000) y Pedro Pablo Kuczynski (2018) en Perú; Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003), y Jean-Bertrand Aristide en Haití (2004). La utilización de estos mecanismos de remoción de las autoridades parece ser un indicador de aceptación —sea por la vía del realismo o meramente por entusiasmo— de las reglas constitucionales para acceder al poder político.

Otro de los objetos de preocupación fue la aparición de un nuevo autoritarismo civil y un personalismo que se encarnó en reformas constitucionales. El deseo de extender en el tiempo la permanencia en el poder ejecutivo alimentó el autogolpe de Fujimori en Perú (1992), el que dio Jorge Serrano Elías en Guatemala (1993), los gobiernos del dominicano Joaquín Balaguer (1986-1996), los intentos de Carlos Menem de ser electo por tercera vez en 1999 tras 10 años como presidente argentino y las reelecciones de Hugo Chávez en

Venezuela (desde 1998 a su muerte en 2013) y de Evo Morales en Bolivia (desde 2006, incluyendo el desdén a un referéndum en 2016 que explícitamente le negaba el derecho a una reelección más). También se indicó como un rasgo negativo de esos años la promulgación excesiva e injustificada de decretos presidenciales como vía de producción legislativa por sobre la tramitación de leyes en el parlamento. La ciencia política le dio el nombre de hiperpresidencialismo a esa voluntad de fijar reformas desde el centro del sistema político, una metodología que fue usada tanto para implementar políticas neoliberales primero como para desmontarlas después.

La inestabilidad política del periodo está asociada con los impactos producidos por la reorientación económica de los últimos años del siglo xx. El giro neoliberal apuntó a desmantelar buena parte de las estrategias de desarrollo llevadas adelante durante medio siglo: a través de agresivas maniobras de reforma del Estado, de sus empresas y de la legislación en los años noventa se desarrolló un proceso de transformación económica que modificó enormemente las reglas de juego, así como el peso de los diferentes actores económicos locales y nacionales, y que incrementó la vulnerabilidad externa de los países latinoamericanos. La nueva política económica descansaba en la promoción de las exportaciones (primarias) como fuente de crecimiento; la ampliación y la liberalización del comercio internacional; un nuevo ciclo de endeudamiento con el exterior; apertura y protección a inversiones principalmente financieras; privatización de servicios y empresas públicas, y la desregulación de precios y de tarifas de servicios públicos. Una presencia amplia del gran capital europeo se interesó en participar en las privatizaciones de las empresas de provisión de servicios públicos (gas, teléfonos, ferrocarriles, electricidad, etcétera). En América Central hubo más presencia de capital estadounidense y canadiense en la compra de empresas eléctricas y de bancos

El llamado Consenso de Washington, según sintetizó John Williamson en 1990, constituía el decálogo del buen gobierno de la economía: 1) disciplina fiscal; 2) priorización del gasto público

en áreas de alto retorno económico; 3) reforma tributaria; 4) tasas positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio competitivos y liberalización financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) apertura a la inversión extranjera; 8) privatizaciones; 9) desregulación amplia, y 10) protección a la propiedad privada. Los actores externos pasaron a tener enormes papeles e incidencia merced a la capacidad otorgada al FMI para monitorear las cuentas públicas.

Las consecuencias sociales de este giro económico han sido negativas. Los años ochenta, a los que los economistas llaman la “década perdida”, incrementaron la pobreza (una condición en la que probablemente estaba la mitad de la población latinoamericana a finales de ese decenio). En los años noventa hubo crecimiento económico, pero se exacerbó la desigualdad económica y social, y en algunos casos se agravó la situación de la deuda externa (El Salvador la duplicó de 1995 a 2003). La erosión de la clase media, la informalización y la flexibilización del empleo, así como la aparición de segmentos profesionales con ingresos transnacionalizados contribuyeron a una distribución cada vez menos equitativa de los ingresos. En México y América Central se extendió la actividad de maquila: plantas para el ensamblaje de piezas industriales en zonas francas donde no se cumplen las normas laborales ni se realiza actividad sindical. Todo ello ha conducido a incrementar la desigualdad: según calculó José del Pozo, en 2001 el 10% más rico del continente concentraba 40% de las riquezas, mientras que el 20% más pobre era dueño de sólo 4%. La situación en países como México, Brasil o Chile era aun peor. La privatización de los servicios públicos que hasta entonces brindaba el Estado de manera monopólica trajo consigo alteraciones en la calidad y la universalidad de la cobertura. Las diferencias entre los servicios de salud y de educación que recibía —más bien podía pagar— la población fueron crecientes, al punto de que la esperanza de vida entre barrios de São Paulo podía variar hasta en 15 o 20 años.

El deterioro de las condiciones de vida y el incremento de los niveles de (auto) explotación impulsaron la organización de protestas y formas de resistencia a la avanzada neoliberal. En ese proceso tuvieron papel destacado no tanto los antaño poderosos sindicatos de trabajadores industriales, sometidos a la amenaza del desempleo y al impacto de la apertura comercial. Quienes lideraron la protesta fueron los empleados públicos, los estudiantes, los desempleados y movimientos sociales urbanos y rurales como los cocalleros de Bolivia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (México), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sem Terra, los piqueteros de Argentina y el Foro Social Mundial con sede casi permanente en Porto Alegre (Brasil), nacido en 2001. Ante el extravío ideológico de la izquierda, que tardó en sacarse de encima los escombros del muro berlinés, lo más creativo e innovador provino de esos movimientos sociales.

Las áreas rurales de América Latina ofrecían indicadores de calidad de vida mucho peores que las regiones urbanas: los conflictos por ocupaciones de tierras y por la definición de los territorios bajo control político de los pueblos originarios han jalonado la vida política de México, Guatemala, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, el sur de Chile y Argentina, sólo por mencionar a algunos de los países donde más se han hecho presentes estos choques. Las innovaciones constitucionales para darle reconocimiento y protección a la propiedad comunitaria de la tierra y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en general han tenido poco nivel de aplicación. El corrimiento de la frontera agrícola puesto al servicio de la ampliación de las exportaciones primarias (principalmente la soja) ha favorecido a los latifundistas, quienes han establecido alianzas con los partidos políticos de derecha y con las empresas multinacionales productoras de semillas y agroquímicos. En un sentido parecido ha ido la expansión de la gran minería sobre los Andes, de potencial (o efectivo) impacto contaminante sobre las

poblaciones humanas y con graves efectos sobre la agricultura local, pero que es promovida por considerarla una valiosa fuente de divisas.

En ese marco debemos destacar el agravamiento de la criminalidad urbana (secuestros, asesinatos y robos), desbordada a causa del creciente peso de las redes del narcotráfico, sobre todo en Colombia, Brasil y México. Países de América Central han estado sometidos a altísimos niveles de violencia delictiva desde hace veinte años, por el accionar de bandas armadas en connivencia con las fuerzas de seguridad. El grueso de las víctimas de la actividad delictiva urbana está compuesto por los sectores menos pudientes, que tienen menos acceso a formas de seguridad privada y que están expuestos mayor cantidad de tiempo en las calles. Los reclamos de seguridad y de persecución criminal han jalado muchas de las demandas de las derechas, mientras que las preocupaciones por el abuso y el racismo de la violencia policial han sido más propias de las izquierdas y de los movimientos sociales.

Una de las consecuencias del empeoramiento de las condiciones de vida es el incremento de los flujos migratorios dentro de los países y hacia los Estados Unidos. Ya no se trata sólo de la población mexicana que cruza la frontera hacia el norte, sino de millones de habitantes de varios países caribeños, sudamericanos y centroamericanos que han ingresado a los Estados Unidos y a Europa en las últimas tres décadas. En el año 2000 por cada dos salvadoreños que vivían en su país había uno en los Estados Unidos. En lo referido a movimientos internos, sin dudas el caso de Colombia es el más impactante: en este país, a causa de las disputas entre los grupos guerrilleros, los paramilitares, el Ejército y las redes de narcotráfico se han producido desplazamientos de millones de personas provenientes de ámbitos rurales que pugnan por salvar sus vidas. También en la década de 2010 fueron millones los venezolanos que abandonaron su país para huir de los problemas económicos o de la tensión política en ascenso. Las crecientes

dificultades de la población migrante para llegar a los Estados Unidos o a Europa han empujado a colombianos, venezolanos y haitianos a buscar destinos dentro de la propia América Latina, lo cual ha ido acompañado de algunos rebotes xenófobos.

Las reformas en la legislación laboral y la informalidad de la vida económica contribuyeron a que se fracturaran las identidades políticas de los trabajadores, un punto sobre el cual vale la pena detenerse. El politólogo Kenneth Roberts ha estudiado algunos de los impactos políticos generados por el nuevo rumbo económico. Entre ellos destaca tres. El primero es una creciente desinstitucionalización de la representación política, que es cada vez menos monopolizada por los partidos políticos, sobre los cuales pesan normalmente sospechas respecto de su probidad moral y eficiencia en la gestión. La representación política es cada vez más encarnada por *outsiders* o por políticos que intentaban mostrar que no eran políticos o que abandonaban los partidos tradicionales. La erosión de las identidades políticas colectivas, el peso de los medios de comunicación y la fragmentación de las experiencias laborales han contribuido a una mayor volatilidad electoral. En 2002, por primera vez en la historia de Colombia fue electo presidente un candidato que no era del Partido Liberal ni del Conservador.

El segundo punto es que, en consecuencia, esa representación política era menos masiva que en los años sesenta y setenta, puesto que la reorientación neoliberal de la economía les ha quitado capacidad para fijar temas de la agenda política a los sindicatos de trabajadores, en particular a aquéllos vinculados a los partidos populistas. Una vida política crecientemente profesionalizada (comunicación, encuestas, consultoría, campaña, uso de *marketing* y de *big data*, etcétera) ha aumentado el peso de las formas más tecnocráticas. Por ello se relaciona mejor con redes y organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas específicos antes que con las grandes confederaciones sindicales. En el tiempo de la “videopolítica”, tal como la definió

el politólogo Giovanni Sartori, la competencia electoral tendió a centrarse entre personalidades y grupos reducidos, que procuraban seducir a sus votantes con mensajes universales e inespecíficos y que renunciaban expresamente a cualquier identificación de clase y doctrinaria. Es comprensible que ese juego parecieran jugarlo peor las organizaciones de izquierda, porque en general estaban más ideologizadas que las de derecha. Pero también porque estaban más habituadas a que los sindicatos industriales fueran su interlocutor predilecto y no el creciente y heterogéneo sector informal urbano, que construye su identidad política de una manera más difícil de predecir, por fuera de los ámbitos laborales.

De allí el tercer rasgo identificado por Roberts, una fuerte verticalización y clientelización de los lazos entre los partidos y la sociedad, que ha desplazado a los anteriores patrones de representación de intereses de las clases sociales. Las convocatorias de los candidatos se desplazan por redes jerarquizadas, que intercambian favores y ventajas individuales, y que cada vez en menos ocasiones convocan a participar en movilizaciones masivas. La sobrevida de los partidos, en particular de sus cúpulas, depende de las conexiones con aparatos de Estado más que de los vínculos con las bases sociales. Éstas aparecen atomizadas tanto por la erosión de la capacidad igualatoria de las políticas sociales del Estado como por la fragmentación social y de experiencias que produce la brutal desregulación de los mercados de bienes y de empleo desde los años noventa.

¿HAY ALGÚN NO NEOLIBERAL EN LA SALA?

Las opciones disponibles para los gobernantes provenientes de extrema derecha, de la izquierda social-cristiana, del APRA peruana o del populismo parecían reducirse a una sola: desregulación, extranjerización y privatización de la economía. La cesión de la facultad

estatal para fijar precios al “mercado” y la asignación de la responsabilidad de la política financiera a los bancos les impusieron a los partidos la noticia de que tenían pocos medios para diferenciarse en materia de oferta electoral: en general, tendieron a presentarse como versiones más adecentadas, más “éticas” como se decía en esos años, o con mayor “rostro humano del Estado” de lo que ya venían haciendo los gobernantes. Varios de los puntos que distanciaban históricamente a las izquierdas y a las derechas, nacionalistas y liberales de América Latina, se erosionaron o desaparecieron después de 1989: luego de entonces ningún actor relevante de la política parecía dispuesto a promover o a aceptar algo distinto que una democracia multipartidaria y un mercado lo más abierto posible a las inversiones y las iniciativas privadas. Ello legitimaba las alianzas electorales creadas contra fuerzas consideradas anticuadas, como la que supuestamente encarnaba la candidatura de Lula da Silva en 1994 y 1998, o la de Andrés Manuel López Obrador en 2006. El acuerdo sobre este punto parece haber sido tan amplio que permitió que circulara y se comentara con cierta seriedad la argumentación de Francis Fukuyama sobre el advenimiento del “fin de la historia” y la llegada de un tiempo de administración civilizada y despolitizada de los conflictos sociales.

En general, los políticos no discutían la idea de que la economía de mercado tenía sus reglas específicas y objetivas, que debían ser administradas por técnicos no partidarios. Las voces neoliberales insistían en que el arte del gobierno tenían que ejercerlo sólo aquellos que conocían y respetaban las “leyes objetivas de la economía”, en particular la que postulaba que los deseos de los mercados financieros debían considerarse la prioridad de la acción estatal. Quienes así lo entendían eran “expertos” cosmopolitas, formados en instituciones “serias”, con experiencia laboral en instituciones financieras, en muchos casos provenientes de familias encumbradas y cuya opinión era recabada por la prensa especializada en economía (equiparada de manera recurrente con la actividad bursátil y financiera).

Por el contrario, las voces que no participaban de estas ideas eran criticadas por las derechas, por tratarse de figuras “ideologizadas” y arcaicas, que seguían pensando que la política debía gobernar sobre la libertad de los mercados. Así, eran arrojadas por la prensa y “los mercados” al campo del pensamiento no racional, anticientífico o nostálgico (a ellos se refirió el presidente argentino Menem como que “se quedaron en el 45”, indicando que añoraban las condiciones que habían permitido el origen del peronismo). Como mostró Mariana Heredia, en los años ochenta se produjo el divorcio entre un saber de la política (una actividad entendida como eminentemente corrupta) y la economía (que supuestamente se regía por leyes naturales y transparentes). De hecho, en estos años tenemos muchos más economistas devenidos altas autoridades políticas que políticos ocupando la función de autoridades económicas. Domingo Cavallo en Argentina, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Carlos Salinas de Gortari en México y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia obtuvieron (o intentaron obtener) la presidencia luego de su paso por áreas económicas del gabinete. Pero también la política se llenó de muchos empresarios: Mauricio Macri en Argentina, Vicente Fox en México, Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lasso en Ecuador, Horacio Cartés en Paraguay, Elías Saca y Nayib Bukele en El Salvador, etcétera.

Coaliciones de centro-izquierda y de centro-derecha proponían en general lo mismo, puesto que aceptaban las reglas de una economía neoliberal que producía recurrentemente crisis para cuya solución se invitaba a más reformas neoliberales, lo que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión”. De hecho, uno de los argumentos más perversos usados en aquellos años era el que postulaba que si la política económica implementada generaba protestas de sectores amplios de la población por verse afectados negativamente sus niveles de vida, era señal inequívoca de que se estaban tomando las medidas correctas, avaladas por la ciencia económica. Y las crisis no faltaron en los últimos 30 años en el mundo

en general y en América Latina en particular: Crisis del Tequila (1994), Asiática (1997), Rusa (1998) y de las Hipotecas (2008).

Resulta claro que en los años noventa se acotó el margen de maniobra para los gobernantes que procuraran transitar un camino económicamente heterodoxo en un mundo que estaba cada vez más globalizado. Los gobiernos de Raúl Alfonsín en Argentina (1983-1989), Jaime Lusinchi en Venezuela (1984-1989), Alan García en Perú (1985-1990) y José López Portillo en México (1976-1982) terminaron con episodios de altísima inflación, devaluación, corridas bancarias y crisis de la deuda. Sus sucesores en el cargo tomaron debida nota de las consecuencias económicas y políticas de gobernar sin prestar atención de manera casi exclusiva a los intereses de los actores financieros y del FMI. Antes de que Carlos A. Pérez girara hacia la ortodoxia neoliberal lo había hecho Víctor Paz Estenssoro, quien presidió Bolivia entre 1985 y 1989. El presidente decidió poner en marcha un programa de estabilización y de control del gasto público que dio por tierra con lo que habían sido las líneas ideológicas del MNR desde los años cincuenta. Ese giro de la política económica hacia lineamientos defendidos por el FMI permitió controlar la inflación, que hasta ese momento estaba desbocada. El precio pagado fue que el MNR licuó cualquier tentativa de mostrar coherencia o continuidad ideológica.

Algo parecido ocurrió con el peronismo en 1989. Carlos Menem fue electo con promesas de “revolución productiva” y de relanzamiento de la Argentina opulenta: sin embargo, tras asumir en un contexto de una hiperinflación, el presidente dio por tierra con esas consignas y con las expectativas de los votantes y orientó la política económica según los parámetros neoliberales. En pocos años el peronismo pasó de ser el partido de la Argentina industrial (sobre todo de sus trabajadores) para ser el campeón del neoliberalismo en la región: privatización acelerada de empresas públicas, cierre de ramales ferroviarios, apertura comercial irrestricta, gravoso endeudamiento externo y firma de múltiples tratados bilaterales

de inversión marcaron los primeros años del gobierno de Menem. Incluso para las sensibilidades más derechistas dentro del peronismo se advertía que se trataba de una traición más que de una modernización de sus banderas históricas. Las distancias respecto del peronismo clásico de los años cuarenta y cincuenta no se redujeron a la política económica, sino que abrazaron de manera entusiasta y no vergonzante la dimensión identitaria. El presidente se reunió con el almirante Isaac Rojas, uno de los máximos responsables del golpe de Estado que había desalojado al general Perón del poder y lo había enviado al exilio en 1955: el símbolo no pasó inadvertido para nadie, al igual que la voluntad, explicitada por el canciller argentino, de establecer “relaciones carnales” con los Estados Unidos. La intención de saldar la grieta entre peronistas y antiperonistas se hizo evidente y, hasta cierto punto, exitosa.

El caso del PRI es bastante similar: con el gobierno de Miguel de la Madrid desde 1982 y sobre todo con el de Carlos Salinas de Gortari desde 1988, el viejo partido en el poder comenzó un giro copernicano en sus orientaciones económicas. Dejó de lado el tradicional estatismo y puso en marcha un proceso de reconversión de la economía que incluyó la apertura a las importaciones y a las inversiones extranjeras en la compra de empresas estatales de servicios públicos, como la telefonía. El punto más ambicioso de esa iniciativa fue la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, vigente a partir de 1994. La voluntad de mostrar que se trataba de un “nuevo” PRI y de un nuevo México se transparentó con el mejoramiento de las relaciones con el Vaticano, que habían sido un histórico punto de tensión desde el siglo XIX.

Vale la pena recordar que la particular victoria ideológica del neoliberalismo no trajo siempre el triunfo electoral de sus representantes predilectos, sino el de sus adversarios históricos. Ese giro de los partidos populistas hacia una política neoliberal no dejó indemnes a las derechas partidarias ni al empresariado. Las fuerzas de derecha de Bolivia, Argentina, Venezuela y México tuvieron

que responder a las reorientaciones neoliberales que tomaron sus rivales electorales por décadas. En algunos casos, como el del Partido Acción Nacional (PAN) mexicano, acusaron a los populistas de haber robado su programa económico, e intentaron presentarse a la población no sólo como los propietarios intelectuales del plan —sobre todo cuando los indicadores eran positivos—, sino, especialmente, como variantes más prolifas y menos corruptas del mismo programa. Y, de hecho, la alternancia entre el PRI y el PAN (2000-2018) no trajo ninguna novedad en términos de desafíos a la continuidad del orden neoliberal erigido bajo el gobierno de Salinas de Gortari. En otros casos, las fuerzas derechistas optaron por participar en el cambio, sumándose —o fusionándose de hecho, como hizo la Unión de Centro Democrático con el peronismo— a la gestión directa de la reforma del Estado.

Como explicó Manuel Garretón, el periodo posterior a 1989 trajo aparejada la novedad para la política latinoamericana de que se produjo un desacople —¿irreversible?— entre el mundo de la política y otras esferas y pertenencias sociales, en particular la de clase. De allí que la política ya no expresaba una confrontación irreconciliable entre proyectos ideológicos totales y autoexcluyentes, sea la defensa del *statu quo* o la transformación completa de la sociedad. Esa dimensión agónica del conflicto político da la impresión de haberse perdido tras el proclamado “fin de la historia”. Tal como señalaba este sociólogo chileno, tal limitación o “normalización” de la política ilustra simultáneamente un aprendizaje y una frustración. Un aprendizaje, porque daba cuenta de que las sociedades habían renunciado al mesianismo y al inmovilismo, y aceptaban de buen grado a la negociación como herramienta y a los cambios controlados y consensuados como un valor socialmente deseable. Una frustración, porque mostraba que a la democracia no se le podía exigir mucho en términos de su capacidad para incidir favorablemente sobre la calidad de vida de las personas. Esto es, la democracia es cada vez más entendida en su faz instrumental como

un conjunto de mecanismos y de procesos de selección de representantes y menos en su dimensión sustancial y de contenido. En particular, en los años noventa y dos mil la democracia parece tratarse de una disputa entre distintas versiones de las derechas neoliberales, algunas más coherentes, otras más advenedizas y otras avergonzadas de esa condición.

Este aparente consenso, que convirtió a la derecha neoliberal en dominante y que a la vez legitimó un triunfo aplastante del capital sobre el trabajo, es el resultado de una nueva hegemonía. Ella se expresa en la aceptación casi universal de lógicas individualistas, hedonistas y desigualadoras centradas en el mercado. Sergio Morresi señaló algo respecto de la nueva derecha argentina que bien puede ser extendido a otros casos nacionales. Se trata de una victoria cultural y ético-política que constituye una hegemonía ideológica, puesto que incluso los adversarios de la derecha neoliberal dan por buenas esas ideas:

Las ideas que en el momento en que se inauguraba la democracia eran rechazadas u observadas con recelo, a comienzos del siglo XXI son tomadas con naturalidad o levantadas como banderas por buena parte de la dirigencia política y una fracción de la sociedad civil. Incluso ciertos sectores que en general son críticos de las posiciones de la nueva derecha utilizan su lenguaje y participan de sus diagnósticos.

Esa hegemonía entrañaba la renuncia a las salidas *manu militari* que tanto se habían usado desde los años sesenta en adelante. Pero también daba cuenta de que el espacio político disponible para las organizaciones de derecha extrema quedó muy restringido, especialmente si seguían alineadas con una orientación económica mercado-internista o dirigista. Al igual que buena parte de las izquierdas partidarias, los años noventa fueron de mucha marginalidad política para las figuras de las derechas extremas,

salvo para las que lograran reciclarse dentro de la oferta política neoliberal y ofrecer asesoramiento para la “responsabilidad social empresarial”. Las organizaciones de extrema derecha que reclamaban contra la internacionalización de la economía local, el poder del FMI y la adopción de pautas de consumo provenientes de los Estados Unidos descubrieron con incomodidad que compartían argumentos con la izquierda antiglobalización o a favor de otra globalización.

LAS DERECHAS ANTE LA “MAREA ROSA”

El precio del “neoliberalismo por sorpresa” que se inició con las presidencias de Estenssoro, Pérez y Menem fue la aparición —o la potenciación— de grupos políticos que prometían defender aquellas banderas históricas que “los traidores” habían “vendido al FMI”: ese espacio fue en buena medida el que aprovechó el chavismo desde 1998, el que permitió el crecimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mexicano en los noventa —y luego de López Obrador— y el que cultivaron los kirchneristas en Argentina desde 2003. En los primeros 15 años del siglo XXI se explicitaron varios desafíos al orden neoliberal que se había apropiado de la política y la economía latinoamericana desde la década anterior. Esos desafíos nacieron del fracaso vivido por las políticas neoliberales a la hora de generar crecimiento en varios países. Tales políticas consiguieron domesticar la inflación, pero a un precio que pareció ser socialmente inadmisibles en el comienzo del nuevo milenio: sobreendeudamiento, pauperización, desempleo, vulnerabilidad externa y distribución cada vez más desigual de la riqueza. Los embates al neoliberalismo fueron protagonizados por partidos políticos y por gobiernos de centro-izquierda, algunos de los cuales llegaron al poder respaldados por movimientos sociales de base de indígenas, de desocupados o de trabajadores urbanos e informales.

Se trataba de gobiernos que, por un lado, podían mostrar planteles —e incluso presidentes— con credenciales en las izquierdas y el mundo sindical, pero que, por el otro, habían renunciado al horizonte anticapitalista: por tratarse de un rojo lavado, *market-friendly*, fueron llamados “rosas”. El término *marea rosa* fue acuñado por el politólogo Francisco Panizza y se usa para denominar a las experiencias dirigidas por Hugo Chávez en Venezuela (1998-2013), el Partido dos Trabalhadores en Brasil (2003-2016), el kirchnerismo en Argentina (2003-2015), Evo Morales en Bolivia (2005-2019), el neosandinismo en Nicaragua (desde 2007), Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Fernando Lugo en Paraguay (2008-2012), el Frente Amplio en Uruguay (2005-2020) y, de manera menos convincente, los gobiernos de Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 y 2014-2018).

Este proceso coincide con el lugar creciente que fue tomando la República Popular China en la economía latinoamericana. El papel del gigante asiático fue crucial en la demanda de las exportaciones primarias de nuestro continente y en la llegada de inversiones directas y de préstamos en la década del dos mil: en algunos países como Brasil o Perú, China se convirtió en el principal socio comercial. Y si bien esa presencia económica china no desplazó a los Estados Unidos de su lugar preponderante ni tiene capacidades (¿aún?) para obtener hegemonía cultural ni presencia militar en el continente, es cierto que su nuevo papel no pasó desapercibido. La tentativa del presidente Lula da Silva de crear una alianza internacional con Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) testimonia esos primeros escauceos con la hegemonía estadounidense. También ayuda a entender por qué el presidente Jair Bolsonaro amenazó con romper las relaciones comerciales con China apenas asumió, aduciendo que se trataba de un país comunista.

Entre los rasgos que se consideran propios de los gobiernos de “marea rosa” se cuenta una mayor distancia y acritud política y doctrinaria respecto del FMI y de la agenda estadounidense, más

compromiso con la integración regional —por ejemplo, a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008— y lecturas críticas respecto del rumbo económico seguido por los gobiernos neoliberales anteriores. Coincidieron en políticas tales como nacionalizaciones o expropiaciones, restricciones a la propiedad o a la libre disposición privada de los recursos, respaldo a organizaciones sindicales o campesinas, o legislación sobre regulación del empleo y ampliación e incluso universalización de programas de la política social. Los analistas de estos gobiernos han discutido sobre las diferencias con las experiencias neoliberales, su carácter neopopulista o neodesarrollista y la intensidad de su compromiso con la democracia multipartidaria y con un modelo productivo y social alternativo.

En algunos casos las reformas promovidas por estos gobiernos alcanzaron rango constitucional (Bolivia, Ecuador, Venezuela), pero en otros fueron muy efímeras y de escasa incidencia sobre la realidad socioeconómica (el Paraguay de Lugo). Ciertos gobiernos mostraron rasgos de fuerte personalización del poder (Venezuela y Bolivia), mientras que otros lograron —o al menos intentaron— la rotación y la institucionalización de los liderazgos. A ojos de sus detractores de derecha, los gobiernos de la “marea rosa” compartían muchas características unánimemente negativas, aunque algunos países las tenían más agravadas (y aquí Venezuela, y en menor medida Bolivia, recibían todos los dardos). No parece casual que tanto Hugo Chávez (en 2002) como Evo Morales (en 2019) hayan sido objeto de un golpe de Estado donde hubo participación de partidos políticos derechistas e integrantes de las Fuerzas Armadas. “Populismo” (con toda la ambigüedad y carga peyorativa que el término trae), antirrepublicanismo, totalitarismo, corrupción y autoritarismo fueron algunos de los términos a los que estos gobiernos fueron asociados por las oposiciones de derecha.

La Fundación Internacional para la Libertad (FIL), cuyo presidente honorario es Mario Vargas Llosa, ha sido uno de los más

entusiastas promotores de las diatribas antipopulistas, pero también anticomunistas: detrás de la condena al “populismo” se alineaban antiguas preocupaciones sobre la conflictividad sindical, restricciones a la propiedad privada y la circulación transnacional del capital. En abril de 2020 la FIL emitió el manifiesto *Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo*, donde advertía contra “el estatismo, el intervencionismo y el populismo”, que crecían en el contexto de la pandemia de Covid-19. La lista de los firmantes incluía la plana mayor de los políticos de la derecha neoliberal del continente, de España y de Italia, y abarcaba desde representantes del Cato Institute y Atlas Network a expresidentes como José María Aznar, Mauricio Macri, Ernesto Zedillo, Álvaro Uribe, Luis Lacalle y Federico Franco, empresarios y académicos.

También es interesante hacer notar un aspecto internacional del enfrentamiento entre los gobiernos de la “marea rosa” y sus adversarios internos y externos. En 2005 se realizó la IV Cumbre de las Américas, que reunió a los presidentes del continente en la ciudad argentina de Mar del Plata: en aquella ocasión fracasó el intento del presidente George Bush (y del presidente mexicano Vicente Fox) de crear un área de libre comercio de alcance hemisférico. Si Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez eran la encarnación de la resistencia frente a la pretensión estadounidense, pronto encontraron éstos otros rivales de orden internacional. El presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue sin duda uno de los grandes detractores de Venezuela y del modelo “bolivariano”, un poco por detrás estuvo el mencionado Fox, alineado muy de cerca con Washington. De hecho, el encono contra Chávez fue un recurrente elemento de las identidades derechistas a inicios del siglo XXI: fue difundido por diversas redes de *think tanks* y figuras estadounidenses y latinoamericanas de inspiración conservadora y neoliberal. De hecho, el miedo a las potenciales réplicas de la situación de Venezuela en otros puntos del continente ha sido uno de los argumentos repetidos de las derechas latinoamericanas

hasta nuestros días. Con menos épica que la guerrilla de Sierra Maestra de 1956, el Palacio de Miraflores ha sido recurrentemente acusado desde 1998 de ser el mentor ideológico y financiero de todas las oposiciones a las políticas neoliberales en la región.

¿Qué tan grave fue la amenaza de los gobiernos de la “marea rosa” a la dominación neoliberal? De acuerdo con Barry Cannon, éstos no lograron modificar el hecho de que la mayor parte de América Latina permaneció a inicios del siglo XXI bajo la ortodoxia neoliberal. Es cosa cierta que la “marea rosa” reformó y limitó el modelo económico basado en las exportaciones antes que remplazarlo: a veces los gobiernos ni siquiera intentaron limitarlo. De hecho, tampoco hubo modificaciones significativas en las políticas impositivas llevadas adelante. La “marea rosa” no fue de cobertura universal y varios países permanecieron al margen de sus efectos. En todo caso, Cannon identifica tres niveles de amenaza a esa hegemonía: el más alto es el percibido en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina; hay uno que oscila entre bajo y medio en Brasil, Uruguay, Nicaragua y El Salvador, y hay otro mínimo o inexistente en Colombia, México, Perú, Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde las potenciales coaliciones antineoliberales quedaron postergadas en las elecciones. Y cuando así no fue, la utilización del fraude y el uso de campañas del miedo evitó triunfos opositores, como parece haber sido el caso de México en 2006 (y quizás en 1988). En Colombia y en Perú muchas segundas vueltas electorales se dirimieron entre candidatos de las derechas y de las extremas derechas. Farid Kahhat argumenta que la intensidad de la actividad guerrillera o terrorista en estos dos países ha contribuido enormemente a exacerbar la fuerza de las derechas extremas y a reducir el espacio para una agenda progresista.

Es cierto que las amenazas rosas no tenían la radicalidad de las rojas de los setenta, pero no por ello generaron menos reacciones por parte de sus detractores a nivel nacional e internacional. En particular, considero que hay tres aspectos que incidieron sobre los rostros que tomaron las derechas en la región en la década de 2010.

Uno es que los gobiernos de la “marea rosa” estuvieron decididos a discutir una de las premisas fundacionales de las democracias neoliberales, tal como habían sido entendidas y practicadas desde los años noventa. Estos gobiernos expresaban abiertamente la idea de que era la política la que le debía fijar las orientaciones a la economía y no al revés. Y ello significaba que las políticas económicas debían estar al servicio de los intereses de la mayoría que había ganado las elecciones. Con esto no quiero decir que los gobiernos de la “marea rosa” hicieran eso o que lo hicieran todo el tiempo, sino que esgrimían discursivamente el principio de la subordinación de la economía a la política. Y el segundo punto es que bajo estas coaliciones de gobierno se produjeron —o al menos se discutieron— innovaciones en áreas de la legislación sobre familia, identidad y educación: educación sexual, derecho al aborto, matrimonio homosexual, uso y distribución de anticonceptivos, consumo de drogas, etcétera. El matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo se aprobó en Argentina (2010), Brasil (2013), Ecuador (2008) y Uruguay (2013). Como se verá en la coda de este libro, estas leyes —o las discusiones públicas sobre la posibilidad de que esas leyes se aprobaran— suscitaron la constitución de una derecha emergente, de tono muy conservador. El tercer punto de diferenciación de los gobiernos de “marea rosa” fue el establecimiento de políticas de memoria —y a veces de judicialización— del pasado dictatorial del Cono Sur. En particular, la política de memoria de los gobiernos kirchneristas en Argentina, del Partido dos Trabalhadores en Brasil y del Frente Amplio en Uruguay contribuyeron a una repolitización y un recalentamiento de los usos públicos (políticos, educativos, mediáticos) de la memoria sobre la represión dictatorial ejercida en las décadas de 1960 y 1970.

Las respuestas que las élites y las derechas desplegaron frente a esas amenazas han sido, también según Cannon, de diferente naturaleza, y se activaron según las circunstancias y la gravedad de esos desafíos. En ese repertorio se incluyen prácticas realizadas dentro

del marco legal, como lo son las elecciones desde ya, pero también las estrategias parlamentarias que permiten reducir o anular las pretensiones reformistas del Ejecutivo. A ello se suman las prácticas de movilización de recursos y seguidores (manifestaciones, campañas mediáticas, operaciones de desestabilización, *lobby*) que consiguieron bloquear las veleidades de quienes ganaron elecciones y deseaban imponer nuevas reglas económicas, como ocurrió con el presidente peruano Ollanta Humala en 2011. Finalmente, se cuentan aquellas actividades que claramente son de orden anticonstitucional, como el accionar paramilitar y los golpes de Estado ocurridos en Venezuela (2002), Honduras (2009), Ecuador (2010) y Bolivia (2019). En lo que se refiere a este último recurso (“el recurso del método” diría Alejo Carpentier), parece crucial para los golpistas y sus promotores el contacto con organizaciones y gobiernos amigos, que se muestren rápidamente decididos a aceptar la nueva situación política y a darle reconocimiento oficial al presidente que emerja del golpe de Estado. Eso hicieron José María Aznar, jefe del gobierno español, con Pedro Carmona en 2002 en Venezuela, y Donald Trump con Juan Guaidó en ese país caribeño y con Jeanine Añez en Bolivia en 2019.

CONCLUSIONES

En la introducción de este capítulo se expuso la idea de que en 1989 se cerraron tres ciclos de manera simultánea. En el nivel político, se acabó el ciclo de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, puesto que desde entonces no ha habido experiencias de este tipo, aunque sí que se han producido maniobras de presión, intervenciones militares y destitución de gobernantes electos. Ha desaparecido del horizonte el mesianismo contrarrevolucionario castrense para dar paso a la aceptación —a veces resignación— por parte de las derechas de que el juego de la democracia era el único

que permitía acceder al poder público. El segundo ciclo que se clausuró es el de la Guerra Fría, iniciado a fines de los años cuarenta con la persecución a los partidos comunistas y el acoso a la revolución guatemalteca. La desaparición del horizonte socialista en los años noventa no arrastró consigo a Cuba —cuya población vivió probablemente ésa como la peor década del siglo—, pero sí contribuyó a desactivar las actividades guerrilleras en América Central, y sobre todo a desanimar a movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda. Éstos se vieron huérfanos y consternados frente a la rápida disolución del marco geopolítico que había regido por 40 años: si ese marco era ya bastante desequilibrado, puesto que favorecía casi constantemente a Washington por sobre Moscú, luego de 1989 el desbalance fue aun mayor. El tercer ciclo que se cerró ese año era incluso de mayor duración y podríamos titularlo como el del sueño o proyecto industrialista latinoamericano. Con ello se hace referencia a un conjunto de iniciativas oficiales, partidarias, sindicales, corporativas y de instituciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que desde los años treinta y sobre todo los cuarenta impulsaron la autarquía, la concertación social, la planificación y el crecimiento industrial nacional por sobre el perfil de país exportador de bienes primarios y estrechamente vinculado al comercio y las finanzas internacionales, que había predominado hasta 1929. En los años noventa las nuevas orientaciones económicas fueron a la búsqueda del mercado internacional, las inversiones financieras y la integración comercial regional y mundial. Los inversores financieros y su tasa de ganancia —en muchos casos especulativa y cortoplacista— fueron crecientemente considerados por las autoridades políticas de una relevancia mayor que el bienestar de las mayorías o que el mantenimiento de la tasa de empleo y actividad económica.

El panorama ideológico en los años posteriores a la caída del Muro de Berlín fue de un contundente triunfo ideológico de las derechas neoliberales, el cual permitió el despliegue intenso de me-

didadas económicas que favorecieron la concentración del ingreso, el retroceso de los salarios frente a las ganancias y, en general, una enorme autoconfianza de las élites económicas. En 1989 el politólogo inglés Roger Eatwell sentenció que durante buena parte del siglo xx en las democracias liberales la izquierda reflexionaba y la derecha gobernaba. Pero en ese momento la derecha tanto gobernaba como pensaba, aun cuando quienes gobernaban raramente también eran pensadores. La hegemonía cultural derechista fue muy marcada desde los años noventa hasta inicios del siglo xxi: el éxito electoral les ha sido más esquivo a las fuerzas políticas explícita o centralmente neoliberales, pero no así la definición sobre cuáles eran los temas de discusión y cuáles no, qué decisiones eran técnicas, cuáles políticas y cuáles eran los saberes legítimos para opinar sobre cuestiones de interés público. Todo ello era expresión de una muy poderosa capacidad de las derechas neoliberales para controlar los límites de lo político y sus argumentos.

Tal como señaló Kenneth Roberts, la puesta en marcha de modelos económicos neoliberales terminó por alterar irreversiblemente una buena parte de los patrones de representación política desde los años noventa. Se evidenció a partir de allí una atrofia de los electorados masivos —hasta entonces estaban organizados y encuadrados por partidos y sindicatos—, así como una creciente descolectivización de las opciones e identidades políticas. Ello ocurrió junto con la profesionalización y la autonomización del liderazgo de las élites partidarias y una descorazonadora desideologización de la política. En ese marco, las élites económicas descubrieron que “su” gente podía acceder a importantes cargos en el poder ejecutivo, empresas públicas y organismos reguladores sin necesidad de intermediación partidaria y, sobre todo, de triunfos en las urnas. El éxito alcanzó el punto máximo probablemente cuando esa derecha neoliberal no sólo consiguió absorber organizativa y discursivamente a otras fuerzas de derecha —como las más abiertamente defensoras de la dictadura o las neofascistas—,

sino sobre todo colonizar ideológicamente a sus adversarios. Éstos, tras 1989, ya no eran las guerrillas y los partidos y sindicatos de izquierda marxista o social-cristiana, sino los partidos populistas tradicionales, que desde mediados del siglo xx concitaban la adhesión electoral de las masas trabajadoras.

Los resultados sociales del giro económico neoliberal fueron en general decepcionantes en términos de crecimiento y generación de empleo y se hicieron sentir a finales del siglo xx a través de distintas explosiones sociales, lideradas por usuarios de servicios públicos, desempleados y pobres urbanos. Los gobiernos de la “marea rosa” expresan bastante el hartazgo social ante el carácter plomizo que había tomado la democracia de los años noventa, la cual parecía reducirse a elegir entre distintas versiones de una misma canción. Ese agotamiento fue catalizado entonces por movimientos sociales y luego por gobiernos. De alguna manera, tal proceso también acompañó a otro, que es la pérdida de centralidad política del objetivo antiinflacionario, algo en lo cual las recetas neoliberales habían dado buenos resultados en el Cono Sur. Los gobiernos de “marea rosa” dan cuenta de que el combate a la inflación dejó de ser considerado más importante que la promoción del empleo o que el crecimiento de la producción. Para esos problemas, el ideario neoliberal tenía propuestas ya probadas y menos atractivas, como la disciplina fiscal y la flexibilización laboral, que sonaban poco atractivas a una población que arrastraba muchos años de ajuste, recesión y empobrecimiento.

CODA

¿TIENEN, FINALMENTE, LAS DERECHAS SU PUEBLO?

Hablar de la nueva extrema derecha como “contrarrevolución” —sea “póstuma” o “preventiva”— no me parece útil a la hora de esclarecer el asunto [...] La contrarrevolución no existe sin la revolución.

Enzo Traverso, “¿Fascismo universal?”,
Jacobin América Latina, abril de 2021

El politólogo Brandon van Dyck ha postulado la existencia de una “paradoja de la adversidad” a la hora de entender por qué se desarrollan —o no— partidos políticos fuertes. La paradoja plantea que los partidos nacidos en el marco de regímenes autoritarios tienden a ser más fuertes y electoralmente exitosos en el largo plazo, puesto que se sostienen sobre el esfuerzo de los militantes fogueados en la adversidad. Un contexto hostil fortalece la construcción partidaria en las catacumbas y acostumbra a los militantes y a los dirigentes a buscar recursos no provenientes del Estado para sostener al partido. Esta propuesta analítica fue utilizada para estudiar la exitosa supervivencia de organizaciones como el Partido dos Trabalhadores, surgido en los últimos años de la dictadura brasileña y luego cuatro veces ganador de las elecciones presidenciales. James Loxtton se interrogó si sería posible observar esta misma paradoja en regímenes “autoritarios y competitivos” como los de “marea rosa” de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua de inicios de la década de 2010: ¿fueron esos contextos favorables para el surgimiento de partidos de derecha, contrarios a la “marea rosa”? Su respuesta fue que no

habían emergido de esos contextos partidos conservadores resilientes ni exitosos. Hoy la respuesta a esa pregunta amerita algunos matices.

En los últimos años fuerzas de derecha se han hecho del poder ejecutivo en varios países a través de distintas estrategias como juicios políticos (Paraguay, 2012, y Brasil, 2016), golpes de Estado (Bolivia en 2019) e incluso de triunfos electorales (Argentina, 2015; Chile, 2009 y 2017; Brasil, 2018; Uruguay, 2020, y Ecuador, 2021). Al escribir estas líneas, de la “marea rosa” de inicios de siglo sólo parecen sobrevivir, a los tumbos, la Venezuela chavista en descomposición, la Nicaragua neosandinista y, a la distancia, y con enormes ambigüedades, el gobierno de López Obrador en México, así como el presidente argentino Alberto Fernández, sumidos ambos en los problemas de la gestión de la pandemia de Covid-19. Su continuidad con la “marea rosa” iniciada por Chávez en 1998 es más voluntaria que sólida, más identitaria que objetiva. ¿Llegó un nuevo tiempo, feliz, para las derechas latinoamericanas? Con plena conciencia de las dificultades que implica escribir sobre procesos aún en marcha, estas líneas finales intentarán decir algo sobre esa pregunta. El atractivo de los gobiernos de la “marea rosa” se erosionó en la década de 2010 al punto de no ofrecerles a sus sociedades propuestas lo suficientemente interesantes —o creíbles— acerca de cómo serían atendidos problemas tales como la actividad criminal urbana (pavorosa en América Central, México y Brasil) o las denuncias sobre actividades de corrupción, fogueadas por el *affaire* Odebrecht. Una parte de los votantes se fugó hacia la izquierda, al ver falta de compromiso o de coherencia con una vía igualitaria y la justicia social. Esas voces se quejaron de la falta de voluntad de superar el umbral del extractivismo, de la estructura impositiva regresiva y de políticas sociales centradas en el consumo, incapaces de eliminar la pobreza y promotoras del control político de los beneficiarios.

Sin embargo, es posible pensar que hay otros elementos, menos presentes en las tapas de los periódicos, que han operado para

favorecer el crecimiento de las opciones políticas derechistas. Procesos sociales, económicos y culturales vividos en los últimos años en diversos países alentaron la constitución o la transformación de partidos, sensibilidades y formas de movilización derechistas, y han ido condicionando en un sentido conservador y jerárquico las formas en las cuales se piensa y se actúa en el campo político. Uno de esos puntos es la individualización popular extrema. Se trata de un proceso nacido en los años noventa, que quizás encontró alguna ralentización con las políticas sociales de la “marea rosa”, pero que no se detuvo. El segundo es la consagración de la meritocracia como criterio de distribución de bienes y oportunidades: ello condujo a exacerbar la preferencia por las salidas individuales por sobre las colectivas. Araujo y Martucelli han planteado la necesidad de deshacerse de caracterizaciones idealizadas y esencialistas sobre los sectores populares para percibir las formas de la individualidad popular actual. Estos investigadores mostraron que las circunstancias actuales en Chile (flexibilidad, inestabilidad y sobreexigencia laboral) afectan notablemente la producción de la subjetividad y apremian fuertemente a los sectores populares. Ello ha producido una “individualidad de clase” que naturaliza o acepta “el carácter estructural de soledad y desprotección presentes en la sociedad” frente a las cuales se despliegan ejercicios de autoafirmación basados en la posesión de virtudes psicológicas personales (como la capacidad para adaptarse, resistir o emprender). Elementos como éstos ha encontrado también la socióloga Paula Canelo al tratar de entender el triunfo de un sentido común de derecha, que fue aprovechado más que creado por la coalición macrista en Argentina en los últimos años. La socióloga Verónica Gago ha postulado que se ha desarrollado en los sectores populares un “neoliberalismo desde abajo”, que funciona con cierta independencia de la promoción estatal de esa orientación. Ese “neoliberalismo desde abajo” se expresa en las abigarradas economías populares informales que combinan “saberes comunitarios autogestivos”, formas organizati-

vas propias y “autoempresarialidad de masas”. Se trata de modos de vida, saberes, prácticas y formas de relación que toman al cálculo como “matriz subjetiva primordial” y que no se removieron por el hecho de que algunos gobiernos identificados con la “marea rosa” afirmaran haber terminado con las políticas públicas de inspiración neoliberal.

Estos gobiernos llevaron adelante ciertos procesos de movilidad social ascendente que les permitieron a millones de personas el paso de la pobreza extrema a la pobreza y el ingreso en el mercado laboral formal de ciertas áreas de la actividad económica, como el empleo doméstico. La ampliación de la ciudadanía social que intentaron estos gobiernos a través de la expansión del mercado de bienes y servicios condujo a politizar y asignar (o quitar) legitimidad a los patrones de consumo, y a promover la idea de que ciertos consumos implicaban opciones políticas e incluso existenciales. Como ha señalado Pablo Semán en una entrevista reciente, la estrategia de inclusión basada en la ampliación del consumo condujo a una suerte de “aplanamiento de la estructura de premios” que terminaba siendo irritante para quienes no eran objeto directo de atención por parte de las políticas públicas. Su autoimagen y sus “méritos” no se traducían a “una escala de diferencias de consumo, de ingreso, de legitimidad respecto de otros grupos”, lo cual terminó impulsándolos a abrazar más el deseo de diferenciación que el de igualación.

Amplias capas populares y medias —y no sólo las élites— rechazaban la continuidad de algunas de esas políticas públicas e insistían en la necesidad de “ubicar” a cada quien en “su” lugar, de restaurar la distancia entre las clases sociales y entre los géneros. En los últimos años se han podido escuchar o leer los reclamos de que se evacúe a los indígenas bolivianos de la vida política, tal como se hizo explícito en el breve gobierno de Jeanine Añez (2019-2020), a los afrodescendientes de las universidades brasileñas y a los beneficiarios de ayuda social (“planeros”) argentinos del presupuesto nacional. En síntesis, una buena parte de las respuestas a la pregunta

por el crecimiento electoral y cultural de las derechas de los últimos años parece explicarse por las reacciones de estos muchos sectores sociales ajenos a la élite, que imaginan su suerte política más cercana a la de quienes tienen más que a la de quienes tienen menos.

En el capítulo anterior se indicó que los gobiernos de “marea rosa” produjeron innovaciones sobre tres aspectos: *a)* mayor regulación —o al menos amenaza de regulación— de la economía y distanciamiento doctrinario de las orientaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI); *b)* innovaciones en materia de legislación de familia e identidad de género, y *c)* políticas de memoria y de reparación de los crímenes producidos durante las dictaduras. No todos los países tuvieron las tres ni las tres tuvieron la misma importancia en cada uno de ellos. En Uruguay hubo legalización del consumo de cannabis, pero ello no fue acompañado por un alejamiento de la ortodoxia neoliberal. El chavismo introdujo un enorme nivel de disrupción respecto de Washington, pero se despreocupó respecto de una agenda de nuevos derechos. Rafael Correa planteó medidas heterodoxas, pero en Ecuador la idea de una política de repudio a las dictaduras no ocupó gran interés. La muy innovadora constitución boliviana convivió con declaraciones abiertamente homofóbicas del presidente Evo Morales.

A ojos de sus opositores de derecha, los gobiernos de “marea rosa” parecían concitar las tres amenazas simultáneamente. Por ello las organizaciones opositoras —sea que lograron ganar el gobierno o no— en la actualidad reclaman:

- *Restauración de libre mercado y fin de la heterodoxia.* Esta demanda se hizo presente e intensa aun cuando los intereses económicos apenas fueron rozados. Aquí da la impresión de que el peso de las anticipaciones y las proyecciones fue mayor que el cálculo racional sobre las medidas efectivamente tomadas. Condenan toda política social igualatoria porque consideran que es un mecanismo intervencionista e injusto

que no descansa en el reconocimiento del mérito individual y que no está regulada por el sistema de premios y castigos del mercado.

- *Difusión de la “memoria completa” o incluso glorificación de la guerra antisubversiva de los años setenta.* En algunos casos, se pondera su potencial recreación en la actualidad como estrategia de mano dura contra el crimen urbano y el narcotráfico.
- *Regreso o refuerzo de las formas de dominación patriarcal, la creciente incidencia de la religión en aspectos públicos y el desmantelamiento de la legislación sobre identidad de género, consumo de drogas y aborto.* Se entusiasman con terminar con la educación sexual, el feminismo y lo que llaman “ideología de género”.

En síntesis, orden en el mercado, las calles y la casa. No todos piden lo mismo ni todos dan la misma prioridad a los tres. Hay derechistas que avalan al feminismo y no cejan en su antiigualitarismo. Hay feroces antiabortistas que recelan de la apertura comercial irrestricta. Lo cierto es que en los últimos años se ha producido un acercamiento entre las fuerzas de derecha neoliberales cuya agenda es eminentemente económica, los nostálgicos de las dictaduras, los representantes de fuerzas de seguridad y defensa y unas derechas muy conservadoras. Aun cuando estos actores tienen agendas y orígenes ideológicos distintos, los impactos reales o temidos de los gobiernos de “marea rosa” (la famosa “venezuelanización” y la súbita resurrección del anticomunismo) los han impulsado a asociarse: comparten enemigos y redes, y eso termina incidiendo más que las distancias o incoherencias ideológicas. Las políticas seguidas contra la expansión de la pandemia de Covid-19 han incrementado este proceso a un ritmo desenfrenado, al politizar aspectos tales como el derecho a circular libremente, a no usar máscaras y a no vacunarse.

En ese proceso, las voces de las derechas más extremas han establecido crecientes conexiones con organizaciones estadounidenses más que con las europeas. *Think tanks* muy vinculados al Partido

Republicano y predicadores muy conservadores forman parte de los interlocutores y redes de esas derechas autoritarias latinoamericanas. Ello ha impulsado también una súbita repolitización del neoliberalismo, que hasta aquí había exhibido en primer lugar su supuesto carácter de discurso exclusivamente económico o científico. El neoliberalismo es cada vez más presentado como un estilo de vida superior a otros —y no sólo una orientación económica más eficiente—, por cuanto ofrece a los sujetos “libertad”.

El proceso no es sólo latinoamericano, sino que tiene numerosas similitudes con el auge de la extrema derecha en los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump (2016-2020), y en puntos de Europa como Polonia, Hungría, Francia o España, donde una derecha muy valórica y conservadora se acerca al poder. Pero, según Farid Kahhat, mientras que en los Estados Unidos y Europa las derechas radicales pelean a brazo partido contra las neoliberales, modernizadoras y proglobalización, en América Latina su bestia negra son los gobiernos de “marea rosa”, la liberalización de la legislación civil, todo lo que critique a la economía neoliberal y lo que denominan “marxismo cultural”. Otra particularidad latinoamericana es la intensidad de los enfrentamientos sobre principios y concepciones de la vida, que difícilmente entran en transacción: políticas públicas para prevención y control de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, derecho al aborto, reconocimiento legal de parejas y familias por fuera de la heterosexualidad, etcétera. A favor de esta agenda han participado la Iglesia católica, *think tanks* “profamilia” y la creciente población que se adhiere a las iglesias neopentecostales.

La expansión de estas iglesias es innegable: los evangélicos en Chile eran 15% de la población en 2002, en Nicaragua 21% en 2005, en Brasil 22% en 2010 y en Honduras 36% en 2007. La tesis que afirmaba el carácter sólida y homogéneamente católico de los sectores populares latinoamericanos, urbanos o rurales hoy parece desencaminada. Así y todo, sí parecen discutibles otros dos puntos. El

primero es el que supone que la Iglesia católica está siendo remplazada por otra fe: más bien lo que es posible advertir es la multiplicación de identidades religiosas de cuño neopentecostal o de *New Age*, que pueden tener mucha homogeneidad o cercanía teológica, pero una enorme fragmentación y desregulación institucional. Además de las iglesias protestantes clásicas (luteranos, adventistas), se cuenta una galaxia de iglesias neopentecostales, “cristianas”, más fundamentalistas y promotoras de las lecturas bíblicas literales. El segundo es aquel que supone una alineación directa y permanente entre esas religiones y el voto de extrema derecha, como muestran la proximidad de las iglesias neopentecostales con Jair Bolsonaro y el rechazo electoral al referéndum por la paz en Colombia en 2016. Hay fuertes conexiones entre los promotores del neoliberalismo y los pastores defensores de una “teología de la prosperidad” que se expande por los barrios periféricos de América Latina. La exaltación del mérito como criterio de compensación en el mercado encuentra una traducción a veces directa en la búsqueda de la salvación por propio esfuerzo: actor de mercado y de la vida religiosa se unifican bajo el formato de emprendedor, de un protagonista de su salvación o de una acumulación de fortuna *self-made*. Se fraguó allí una subjetividad popular novedosa, que combina una moralidad conservadora con el entusiasmo por la innovación económica y una valoración positiva de la incertidumbre y de la retirada de las ayudas sociales por parte del Estado. Pero que ésa sea hoy la situación no debe inhibirnos de ver que en 2006 la candidatura de Lula da Silva fue explícitamente apoyada por las iglesias evangélicas, y que los sucesivos triunfos de Evo Morales requirieron también del voto de los creyentes neopentecostales bolivianos. El voto evangélico fue cortejado explícita —y exitosamente— por figuras como Alan García o Daniel Ortega en el momento de las elecciones.

Tenemos hoy partidos y figuras que están a la derecha de los políticos neoliberales tradicionales y que tienen un cierto caudal electoral: Cabildo Abierto en Uruguay; Rafael López-Aliaga en

Perú; Juan José Gómez Centurión y Patricia Bullrich en Argentina; José Antonio Kast y Evopoli en Chile, y, sobre todo, Jair Bolsonaro, electo presidente de Brasil en 2018. Esas fuerzas han contribuido a modificar violenta y rápidamente los límites de lo que se consideraba discutible y argumentable en materia de racismo, memorias sobre las dictaduras o misoginia. ¿Se trata de contrarrevolucionarios? La sentencia de Enzo Traverso que abre esta sección contradice tal idea: esta derecha extrema no desea remplazar el orden neoliberal, desbordar las instituciones democráticas ni ofrecer un futuro alternativo como el fascismo clásico, sino convertirse en un garante más eficiente y autoritario de la dominación y de la reproducción de un orden moral, social y económico supuestamente amenazado.

Los triunfos electorales de las derechas en los últimos años, así como el desinterés de amplias capas de la sociedad sobre la suerte de las fuerzas políticas y sindicales de izquierda que dicen representarlas, invitan a reflexionar sobre la desaparición del “pueblo”, tal como fue imaginado por las izquierdas, los populismos y una fracción del catolicismo por más de medio siglo. Parece hoy innegable que hay un giro de una buena parte de la sociedad —incluyendo el mundo popular— hacia un conservadurismo valórico e identitario, que no desea seguir la agenda progresista, por ejemplo, sobre derechos para la población LGTTTIQ, legalización del aborto o portación de armas. Si bien el término *pueblo* es eminentemente polisémico y resulta difícil cuando no imposible asociarlo a una realidad social precisa, podemos postular que esa desaparición simbólica del pueblo acompaña tardíamente la que ya se había producido en la estructura social latinoamericana desde los años ochenta con la fragmentación, la pauperización y la entrada en la informalidad del mundo obrero. Aquella estructura social más sólida, con ligazones recurrentes entre pertenencia de clase y política, dio paso a la multiplicación y la volatilidad de las identidades políticas, mucho más vinculadas al consumo, el impacto de los medios y las redes sociales digitales, y a causas no asociadas con la pertenencia de clase,

como las religiosas. Ese pueblo, hoy heterogéneo, crecientemente desintegrado y reintegrado en fracciones cada vez más pequeñas, sin autoconciencia de tal, ya no es interpelado de manera directa, mayoritaria ni permanente por las izquierdas ni por la Iglesia católica. En consecuencia, los triunfos de las derechas de los últimos años pueden significar que hoy en día no existe más ese pueblo al que la izquierda le hablaba y sobre el que pensaba y tenía cifradas sus esperanzas. El tiempo nos dirá si estamos ante el fin del pueblo, si acaso coexistirán dos pueblos o si, por el contrario, hoy hay un “pueblo” de derecha —como en los años noventa— dispuesto a apoyar soluciones autoritarias y neoliberales.

CONCLUSIONES GENERALES

Es cierto que leer a racistas, desigualitarios y misóginos requiere cierto estoicismo, pero puede dar sus frutos.

Pablo Stefanoni,

¿La rebeldía se volvió de derecha?

En estas conclusiones le propongo al lector empezar con el siguiente ejercicio: identificar cuáles de los cinco grupos de recursos de las élites (Fuerzas Armadas; poder económico; esfera de la cultura y la comunicación; partidos políticos, y socios en el exterior) que identificó Barry Cannon fueron más usados en los momentos recortados en este libro. Así, en el primer periodo, de predominio de los regímenes oligárquicos, observamos que la dominación política descansaba fuertemente sobre la posesión de las principales actividades lucrativas del país (agricultura, ganadería y minería para la exportación), que le daban a la élite un control casi total de las variables económicas centrales. Ello se complementaba con el recurso casi permanente a la coacción armada a través de las fuerzas de seguridad y militares, dispuestas a disciplinar a aquellos actores que manifestaran voluntad de hacer público su disenso respecto de la distribución del poder económico y político. Asimismo, las élites contaban con el respaldo de poderosos actores económicos internacionales (acreedores, inversores, empresas navieras) que se manifestaban interesados en el mantenimiento de las condiciones en que se venía llevando adelante la expansión de la economía capitalista. En este marco, fueron principalmente los británicos los que desempeñaron ese papel en América del Sur, mientras que los estadounidenses desplegaron sus iniciativas en el Caribe y América Central. Los partidos políticos no parecen haber jugado un papel significativo en regímenes políticos donde el derecho a voto en general estaba restringido de hecho o de derecho a grupos estrechos de varones:

los partidos se dedicaban menos a convencer a una potencial masa de electores que a regular la disputa entre las élites políticas para evitar nuevas guerras facciosas.

Las derechas emergentes echaron mano esencialmente de recursos ideológicos para desafiar a las fuerzas liberal-conservadoras. De acuerdo con la reconstrucción que hiciera el historiador Oscar Terán, los reaccionarios de esos años se presentaban como una minoría estética y moral, dotada de una suerte de gracia aristocrática que los blindaría contra la especialización, el cortoplacismo y el lucro. Su voluntad política, tan autoritaria como intelectualista, propugnaba la idea de que toda evaluación de la vida debía basarse en aspectos cualitativos, y, en consecuencia, desdeñar cualquier ponderación cuantitativa y materialista. Los cruzados del espíritu, muchos de ellos sacerdotes, se daban a la tarea de cerrar el paso a la inundación de mal gusto y vulgaridad que adivinaban como el gran defecto de su tiempo. Promovían el regreso a la vida ascética y sencilla de los tiempos en los que política y religión, moral y fe, constituían una sola e indivisible cosa.

La Primera Guerra Mundial trajo consigo fuertes descalabros económicos, retroceso general del comercio exterior y, finalmente, mayor conflictividad laboral tras 1918. Luego de ese año, un ámbito que la élite entendía exclusivamente suyo como lo eran los claustros universitarios, se vio sacudido por el proceso de Reforma, de cuño más latinoamericano que nacional. No es extraño que la conjunción de desafíos políticos reformistas, democratizadores y obreros intensificara miedos y reacciones violentas e históricas al juntarse con las noticias que llegaron desde Rusia. La historiadora Cándida Calvo Vicente ha postulado que las élites políticas europeas comenzaron a prestarle más atención al problema del consenso de los subalternos después de la Gran Guerra, como resultado de la aparición de las dificultades para mantener el orden social ¿Cuándo fue ese momento en América Latina?, ¿cuándo salieron las élites a buscar una legitimidad que hasta entonces no les interesaba conseguir? Es

probable que la fecha no sea muy distinta a la asignada a Europa Occidental. El deseo de salvar el capitalismo, la estabilidad política prebélica y un orden social debilitado empujaron a la búsqueda de alguna forma de acuerdo con unas masas que estaban siendo crecientemente organizadas por partidos políticos y sindicatos.

En los años veinte es posible detectar una cierta pérdida de capacidad de control político de las élites merced a los límites encontrados por la economía basada en las exportaciones primarias. Si bien las Fuerzas Armadas siguieron siendo custodios automáticos del orden —salvo los alzamientos *tenentistas*—, empezaron a tener más peso los elementos comunicacionales y de formación de consenso a través de instrumentos como la propaganda de masas y los discursos eclesiásticos. Las crecientes competencias entre ingleses y estadounidenses por la hegemonía de la región les dieron menor estabilidad a unos gobiernos que carecían de una legitimación electoral masiva, y sin dudas complotaron contra la posibilidad de que las potencias centrales brindaran respaldo automático y universal a las élites económicas.

En el periodo de 1930 a 1945 se perciben fuertes cambios como producto de la crisis socioeconómica iniciada a fines de 1929. La reestructuración económica, la industrialización y la urbanización contribuyeron a desconcentrar los recursos económicos, hasta entonces en manos de una élite bastante unificada. Esa menor capacidad fue compensada por la táctica de recurrir de manera más intensiva a las Fuerzas Armadas (a través de las dictaduras personalistas), pero también por la ampliación de la oferta ideológica, con grupos de derecha radical y con tentaciones fascistas. Esta diversificación ideológica fue también apuntalada por la creciente competencia entre alemanes e ingleses, y de éstos con los Estados Unidos, que procuraron sumar inestabilidad en aquellos territorios considerados como (posibles) plazas de sus enemigos. La internacionalización de los conflictos ideológicos y militares europeos condicionó fuertemente la política y las identidades políticas en el

continente americano en estos años: la lucha por las ideas provocó una intensificación de las estrategias de comunicación, propaganda y argumentación.

El tiempo de la primera Guerra Fría se caracteriza por un mayor peso de los partidos políticos de derecha (modernizadores, desarrollistas, anticomunistas) como mecanismo de integración política. Las ideologías sobre el consenso social, la búsqueda del desarrollo y la armonía de clases fueron recurrentemente difundidas entre la población, en un contexto de retirada general de las dictaduras. Los “amigos del exterior” con relevancia pasaron a ser exclusivamente los estadounidenses, quienes se comprometieron a través de distintos mecanismos y organismos oficiales y no oficiales a sostener los gobiernos —electos o no— que pudieran ayudar en la contención de la Unión Soviética. La centralidad de la agenda del “desarrollo” fue expresión de esa creciente presencia ideológica estadounidense, pero también del esfuerzo de las organizaciones derechistas por construir un orden político estable, aceptado y sin amenazas de cambios radicales o acelerados.

El tiempo iniciado en 1964 guarda enormes diferencias respecto de los periodos anteriores. Fue entonces que la dominación volvió a descansar casi exclusivamente en el despliegue de los recursos coercitivos. El gran actor político de la época fueron las Fuerzas Armadas más que los partidos políticos. El uso de la mayor dosis de violencia estatal conocida en el siglo xx tuvo en el centro de sus preocupaciones a la lucha contra la subversión y desdeñó la búsqueda de negociaciones con otros actores sociales o políticos. Las conexiones de las corporaciones castrenses con Washington fueron un reaseguro del predominio de la coerción por sobre la dirección —para decirlo en términos de Antonio Gramsci—. Las ideologías, la cultura y la comunicación fueron usadas para sostener esa actividad represiva más que para desplegar alguna dimensión propositiva: en definitiva, predominó su voluntad anticomunista por sobre alguna imagen de futuro compartido. La fuerte conflictividad entre

actores católicos a causa de los impactos del Concilio Vaticano II y sus derivas liberacionistas en América Latina condujeron a una reducción de la tradicional autoridad ideológica eclesiástica y de sus vínculos con las élites. El control de los principales recursos económicos, antaño amenazado por reformas agrarias o nacionalizaciones, facilitó los procesos de encuadramiento y disciplinamiento social de la clase trabajadora a través del desempleo, la recesión y el desmantelamiento parcial de la actividad industrial en los años setenta y ochenta.

Los tiempos posdictatoriales muestran cambios significativos en los recursos utilizados por las élites latinoamericanas. Por un lado, es evidente el abandono de las Fuerzas Armadas para sostener el orden político: el fin del pretorianismo político fue acompañado por un creciente papel jugado por los partidos políticos, muchos de ellos de reciente creación, que se dieron a la tarea de defender exitosamente los intereses de las élites en ámbitos parlamentarios y ejecutivos. El mayor peso de los partidos políticos, de ideología unánimemente neoliberal, fue seguido de cerca por un uso mucho más intensivo de los medios de comunicación —los tradicionales y los nuevos— para convencer a la opinión pública de que no había alternativas al Consenso de Washington y de que la adopción de las vías contrarias (“populismo”, “bolivarianismo”, etcétera) llevaría a un desastre social y económico completo. El hecho de que las políticas neoliberales condujeran *de facto* a desastres sociales y económicos completos no amilanó a los ideólogos presentes en la televisión, los periódicos o YouTube, cuyo campo de acción y esquema de alianzas es no ya nacional sino fuertemente transnacional. Pensemos en el caso de Olavo de Carvalho, devenido gurú de la extrema derecha brasileña, ideólogo de Jair Bolsonaro y de perspectivas conspiracionistas, que a inicios de 2022 contaba con más de un millón de seguidores en YouTube.

El accionar de los *think tanks* y de grupos empresariales concentrados en los servicios de comunicación ayuda a entender el peso

relevante de la dimensión cultural e ideológica, que intentó refundar el sentido común latinoamericano bajo una perspectiva neoliberal y conservadora, una pauta a la cual se sumaron los grupos neopentecostales. Desde los años noventa a la actualidad el peso de las redes transnacionales ha crecido, al igual que su capacidad para incidir en la agenda política de diversos países. Pero, en todo caso, conviene prestar atención no sólo a quien difunde el mensaje sino también a quienes se lo apropiaron, naturalizaron e incorporaron. Como ha mostrado Verónica Gago, el neoliberalismo no es sólo un conjunto de políticas públicas inspiradas en el Consenso de Washington sino “una forma anclada en los territorios, fortalecida en las subjetividades populares y expansiva y proliferante en términos organizativos en las economías informales”. Es decir, el neoliberalismo no es externo sino constitutivo de la actual subjetividad popular latinoamericana: su remoción no depende(rá) en consecuencia de una circunstancial elección presidencial sino de la constitución de cambios culturales y económicos producidos por los propios sectores populares.

En la última década América Central ha sido testigo de un creciente recurso a las Fuerzas Armadas y a la militarización para sostener la dominación política: quizás Honduras sea el ejemplo más palpable de esa tendencia, pero la Nicaragua sandinista no le va a la zaga en materia de utilización de las Fuerzas Armadas para reprimir a actores políticos nacionales. Problemas como la inmigración internacional o el narcotráfico van quedando cada vez más señalados como cuestiones sobre las cuales las instituciones de defensa tienen algo para decir o para hacer.

¿Se puede identificar en qué momentos fue más usado cada uno de los cinco recursos de las élites? Podemos percibir que las Fuerzas Armadas tuvieron mayor participación en tres momentos: a fines del siglo XIX e inicios del XX, cuando actuaban como respaldo automático del orden social; en las dictaduras de los años treinta, y, desde ya, durante la vigencia de las dictaduras inspi-

radas en la doctrina de la seguridad nacional, en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Es interesante contrastar el uso de la coacción con el de los partidos políticos, por cuanto parece haber un juego de suma cero entre ambos. Los partidos de derecha tuvieron mayor peso en la tarea de apuntalar la dominación exactamente cuando el uso de la coerción tenía menos legitimidad y cuando los recursos ideológicos jugaban un papel mucho más importante: en las primeras dos décadas tras la Segunda Guerra Mundial y a finales del siglo xx. En esas circunstancias en las que el acceso a las posiciones dentro del Estado dependía del resultado electoral más que del accionar de las tropas, los partidos tenían un papel a desarrollar. Algo parecido se podría predicar respecto de la relación entre la importancia de los elementos ideológico-culturales y de las Fuerzas Armadas. Los intentos de hegemonía a través de recursos culturales fueron más intensos cuando la intervención militar ya no era posible ni deseable: en los inicios de la Guerra Fría, cuando la democracia (sin comunismo) se expandió por el continente, y a la salida de las dictaduras, desde los años ochenta hasta la actualidad. El dominio ideológico de la derecha neoliberal ha sido tan apabullante desde entonces que, como se intentó mostrar en el capítulo 6, ningún actor político relevante deseaba hacer algo distinto a lo dictado por el Consenso de Washington. La aparición de los gobiernos de “marea rosa” incentivó aún más el uso de los argumentos ideologizados por parte de diversos actores de la derecha.

El control de los principales recursos económicos fue crucial en la dominación política también en dos periodos. El primero de ellos es con la constitución y la expansión de la economía basada en las exportaciones primarias, y el segundo es en los últimos treinta años de historia latinoamericana. La concentración de la actividad económica, el desplazamiento hacia actividades y agencias financieras y el relanzamiento de la estrategia exportadora les dieron una gran oportunidad a las élites para desplegar recursos que les per-

mitieran controlar el rumbo político de sus naciones e impedir la instalación de agendas de reformas contrarias al orden neoliberal. En lo referido al peso de los “amigos del exterior”, lo que se hace claro es que éstos en el continente han sido sistemáticamente relevantes para asegurar la dominación. Quizá los momentos en los que ese recurso tuvo menos importancia fueron los años veinte y los de la Segunda Guerra Mundial, dado que entonces los niveles de competencia entre las potencias complicaban la obtención de un respaldo sólido desde el exterior. En cambio, el apoyo de los actores externos a la dominación de las derechas locales fue sistemático para los regímenes oligárquicos a fines del siglo XIX, para las leyes de persecución al comunismo en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, para las dictaduras de la década de 1970 y para las reformas neoliberales de los años noventa.

Un último punto a desarrollar en este libro refiere a una idea planteada en la introducción: la forma de las derechas, las ideas que defiende, las políticas públicas que promueve, todo ello guarda relación menos con un cierto corazón ideológico permanente e invariante que con las características de sus adversarios. La identidad de las derechas, como la de todos los actores políticos, es de naturaleza relacional antes que esencial. Los “otros” que han servido de *sparring* ideológico han sido numerosos. Primero fueron las fuerzas democratizadoras de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que presionaban por el fin de la corrupción electoral y del reclutamiento cerrado de los planteles políticos. Frente a esas organizaciones tenidas por advenedizas, las derechas esgrimieron argumentos elitistas en el peor de los casos, lanzaron iniciativas de cooptación personal o grupal, o prometieron la llegada de la “república ideal” en un tiempo futuro y vaporoso. Los sindicatos de trabajadores, de inspiración marxista o anarquista, constituyeron el mayor desafío tras la Revolución Rusa. El grueso, cuando no la totalidad, de las demandas de los trabajadores era rechazado al ser considerado un asalto a las reglas sociales, a la convivencia entre las clases sociales y a las

tradiciones nacionales, entre las cuales pasó a contarse la república democrática. Tras la Segunda Guerra Mundial el “comunismo”, entendido de una manera muy laxa, se percibió como el enemigo por antonomasia de las derechas, un papel que se superpuso —y a veces fusionó— con el que tenía el populismo. “Modernización” y “democracia” (sin comunismo) eran algunas de las consignas derechistas de la época: su contracara era el repudio al “totalitarismo” y a las formas tradicionales de vida. Luego de la Revolución Cubana, las derechas se mostraron mucho menos convencidas del valor o del atractivo de sus ideas, y se sintieron más cómodas en el apoyo a regímenes extraordinariamente represivos. La otredad en esos años era la “subversión”, entendida ya no como una fuerza partidaria o sindical, sino como un enemigo ideológico, presente en las calles, en las aulas, en las revistas, en las faldas cortas y en el nuevo folclore. El tiempo abierto al finalizar las dictaduras está muy marcado por el predominio ideológico del neoliberalismo: su otredad más recurrente la constituyeron quienes se opusieron al giro económico promercado: sindicatos de empleados públicos, docentes, movimientos sociales, consumidores, etcétera. “Populistas”, “estatistas” y en los últimos años “chavistas” (¡e incluso comunistas!) han sido las acusaciones más recurrentes en el uso de una gramática que ha logrado permear a una parte importante de la sociedad, incluyendo a los sectores populares.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE LA INTRODUCCIÓN

La bibliografía teórica sobre derechas y conservadurismo es enorme y no hay espacio aquí para reseñarla con justicia. Es útil comenzar esa revisión con el libro de Karl Mannheim *Conservatism. A Contribution to the Sociology of Knowledge* (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1986, orig. 1925). *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política* (Madrid: Taurus, 1994) de Norberto Bobbio es un punto de partida inevitable no sólo por sus propuestas teóricas, sino también por presentar de manera respetuosa y crítica las opiniones con las que está en desacuerdo total o parcialmente, como las de Dino Cofrancesco o Marco Revelli, que menciono en la introducción de este libro. Al salir del campo de la clasificación ideológica en abstracto, puede ser útil la compilación de Roger Eatwell y de Noël O'Sullivan, *The Nature of the right: American and European politics and political thought since 1789* (Boston: Twayne Publishers, 1990): en particular, los primeros dos capítulos, de autoría de Eatwell, me resultaron sugerentes. El libro de Eugen Weber, *Varieties of fascism; doctrines of revolution in the twentieth century* (Princeton: Van Nostrand 1964), sigue teniendo utilidad. El volumen de Albert Hirschman, *Retóricas de la intransigencia* (México: FCE, 1991) es espléndido por lo que permite saber del pasado y a la vez entender los discursos contemporáneos. La idea de la derecha como un campo en el que conviven tradiciones dominantes, residuales y emergentes la plantea Pedro González Cuevas en *Historia de las derechas españolas: de la Ilustración a nuestros días* (Madrid: Biblioteca Nueva, 2000).

No sobran las producciones de síntesis a escala continental o nacional sobre las derechas. La tradición se inicia con el trabajo de José Luis Romero titulado “El pensamiento político de la derecha”,

incluido en su obra *El pensamiento político latinoamericano* (Buenos Aires: A-Z Editora, 1998, orig. 1970). Entre las obras más ambiciosas se cuenta sin dudas el libro de Sandra McGee Deutsch, *Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile 1890-1939* (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2005). A ella hay que sumarle compilaciones como las de Kevin Middlebrook, *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000); Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Kaltwasser, *The Resilience of the Latin American Right* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014); Francisco Dominguez, Geraldine Lievesley y Steve Ludlam, *Right-Wing Politics in the New Latin America: Reaction and Revolt* (Londres: Zed Books, 2011), y la que João Fábio Bertanha y yo coordinamos, llamada *Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973* (Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016). El pequeño libro de Barry Cannon, *The Right in Latin America. Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State* (Nueva York y Londres: Routledge, 2016) es de una ayuda enorme para comprender las relaciones entre élites sociales y fuerzas políticas de derecha. Un trabajo enjundioso de comparación entre países es el de Cristian Buchrucker en “Temas antidemocráticos e identidad nacional en la cultura política del Cono Sur. Un panorama comparativo de seis trayectorias históricas del siglo xx”, en *Estudios Sociales* (vol. 27, núm. 1, 2004).

Para los interesados en Chile, sugiero los libros de Sofía Correa Sutil, *Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo xx* (Santiago de Chile: Sudamericana, 2005); Tomás Moulian e Isabel Torres Dujisin, *La derecha en Chile: evolución histórica y proyecciones a futuro* (Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo, 1985), y Verónica Valdivia, *Subversión, coerción y consenso: creando el Chile del siglo xx (1918-1938)* (Santiago de Chile: Lom, 2017). Para acercarse a historia mexicana, inevitable consultar los dos tomos editados por Erika Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de Mé-*

xico (México: FCE y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009). Para Argentina, una perspectiva del siglo xx en la compilación de Sandra McGee Deutsch y Ronald Dolkart, *La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales* (Buenos Aires: Javier Vergara editor, 2001) y la que hice junto con Olga Echeverría y Martín Vicente, *Las derechas argentinas en el siglo xx* (Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2021). El libro de Rodrigo Patto Sá Motta, *Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil, 1917-1964* (São Paulo: Editora Perspectiva y FAPESP, 2002; hay versión en español) puede actuar como texto de síntesis. Lo propio puede decirse de *O fascismo em camisas verdes: do integralismo ao neointegralismo* (Rio de Janeiro: FGV, 2020), de Leandro Pereira Gonçalves y Odilon Caldeira Neto.

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO I

Entre la bibliografía utilizada se cuentan textos generales sobre el periodo, como el clásico de Tulio Halperin Donghi, *Historia contemporánea de América Latina*, que con medio siglo a cuestas sigue teniendo iluminaciones para quien se acerque a su —laberíntica, sin dudas— escritura. El manual de José del Pozo *Historia de América latina y del Caribe, 1825-2001* (Santiago de Chile: Lom, 2001) también fue fuente de consulta. El libro de Oscar Terán, *Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo: 1880-1910: Derivas de la “cultura científica”* (Buenos Aires: FCE, 2000) es de gran ayuda para entender el campo de las ideas y la literatura de la década de 1900 en Argentina. Sugiero también los ensayos que el propio Terán compiló en *Intelectuales y cultura en el siglo xx latinoamericano* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004), que retoman los casos de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.

Para abordar conceptualmente los regímenes oligárquicos, me resulta productivo y hasta inevitable el texto de Waldo Ansaldi,

“Frívola y casquivana. Mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para conceptualizar el término oligarquía en América Latina”, en el libro de Patricia Funes, *América Latina: planteos, problemas, preguntas* (Buenos Aires: Manuel López Editor, 1992). Hegemonía, consenso y dominación son categorías de mucho diálogo con la obra de Gramsci, desde ya. Por ello, al texto de Cándida Calvo Vicente (“El concepto de consenso y su aplicación al estudio del régimen franquista”, *Spagna Contemporánea*, núm. 7, 1995) lo hallo muy útil para pensar las actitudes sociales bajo regímenes autoritarios, pese a enfocarse en el caso español.

Para el estudio de los regímenes políticos nacionales y los límites de la ciudadanía, la literatura con la que contamos hoy es enorme. Libros como el de Hilda Sábato (*Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, México: FCE, 2002) son testimonio de ello: en esa compilación se encuentran muy buenos textos, incluyendo el de Marta Irurozqui sobre las elecciones bolivianas que cito en el primer capítulo. El libro de Natalio Botana (*El orden conservador: la política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires: Sudamericana, 1977) es un clásico sobre y contra el cual se ha producido la historiografía política del periodo dominando por los conservadores en Argentina. El libro de José Murilo de Carvalho (*Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil*, Buenos Aires: FCE, 1995) ofrece una buena síntesis sobre los rasgos del coronelismo. Los interesados en el caso uruguayo pueden servirse del libro de José Pedro Barrán *Los conservadores uruguayos 1870-1933* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2004). Sobre el pensamiento de esas figuras de la derecha uruguaya pueden verse el libro de Alción Cheroni, *El pensamiento conservador en el Uruguay* (Montevideo: CLAEH, 1986) o el más reciente de Laura Reali Herrera, *La revolución del orden. Discursos y prácticas políticas, 1897-1929* (Montevideo: Ediciones Banda Oriental, 2016). Para el análisis del pensamiento de Vallenilla Lanz, me serví con provecho del artículo de Victoria Haidar, “La problematización

latinoamericana del cesarismo: un análisis de las contribuciones de Ernesto Quesada (1858-1934) y Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936)”, *Revista E-latina* (vol. 19, núm. 74, 2021).

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 2

Para entender los cambios ideológicos de los años veinte resulta imprescindible el libro de Patricia Funes, *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años 20* (Buenos Aires: Prometeo, 2007). Sobre el impacto del primer fascismo en las colectividades italianas sudamericanas se pueden leer con provecho los libros de João Fábio Bertonha (*O fascismo e os imigrantes italianos no Brasil*, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001) y de Leticia Prislei (*Los orígenes del fascismo argentino*, Buenos Aires: Edhasa, 2008). Hace poco tiempo con los colegas David Jorge y Clara Lida tuve la oportunidad de compilar *Las derechas ibero-americanas. Desde el final de la Primera Guerra hasta la Gran Depresión* (México: El Colegio de México, 2019). En ese libro se cuenta una decena de artículos sobre la historia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y Uruguay, que fueron centrales para la elaboración del capítulo 2 (la cita a *El Debate* proviene del texto de Ricardo Arias de ese libro, al igual que las referencias al texto de Verónica Valdivia en el capítulo 1 y al de Norberto Ferreras en el capítulo 2). Para quien quiera adentrarse en el análisis de la Liga Patriótica Argentina, la referencia ineludible es el libro de Sandra McGee Deutsch, *Contrarrevolución en la Argentina 1900-1932* (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003, orig. 1986). Sobre las ligas chilenas, esta destacada colega escribió junto a Sergio González Miranda y Carlos Maldonado Prieto el artículo “Ligas Patrióticas” (*Revista de Investigaciones Científicas y Tecnológicas*, núm. 2, 1993).

Para los interesados en los Leopardos sugiero dos textos. Primero el libro del profesor César Ayala Diago, *El porvenir del pasado:*

Gilberto Alzate Avendaño, sensibilidad leoparda y democracia (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Gobernación de Caldas y Universidad Nacional de Colombia, 2007). Y en segundo lugar el de Ricardo Arias Trujillo, *Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920* (Bogotá: Uniandes-Ceso-Departamento de Historia, 2007). Sobre el caso de Leopoldo Lugones hay una bibliografía innumerable a causa de las múltiples actividades que esta figura desarrolló, su longeva carrera y su centralidad en el campo de la literatura. Para sus aspectos políticos, remito al libro de Olga Echeverría, *Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios argentinos en las primeras décadas del siglo XX* (Rosario: Prohistoria 2009). El texto de Émile Poulat en el que se presenta la noción de “catolicismo integral e intransigente” es *Église contre Bourgeoisie. Introduction au devenir du catholicisme actuel* (París: Casterman, 1977).

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 3

El impacto económico de la crisis y la recuperación de los años treinta son tratados con solvencia en el capítulo de Victor Bulmer-Thomas, “Las economías latinoamericanas, 1929-1939”, incluido en el tomo XI de *Historia de América Latina* que compiló Leslie Bethell (Barcelona: Crítica, 1997). Sobre la “era del fascismo” recomiendo el ya referido *Las derechas* de Sandra McGee Deutsch. Ella aplicó la perspectiva de género al análisis de estos grupos en el artículo “What Difference Does Gender Make? The Extreme Right in the ABC Countries in the Era of Fascism”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* (vol, 8, núm. 2, 1997). Para comprender mejor la lógica de quienes utilizaban y producían mitologías conspirativas, me resultaron muy útiles el libro de Léon Poliakov, *La causalidad diabólica. Ensayo sobre el origen de las persecuciones* (Barcelona: Muchnik, 1982), y el artículo de Pierre-André Taguieff sobre el llamado “nacionalismo de los nacionalistas”, incluido

en *Teorías del nacionalismo* (Barcelona: Paidós, 1992), del propio Taguieff y Gil Delanoi. El libro de Leonardo Senkman y Luis Roniger, *América Latina tras bambalinas. Teorías conspirativas, usos y abusos* (Pittsburgh: Latin American Research Commons, 2019), es una buena entrada para ver el uso de las mitologías conspirativas en América Latina desde hace dos siglos: de allí tomé la caracterización que Braden hizo de Perón en 1945. El reciente volumen del profesor Antonio Costa Pinto brinda un acercamiento a los numerosos proyectos corporativistas desarrollados en los años treinta por las dictaduras en América (*Latin American Dictatorships in the Era of Fascism: the corporatist wave*, Londres: Routledge, 2021).

La investigación historiográfica sobre el integralismo brasileño está muy consolidada. Desde el trabajo seminal de Helgio Trindade (*Integralismo, o fascismo brasileiro na década de trinta*, São Paulo: Difel, 1979) se ha publicado tanto y tan bueno que es imposible reseñar aquí el desarrollo de ese campo de estudios. En mi caso, me resultó muy útil la reciente biografía de Plinio Salgado que hizo João Fábio Bertonha (*Plínio Salgado: biografia política, 1895-1975*, São Paulo: Edusp, 2018). Sobre el Estado Novo, sus políticas y los procesos de reclutamiento y formación del personal político, sigo las ideas de Adriano Codato, por ejemplo, “Classe política e regime autoritário: os advogados do Estado Novo em São Paulo” (*Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 29, 2014). La bibliografía sobre el “nacionalismo” argentino de los años treinta y cuarenta es muy vasta. Recomiendo tres libros sobre el particular. El primero es el de Cristin Buchrucker, *Nacionalismo y peronismo: la Argentina en la crisis ideológica mundial, 1927-1955* (Buenos Aires: Sudamericana, 1987). El segundo es el de Fernando Devoto, *Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna: una historia* (Buenos Aires: Siglo XXI de Argentina Editores, 2002), centrado más en análisis de las ideas. El tercero es el de Daniel Lvovich, *Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina* (Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2003), quien se preocupa también por las prácticas políticas

de los “nacionalistas”. La tesina que Mariela Rubinzal realizó para obtener la licenciatura en historia en la Universidad Nacional del Litoral en 2005 (“La derecha y la cuestión social en la Argentina. La cuestión obrera en la perspectiva del nacionalismo en Buenos Aires, 1935-1943”) es crucial para ver el proceso de acercamiento de las derechas al sindicalismo.

La bibliografía sobre el sinarquismo es también muy grande. Para conocer mejor el contexto de su aparición y la intensidad del anticardenismo sugiero ver el libro de Ricardo Pérez Montfort, *Por la patria y por la raza. La derecha secular en el sexenio de Lázaro Cárdenas* (México: UNAM, 1993). Entre los que han escrito las cosas más importantes sobre el sinarquismo se cuentan Jean Meyer, *El sinarquismo, ¿un fascismo mexicano* (México: Joaquín Mortiz, 1979) y Pablo Serrano Álvarez, *La batalla del espíritu. El movimiento sinarquista en el Bajío, 1932-1951* (México: Conaculta, 1992). El artículo de Servando Ortoll en el libro de Rodolfo Morán, *La política y el cielo. Movimientos religiosos en el México contemporáneo* (México: Universidad de Guadalajara, 1990), permite ver las conexiones con otras organizaciones católicas. Sobre los Camisas Doradas la referencia más usual es el libro de Alicia Gojman de Backal, *Camisas, escudos y desfiles militares: los Dorados y el antisemitismo en México, 1934-1940* (México: FCE, 2000). Para el anticomunismo en Perú en los años treinta, remito al artículo de Paulo Drinot, “Creole Anti-Communism: Labor, the Peruvian Communist Party, and APRA, 1930-1934” (*Hispanic American Historical Review*, vol. 92, núm. 4, 2012). Sobre el Uruguay sometido a la dictadura de Terra se puede leer con provecho el capítulo de Clara Aldrighi incluido en el libro *Antisemitismo en Uruguay. Raíces, discursos e imágenes, 1870-1940* (Montevideo: Trilce, 2000).

Sobre las actividades nazis en América del Sur es muy recomendable comenzar con la lectura del libro de Ronald Newton, *El cuarto lado del triángulo. La “amenaza nazi” en la Argentina, 1931-1947* (Buenos Aires: Sudamericana, 1995), quien ofrece una lectura sobre

ese periodo basada en la consulta a múltiples archivos. El artículo de Ignacio Klich en *Ciclos* (vol. 9, 1995) se acerca a la cuestión de las interpretaciones fantasiosas sobre los vínculos entre Perón y el III Reich. Sobre la penetración alemana en México, remito al libro compilado por Brígida von Mentz y otros, *Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la oposición de derecha a Cárdenas* (México: CIESAS, 1988). Para los vínculos de la Falange con las derechas mexicanas, es provechoso leer a Ricardo Pérez Montfort (*Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha española y México*, México: FCE, 1992), y con las cubanas, a Katia Figueredo Cabrera (“Falange española tradicionalista y de las JONS: estructura y funcionamiento en Cuba, 1939-45”, *Rábida*, núm. 24, 2005). Algunas de las respuestas ensayadas por el Departamento de Estado frente a la penetración nazi —y de paso, frente al comunismo— las ofrece *The FBI in Latin America: The Ecuador Files* (Durham: Duke University Press, 2017), de Marc Becker.

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 4

Sobre el periodo de la Guerra Fría, remito en primer lugar al libro de Vanni Pettinà, *Historia mínima de la Guerra Fría* (México: El Colegio de México, 2018), y a la compilación de Daniela Spenser, *Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe* (México: CIESAS, 2004). El libro de Samuel Huntington que menciono en el capítulo es *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1993, hay versión en español). Sobre la cuestión de las instituciones estatales o paraestatales estadounidenses que participaron en la Guerra Fría cultural sirve revisar muchas obras recientes, como las de Germán Albuquerque —*La trinchera letrada: intelectuales latinoamericanos y Guerra Fría*, Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2011—, Karina Jannello —“Los intelectuales de la Guerra Fría. Una cartografía

latinoamericana (1953-1961)”, *Políticas de la Memoria*, núm. 14, 2013-2014—, Jorge Nállim —“Redes transnacionales, antiperonismo y Guerra Fría: Los orígenes de la Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura”, *Prismas*, vol. 16, núm. 1, 2012— y Juan Alberto Bozza —“Un emisario sospechoso. Contradicciones del anticomunismo en América Latina en la década de 1950”, *Oficios Terrestres*, vol. 1, núm. 27, 2012—. También es recomendable la compilación de Benedetta Calandra y Marina Franco, *La Guerra Fría cultural en América Latina* (Buenos Aires: Biblos, 2012). Quienes se interesen por la utilización del concepto de totalitarismo tienen pistas muy relevantes en el artículo de Sergio Morresi y Martín Vicente, “El enemigo íntimo: Usos liberal-conservadores del totalitarismo en la Argentina entre dos peronismos (1955-1973)”, *Quinto Sol* (vol. 1, núm. 21, 2017).

Para el análisis a escala nacional de las fuerzas liberales y conservadoras en la Guerra Fría remito al libro de Soledad Loeza sobre el PAN (*El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México: FCE, 1999) y al de Tania Hernández Vicencio (*Tras las huellas de la derecha. El Partido Acción Nacional, 1939-2000*, México: Ítaca, 2009); al de Jorge Nállim sobre Argentina (*Transformación y crisis del liberalismo: su desarrollo en la Argentina en el periodo 1930-1955*, Barcelona: Gedisa, 2014), y al de Maria Victória Benevides sobre la Unión Democrática Nacional en Brasil (*A UDN e o udenismo. Ambigüidades do liberalismo brasileiro, 1945-1965*, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981). Referencias a fuerzas liberales y de extrema derecha hay en los textos de Magdalena Broquetas sobre Uruguay (*La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay, 1958-1966*, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2014), de Marcelo Casals Araya (*La creación de la amenaza roja: del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campana del terror” de 1964*, Santiago de Chile: Lom, 2016), de Carlos Huneeus sobre Chile (*La Guerra Fría chilena. Gabriel González Videla y la ley maldita*, Santiago: Debate, 2009)

y de Cristian Buchrucker (“Los nostálgicos del ‘Nuevo Orden’ europeo y sus vinculaciones con la cultura política argentina”, en el libro de Ignacio Klich, *Sobre nazis y nazismo en la cultura argentina*. College Park: Hispamérica y Maryland University, 2002). Los interesados en América Central pueden ver la compilación de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias, *El verdadero anticomunismo. Política, género y Guerra Fría en Costa Rica, 1948-1973* (San José de Costa Rica: EUNED, 2017). La referencia para conocer el accionar anticomunista de la inteligencia mexicana es el libro de Sergio Aguayo Quezada, *La charola* (México: Grijalbo, 2001).

Sobre el anticomunismo del peronismo, remito a la ponencia de Mariana Nazar en la VIII Reunión de Antropología del Mercosur, 2009. El libro de Eugenia Marengo, *Lo aparente como real: un análisis del sujeto “comunista” en la creación y consolidación del servicio de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires, 1930-1962* (La Plata: UNLP, 2015), reconstruye la creación del aparato de vigilancia al comunismo. En lo referido a las denuncias sobre la penetración peronista en otros países, es inevitable leer *La Internacional Justicialista. Auge y ocaso de los sueños imperiales de Perón* (Buenos Aires: Sudamericana, 2013) de Loris Zanatta, y *Ambassadors of the working class: Argentina’s international labor activists and Cold War democracy in the Americas* (Durham: Duke University Press, 2017) de Ernesto Semán. La tesis de maestría de Nicolás Rojas Scherer defendida en 2017 en la Universidad Nacional de San Martín reconstruye los debates parlamentarios chilenos sobre la supuesta expansión del peronismo en el país: de allí extraje las citas incluidas en el capítulo.

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 5

Para el estudio de las dictaduras, remito a la reciente y extensa compilación de Hernán Ramírez y Marina Franco, *Dictaduras no Cone*

Sul da América Latina. Um balanço historiográfico (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021), que ofrece artículos sobre muchos casos nacionales y una densa preocupación historiográfica. Una buena entrada al tema es el capítulo “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, de Alain Rouquié y Stephen Suffern, en el tomo 12 de la *Historia de América Latina* que coordinó Leslie Bethell (Barcelona: Crítica, 1997). El texto de Manuel Garretón incluido en el libro de Isidoro Chereski y Jacques Chonchol, *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*, Buenos Aires: Eudeba 1985), evalúa las principales interpretaciones sobre las dictaduras que ofrezco en el capítulo 5. El libro de Guillermo O’Donnell, *El Estado burocrático autoritario* (Buenos Aires: Prometeo, 2009, orig. 1972), contiene la referencia a la crisis de la dominación celular. La noción de pánico moral la aportó Stanley Cohen, *Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers* (Londres: MacGibbon & Kee, 1972), y fue discutida por Jock Young en la revista *Delito y Sociedad* (vol. 31, núm. 1, 2016).

De la bibliografía sobre mujeres anticomunistas recomiendo el libro de Janaina Martins Cordeiro, *Direitas em movimento: a campanha da mulher pela democracia e a ditadura no Brasil* (Rio de Janeiro: FGV, 2009), y el de Margaret Power, *La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973* (Santiago de Chile: Centro Barros Arana, 2009). Esta misma colega retrató las conexiones entre las redes de mujeres anticomunistas de Brasil, Chile y los Estados Unidos: “Who but a Woman? The Transnational Diffusion of Anti-Communism among Conservative Women in Brazil, Chile and the United States during the Cold War”, *Journal of Latin American Studies* (vol. 47, núm. 1, 2015). Para las católicas mexicanas, puede leerse el capítulo de Kristina Bylan en *Right-Wing Women. From Conservatives to Extremists around the world*, compilado por Paola Bacchetta y Margaret Power (Londres: Routledge, 2002).

Para el caso de la dictadura en Paraguay, remito al capítulo de Andrew Nickson incluido en el libro de Ignacio Telesca, *Historia*

del Paraguay (Asunción: Taurus, 2010). Los lazos entre el stronato y la dictadura taiwanesa están retratados en un artículo que publiqué con Ignacio Araujo en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* (vol. 31, núm. 1, 2020). La idea de que en México hubo un anticomunismo discreto en los años sesenta y setenta es algo discutido: fue mérito de Lorenzo Meyer proponerla en un capítulo del libro de Daniel Spenser antes mencionado.

El estudio de las organizaciones católicas anticomunistas es un campo en crecimiento. Por un lado, tenemos investigaciones sobre las organizaciones juveniles, como la de Mario Santiago Jiménez en su tesis doctoral “Juventudes católicas contra la ‘amenaza comunista’. Estudio comparativo entre el Yunque de México y Tacuara de Argentina, 1953-1964” (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016) y la de Juan Manuel Padrón (“*Ni yanquis, ni marxistas! Nacionalistas*”: *Nacionalismo, militancia y violencia política: el caso del Movimiento Nacionalista Tacuara en la Argentina, 1955-1966*, La Plata: UNLP, UNGS y UNAM, 2017). Por el otro, tenemos las investigaciones sobre las organizaciones y figuras religiosas, como las de Ben Cowan (*Securing Sex. Morality and Repression in the Making of Cold War Brazil*, Berkeley: University of California Press, 2016), Rodrigo Coppe Caldeira (*Os baluartes da tradição: o conservadorismo católico brasileiro no Concílio Vaticano II*, Curitiba: CRV, 2011) y Gizele Zanotto (*TFP. Tradição, Família e Propriedade. As idiosincrasias de um movimento católico no Brasil, 1960-1995*. Passo Fundo: Méritos Editora, 2012). El ya citado libro de Magdalena Broquetas recupera la trayectoria de las derechas radicales juveniles en Uruguay y sus conexiones con sus pares argentinas.

La bibliografía sobre el neoliberalismo, sus ideas e instituciones no ha dejado de crecer y de volverse compleja desde los años noventa. El libro de David Harvey, *The New Imperialism* (Oxford: Oxford University Press, 2003), ofrece una entrada muy crítica sobre las consecuencias sociales y ambientales de la entronización del neoliberalismo. El tomo de Fernando Escalante incluido en esta

misma colección de Historias Mínimas dedicado al neoliberalismo es de lectura muy recomendada. Lo propio puede decirse del libro de Susan Stokes, *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). El artículo de Raewyn Connell y Nour Dados, “Where in the world does neoliberalism come from? The market agenda in southern perspective”, *Theory & Society* (vol. 43, núm. 2, 2014) permite ver la pluralidad de centros y de formas de circulación que ha tenido el neoliberalismo. En igual sentido va el *dossier* recientemente organizado por Hernán Ramírez y José Francisco Puello-Socarrás (*História Unisinos*, vol. 25, núm. 2, 2021), que contiene el artículo de Ana Belén Mercado sobre los *think tanks* neoliberales en Colombia que menciono en el capítulo 5. La caracterización que hizo Eduardo Devés-Valdés del neoliberalismo se encuentra en el tercer tomo de *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Entre la modernización y la identidad* (Santiago de Chile: Biblos-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2000).

El libro de Peter Smith, *Los laberintos del poder. El reclutamiento de las élites políticas en México, 1900-1971* (México: El Colegio de México, 1981), muestra los procesos clásicos de reclutamiento de planteles políticos en el México posrevolucionario. El de Mariana Heredia, *Cuando los economistas alcanzaron el poder* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2015), testimonia el éxito de los economistas (neoliberales) al desplazar a los abogados. El accionar de este tipo de economistas en el Chile pinochetista es relevado por Stéphane Boisard en su tesis doctoral, “L’émergence d’une nouvelle droite: monétarisme, conservatisme et autoritarisme au Chili (1955-1983)” (Université de Toulouse, 2001). El libro de Juan Gabriel Valdés, *Pinochet’s economists. The Chicago School in Chile* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Hay edición en español) es una referencia inevitable. A quien quiera saber algo sobre los cambios vividos por la derecha chilena en ese periodo, sugiero el libro de Verónica Valdivia Ortiz de Zárata, *Nacionales y gremiales* (Santiago de Chile: Lom, 2009). Para

los interesados en la actividad de las fundaciones, ver el volumen de Hernán Ramírez, *Corporaciones en el poder. Institutos económicos y acción política en Brasil y Argentina*. IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea (Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora, 2007). Sobre los *think tanks* actuales remito a la tesis doctoral defendida por Camila Rocha en la Universidade de São Paulo en 2019 (“‘Menos Marx, mais Mises’: uma gênese da nova direita brasileira, 2006-2018”). Los empresarios volcados a la política son retratados por Inés Nercesian en *Presidentes empresarios y estados capturados. América Latina en el siglo XXI* (Buenos Aires: Teseo, 2020).

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 6

Sobre las transiciones a la democracia y los rasgos de los nuevos regímenes, la bibliografía es ingente, sobre todo la producida por la ciencia política. Recomiendo el texto de Manuel Antonio Garretón, “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”, *Nueva Sociedad* (núm. 148, 1997), para tener una idea breve y crítica de los procesos. Edelberto Torres Rivas incluyó un capítulo sobre la América Central desde los años ochenta hasta el inicio del siglo XXI en el libro de Waldo Ansaldi, *Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente* (Buenos Aires: Ariel, 2004) que orienta muy bien a los lectores sobre las oposiciones reales y falsas entre guerra y democracia. El artículo de Antonio Acosta, “América Central: de los proyectos revolucionarios al neoliberalismo dependiente, 1960-2004” (*Boletín Americanista*, 56, 2006), ofrece una síntesis sobre la segunda mitad del siglo XX en el istmo. El libro de Sergio Morresi, *La nueva derecha argentina. La democracia sin política* (Buenos Aires: Biblioteca Nacional y Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008) es una excelente síntesis sobre el proceso de entrada del neoliberalismo en las fuerzas políticas y el Estado en Argentina. La tesis doctoral de James Loxton, “Authoritarian

inherance and Conservative Party-Building in Latin America” (Harvard University, 2014) permite ver las *performances* que tuvieron los partidos “amigos de las dictaduras” en los años ochenta y noventa. Esa tesis dialoga con la de Brandon van Dyck “The Paradox of Adversity: New Party Survival and Collapse in Latin America” (Harvard University, 2013) sobre los partidos opositores. En *Homo videns. La sociedad teledirigida* (México: Santillana, 2009) Giovanni Sartori propone la idea de la llegada de la videopolítica. Algunos de los impactos de la mediatización y descomposición de la representación política están estupendamente presentados por Kenneth Roberts en un texto incluido en el libro de Marcelo Cavarozzi y de Juan Manuel Abal Medina (h.), *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal* (Rosario: Homo Sapiens-Fundación Konrad Adenauer, 2003). Sobre la expansión de las derechas en los últimos años en América Latina, remito al libro de Farid Kahhat, *El eterno retorno. La derecha radical en el mundo contemporáneo* (Lima: Planeta, 2019), al *dossier* de Barry Cannon y Patricia Rangel en la *Revista CIDOB d’Afers Internacionals* (núm. 126, 2020) y al número especial de *Nueva Sociedad* (núm. 254, 2014).

La cuestión de las nuevas formas derechistas de individualidad popular es retratada en textos sobre diversos países: el de Gabriel Feltran sobre Brasil (“The revolution we are living”, *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, vol. 10, núm. 1, 2020), el de Kathya Araujo y Danilo Martuccelli sobre Chile (“Las individualidades populares. Análisis de sectores urbanos en Chile”, *Latin American Research Review*, vol. 50, núm. 2, 2015), el de Paula Canelo sobre Argentina (*¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2019) y la entrevista al antropólogo Pablo Semán (<http://bunker.net.ar/sobre-llovido-mojado/>). Verónica Gago en *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular* (Buenos Aires: Tinta Limón, 2014) ha mostrado la penetración y la apropiación popular del neoliberalismo. El libro de Pablo Stefanoni, *¿La rebeldía se volvió de*

derecha? (Buenos Aires, Siglo XXI, 2021) ofrece ideas muy interesantes para entender la popularización —y el ingreso en la juventud— de las ideas de la derecha extrema en los Estados Unidos, Europa y América Latina.

Historia mínima de las derechas latinoamericanas
se terminó de imprimir en febrero de 2023,
en los talleres de Editorial Color, S. A. de C. V.
Naranjo 96 bis, P. B., col. Santa María la Ribera,
06400, Ciudad de México, México.

Portada: Pablo Reyna.

Tipografía y formación: LaCriba.

Cuidó la edición Carlos Mapes bajo la coordinación
de la Dirección de Publicaciones de El Colegio de México.

La edición consta de 1 000 ejemplares.

Historia mínima de las derechas latinoamericanas intenta explicar la paradoja por la que líderes y organizaciones partidarias autoritarias y defensoras de intereses minoritarios han conseguido amplios apoyos sociales: ¿cómo explicar la simpatía de sectores populares hacia el pensamiento y la acción política de las derechas?

Este libro indaga el curso de las derechas latinoamericanas entre finales del siglo XIX y la actualidad. En ese recorrido, que va de Porfirio Díaz a Jair Bolsonaro, se atiende la especificidad de las ideas y de las organizaciones de las derechas, así como sus vínculos con el empresariado, la Iglesia católica, las fuerzas armadas y actores externos. La obra descansa en tres estrategias de investigación: la comparación entre figuras, partidos e ideas de derecha; el estudio de los procesos de circulación transnacional de ideologías y personas; y el análisis de los discursos públicos, las prácticas políticas y las identidades propias y asignadas a los llamados “enemigos” de la nación.

C EL COLEGIO
M DE MÉXICO



Historia
M·Í·N·I·M·A